



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE HUMANIDADES

COMISIONES DE LA VERDAD: HERRAMIENTAS NECESARIAS AUNQUE
INCOMPLETAS PARA ALCANZAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
CASOS LATINOAMERICANOS DE GUATEMALA Y ARGENTINA

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

DOCTORA EN HUMANIDADES: **ESTUDIOS LATINOAMERICANOS**

PRESENTA:

NORMA DE LOS ANGELES GARCÍA CARRERA

DR. EDGAR SAMUEL MORALES SALES

DIRECTOR DE TESIS



JULIO, 2019.

AGRADECIMIENTOS

A Israel por todo el amor, la paciencia, la motivación, las risas;
por ser mi hombro, mi apoyo y mi fuente de inspiración para
tantas cosas; por apoyar cada una de mis locuras; por ser mi
medio pomelo; por todo lo que ni siquiera puedo expresar con
palabras. Te amo siempre.

A los Panchos por ser mis lectores favoritos y mis cómplices;
por sus ánimos, su apoyo incondicional; por hacerme
quien soy; porque sin ustedes nada de esto sería posible.
Mi amor y admiración siempre.

A Samuel y Guadalupe, por todas las enseñanzas y la infinita
paciencia; por las risas, las comidas y el invaluable apoyo.

A mis hermanos y anexos por estar conmigo siempre; por
interesarse en estos temas; por su incondicional apoyo;
porque ni las chelas ni los conciertos serían lo mismo sin
ustedes; porque mi vida no sería la misma sin ustedes.
Los quiero al infinito.

A mi Príncipe Azulado por todas las incontables horas de
lectura en que me acompañaste; por enseñarme lo
verdaderamente importante de los momentos y a valorar
lo que a veces se da por sentado. Hasta que nos
encontremos de nuevo.

A mi sensei Abelardo por creer en mí siempre; por las risas y
los tragos en medio de invaluables charlas que me
hicieron entender mejor de qué va la vida; porque ahora
me cuidas y me sigues dando lecciones desde el cielo.

A mi Ofe adorada por estar siempre; por darme ánimos; por
las charlas y por hacerme valorar las cosas más simples
que terminan siendo las más hermosas y relevantes.

A Pepe y Frijol por las horas, los días y meses que les tocó
acompañarme en este trayecto.

Índice

INTRODUCCIÓN	7
Introducción.....	8
Pregunta de Investigación	15
Objetivos	15
Justificación.....	16
Hipótesis	17
Metodología.....	17
Esquema	23
SUSTENTO TEÓRICO.....	25
Violencia, verdad y justicia en América Latina	26
Genocidio y Crímenes contra la humanidad, los extremos de la violencia.....	33
Justicia Transicional, el gran reto post-conflicto.....	46
Comisiones de la Verdad, una opción humana ante la injusticia	59
CASO GUATEMALA	88
Guatemala en Conflicto	89
Guatemala, Memoria del Silencio.	120
Guatemala Nunca Más.....	143
Guatemala, Entre la Memoria y la Impunidad	159
CASO ARGENTINA	174
Argentina ante la Última Dictadura	175

Argentina entre la Verdad y la Justicia	214
Argentina Justicia contra el Olvido	244
BALANCE	269
CONCLUSIONES	282
FUENTES	289
ANEXOS	298
APÉNDICES	318

INTRODUCCIÓN



Fotografía tomada por la autora de una de las columnas de doce que existen en el atrio de la catedral de Ciudad de Guatemala en donde se encuentran escritos cada uno de los nombres de víctimas alrededor del país por la violencia durante el conflicto armado (marzo de 2013).

COMISIONES DE LA VERDAD: HERRAMIENTAS NECESARIAS, AUNQUE INCOMPLETAS PARA
ALCANZAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
CASOS LATINOAMERICANOS DE GUATEMALA Y ARGENTINA

Introducción

“Para confrontar impunidades, garantizadas por el sistema de justicia y la complicidad de sucesivos gobiernos, sólo nos queda la memoria, que mientras viva seguirá siendo un arma cargada de futuro”
(Bellinghausen, 2008: 141).

Planteamiento del Problema

La justicia se convierte en una necesidad para cada individuo que vive dentro de una sociedad. Se puede considerar como la condición más importante para que un grupo de personas tenga un orden dentro de sus normas de convivencia. Sobre todo, “... sin justicia no hay paz, ni respeto mutuo, ni tolerancia, ni honradez” (López Martínez, 2004: 615).

Tradicionalmente, los estados se han encargado de crear las instituciones adecuadas para que haya justicia dentro de una sociedad. Las sociedades se han hecho cada vez más complejas; tanto, que el simple concepto de justicia ha tenido que ser complementado para que pueda abarcar todas las necesidades. Sin embargo, crear más conceptos es insuficiente, cuando el concepto más básico “la justicia se entiende como un valor jurídico fundamental legitimador de los derechos humanos...” (López Martínez, 2004: 615) es vulnerado por el propio estado quien es el responsable de legitimarlo.

Las Comisiones de la Verdad “son un tipo de institución temporal y complementaria encargada de investigar todo tipo de crímenes y violaciones masivas de derechos humanos sucedidas en el pasado” (López Martínez, 2004: 137). Dichas instituciones no son sustitutivas de la justicia penal, pero son eficaces para esclarecer un pasado oculto, clarificar responsabilidades, regenerar el tejido social y resarcir a las víctimas. La compensación a las víctimas puede ser en términos de duelo, superación del dolor y reconstrucción de la dignidad, así como compensaciones económicas, políticas o éticas.

La compilación de cuatro elementos puede definir de mejor manera una comisión de verdad (Hayner, 1994: 206):

1. Una comisión de esta especie sólo se enfoca en el pasado.
2. No puede enfocarse a sólo un evento, sino que el objetivo es formar una imagen integral de los abusos o las violaciones a los derechos humanos y/ o al derecho internacional sobre un determinado periodo de tiempo.
3. Estas comisiones sólo están activas por un periodo de tiempo determinado, el cual termina al entregarse un reporte al gobierno en turno (usualmente gobiernos resultado de una transición política), que contiene recomendaciones para propiciar la búsqueda por la justicia, apoyar a las víctimas y algunas otras para que la violencia no resurja.
4. Con el objetivo de que los reportes puedan tener mayores alcances, y, por ende, un mayor impacto, las comisiones deben de estar respaldadas por algún tipo de autoridad en todo momento para obtener información e investigar, así como para la propia seguridad de los miembros de este organismo. Lo más común es que las comisiones sean generadas como resultado de algún acuerdo de paz, o bien, como parte de alguna iniciativa gubernamental; en ocasiones organismos como las Naciones Unidas pueden ser parte del soporte para la legitimación del trabajo de la comisión.

Para que estas herramientas puedan ser utilizadas, tiene que haber habido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Esto implica: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, encarcelación, tortura, violación y otros abusos sexuales, persecución de un grupo o colectividad, desaparición forzada de personas, crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física, salud mental o física de un sector o varios sectores de la población (López Martínez, 2004: 193-194). Todas estas agresiones pudieron haber sido perpetradas por instancias gubernamentales, por otros grupos con aprobación del Estado o simplemente grupos que no encontraron resistencia del gobierno -aunque éste establezca no haber estado de acuerdo-.

Además de los crímenes antes mencionados, tiene que existir la condición de voluntad por parte del Estado en la participación y conformación de comisiones -en caso de que sean oficiales-.

En casos de países que van saliendo de conflictos armados, las comisiones de la verdad son parte de los acuerdos de paz que se firman antes de la transición política. En estos casos, suele haber apoyo de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas que pueden apoyar económicamente los trabajos de la comisión. Si las comisiones no son parte de algún acuerdo de paz, los gobiernos pueden solicitar la creación de la misma; en estos casos las instancias internacionales pueden dar algún tipo de aval si es que es requerido. Existe también el caso de comisiones de la verdad no oficiales que parten de organismos civiles como instancias religiosas, quienes hacen la labor de investigación de la verdad por medios propios.

Las comisiones de la verdad, sean oficiales o no, prácticamente actúan de la misma manera. Se busca obtener testimonios de personas que han sido víctimas directas o indirectas de la violencia, se hace una búsqueda exhaustiva de documentos, demandas, archivos, bitácoras, grabaciones... con el fin de reconstruir el contexto, la historia, los hechos que han quedado en el silencio e impunes. Una vez que se tiene la información, se elaboran reportes cuyo objetivo es presentar la verdad de los hechos -una verdad que habrá de convertirse en oficial-. Los textos elaborados por las comisiones oficiales son entregados a instancias gubernamentales para que se hagan públicos, se presenten ante la sociedad y la verdad sea de dominio público. Las comisiones no oficiales llevan el mismo procedimiento, la diferencia es que los reportes no son presentados ante instancias gubernamentales sino ante la sociedad civil. En el momento en que el reporte se entrega, las comisiones de la verdad resultado de acuerdos de paz o de solicitudes de gobiernos en transición dejan de funcionar. Es decir, la labor de las comisiones llega hasta la entrega del reporte. No hay ninguna comisión que tenga manera de saber u obligar al gobierno en turno a actuar para que las recomendaciones se cumplan.

En una situación ideal, los gobiernos atenderán de manera inmediata las recomendaciones planteadas para mejorar las condiciones de las víctimas o asegurar que la violencia no pueda repetirse. Los testimonios podrían ser utilizados en juicios para hacer justicia en favor de las víctimas y que los victimarios paguen por las atrocidades cometidas. Si esto fuera así, la justicia transicional, realmente abarcaría todas las aristas que deberían de cubrirse para hablar del desarrollo, justicia

social y reconciliación que persigue. Sin embargo, si se considera que el proceso de justicia transicional plantea conocer la verdad, plantear programas de reparación, reformas institucionales y actuar penalmente en contra de los responsables; las comisiones de la verdad están llevando a cabo todas sus responsabilidades, pero, al final, su labor está incompleta -por su naturaleza- cuando de hablar de justicia transicional se trata. No se trata de decir que las comisiones de la verdad no funcionan, porque son el cimiento para que la sociedad pueda reconstruirse, pero el impacto que deberían de tener a largo plazo, queda sujeto a factores que se relacionan más con quien esté al frente del país, que con seguir los pasos para alcanzar la reconciliación.

Hablar de que solamente algunas violaciones a los derechos humanos pueden ser agravantes para que se pueda proceder a una comisión de la verdad en beneficio de las víctimas ya es una limitante. Pero, que la verdad y acciones para evitar que altos grados de violencia puedan resurgir -incluida la justicia- quede a merced de la voluntad política del gobierno en turno puede considerarse como un obstáculo tan importante que el trabajo de la comisión no pueda ayudar a la sociedad victimada. Considerar que un tejido social que ha sido vulnerado por el propio estado, o bien, que no fue defendido por el mismo, puede sanarse solamente hablando del derecho a la verdad -que sí puede garantizar la investigación sobre el pasado que realiza una comisión de la verdad- resulta casi inútil si no hay una consecuencia en términos de justicia para los perpetradores. No se trata de venganza, se trata de construir una sociedad en donde se privilegie la reinserción de las víctimas sobrevivientes y el respeto a quienes no sobrevivieron; se trata de que la memoria perdure en las sociedades para evitar que las historias de violencia se repitan.

A partir de los años 70's muchos países alrededor del mundo buscaron hacer la transición a gobiernos democráticos, llevando a cuentas crímenes de lesa humanidad. Si bien las comisiones de la verdad existían desde esas épocas, son herramientas que empezaron a utilizarse por la comunidad internacional con mayor fervor a partir de los años 90's. Casos muy exitosos como Myanmar (antes Birmania), Sudáfrica, Ruanda, Uganda, Filipinas, Nepal, Alemania pueden

mencionarse. Sin embargo, América ha sido el continente que mayor necesidad ha tenido de este tipo de herramientas y donde se han tenido diversidad de experiencias.

Para los años 80's Latinoamérica se convirtió en tierra fértil para la democracia, pero también para la reconciliación con el pasado, después de años de graves violaciones contra los derechos humanos perpetrados por los gobiernos dictatoriales que diversos países enfrentaron. Después de situaciones tan delicadas como los miles de desapariciones forzadas, asesinatos, encarcelados; las familias de las víctimas claman justicia, la cual es difícil de hallar en gobiernos de transición. Las comisiones de la verdad, pueden considerarse (de acuerdo con sus características) como un punto que favorece la acción hacia la reconciliación, podrían considerarse como un acercamiento a la justicia ya que, si bien una comisión no es un organismo de procuración de justicia, los documentos que producen son evidencias contundentes que pueden ser utilizadas en juicios.

El objetivo de este trabajo no es hacer un recuento de las comisiones de verdad que se han aplicado en toda América Latina, pero sí analizar el rol que estos mecanismos han jugado con el fin de proponer algunos aspectos que puedan ayudar a obtener mejores resultados en beneficio de las personas. Si algunos de los aspectos de las comisiones de la verdad pudieran mejorarse probablemente podrían tener efectos más inmediatos con un impacto en el largo plazo o incluso que puedan ser utilizados ante otros crímenes perpetrados por el estado sin que puedan considerarse crímenes de lesa humanidad. De esta manera, el análisis de esta investigación se limita a dos casos icónicos en Latinoamérica y que -debido a las características particulares- pueden representar una buena dimensión de cómo funcionan y qué alcances pueden tener comisiones de la verdad de manera positiva o negativa en sociedad violentas como los casos de: Argentina y Guatemala.

Argentina, a modo de comisión oficial de la verdad, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). "Tras su fracaso en la política económica, y la derrota en la guerra de Las Malvinas, además del gran repudio internacional por sus graves violaciones a los derechos humanos, a fines de 1983 los militares argentinos se vieron forzados a devolver el poder a los civiles. En Argentina, los derechos humanos de miles de personas fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas... Los organismos de derechos humanos

establecen en cerca de 30,000 personas el número de desaparecidos y asesinados en la guerra sucia.” (Cuya, 1996: 3).

La CONADEP estaba formada por escritores, gente de diversas religiones e incluso miembros del nuevo gobierno. A lo largo de su investigación, los miembros de esta comisión fueron insultados y amenazados, pues los perpetradores seguían viviendo en el país. Después de 9 meses de trabajo se entregó el reporte, en donde además de todos los testimonios, se dieron cuenta que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales tenían un “pacto de sangre” que implicaba la participación de todos en las violaciones a los derechos humanos y el no hablar de los actos atroces que habían llevado a cabo.

Dentro del informe, se entregaron diversas recomendaciones a los distintos poderes del Estado “con la finalidad de prevenir, reparar y finalmente evitar la repetición de conculcaciones de los derechos humanos” (Cuya, 1996: 8). Sin embargo, a pesar del camino recorrido, hay una deuda pendiente pues algunas recomendaciones, después de más de 25 años, se busca sean puestas en práctica. Aun así, la Comisión Argentina de la Verdad es un ejemplo de éxito, pues los hallazgos fueron muy concisos, y aunque el gobierno parecía estar interesado y cooperar; simplemente su voluntad no llegó a tanto. Las políticas de memoria han aparecido o desaparecido -según sea el caso- de acuerdo con la postura de los gobiernos; mientras los gobiernos de izquierda han sido más empáticos con la causa, gobiernos más de derecha han creado leyes en contra de algunas ya creadas en favor de la memoria y los derechos de las víctimas.

Guatemala es el caso de una Comisión de la Verdad que en términos de voluntad política, ha encontrado obstáculos que han mermado sus alcances; por ejemplo el hecho de que cuando la comisión presentó su informe, el presidente se negó a recogerlo. Esto resulta a su vez irónico, considerando que fue el propio gobierno quien solicitó que se crease este organismo dada la magnitud de las violaciones además de ser parte fundamental de los Acuerdos de Paz que dieron fin al conflicto armado.

El resultado de la comisión se tradujo en un informe con diversas recomendaciones. Se proponía que se “cree y se ponga en marcha con carácter de urgencia un Programa Nacional de

Reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado y sus familiares” (Cuya, 2001: 8). Las diversas propuestas se orientaban a desarrollar nuevos principios de equidad, participación social y respeto a la identidad cultural a través de la compensación económica, restitución material y rehabilitación. La práctica de estas medidas ha sido casi nula y una suerte similar ha corrido la justicia para las víctimas y el castigo a los perpetradores - pese a haber casos de sentencias icónicas-.

“Políticamente, se necesita una ruptura con el pasado” (Martín, 2007: 6) Las Comisiones de Verdad pueden ser un buen mecanismo para hacerlo, rehabilitar a la sociedad y empezar con una vida más digna para todos. Sin embargo, la realidad es que la efectividad de estas herramientas depende de diversos factores, algunos de ellos tan complejos como actitudes en torno a sentir la autoridad cuestionada y al poco reconocimiento de las situaciones reales. Es poco probable que los gobiernos asuman responsabilidades como entidades que están al servicio de la población que los eligió, sin pretender individualizar. Entonces, es importante considerar que hay actitudes negativas que marcan el futuro de una sociedad entera y que se convierten en una bomba de tiempo para que el círculo de la violencia continúe.

Se parte entonces del hecho de que las violaciones a los derechos humanos no deberían de suceder, ningún estado ni la comunidad internacional debería permitirlo. Desafortunadamente para el caso latinoamericano, las coyunturas internacionales como la Doctrina de Seguridad Nacional permeada por los Estados Unidos a todo el continente, el comunismo como un enemigo mundial, y los conflictos políticos que han dominado el continente resultaron una “receta perfecta” para el desastre. Gobiernos militares y golpes de Estado se hicieron rutina, movimientos con ánimo de cambiar la desigualdad social optaron por las armas, así como la presión del enemigo subversivo generaron un ciclo de violencia que terminó en miles de víctimas civiles. Se dio paso entonces a la lucha social por la dignidad, el clamor de justicia, el exigir que el estado, junto con el gobierno en transición hicieran su verdadero trabajo en favor de la ciudadanía. Aunque la verdad parecía un predicamento, pero las comisiones de la verdad resultaron ser herramientas en favor de ella ante

estados que parecían privilegiar el olvido y la injusticia. Si bien los resultados de las comisiones pueden ser cuestionados, es necesario analizar el trabajo de estos organismos pues la sociedad cada día necesita más de herramientas en favor de la paz.

Pregunta de Investigación

¿Cómo la propia naturaleza de las Comisiones de la Verdad puede mermar su capacidad de acción para alcanzar la justicia transicional?

Objetivos

Objetivo General

Analizar las experiencias de las comisiones de la verdad en los casos de Argentina y Guatemala identificando los obstáculos que pueden mitigar su impacto en la sociedad en un corto, mediano y largo plazo.

Objetivos Particulares

- Conocer los contextos que pueden dar pie a la necesidad de una Comisión de la Verdad.
- Determinar qué son, cómo funcionan y qué efectos pueden tener las Comisiones de la Verdad en una sociedad violentada.
- Hacer un recorrido histórico para establecer el contexto en que se generan las Comisiones de la Verdad para los casos de Argentina y Guatemala.
- Hacer un balance en relación al contexto, al funcionamiento, al accionar y los alcances que tuvieron las Comisiones de la Verdad para los casos de Guatemala y Argentina.
- Analizar la información histórica y la información recabada en la investigación de campo para proponer posibles mejoras.

Justificación

¿Qué pasa cuando las instituciones encargadas de la administración de la justicia en una sociedad han matado, secuestrado y violado de manera sistemática los derechos humanos? ¿A quién recurrir? ¿Se debe de olvidar la idea de justicia? ¿Se debe de conformar una sociedad sin memoria? ¿Sólo queda esperar que no vuelva a pasar? ¿Los crímenes más deleznable deben quedar en la impunidad? ¿La reconciliación debe ir aunada con la omisión?

El conflicto está presente en toda sociedad. Sin embargo, en el momento en que esos conflictos han dejado completamente de lado la dignidad humana, no resulta sencillo pensar en una sociedad saludable con una necesidad ahogada de justicia. Las comisiones de la verdad tratan de convertirse en una herramienta de reconciliación para las sociedades cuyos derechos humanos han sido violados de manera masiva y sistemática por algún actor, ya sea de la sociedad civil o -que es más recurrente- las propias instituciones del Estado que pueden darse o no en un contexto de conflicto armado.

Las Comisiones de la Verdad pueden ser una herramienta eficaz para reconstruir el tejido social, después de que se han perpetrado crímenes en contra de la sociedad civil. La importancia de este estudio radica en que con base en dos icónicos casos latinoamericanos se puedan analizar los obstáculos que pueden tener debido a su propia naturaleza o a factores externos para que puedan tener una actuación más eficiente en un corto, mediano y largo plazo; incluso teniendo un margen más amplio de acción. Es relevante considerar una mejora en el funcionamiento de estos organismos, para que no haya perpetradores convertidos en jueces, tratando de proporcionar justicia a una sociedad ya de por sí lastimada.

Si estos mecanismos se replantearan y no dependieran de la voluntad de las instituciones gubernamentales, entonces podríamos hablar no sólo de una mayor eficacia sino de una mayor posibilidad de uso. Traducido esto, a que éstas herramientas no sólo se apliquen en casos de violaciones de *lesa humanidad*, sino que se puedan aplicar a otros casos igualmente terribles y desgarradores con el único fin de desarrollar sociedades que vivan en paz y cerrar ciclos de violencia directa, estructural y cultural.

No se trata de encontrar el hilo negro, sino de tratar de satisfacer de una mejor manera una necesidad de justicia, que también es un derecho humano. Una sociedad puede pretender que nada pasó, pero en un corto, mediano y largo plazo, mientras las heridas sigan doliendo no se puede asegurar que el mismo reclamo de justicia no reavive la violencia. Y también de construir sociedades con memoria, sociedades donde no se privilegie el olvido, donde las nuevas generaciones conozcan la verdad sobre su historia para tratar de evitar que atrocidades vuelvan a cometerse.

Tal vez, con base en este análisis se pueda lograr una mejora que derive en que las comisiones de la verdad logren convertirse de órganos de observación y recomendación a organismos con capacidades incluso constitucionales que realmente puedan generar un cambio. No dejar a un lado la justicia transicional en casos de dictaduras, pero sí avocarse más a la justicia restaurativa. No convertirse en un mecanismo sustitutivo de la justicia penal pero que sí se convierta en un mecanismo de presión para que las autoridades cumplan con las leyes y acuerdos existentes. Y aunque la sociedad civil ha demostrado con creces que tiene el impulso para hacer que las cosas cambien, que las comisiones sean órganos con la capacidad para hacer cambios más de fondo para que el trabajo de la sociedad civil sea más sencillo generando un cambio que reinserte socialmente a las víctimas. Comisiones de la verdad que sean capaces de traer la justicia carente por innumerables factores, pero continúa siendo una necesidad y un derecho humano. Convirtiéndose, de esta manera, en herramientas que obliguen a las instituciones, particularmente gubernamentales, a trabajar por la ciudadanía.

Hipótesis

Las Comisiones de la Verdad son condicionadas por su propia naturaleza en detrimento de los alcances que podrían tener, dejándolas como herramientas necesarias para la verdad, pero incompletas para alcanzar la justicia transicional

Metodología

Comisiones de la Verdad: Herramientas necesarias, aunque incompletas para alcanzar la justicia transicional. Casos Latinoamericanos de Guatemala y Argentina es una investigación de tipo cualitativo pues pretende ampliar el panorama que se tiene sobre las Comisiones de la Verdad partiendo de casos latinoamericanos específicos que han resultado icónicos para de esta manera analizando sus características, así como los alcances y resultados que han tenido, se pueda hacer una propuesta de mejora congruente con la realidad de una sociedad violentada.

El estudio tendrá varios alcances se trata de un estudio de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo. Se trata de un estudio con alcance exploratorio porque si bien existe bibliografía sobre las comisiones de la verdad, hay poco análisis en relación a los alcances y los logros que han tenido y no parece existir un estudio crítico que proponga cómo puede ser posible mejorar estos mecanismos. Además, es importante considerar que no existe una comisión de la verdad con características iguales a otras; esto hace que los estudios sobre el tema sean más complejos, ya que no sólo las variantes que puede haber son muchas, sino también los elementos que pueden limitarlas y de los que terminan dependiendo para poder rendir frutos.

También será un estudio con alcance descriptivo. “Los estudios descriptivos se dirigen a la descripción de fenómenos sociales en una circunstancia temporal y especial determinada” (Tecla, 1978: 48). Precisamente, el estudio intenta hacer una descripción detallada de las circunstancias que permiten los altos grados de violencia, cómo es que se desarrolla la represión y los mecanismos contra la subversión, para poder entender la necesidad de una comisión de la verdad y así poder establecer cuál fue el entorno en que este mecanismo aparece, se desarrolla y cómo es que la comisión termina su función para poder determinar con base en las acciones posteriores, tanto de la sociedad civil como de la autoridad el alcance que se logró.

Sin embargo, fundamentalmente, el trabajo tiene un alcance de índole explicativo. La descripción termina siendo irrelevante si no se le da un sentido a todo aquello que conforma un mecanismo tan específico como una comisión de la verdad, pero, sobre todo, sin dar una explicación por el contexto del que se alimenta y dentro del cual emerge. El proceso de transición en cada país, dio lugar a la necesidad del uso de un método no convencional para otorgar a la sociedad el derecho

a la verdad, pero también para dar paso a la justicia que no había encontrado camino. Si en el análisis posterior se encuentra que no se cumplieron con las recomendaciones emanadas de los reportes producidos por las comisiones, si no se dio lugar a remuneraciones, a políticas por la memoria, a juicios, o bien, depende del gobierno en turno la efectividad de este mecanismo; entonces la efectividad, el esfuerzo y el dinero invertido en una comisión podría ser cuestionado.

Los métodos a seguir en este estudio son el método histórico y el comparativo. “La investigación histórica es un intento por establecer hechos y llegar a conclusiones sobre el pasado” (Tecla, 1978: 49). Para cada uno de los casos, se hace todo un recorrido histórico desde los primeros golpes militares hasta la última dictadura. Se hace una descripción con base en la historia para determinar cómo es que se fue incrementando el espiral de violencia para poder establecer las atrocidades que se cometen en torno a dos de las dictaduras más cruentas en América Latina. El método histórico permite hacer una reconstrucción de hechos que se ve enriquecida a través de las diferentes técnicas utilizadas, que habrán de explicarse más adelante. Las comisiones de la verdad, a través de los textos que resultan de ellas, precisamente, hacen una recreación de la historia para poder dar a conocer la verdad de los hechos y que esto traiga reconciliación y paz para las víctimas directas o indirectas.

Que la reconstrucción histórica abarque hasta la historia más reciente es determinante para poder evaluar los logros, las limitaciones y los alcances que tanto la comisión argentina como la guatemalteca han tenido. “El análisis comparativo es un método cualitativo con el que el investigador pretende dominar detalles sutiles” (Babbie, 2000: 285). “El método comparativo es un método para confrontar dos o varias propiedades enunciadas en dos o más objetos, en un momento preciso o en un arco de tiempo más o menos amplio” (Tonon, 2011: 2). A través del método comparativo se podrá hacer un balance de los casos de estudio que será relevante para poner en perspectiva los logros y obstáculos que han enfrentado los casos de estudio. Siendo el objetivo mejorar estos mecanismos de justicia y reconciliación, es importante considerar experiencias pasadas junto con todos sus detalles específicos.

La selección de los casos de estudio fue realizada por la magnitud de los conflictos pero también debido a las diferencias en su propia naturaleza. Esta comparación resultará en similitudes y disimilitudes que derivaron del trabajo de las comisiones de la verdad oficiales y no oficiales para que sean consideradas en la propuesta o bien las diferencias que podrían enriquecer las *nuevas* comisiones de la verdad; tomando como base los elementos positivos en cada uno de los casos teniendo cuidado de que no parezca una herramienta utópica.

Estas comisiones, con las características específicas que cada una contiene, generaron un reporte. Y, si bien el trabajo de las comisiones como organismos termina en la entrega del reporte, no es posible evaluar su trabajo sin considerar lo que ha pasado en un corto, mediano e incluso largo plazo. La temporalidad del estudio se había planteado en un inicio para cubrir los cinco años posteriores a la entrega de los reportes. Sin embargo, esta delimitación temporal interfiere con algunas acciones relevantes que se han logrado. La complejidad del estudio recae, precisamente, en que, si bien se trata de conflictos del pasado, en la realidad de ambos países están vivos y presentan continuos cambios. Es por este motivo que la investigación debió hacer un cierre en cuanto a su temporalidad hasta diciembre de 2017.

Una parte fundamental tanto para el recorrido histórico como para la comparación es que se requiere del uso de diversidad de fuentes para poder evaluar la “verdad histórica” y presentar tantos puntos de vista como sea posible para su reconstrucción. La técnica “es el conjunto de mecanismos, así también de sistemas y medios de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos” (Tecla, 1978: 29). La recolección de datos de mi investigación se hará a través de técnicas documentales y de campo, cualitativas. Ambas teniendo un peso similar dentro del trabajo, pues tienen una función complementaria.

La investigación documental se empleará en tres momentos con un mayor peso. El primero será para dar el marco de referencia conceptual y teórico de la investigación, para lo que se utilizarán fuentes bibliográficas mayores de estudio: libros. Sin embargo, no puedo descartar referencias menores como artículos especializados y diarios que puedan ser de utilidad, sobre todo para las

etapas históricas más recientes, así como columnas y aniversarios de ciertos hechos que se encuentran en la actualidad.

En segundo lugar, los libros de texto también serán utilizados como fuente principal para establecer el contexto que dio origen a la necesidad de crear una comisión de verdad en cada uno de los casos (Argentina y Guatemala). Por ende, la estructura, objetivos y acciones de las comisiones de verdad también serán estudiados a través de esta técnica.

Las fuentes documentales se ampliarán en una tercera etapa. En este caso, los reportes de cada una de las comisiones de verdad se convierten en la fuente principal:

1. *Nunca Más* presentado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina.
2. *Guatemala: Nunca Más* en las dos versiones; la primera que procede de la “verdad oficial”, derivado de los acuerdos de paz a través de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y, también, la versión presentada por la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica en Guatemala producido por la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala

De esta manera, a partir de las fechas en que son entregados los reportes, se buscarán fuentes hemerográficas para conocer cuáles son los hechos, obstáculos o logros que se han tenido a raíz de la entrega de los textos.

Al tratarse de una investigación del orden cualitativo, la investigación de campo es obligada pues necesito tener una visión más amplia de los alcances y efectos que tuvieron las comisiones. “La entrevista a fondo es uno de los pilares de la observación, pero también de los investigadores que no pretenden formar parte de lo que estudian” (Babbie, 2000: 260). Esta es la técnica que permitirá cumplir mis objetivos, y es que las entrevistas a fondo, que realicé a personas víctimas indirectas (familiares de desaparecidos) de la represión así como personas que trabajan en organizaciones que se dedican a la ayuda legal de víctimas y participan de manera activa en las políticas en favor de la memoria tanto en Argentina como en Guatemala; han permitido tener una observación real de los acontecimientos que refuten, aseguren o contradigan los documentos

oficiales. Además, en este caso, la sensación de justicia que hayan percibido las víctimas y los involucrados en las comisiones de verdad no pueden verse reflejadas en ningún documento. Por esto, tanto las fuentes documentales como el trabajo de campo tendrán el mismo peso en este texto.

El proceso de selección de las personas entrevistadas fue el mismo para ambos países. La primera limitante fue el hacer el viaje, y, por lo tanto, antes de realizar el viaje se tenían que tener las entrevistas ya pactadas. De esta manera, a través de la lectura de las fuentes, fui encontrando las organizaciones que han dado continuidad al trabajo de la comisión o que formaron parte de estos trabajos. Al buscar diferentes organizaciones en línea me fui percatando del tipo de trabajo que hacían y también del grado de involucramiento de víctimas directas o indirectas de la violencia. Se hizo una selección de al menos 8 organizaciones para cada caso, y se hizo un primer contacto a través de correo electrónico. De este número de organizaciones, no todos respondieron y así se fueron eliminando algunas. Las citas fueron agendadas y una vez estando en Ciudad de Guatemala y Buenos Aires se procedió a las entrevistas. La mayor parte de las entrevistas fueron con personas diferentes con quienes yo había hecho contacto y esto fue gracias a la amabilidad, pues me agendaron con las personas de mayores rangos en las organizaciones y con más experiencia. En Guatemala hubo un caso no programado de un exmilitar quien resultó ser un prestador de servicios y fue una entrevista informal pero que decidí incluir por la relevancia.

Se trató de tener un balance en los casos de los entrevistados. El objetivo era conocer la perspectiva sobre la situación, algo sobre la historia, pero, sobre todo, sus experiencias personales y la parte “humana” que los libros no te dicen. Las entrevistas fueron semi-estructuradas con base en elementos sobre la organización (historia, obstáculos, lucha), sobre la situación de violencia en general, sobre su experiencia personal y cuál era la opinión sobre la comisión de la verdad -oficial y/o no oficial, según el caso- desde la perspectiva de la organización y la propia. Muchas otras preguntas y dudas surgieron en el transcurso de las entrevistas, pero era importante tener un punto de comparación entre todas ellas por lo que se generó esta directriz como guía.

Para ambos casos, haber estado en contacto con personas que perdieron a sus hijos, que buscaron a sus nietas, que perdieron a sus padres me permitió tener una sensibilidad mayor a las

situaciones. Escuchar voces entrecortadas al contar su experiencia, ver lágrimas caer al decir que no van a detenerse hasta encontrar a sus parientes, decir que se sienten culpables por estar vivos y no así sus seres queridos, ver ceños fruncidos por el enojo; fueron sin duda, palabras que en mí tuvieron un punto de inflexión. Mi perspectiva cambió en el momento en que, al hacer las transcripciones, podía imaginar todas las caras y me descubrí a mí misma llorando o enojada; indignada ante la insensibilidad de los victimarios, de quienes los encubren, de quienes siguen negando los hechos; incrédula ante la inhumanidad de los seres humanos, pero a la vez gratamente sorprendida ante la fuerza de la sociedad civil.

Esquema

Seis apartados darán vida a este trabajo:

La Introducción conformará la introducción del trabajo. En este apartado se hará el planteamiento incluyendo la hipótesis, objetivos, metodología, técnicas, así como el esquema del trabajo y la relevancia de la investigación representada en la justificación.

El segundo capítulo, *Sustento teórico*, contendrá el desarrollo de los conceptos clave contenidos en la hipótesis. Se iniciará con el entorno de violencia e impunidad propiciado por las dictaduras latinoamericanas para poder comprender la necesidad de una Comisión de la Verdad, que es un concepto clave para el texto, así como la justicia transicional que incorpora tanto la situación compleja vivida en todos los ámbitos después de una dictadura.

Tanto el tercer como el cuarto capítulo contendrán los casos de estudio: Guatemala y Argentina. En cada uno de ellos se tiene -en lo general- el mismo esquema en donde se hace un recorrido histórico resaltando episodios violentos o complicados, como golpes de estado. Asimismo, se hace una descripción detallada de la violencia que da pie a la necesidad de una Comisión de la Verdad; el contexto en que este organismo se genera, las acciones que siguió, así como los resultados en un corto, mediano y largo plazo.

Balance, formaría el quinto capítulo. Este apartado está dedicado al análisis de cada una de las Comisiones, pero sobre todo a la comparación entre las mismas, ya que si bien la violencia por

parte del Estado -principalmente- fue devastadora para el tejido social, las circunstancias sociales y políticas se han convertido en piezas fundamentales no sólo para el funcionamiento de los organismos por la verdad, sino de los avances en torno a la justicia.

Dentro de las *Conclusiones*, con base en las experiencias de los casos seleccionados para América Latina se propondrá el mejoramiento de las comisiones de la verdad. El hilo conductor de las propuestas será la mayor eficacia de las comisiones, pero sobre todo que el uso de las mismas se pueda extender a otros crímenes perpetrados por el estado sin que se trate necesariamente de crímenes de lesa humanidad.

SUSTENTO TEÓRICO



Fotografía tomada por la autora en alguna calle de Buenos Aires. Ejemplo del proyecto Barrios por Memoria y Justicia en donde se recuerdan los lugares precisos en donde personas fueron sustraídas. (junio de 2014).

COMISIONES DE LA VERDAD: HERRAMIENTAS NECESARIAS AUNQUE INCOMPLETAS
PARA ALCANZAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL
CASOS LATINOAMERICANOS DE GUATEMALA Y ARGENTINA

Violencia, verdad y justicia en América Latina

“...en América Latina la peor desgracia durante el siglo XX ha sido la extrema y sostenida polarización social sancionada por el cinismo de las minorías, la brutal represión armada, cada vez que se ha juzgado necesaria, y la impunidad, al parecer eterna, de los poderosos cobijados bajo la figura de un “orden natural” y, a veces denominado como democrático”.
(Gallardo, 2007:115)

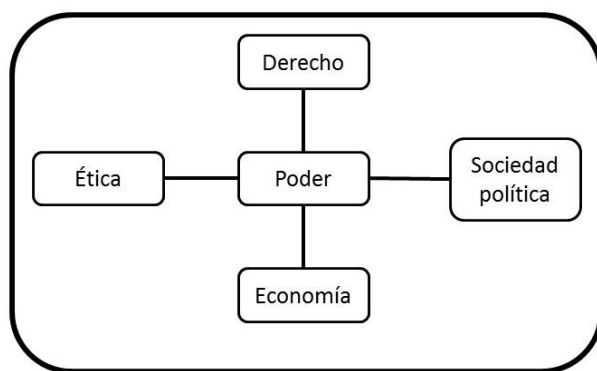
“Dictadura es un término latino que proviene de los vocablos *dicto- dixit- dictatum* que significan fijar u ordenar unilateralmente. En ellos tiene sus raíces el principio latino *magíster dixit*: el maestro dice” (Arriola, 2008: 19). El dictador no cuestiona, simplemente hace su voluntad a costa de lo que sea o de quien sea. La dictadura se torna fácilmente en una historia de abusos de poder. Pero si se contempla que la mayoría de las dictaduras inician como gobiernos de facto, y son soportadas por los aparatos militares estatales, entonces los abusos no son una casualidad. Desafortunadamente, América Latina es capaz de proveer diversos ejemplos de dictaduras, dictadores y golpes de Estado con trágicas consecuencias.

América Latina ha padecido dictaduras desde el siglo XIX y hasta finales del siglo XX (Haití y Chile fueron los últimos países en terminar con sus dictaduras militares en 1994 y 1990 respectivamente). Una de las características particulares de las dictaduras latinoamericanas fue su crueldad y las consecuencias atroces que acarrearón para buena parte de la sociedad en este continente. Si bien el abuso de poder es una constante en las dictaduras latinoamericanas, el grado de éste y su consecuencia en miles de muertos, desaparecidos y víctimas, sí es causa de impacto. Sobre todo, si se considera que los actos más cruentos se llevaron a cabo en los últimos 30 años del siglo XX¹.

¹ Las dictaduras suelen derivar de golpes de Estado que, en términos generales, significa que el mismo gobierno existente en un Estado se divide para formar uno nuevo; estos hechos suelen llevarse a cabo de manera violenta. En América Latina los mandos militares han sido las principales protagonistas de los golpes de Estado y el nuevo régimen los incluyó a ellos como jefes de Estado; es decir, que el golpe de Estado derivó en una dictadura militar. Sin embargo, también existen casos en donde los militares le otorgan el poder a algún civil y no se considera una dictadura militar sin importar el verdadero peso político de las fuerzas armadas. O bien, hay casos en donde el militar o el civil -que se convierte en dictador una vez en el poder- ha sido elegido ya sea por la sociedad en las urnas o a través de Asambleas para evitar la mayor fragmentación del Estado.

Existen muchos elementos que se conjugan para que pueda darse una dictadura. Y si bien cada caso es diferente, el común denominador para que surjan las dictaduras ha sido la inestabilidad política generalizada aunada a crisis económicas y sociales. No se puede dejar a un lado la parte ética de los miembros del gobierno, las condiciones políticas que tiene la sociedad -como su involucramiento en la política- y el respeto a las leyes del Estado. Tampoco se pueden omitir los contextos externos al Estado. Lo último fue –particularmente- relevante para el caso latinoamericano debido a la presión ejercida por los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría.

Existen diversos factores para la existencia de una dictadura. El autor Juan Federico Arriola (2008) propone la *teoría de las camisas de fuerza del poder* representada en el siguiente esquema:



Fuente: Arriola, 2008: 248.

Desde esta perspectiva, el poder está en el centro de la sociedad porque –de ser democrático- representa a una sociedad y trabaja en su beneficio. Pero, cuando se llega al poder a través de un golpe de Estado; el poder se transforma en el centro para controlar todos los otros aspectos. Esta teoría propone que el poder está limitado por el derecho, la economía, la sociedad política y la ética –de ahí el nombre de camisas de fuerza-. En el momento en que alguno de estos elementos es sobrepasado por el poder, entonces éste empieza a no tener restricción y se cae en una dictadura. Una dictadura suele orientar la economía hacia las oligarquías para ganar su respaldo. También cambia las leyes para poder mantenerse en el poder o justificar sus acciones en contra de la sociedad. Sin importar que se hable de un golpe de estado, de la manipulación de la economía o de cualquier otra medida en contra de la sociedad; se tratan de acciones poco éticas. La sociedad política tiende a ser inexistente debido a la represión o bien, le da fundamento a nuevos

movimientos que serán igualmente reprimidos; además de que se procura que las mayorías no reciban o sólo reciban cierta educación para evitar conflictos que vayan en contra del poder.

La relación entre América Latina y *la teoría de las camisas de fuerza del poder* es sencilla. El poder –incluso los que aparentaban ser democráticos pues había elecciones fraudulentas- se ha pasado casi tradicionalmente entre sectores específicos de la población. Las familias en el poder llevan siendo las mismas desde la colonia, prácticamente; la oligarquía ha tenido control del poder. Pero si a este hecho se agregan economías en agonía y en donde la sociedad política es prácticamente inexistente por falta de educación; la ética y brincarse el poder ha sido “juego de niños” pues parece no haber impedimentos para ello. Y si además se añade el factor Guerra Fría - como pretexto- y el patrocinio de los Estados Unidos de los golpes de estado; parece inminente que las *camisas de fuerza del poder* hayan sido enterradas junto con los miles de muertos consecuencia de las dictaduras.

“Los países llamados del Tercer Mundo, Asia, África y América Latina, fueron utilizados como cobayas para llevar a cabo la estrategia anticomunista y de golpes de Estado” (Roitman, 2013: 17). Se puede considerar el inicio de la Guerra Fría en la etapa de posguerra (alrededor de 1947) de la Segunda Guerra Mundial cuando se establece un nuevo orden político, económico y social liderado por los Estados Unidos. Este fenómeno se institucionaliza en América Latina a partir de los años 60's, cuando los golpes de Estado y las inestabilidades políticas se atribuyen a grupos guerrilleros comunistas o “subversivos”. Aunque esto no significa que no haya habido golpes de Estado previos a esta fecha².

El hecho de que el Movimiento Revolucionario de Izquierda en Cuba fuera capaz de derrocar al dictador Fulgencio Batista en 1959, abrió nuevas perspectivas para las izquierdas latinoamericanas que empezaron a tener mejor organización, más adherentes y acciones concretas. Cuando estos movimientos populares empiezan a ganar un espacio, se convierten en una verdadera amenaza en contra del orden establecido; entonces, las oligarquías empezaron a incomodarse.

² Cf. Anexo 1 (Pp. 299). Debido a la relevancia de los casos de Guatemala y Argentina para esta investigación, se hace una cronología de los golpes de Estado que hubo en ambos países.

Además, al exterior, cualquier régimen que amenazara el imperialismo norteamericano sufría las mismas consecuencias: desde preparación profesional para militares y escuadrones de la muerte por parte del Ejército estadounidense, hasta golpes de Estado y establecimiento de nuevos gobiernos con su patrocinio. En la mayoría de los países latinoamericanos, las oligarquías apoyaron estas acciones o bien, dejaron que sucedieran y se quedaron como espectadores, cuidando sus propios intereses.

Los Estados Unidos tuvieron su incursión en América Latina en dos etapas. La primera desde 1945 hasta 1961, cuando John F. Kennedy asume la presidencia de este país; y enfatiza la defensa colectiva con el fin de evitar un ataque extracontinental. Es por esto, que se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947, quedando adheridos todos los países latinoamericanos excepto: Trinidad y Tobago, Nicaragua, Ecuador y Bahamas, quienes se adherirían más tarde, y Canadá que nunca firmó el acuerdo³. La parte medular del Tratado implica que en el momento que hubiera un ataque bélico en alguna parte del territorio continental -excepto Canadá-, el resto de los Estados firmantes estarían obligados a unirse en la defensa del país atacado. Así también, se aprovechó para colocar en el mercado latinoamericano el material bélico sobrante de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra contra Corea (Roitman, 2013: 144).

La segunda etapa fue a partir de 1961, en que los mismos Estados Unidos redefinen el papel de sus fuerzas armadas en el continente por la presión de los nuevos movimientos sociales que brotaron y se fortalecieron al manifestarse en contra de la guerra de Vietnam. De esta manera, el rol que tendrían ahora los Estados Unidos y sus tropas en América Latina sería de asesores. Para los intereses estadounidenses era –incluso– más conveniente “asesorar”, controlar, entrenar y/o influenciar a las tropas de cada país para que no se pudiera culpar al Estado norteamericano por ninguna acción. Sin embargo, el objetivo se mantuvo y era claro: terminar con el movimiento comunista para mantener el orden establecido –orden conveniente a sus intereses–.

³ El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca sigue activo para la mayor parte de los países latinoamericanos excepto Canadá que nunca perteneció. México se retiró en 2012 así como los países miembros de la Alianza Bolivariana para América (ALBA): Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

En 1964, el Departamento de Investigación y Desarrollo del Ejército de Estados Unidos solicitó a las Oficinas de Investigaciones de Operaciones Especiales de la American University el desarrollo del denominado Plan Camelot. La universidad tenía como objetivo medir y detectar la potencialidad de guerra interna, estimación de efectos de reacción, recolectar información y manipular los sistemas estatales en las naciones latinoamericanas con presencia comunista. Un año más tarde, esta acción sería denunciada por diferentes intelectuales y académicos, quienes habían recibido una invitación para participar en el proyecto en sus respectivos países (Roitman, 2013: 62). Pese a la denuncia, el plan continuó.

Parte fundamental dentro de la injerencia de Estados Unidos en América Latina fue la fundación de la Escuela de las Américas. Esta escuela, ubicada en Panamá, se convirtió en el centro de adiestramiento de las fuerzas armadas y grupos paramilitares de las diferentes naciones latinoamericanas desde 1947 hasta 1984. Algunos de los más importantes genocidas se graduaron de esta universidad como Héctor Gramajo uno de los autores de las políticas genocidas de Guatemala en los años 80's y Leopoldo Fortunato Galtieri líder de la junta militar en los últimos dos años de la política de terrorismo de estado en Argentina. El ex presidente Bill Clinton cerró oficialmente la Escuela de las Américas, al relacionar la institución con los genocidios. Sin embargo, apareció el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation⁴ cuya naturaleza es la misma.

“La incorporación de las fuerzas armadas a la lucha antsubversiva facilitó la militarización de las sociedades, dio pie al militarismo y provocó los golpes de Estado institucionales” (Roitman, 2013: 87). Esto se puede ver reflejado a tal grado, que los países latinoamericanos han tenido más gobernantes militares que civiles y los primeros lo han hecho por periodos más largos. Los ejércitos fueron utilizados para mantener el orden establecido y cuidar los intereses de las oligarquías, a costa de lo que fuera necesario y sin tener ningún límite, dejando resultados como los que presentan en la siguiente tabla:

⁴ La Escuela de las Américas se transformó en el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation ahora ubicado en el Estado de Georgia en los Estados Unidos. Este Instituto sigue dedicándose al adiestramiento militar. Sin embargo, en el sitio oficial de internet, la historia de este Instituto no incluye la fase en Panamá por lo que sólo abarca la historia a partir del 2001. Asimismo, es de destacar que algunos países latinoamericanos la siguen utilizando como escuela de adiestramiento de sus fuerzas especiales.

País	Periodo de dictaduras	Número de Víctimas ⁵
Argentina	1974-1983	46,000
Cuba	1952-1958	20,000
Colombia	1946-1991	300,000
Chile	1973-1989	3,065
El Salvador	1980-1992	75,000
Guatemala	1960-1994	200,000
Haití	1958-1985	45,000
Nicaragua	1984-1991	70,000
Perú	1960- 2000	69,000
Panamá	1968-1989	3,000
República Dominicana	1965 (invasión de E.U.A)	6,000
Países como Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Uruguay y Venezuela no manejan cifras oficiales de víctimas de sus dictaduras por ocultarlas o por falta de ellas.		

Fuente: Roitman, 2013: 85-86

América Latina, casi en su totalidad, padeció dictaduras militares. En gran medida, a consecuencia de la presión internacional de los Estados Unidos (principalmente) y su patrocinio. El siguiente mapa muestra los países latinoamericanos que tuvieron una dictadura militar en el periodo de la Guerra Fría -entre 1947 y 1991-. Los países que sufrieron el periodo más álgido de la violencia dictatorial -que inició en los años 70's- se marcan en color oscuro. A rayas se marcan los países que terminaron antes de estos años con las dictaduras.



Fuente: Roitman, 2013: 209-220

El resultado de la presión internacional ante las atrocidades cometidas en este continente - ventiladas sobre todo por organizaciones humanitarias- no dejó otra opción más que se dieran las transiciones. Esto quiere decir que dichas transiciones también fueron controladas o asesoradas por

⁵ Las cifras implican el total manejado oficialmente entre muertos y desaparecidos, haciendo énfasis en que todos los números son aproximados pese a ser las cifras oficiales.

los Estados Unidos en conjunto con las fuerzas armadas que estaban en el poder y las oligarquías, que no querían perder sus privilegios. Las transiciones parecieron no haber sido tan dolorosas -pues no se podía afectar más a una sociedad resquebrajada-, pero los pactos entre los nuevos gobiernos y perpetradores asegurando su inmunidad, sí hicieron que la justicia y la verdad se empañaran.

El estereotipo del *retorno a la democracia* es común en los países y sociedades que experimentaron dictaduras e implica el final de una etapa –la de Seguridad Nacional- y el deseo de no retorno a sus prácticas e instituciones –las del terror del Estado- (Gallardo, 2007:40). En la mayoría de las transiciones, los gobiernos entrantes se toparon con la interrogante sobre las acciones a tomar ante las violaciones graves a los derechos humanos perpetrados por la dictadura saliente. Las nuevas democracias tomaron como bandera, esclarecer la violencia del pasado y hacer justicia. Sin embargo, la medida en que estas acciones realmente se llevaron a cabo varió de acuerdo con el contexto de la transición⁶, así como el grado de involucramiento en el nuevo gobierno de las fuerzas armadas o políticos de la dictadura saliente, e incluso el entorno social particularmente la situación económica y el nivel de educación de las víctimas y sus familiares han marcado diferencias importantes entre los casos que se consideran.

Las nuevas democracias en América Latina –en su mayoría- iniciaron a partir de 1990. “El objetivo era la construcción paralela tanto de la democracia como del Estado de derecho. Los cambios más inmediatos estuvieron encaminados a perfeccionar el sistema electoral” (Orduña, 2008: 29). El simple hecho de tener elecciones ya era un logro, el fortalecimiento del Estado ha tomado tiempo; pero la huella del pasado ha sido un fantasma latente. Por lo tanto, la mayoría de las nuevas democracias se vieron obligadas a atender el pasado a través del establecimiento de comisiones de la verdad; cada una con características particulares. Estos hechos, de acuerdo con la autora Eva Orduña (2008), ya viéndose como un ejercicio concreto de democratización en sí mismo al permitir y estimular la participación de la sociedad.

⁶ Las transiciones que involucraron organismos como la Organización de las Naciones Unidas como resultado de Acuerdos de Paz se vieron obligados a realizar acciones como la creación de Comisiones de la Verdad o Esclarecimiento de los Actos del Pasado como el caso de Guatemala.

Genocidio y Crímenes contra la humanidad, los extremos de la violencia

“Las cuestiones que deben afrontar por igual las víctimas y los perpetradores, aunque sólo sea para negarlas y suprimirlas, son: reconocer y hacer público lo que ocurrió, llevar a los perpetradores ante la justicia y reparar lo que pueda repararse, política, material y moralmente”
(Goldhagen, 2011: 47).

a) Genocidio

“La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en su Resolución 96 (1), el 11 de diciembre de 1946, que el genocidio es un delito relevante de derecho internacional, contrario al espíritu y a los fines de la ONU” (López Martínez, 2004: 502). La crueldad y el número de víctimas del Holocausto Nazi se convirtieron en el fundamento para que el asesinato en masa fuera un elemento para condenar política y legalmente a nivel internacional. Sin embargo, no fue sino hasta el 9 de diciembre de 1948 que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaría el texto *Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio*⁷, para posteriormente ser ratificado por los países miembros de este organismo internacional.

A partir del término de la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha, una de las principales preocupaciones ha sido evitar que hechos de violencia masiva puedan repetirse. Por lo tanto, el aspecto clave -y es importante recalcarlo- en el Proyecto de Convención sobre el Crimen de Genocidio, era el compromiso que firmaban los adherentes a este documento para castigar a los autores de actos de genocidio que se encontraran dentro de su territorio a pesar de que sus acciones se hayan llevado a cabo en otro lugar; esto con base en el concepto de universalidad de jurisdicción⁸. La implicación directa de este estatuto era que los acusados de genocidio deberían ser juzgados ya sea por Tribunales de su propio Estado o por alguno internacional (en ese momento inexistente).

⁷ Cf. Anexo 2 (Pp. 300). Documento completo: *Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio*.

⁸ “El principio de jurisdicción universal consiste en que cualquier Estado tiene autoridad judicial para perseguir, procesar y castigar a los individuos que resulten responsables de graves crímenes internacionales o contra el derecho internacional, incluso aquellos cometidos fuera de su jurisdicción territorial o sin relación alguna con la nacionalidad de los acusados o de las víctimas, pues tales delitos, por su atrocidad intrínseca, ofenden a la humanidad entera y desquician el orden público de la comunidad mundial”. (Valencia, 2000:2)

Para que esto pudiera ser efectivo, tendría que crearse primero el Tribunal Penal Internacional también llamado Corte Penal Internacional. La creación de este organismo tuvo muchos gobiernos detractores como los de: Estados Unidos, India, China, Rusia, Israel, Cuba e Irak quienes a la fecha no han firmado ni ratificado el Estatuto de la Corte. El alegato de los detractores radica en que la intervención internacional en asuntos internos conllevaría una violación a la Constitución de cada nación. Por otro lado, los países a favor de este organismo manifestaron la necesidad de una instancia con estas características pues – en casos de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio- el Estado se encuentra involucrado directamente en las agresiones en contra de sectores de la sociedad, disminuyendo la posibilidad de que se haga justicia.

A pesar de la preocupación que habían manifestado en un inicio las Naciones Unidas y sus miembros por evitar un nuevo Holocausto, no fue suficiente para la creación de la Corte Internacional.

“A fin de cuentas el régimen del asesinato de masas establecido en los años cuarenta, y prácticamente inalterado durante medio siglo, resultó ser extremadamente débil, casi una parodia de lo que se necesitaba. No incluía un régimen de prevención, lo que no es de extrañar, dado que no se prestó una seria atención a qué leyes, instituciones y prácticas podrían reducir la incidencia de los asesinatos de masas, aparte de la inofensiva convención sobre el genocidio” (Goldhagen, 2011: 587).

Si bien la aparición de la Convención contra el Genocidio se firmó en 1948; no fue sino hasta 50 años después que se pudo crear el organismo Penal Internacional.

Hasta 1998, cuando se desarrolló el Estatuto de Roma⁹, fue que cobró vida la Corte Penal Internacional¹⁰. Tuvieron que pasar algunos genocidios más, como el de Yugoslavia entre 1991 y 1995; el de Ruanda en 1994 o aquellos en casi todos los países latinoamericanos, para que la preocupación por la humanidad ahora sí rindiera frutos. El Estatuto de Roma determina, entonces,

⁹ El Estatuto de Roma instituye que la Corte Penal será una institución permanente, facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional complementando las jurisdicciones penales nacionales. La Corte tendrá una personalidad jurídica internacional y podrá ejercer sus funciones en cualquier Estado Parte o en cualquier otro Estado. La competencia de la Corte se limitará al crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. A su vez, este Estatuto sirve como vínculo con la Organización de las Naciones Unidas, quien establece que su sede será en La Haya, Países Bajos. (Estatuto de Roma, 1998: 4)

¹⁰ Cf. Anexo 3 (Pp. 303). En este documento se provee de la información generalizada sobre la Corte Penal Internacional.

que la Corte Penal Internacional será una institución permanente que podrá ejercer su jurisdicción en personas que hayan cometido las siguientes faltas: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Es importante recalcar que el último de ellos –crimen de agresión- no está desarrollado dentro del documento oficial.

El Tribunal Penal Internacional toma como base el texto: *Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio* redactado en 1948 para determinar la definición y actos que pueden ser calificados como delito de genocidio. La Convención contra el Genocidio crea dos obligaciones distintas en los países que ratifican este documento. La primera obligación es la de prevenir este crimen y la segunda es sancionar a quienes lo han cometido. Por lo tanto, de no cumplir con alguna de estas dos obligaciones, se estarían violando las responsabilidades adquiridas. Sin embargo, la realidad es que hay diferentes elementos incluidos dentro de los mismos documentos que permiten a los países librar estas responsabilidades sin ameritar una sanción. Además, ni la Corte Penal Internacional ni la Convención contra el Genocidio son instrumentos que puedan obligar la acción en los Estados.

Lo criticable de los documentos proviene desde la definición de los crímenes que pretende sancionar. Una de las principales limitantes que tiene el término de genocidio es el hecho que sólo abarca la posibilidad de violaciones a los derechos humanos a sectores de la sociedad planteando como posible causas motivos étnicos, raciales o religiosos. No se contempla la posibilidad de que los crímenes se estén llevando a cabo por motivos políticos; lo que ha sucedido en diferentes conflictos. En el caso del juicio en contra del ex presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt, se le llevó a juicio por un caso relacionado con la cuestión étnica; el caso de Guatemala podría considerarse que tuvo tintes de limpieza étnica. Sin embargo, el caso argentino que es meramente político pues no hubo una mayoría étnica entre las víctimas, ¿puede considerarse genocidio?

El término genocidio parece ir de la mano con un alto número de víctimas. Sin embargo, no debería ser así. Tener la intención de destruir de manera total o parcial a un grupo nacional no debería contemplar decenas de miles de víctimas para poder ser tipificado como genocidio. ¿Cuál es la proporción del grupo? ¿Cuántos son suficientes para considerarse con la intención de destruir

parcialmente a un grupo de personas? “Aún más problemática es la incapacidad de la convención de definir el genocidio, y mucho menos de incluir criterios objetivos (como un número umbral de personas asesinadas) que permitan a la comunidad internacional identificar rápidamente el genocidio mientras se está produciendo” (Goldhagen, 2011: 261).

Pese a que no se especifica cuál es el número de víctimas necesario para que se pueda considerar que se ha llevado a cabo un genocidio, podemos asumir que la única manera que se tiene para comprobar que hay “intención” de destruir total o parcialmente podría estar relacionado con un número de víctimas. Una de las debilidades de esta iniciativa es la imposibilidad de poder comprobar la “intención y el deseo”. Pocas veces se cuenta con fuentes de información que provengan de los mismos perpetradores o documentos probatorios de esos conceptos. En el caso argentino, en donde listas de desaparecidos fueron quemadas, o donde hay un pacto para que los militares no revelen sus atrocidades, la labor se hace compleja.

Cuando los Estados estaban debatiendo sobre las capacidades que tendrían la Convención o la Corte Penal Internacional, se inclinaron más hacia la escasa posibilidad de intervención y entonces privilegiar a la soberanía de los Estados. La realidad es que el hecho de no poder comprobar *el dolo* ha sido una escapatoria para los perpetradores. “Este elemento [el no poder comprobar la intención] ha ofrecido una cómoda escapatoria para los Estados, que niegan haber cometido actos de genocidio, sosteniendo precisamente que no existía el elemento de intencionalidad” (Gómez-Robledo, 2002: 940). Entonces, si un Estado de manera “no intencional” limita el acceso a alimentos a un sector, no puede ser considerado como un acto genocida, aunque a la larga el grupo se muera de hambre. Se puede alegar cualquier excusa que evite caer en *el dolo*, elemento indispensable para que pueda procederse jurídicamente.

Como un punto a favor, se puede considerar el hecho de que cualquier Estado adscrito a la Convención puede presentar una denuncia de genocidio ante el Consejo de Seguridad para que se actúe. Esto quiere decir, que si el propio Estado considera que es poco probable que se pueda hacer justicia dentro de su propio territorio puede apelar a que el Tribunal Internacional cumpla con esta tarea. Pero en la mayoría de las ocasiones, después de que un Estado ha sido sometido por un

régimen a un genocidio, es poco probable que el gobierno en transición se encuentre en condiciones plenas para actuar en favor de que se castigue a los perpetradores. La experiencia latinoamericana, al menos, indica que a pesar de que los gobiernos en transición hacen promesas de esta índole, pocas han sido las acciones inmediatas en contra del régimen anterior.

A pesar de las lagunas que contiene la Convención, es importante mencionar los aspectos relevantes que podrían considerarse como logros. Uno de ellos, es la capacidad de sanción que tiene la Corte Penal Internacional a través del juicio a los responsables. Juicios en contra de perpetradores de crímenes de lesa humanidad y genocidio para Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona nunca se hubieran podido llevar a cabo de no ser por esta Convención y la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas, así como la participación activa de la ciudadanía.

La realidad el día de hoy es que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio es el único documento sobre derechos humanos que habilita a los miembros de las Naciones Unidas a intervenir en otros países que estén cometiendo actos eliminacionistas. Es importante destacar como logro la creación de la Corte Penal Internacional, pues pone en marcha una jurisdicción penal internacional y es un paso al frente hacia una cultura de los derechos humanos y contra la impunidad. La Corte Penal se convierte en una posibilidad de justicia, cuando ésta o las leyes que se tienen que cumplir no encuentran el cobijo de un Estado fuerte dejando en la intemperie a las víctimas.

La Organización de las Naciones Unidas está consciente de que las leyes por sí solas no bastan, es necesario poner fin a la cultura de la impunidad. “Para que el derecho penal funcione con eficacia, debe disuadir a las personas de cometer delitos. Para que esto ocurra, los que cometen esos delitos tienen que comparecer ante la justicia y pagar el precio de sus actos” (Ki-Moon, 2007: 5). Los juicios de Núremberg en 1949, que condenaron a nazis de altos rangos que desempeñaron las mayores aberraciones durante el Holocausto, fueron el inicio. Las Naciones Unidas también establecieron tribunales para enjuiciar a los culpables de genocidio en: Srebrenica, Bosnia, la ex Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona y Camboya. Algunos considerados como Tribunales Especiales

y otros bajo la responsabilidad de la Corte Penal Internacional. Además de mandamientos judiciales en la República Democrática del Congo o Darfur (Ki-Moon, 2007: 6).

El trabajo que se desarrolla en las Naciones Unidas continúa, con el afán de prevenir estos crímenes graves y de gran impacto social en un futuro. Prueba de ello es lo presentado por el Secretario General de este organismo, Ban Ki-Moon, en el año 2007 como parte del discurso por el décimo tercer aniversario del genocidio en Ruanda. Se hace una síntesis sobre el trabajo realizado por el Asesor Especial de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y su equipo en relación a acciones que pueden ser un indicador de que alguna comunidad se encuentra en peligro de algún crimen de esta naturaleza. Algunos aspectos son:

- El país tiene un gobierno autoritario o totalitario donde el poder recae en un solo grupo.
- El país está en guerra o bajo un clima en donde se pueden realizar asesinatos en masa sin que se puedan detectar o documentar.
- Existen grupos dentro del país que son blanco de discriminación.
- Se “deshumaniza” a algún grupo social y se justifica la violencia en su contra.
- Se aceptan las violaciones a los derechos humanos de ciertos grupos, existen antecedentes previos de este tipo de crímenes y sobre todo que dichos actos previos hayan quedado impunes, así como sus perpetradores. (Ki-Moon, 2007: 3)

Ya que un genocidio no se da de la noche a la mañana y las consecuencias para la sociedad que lo padece pueden ser devastadoras; incluso con el paso de las generaciones; conocer las causas es importante. El 7 de abril de 2004, el entonces Secretario de la Organización de las Naciones Unidas Kofi Annan expuso un plan de cinco puntos para la prevención de este grave delito de masas¹¹:

1. Prevenir el conflicto armado;
2. Proteger a los civiles en caso de conflicto armado;
3. Poner fin a la impunidad mediante procedimientos judiciales en los tribunales nacionales e internacionales;
4. Reunir información y establecer un sistema de alerta anticipada;

¹¹ El plan de cinco puntos propuesto por Kofi Annan para la prevención del genocidio fue parte del discurso con motivo del décimo aniversario del genocidio de Ruanda, pero es incluido nuevamente en el discurso de Ban Ki Moon del 2007 *Nunca Más: Prevenir el genocidio y castigar a los culpables*, (2007: 4) por la relevancia de la propuesta pese a la complejidad de llevarlo a la práctica.

5. Adoptar medidas rápidas y resueltas en algunos aspectos, con inclusión de la acción militar.

Idealmente, conocer las causas y la prevención son elementos de vital importancia para que puedan evitarse estos crímenes y sus consecuencias sociales. Pero la realidad es que no hay una mayor explicación sobre cómo la Organización de las Naciones Unidas u otro órgano similar puedan ampliar su espectro de acción en los Estados para que, de manera efectiva, se pudiera prevenir un conflicto armado, proteger a los civiles, poner fin a la impunidad, que haya alertas anticipadas ni forma de determinar cuándo aplicaría una acción militar como medida inmediata. Los discursos sobre el genocidio actualmente giran en torno al “prevenir es mejor que curar” pero, desafortunadamente, esto no ha sido evidente a través de acciones concretas.

b) Crímenes contra la Humanidad

Uno de los delitos que masifica a las víctimas de mayor impacto son los crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad. Es importante hacer la distinción entre genocidio y estos crímenes debido a que los casos de esta investigación abordan ambos. En el caso de Guatemala las principales acusaciones han sido por genocidio, mientras que en Argentina la mayoría de los juicios han sido por crímenes de lesa humanidad.

El concepto de crimen de lesa humanidad está contenido de manera formal en el artículo 7° del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Según este documento, crimen de lesa humanidad es cualquiera de los actos que se detallan a continuación, cuando se cometan como parte de un ataque sistemático en contra de la población civil y con conocimiento del ataque y sus consecuencias (ONU, 1998: 5). Los actos considerados como crímenes de lesa humanidad son:

Asesinato	Muerte de una víctima como resultado de la acción u omisión ilegal de un perpetrador o un subordinado de él. En el momento de la muerte el perpetrador debe tener la intención de matar o infligir serios daños sobre la víctima sabiendo que esto podría provocarle la muerte.
Exterminio	Imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de

	parte de una población. La diferencia con el asesinato radica en el número de víctimas con proximidad de tiempo y espacio además de las circunstancias que suelen no ser inmediatas.
Esclavitud	El ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños. Aunque no se considera al trabajo forzado como esclavitud pues este acto se determinó como competencia de la Organización Internacional del Trabajo.
Deportación o traslado forzoso de la población	Desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional. Esto incluye el desplazamiento fuera del país o dentro del mismo. Los motivos que obligan al traslado pueden ser por la fuerza física o amenaza de la misma, como por intimidación, temor a la violencia, abuso de poder u opresión psicológica.
Encarcelación o privación grave de la libertad física	Privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
Tortura	Causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. Los perpetradores pueden ser actores estatales o no.
Delitos sexuales	Violación, esclavitud sexual (incluye la compra, venta, préstamo o trueque de una persona para fines sexuales en contra de su voluntad), prostitución forzada, embarazo forzado (el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población), esterilización forzada (se trata de privar a una persona de su capacidad reproductiva sin que haya una justificación médica de por medio ni el consentimiento de la víctima) o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable (no es necesario que haya contacto físico).
Persecución	Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables de acuerdo con el derecho internacional. Este delito puede ir desde el asesinato hasta limitaciones profesionales, violación de derechos humanos básicos en términos físicos, políticos o económicos.

Desaparición forzada	Aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
Apartheid	Actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. Puede ser a una persona solamente o a un grupo de personas de diferente grupo racial al que está en el poder. Los actos van desde violar la libertad, negar el derecho a la vida, acabar con la dignidad de las víctimas, detención arbitraria, negar la participación en la vida política, social, económica y cultural del país.
Otros actos inhumanos	Se hace referencia a cualquier otro acto de carácter similar a los mencionados y que cause intencionalmente sufrimiento o atente gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Fuente: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998: 5 y Lorenzetti y Kraut, 2011: 50-66.

“No se trata simplemente de un homicidio o de torturas o de secuestros aislados, sino de una planificación sistemática y organizada de atacar a la sociedad civil” (Lorenzetti y Kraut, 2011: 22). Los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos en tiempos de guerra o de -supuesta- paz, pero estos tienen dos particularidades que pueden definirlos: tienen como objetivo exterminar al enemigo y son cometidos bajo el cobijo de la ley. Por lo general, son cometidos por regímenes totalitarios que tratan de acabar con los opositores, por lo tanto, es común que se hagan cambios a leyes para que las acciones -por atroces que sean- puedan ser justificadas.

Pese a las particularidades que pueda presentar el concepto y tomando en cuenta la diversidad de actos contemplados como crímenes de lesa humanidad pareciera, incluso, el genocidio, estar incluido. La inclusión de esta vasta variedad de actos para conformar un solo concepto obedece a la necesidad de castigar todos ellos independientemente de las fronteras en donde se lleven a cabo. Y es que en el momento de que los actos son categorizados como crímenes contra la humanidad adquieren tres características básicas: imprescriptibilidad, imposibilidad de amnistía e irretroactividad de la ley. Todas ellas permiten que pese a los obstáculos que la justicia

pueda encontrar dentro de los Estados, se puedan recurrir a otros medios para alcanzarla; esto en favor de las víctimas.

La palabra *amnistía* procede del griego y significa olvido. Según la Real Academia de la Lengua Española citada por la Enciclopedia de Paz y Justicia (López Martínez, 2004:22-23) la *amnistía* en términos legales se refiere a “el olvido de los delitos políticos, otorgado por la ley; supone una extinción de responsabilidad penal por la comisión de un delito político y el perdón (u olvido) del mismo por parte del Estado como único titular del derecho legítimo”. La Ley de Punto Final en Argentina se puede considerar un ejemplo de amnistía pues, implicaba la extinción de la acción penal en contra de perpetradores alegando represión de terrorismo de Estado significando que los culpables nunca podrían ser juzgados; esta Ley quedó anulada hasta el 2003.

El ámbito temporal se consideró como un severo obstáculo en contra de que se hiciera justicia en este tipo de crímenes por dos motivos principales. El primero -se utilizó de manera consecuente durante juicios relacionados con la Segunda Guerra Mundial- fue la irretroactividad de la ley que implicaba no condenar a algún perpetrador porque para el momento en que se llevó a cabo el delito, no había una ley que lo penara o existía alguna que lo permitía. En Guatemala los primeros juicios sobre desapariciones forzadas fueron casi imposibles porque se alegaba la falta de tipificación de este delito en la Constitución del país, por lo tanto, no podía enjuiciarse en los Tribunales locales. Si no existiera el principio de irretroactividad a los crímenes de lesa humanidad que contemplan la desaparición forzada las sentencias no hubieran podido existir; pues no fue sino hasta el año 2000 que Guatemala ratificó la Convención Americana de Desaparición Forzada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de la ratificación se hubiera podido alegar la inexistencia de una ley que condenara el delito.

En muchos países los delitos prescriben en un lapso de tiempo determinado, esto es, que hay delitos que pueden quedar impunes por no llevarse ante la justicia en el lapso de tiempo estipulado por la propia ley. Es por esto que se necesitó de un documento que evitara estas herramientas a la hora de enjuiciar a los perpetradores. Gracias a las amnistías o modificaciones hechas a las Constituciones por los perpetradores, no hubiera sido posible tener juicios en contra

de genocidas o criminales de lesa humanidad pues parecían haberse amparado. El caso del ex presidente y ex senador –y también uno de los más cruentos perpetradores- ex Gral. Efraín Ríos Montt es emblemático en Guatemala. No hubo una amnistía como tal, pero al otorgarse a sí mismo un cargo vitalicio dentro del gobierno del país y el fuero correspondiente, parecía estar exento de cualquier intento de justicia hasta su jubilación. La imprescriptibilidad de este tipo de crímenes ha permitido llevar a los tribunales –incluso después de decenas de años de lo sucedido- a perpetradores y evitar la impunidad.

Algunas de estas características van en contra de las leyes nacionales, por lo tanto, tener un documento que apoyara esta ley internacional era inminente. Se creó entonces, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que desarrolla la *Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad*. A diferencia de la Convención sobre el Genocidio, que plantea las bases para poder identificar y poder enjuiciar este delito; la Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad solamente se enfoca a la cuestión temporal. Al ratificar este documento los Estados estarán obligados a “adoptar todas las medidas internas que sean necesarias, legislativas o de cualquier otro orden, con el fin de hacer posible la extradición, de conformidad con el derecho internacional, de las personas que hayan cometido un crimen de esta especie” (ONU, 1970: 1).

La *Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad*, si bien pareciera no estar tan completa como el documento relacionado con el genocidio, cumple su propósito. Esto es porque no se trata de un documento explicativo de los crímenes sino, más bien, de un documento que deja en claro su propósito: obligar a los Estados a trabajar en contra de la injusticia. Para ello, presenta los motivos que hacen necesaria la creación del texto: al considerarse los crímenes de lesa humanidad dentro de los delitos más graves y ante el hecho de que los Estados están impedidos para hacer juicio por la prescriptibilidad de los acontecimientos para sus leyes nacionales se crea este documento que contempla la imprescriptibilidad de estos crímenes combatiendo su impunidad y así prevenir que estos hechos

se repitan en un futuro protegiendo los derechos humanos y contribuyendo a la paz y la seguridad internacionales (ONU, 1970: 1).

Pese a estos esfuerzos, existe un alto grado de dificultad para castigar estos crímenes incluso ante las evidencias que puedan mostrar los reportes de las Comisiones de la Verdad y/o Esclarecimiento Histórico. El hecho de que existan leyes que justifiquen actos violentos o amnistías para los perpetradores son trabas importantes en los procesos; donde son habitualmente invocadas como respaldo. Pese a ello, eventualmente tiene remedio pues llegará un gobierno (con más voluntad y tal vez bajo una circunstancia diferente) que revoque dichas leyes; aunque el principal obstáculo sea lograr comprobar que había intención de exterminar a los opositores y que hubo una planeación de la violencia ejercida cuando se alega no tener evidencias suficientes.

Se requiere de evidencia clara de haber un ataque generalizado en contra de la población civil. "...el ataque contra una población civil debe entenderse como una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos o conductas contra la humanidad [los mencionados anteriormente], contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política" (Lorenzetti y Kraut, 2011: 48). Esto resulta complicado porque al estar los perpetradores en puestos de poder manipulan y esconden esta información durante el conflicto y después del mismo ya que en la mayoría de las ocasiones, el gobierno en transición no logra despojarse de todos los perpetradores y sus cómplices en puestos de poder.

Cuando los altos mandos quedan impunes -por lo general- es por falta de información; y es que las evidencias deben ser claras a través de documentos y no basarse únicamente en testimonios. Si los documentos se destruyen, sólo quedan los testimonios que pueden ser refutados o, se finge desconocer los hechos amparados en un estado de guerra civil en donde la violencia es una constante. La impunidad de los mandos medios y bajos es más común todavía pues, a veces realmente no tienen conocimiento de una sistematización del ataque o de planes específicos "además de las conductas específicas, la persona que la comete debe tener conocimiento actual o potencial de que ella forma o formará parte de un ataque generalizado o sistematizado en contra de

la población” (Lorenzetti y Kraut, 2011: 49). Entonces es fácil ampararse detrás del acato de órdenes lo que ha complicado la fundamentación de las acusaciones.

Que se ponga mayor atención a la prevención de estos delitos debe considerarse una obligación de las organizaciones internacionales y no gubernamentales, pero sobre todo debería ser de los Estados. Las posturas importantes sobre los temas de crímenes graves de masas suelen darse en el marco de algún aniversario de uno que ya se suscitó. Tal vez de ahí el interés en hacer las propuestas, aunque queden trucas. Precisamente cuando a principios de los años noventa la violencia se empezaba a recrudecer en Ruanda, la Asociación Human Rights Watch estableció una comisión de la verdad semioficial con el fin de esclarecer los crímenes del pasado y evitar que la violencia siguiera subiendo de tono a mediados de 1993 (Hayner, 2008: 47-48). El reporte presentaba hechos, testimonios de violaciones a los derechos humanos en el pasado (de octubre de 1990 a enero de 1993) y también presentaba propuestas para evitar una nueva escalada de violencia. El gobierno recibió el reporte, Estados europeos se indignaron, pero no pasó nada más; sólo un año después, en julio de 1994, ocurrió el genocidio ante la inacción de estos actores.

Bajo las condiciones planteadas, ¿realmente se puede prevenir un evento de esta especie? ¿La Corte Penal Internacional o la Organización de las Naciones Unidas podrían tener otro modo de operar? No debe desvirtuarse el trabajo de estos organismos, pero también se debe ser realista de lo que se puede y no hacer. Los juicios que se han logrado han sido gracias a la voluntad de algunos Estados, pero en la mayoría de los casos al trabajo de organizaciones civiles y la presión de sectores valientes de la sociedad, pues en casos más actuales como la guerra civil en Siria no ha servido de mucho la indignación de la comunidad internacional si no se detienen las muertes de la sociedad civil. Mientras los Estados sigan encubriendo, protegiendo o perpetrando estos deleznable actos, ¿qué posibilidades tiene cualquier iniciativa?

Justicia Transicional, el gran reto post-conflicto

“Existe una correspondencia natural entre el deseo de reconciliación que a menudo inspira a los líderes entrantes y el deseo de inmunidad de los salientes”
(Elster, 2006: 45).

En una definición muy general, “la justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos” (Centro Internacional de Justicia Transicional, 2014). Se refiere al proceso en el cual se trata de dar solución a las violaciones de los derechos humanos sucedidos en un periodo de autoritarismo para dirigir a la sociedad a un futuro democrático. El hecho de que se hable de un proceso no implica que la justicia transicional sea un tipo especial de justicia, sino una manera de abordarla después de una situación de conflicto y represión en donde el Estado es el principal actor como represor.

Hoy el término se ha ampliado hasta involucrar los resultados de la transición política; relacionándose también con el desarrollo y la justicia social. (Laban, 2011: 2). El proceso de la justicia transicional implica actuar penalmente en contra de los perpetradores, activar comisiones de la verdad que hagan investigaciones serias sobre los hechos, programas de reparación para las víctimas, así como realizar reformas institucionales que, usualmente, están contempladas dentro de los informes de las comisiones de la verdad como recomendaciones. Sin embargo, cada proceso de transición es diferente y los resultados no pueden predecirse dada la cantidad de factores que se ven involucrados.

El campo de estudio de la justicia transicional es relativamente nuevo. El punto detonante fue el final de la Segunda Guerra Mundial y la naciente preocupación por los derechos humanos, el grado de violencia alcanzado y el número de víctimas por tales hechos. Se considera a la transición de la Alemania Nazi como el primer ejemplo de justicia transicional por los acontecimientos que implicó como la creación de la Convención en contra del Genocidio, los Tribunales Internacionales, la Convención de Ginebra o la Declaración Universal de los Derechos Humanos; todo ello tratando

de atender la masiva violación de los derechos más elementales que se había cometido. “De los veintidós oficiales nazis procesados por el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, conformado por las cuatro potencias victoriosas, tres fueron absueltos, siete sentencias a prisión, y a los restantes se les dictó pena de muerte” (Elster, 2006: 73). También hubo compensaciones a las víctimas del régimen nazi –principalmente monetarias-.

Para la década de los ochenta cuando países de África y América Latina entraron en una fase de transición -después de haber padecido regímenes autoritarios y cruentos-, no sólo los juicios y las compensaciones eran necesarias, sino también los elementos relacionados con la memoria y la verdad. Es por esto que el término de justicia transicional se ha ido enriqueciendo para alcanzar a cubrir todas las necesidades que la justicia requiere ante una situación tan delicada como una transición a la democracia después de una macrovictimización. Pero no fue sino hasta 1991 que se dio a conocer el concepto de justicia transicional tan amplio como se conoce hoy. Éste implica desde prácticas como juicios, comisiones de la verdad, elementos relacionados con la memoria, reparaciones, amnistías y perdones hasta la vinculación con la Ley Internacional Humanitaria, Tribunales Internacionales, la inclusión de las Naciones Unidas y sus programas de desarrollo, así como la participación de organizaciones no gubernamentales.

Desde poco antes de la mitad del siglo XX, y hasta el inicio del siglo XXI, las necesidades de justicia transicional no han cesado; por el contrario, han ido aumentando. La importancia de que se lleve a cabo este proceso de justicia dentro de las transiciones políticas es de vital importancia para la sociedad. De acuerdo con el Centro Internacional de Justicia Transicional (2014), “las sociedades que no se enfrentan a las violaciones masivas de los derechos humanos suelen quedar divididas, generándose desconfianza entre diferentes grupos y frente a las instituciones públicas y obstaculizándose o haciéndose más lentas las mejoras en materia de seguridad y desarrollo”. La gravedad de que no se apliquen las medidas de justicia transicional es que la división social y la desconfianza hacia las instituciones pueden generar nuevos episodios de violencia.

Un reflejo de que la justicia transicional puede considerarse como una necesidad latente fue la fundación del propio Centro Internacional de Justicia Transicional (International Center for

Transitional Justice). El trabajo sobre justicia transicional –muy nuevo aún para finales de los noventas- se hacía a través de abogados que se habían relacionado con los derechos humanos, pero no había ninguna instancia (ni siquiera en las Naciones Unidas) que se especializara en estos nuevos procedimientos. En 2001 se crea este Centro dedicado específicamente al trabajo de la justicia transicional, que tuvo su base en los trabajos de la Fundación Ford. Se trata de una organización internacional no lucrativa especializada en la justicia durante los periodos de transición que se enfoca en las víctimas y los procesos de esclarecimiento de la verdad, rendición de cuentas y reparaciones. Básicamente, brinda asesoría técnica a gobiernos y órganos judiciales, a la propia Organización de las Naciones Unidas y a organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo. En América Latina se ha enfocado su trabajo en: Argentina, Guatemala, Perú, Brasil, Colombia, Canadá y Estados Unidos¹².

La violencia no sólo afecta a las víctimas directas, sino a la sociedad en general. Esto implica que -como mínimo- la sociedad tiene derecho a conocer la verdad, a ver que los autores reciban penas y a recibir reparaciones. A pesar de contemplar tres aspectos, los alcances que tienen, las implicaciones y el contexto que se requiere para que estos mínimos se cumplan, hacen que la labor de la justicia transicional sea compleja pero no imposible. Además, es indispensable contemplar que los resultados de los procesos transicionales, al ser dependientes de tantos factores, es poco probable que puedan predecirse cuando la propia transición política está rodeada de incógnitas.

La transición en sí misma puede opacar a la justicia transicional. Cuando un Estado se enfrenta a una transición –por lo general- se procura que ésta sea pacífica y que se encamine a la justicia. La incongruencia se da cuando, para asegurar una transición pacífica, se pactan amnistías o inmunidades con los perpetradores y con la oligarquía que pudo haber estado involucrada¹³. Esto

¹² En el caso de Estados Unidos el trabajo no está relacionado propiamente con algún periodo de transición política, pero sí en las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército Estadounidense tanto a prisioneros como a la sociedad civil en general durante sus incursiones en diferentes países del mundo.

¹³ Por lo general los pactos de inmunidad y amnistías -en los casos latinoamericanos- incluyen a perpetradores y la oligarquía. Los perpetradores alegan haber seguido órdenes o bien hacen creer que las acciones violentas eran completamente necesarias ante la amenaza terrorista y comunista. Por su parte, la oligarquía es protegida no por algún connato que hiciera que la transición fuera violenta sino por su capacidad económica necesaria para el desarrollo social y eventualmente para las compensaciones de la propia justicia transicional.

no motiva una justicia transicional pues elimina los juicios o el conocimiento de la verdad; por el contrario, propicia la impunidad. Los gobiernos derivados de una transición están en un dilema en donde para asegurar que no retorne la violencia, ponen en tela de juicio a las instituciones que pretenden limpiar. Adicionalmente, los gobiernos se encuentran con situaciones económicas generalmente precarias por lo que las reparaciones a las víctimas o bien el desarrollo económico pueden verse comprometidos haciendo que el proceso sea tan lento que pierda legitimidad y genere desconcierto.

Cuando se logra la transición política y el nuevo gobierno desea incursionar en la justicia transicional se deben tomar decisiones. La mayoría de ellas representan retos para el nuevo gobierno, pero también dependen de la voluntad política del mismo y los que habrán de continuar. Irremediamente se deben de considerar varios periodos de gobierno porque al ser la justicia transicional una medida tan incluyente, es poco probable que un periodo de gobierno pueda cumplir con todos los objetivos. Y en ese momento, el problema recae en si las autoridades siguientes respetarán las reglas que se han fijado y tienen la misma voluntad política sobre los hechos del pasado. Algunas de las decisiones que deben tomarse para iniciar con un proceso de justicia transicional son:

Consideraciones para iniciar un proceso de justicia transicional
Ocuparse o no de los crímenes del pasado.
Elegir si se privilegiará la justicia o la verdad.
¿Quién se considerará y quién no se considerará criminal?
¿Qué se hará con quienes sean considerados criminales?
¿Qué se hará con los funcionarios públicos involucrados en hechos violentos?
¿Quién se considera víctima y cuáles daños merecen reparación?
¿Qué tipo de reparaciones se darán?
¿Con qué procedimientos legales se habrá de trabajar?

Fuente: Elster, 2006: 140-160.

La primera consideración es si ocuparse o no de los crímenes del pasado lo que – generalmente- sucede, porque incluso es utilizado como bandera de los nuevos y antiguos partidos políticos que entran a los nuevos procesos democráticos. La contradicción se da cuando se decide

ocuparse de los crímenes del pasado, pero el mismo nuevo gobierno pone limitaciones para ello. Este es el caso de la elección entre la verdad y la justicia cuando no deberían de ser excluyentes. En el caso de América Latina, cuando se ha optado por la verdad, se han creado comisiones de la verdad o de esclarecimiento histórico con el mandato de documentar los hechos violentos del pasado como el caso de Guatemala. Sin embargo, con excepción del documento producido en El Salvador, no ha habido país cuya Comisión de la Verdad oficial haya autorizado la mención de los autores de la violencia. Pero también hay casos, en donde a pesar de que se ha optado por la justicia, se conceden amnistías o perdones para los responsables como sucedió inicialmente en Argentina con la Ley de Punto Final y de Obediencia Debida (leyes que se tratarán a fondo en apartados posteriores).

Determinar quién es criminal y quién no lo es se convierte en un dilema cuando los perpetradores justifican sus acciones ya sea ideológicamente o con el argumento lógico de la obediencia ante su rango militar. Criminal puede ser quien dio la orden (en todos los eslabones de la cadena de mando), quien la ejecutó, o quien facilitó el crimen. Entonces una vez que se defina quién sí y quién no va a ser considerado como criminal; de acuerdo con su cota de responsabilidad, debe de responder a su falta mediante alguna sanción. Las sanciones pueden ir desde una ejecución, pasando por penas carcelarias o simples multas. Determinar con claridad las acciones a tomar ante los hechos del pasado es clave en el caso de los funcionarios públicos quienes también deben de tener una sanción en cualquiera de sus niveles. Se pueden tener desde cesantías de los cargos y de la vida política en el nuevo régimen hasta sentencias de cárcel o el exilio.

La compensación que puede recibir una víctima depende del daño que quiera resarcirse. Generalmente se contemplan tres tipos de daños: materiales, personales o intangibles. Este rango abre las posibilidades de reparación pues va desde la pérdida de una casa, daños físicos, pérdida de familiares, hasta la pérdida de oportunidades. El inicio es determinar quién sí será considerado como víctima que puede ser quien recibe el daño directamente -víctima primaria-, o bien víctimas secundarias quienes son afectados como resultado del daño directo a una persona. Posteriormente, el cómo reparar es una decisión crucial contemplando que todas las víctimas tendrán demandas

propias y habrán sido afectadas de manera diferente. Además de la usual situación económica complicada que enfrenta un nuevo gobierno en el proceso de transición.

La justicia transicional plantea como parte fundamental del proceso la reparación a las víctimas por los daños provocados. Tal vez lo más sencillo sería recuperar los bienes materiales, sin embargo, "...los bienes destruidos han recibido una tasa baja de compensación" (Elster, 2006: 198). Las reparaciones tienden a estar más relacionadas con la parte simbólica que se considera fundamental para cerrar los ciclos de duelo que quedan interrumpidos. Las reparaciones materiales han tendido a convertirse en actos de proselitismo político de los gobiernos en turno. En algunos casos, la gente tiende a ver los daños sufridos como moneda de cambio para obtener beneficios sobre todo en el ámbito económico. Por otro lado, está la ofensa de ponerle un precio al ser querido desaparecido o fallecido; y por ende, el rechazo por parte de los familiares de víctimas hacia estas acciones. Las reparaciones hacia daños personales e intangibles tienen tantas implicaciones simbólicas que, aunque parecieran las más sencillas -como monumentos y homenajes para las víctimas- se convierten en conflictos importantes, pues implican que el Estado acepte su responsabilidad en los hechos de violencia.

Los elementos antes mencionados son consideraciones necesarias para iniciar un proceso de justicia transicional. Sin embargo, es necesario complementarlos con la propuesta del Centro Internacional de Justicia Transicional (2014) que plantea la existencia de cuatro herramientas clave que componen las políticas de justicia transicional:

- Acciones penales. Principalmente contra los criminales de mayor responsabilidad.
- Reparaciones. Que van desde lo material a través de pagos monetarios hasta aspectos simbólicos, como placas conmemorativas o parques que se convierten en reparaciones morales.
- Reforma de instituciones públicas. Esto con el fin de que a través de los procedimientos adecuados las instituciones involucradas sean desmanteladas o al menos filtradas para que

los personajes que hayan estado directamente involucrados en actos violentos no permanezcan como servidores públicos.

- Comisiones de la verdad. Es vital hacer una investigación y análisis de las acciones perpetradas que estén basadas en información de primera mano, principalmente testimonios. Hacer pública la verdad, que la gente se sienta escuchada y además hacer las recomendaciones pertinentes son elementos clave para la reconciliación nacional.

A pesar de que los mecanismos mencionados son clave, cada proceso de justicia transicional es diferente y los elementos revisados pueden terminar siendo o no utilizados porque no hay ningún estatuto que pueda obligar a hacer uso de estas herramientas. La presión que la comunidad internacional puede ejercer podría ser clave para aplicar las medidas necesarias y así cumplir el ciclo de la justicia transicional. “La premisa de la justicia internacional es intervenir y proveer justicia a las víctimas de lo que el Estado es incapaz, usualmente porque los actores del Estado fueron los perpetradores o al menos se involucraron en la violencia masiva” (Drexler, Elizabeth en Laban, 2011: 51). Pero esto no quiere decir que la justicia internacional pueda intervenir directamente en un proceso transicional; tiene que ser solicitado de manera oficial.

En relación a lo anterior, la justicia transicional puede verse limitada por el propio contexto local. Es decir, “incluso con las mejores intenciones, los mecanismos de justicia transicional tienen resultados inesperados que surgen de la fricción entre los mecanismos globales y las realidades locales” (Laban, 2011:9). Las transiciones suelen ser procesos complejos, que, aunque las leyes internacionales establezcan las bases para poder alcanzar objetivos en favor de la justicia y las víctimas, las instituciones locales no suelen estar preparadas para ello. Si la transición se está haciendo de manera pacífica o pactada hará que los sentimientos de venganza aparezcan convirtiéndose en una limitante para hacer juicios justos y objetivos en contra de los perpetradores. Como una limitante más se agregan las acciones de los propios perpetradores al estar en el poder

y tener la capacidad para desaparecer la información que los comprometa. Esto hace que la cantidad de juicios en su contra disminuya por falta de pruebas contundentes como el caso de Argentina¹⁴.

Es importante determinar el rol que juegan los involucrados en la violencia para el proceso de justicia transicional. Existen actores obvios como las víctimas y los victimarios; pero existen algunos matices sobre todo en los segundos. Mientras que las víctimas son quienes suelen demandar acciones de justicia transicional, los victimarios pueden tomar varias posturas. Por esto, el rol que tienen los victimarios dentro del proceso de la transición puede ser determinante, ya que parece tener la capacidad de darle otra dimensión a la violencia al salirse del rol de perpetrador convirtiéndose en una víctima más. Esta dimensión humana puede convertirse en un obstáculo para el perdón, la justicia y el resurgimiento de una sociedad.

Según Elster (2006: 121-122), existen ocho categorías para ubicar a los involucrados en la violencia como resultado de un gobierno autoritario: los criminales, independientemente del rol más o menos activo que hayan tenido; las víctimas, ya sea directas o indirectas; los beneficiarios de los crímenes, quienes pueden o no participar directamente en la violencia pero que apoyan al gobierno autoritario para mantener sus privilegios y fuera de las estadísticas de víctimas; los auxiliadores, que trataron de prevenir o aliviar la violencia cuando se estaba llevando a cabo; la resistencia, miembros de la resistencia que lucha o se opone contra criminales en el poder; neutrales, que no toman ningún rol y se mantienen al margen de cualquier situación. Después de la transición surgen organizadores y defensores de la justicia transicional, incluso jueces y jurados pueden pertenecer a este grupo. El último rubro trata a los saboteadores, quienes pueden obstaculizar, obstruir o aplazar la justicia transicional desde sus puestos de poder o tomando ventaja del poder que tuvieron.

Los involucrados pueden estar dentro de la clasificación antes mencionada en más de un rubro. Esto es posible debido a la generalidad en la clasificación o bien por haber cambiado de postura a lo largo del conflicto. La segunda opción resulta en una complicación para la justicia

¹⁴ La Comisión Nacional para los Desaparecidos (CONADEP) en Argentina documenta gracias a testimonios de las propias víctimas y algunos perpetradores que todas las personas que eran secuestradas y posteriormente desaparecidas tuvieron un archivo con toda la información que incluía cuál había sido su último destino. Pero el General Bignone –quien fuera el último militar frente al poder antes del regreso a la democracia- mandó a quemar documentos vitales que han mermado el número de juicios en contra de perpetradores por falta de pruebas contundentes en su contra.

transicional, sobre todo en el caso que un criminal se haya convertido en auxiliador o en defensor de la justicia durante la transición. De acuerdo con la ley, si cometió algún delito debe ser juzgado, aunque después haya cambiado de parecer o no haya continuado con acciones violentas. Dentro de un proceso transicional es común que algunos criminales comprendan que han actuado mal y puedan sentir culpa. Aunque en raras ocasiones este sentimiento de culpa los lleva a enfrentarse a la justicia o las consecuencias de sus actos, más bien "...pueden tratar de minimizar el daño que han hecho, o culpar a las víctimas. Al buscar otros culpables, pueden crear una contracultura basada en el resentimiento y la victimización, obstruyendo o entorpeciendo el curso de la justicia transicional" (Elster, 2006: 280-281).

Las excusas pueden ser meros actos para reducir la culpa a nivel personal o para enfrentar sentencias o procesos judiciales con menor severidad; o pueden ser verdad. Las acciones de los criminales no pueden ponerse en duda menos cuando hay testigos o denunciantes; pero las motivaciones de actos violentos sí pueden ponerse en duda y carecen de los determinantes testigos y/o denunciantes. La excusa de coacción: "si no lo hubiera hecho, me habrían matado o hecho mucho daño" alegando la cadena de mando tradicional de los ejércitos o -conforme la violencia va escalando- la seguridad de sus propias familias; es una de las excusas más comunes y ejemplos más claros sobre cómo la motivación no necesariamente podría ser considerada como una excusa ante la justicia.

Por otro lado, las víctimas no sólo son el complemento al binomio víctima- victimario, sino que -dentro de la justicia transicional- juegan un papel determinante en los alcances que tendrá el propio proceso. Las víctimas, ya sean directas o indirectas, a través de su propia voz o de organismos no gubernamentales serán capaces de abrir el diálogo con las instituciones que se están rehaciendo. El diálogo -en un inicio- tiende a ser discreto pues no se puede borrar el miedo y la persecución por parte de instituciones públicas hacia la sociedad civil de la noche a la mañana. Pero el hecho de que las víctimas mitiguen el miedo, ejerce una presión importante sobre las instituciones para que actúen en favor de la verdad. La propia influencia de la sociedad civil puede ser un factor

determinante para las acciones a seguir en contra de los culpables de los crímenes, así como las reparaciones o políticas públicas en favor de la memoria y la reconciliación que puedan alcanzarse.

La memoria se convierte en un arma poderosa para las víctimas, pues les permite presionar a las nuevas autoridades para que se concreten las acciones que se hayan prometido como parte de la transición, de un acuerdo de paz, como recomendaciones de una comisión para la verdad o simplemente como parte de la justicia que se espera. Cuando las víctimas vislumbran una apertura de las instituciones o que se han desarrollado herramientas para dar a conocer la verdad y que se aplique la justicia; tiende a haber una ola de optimismo y de empoderamiento de las víctimas que parecen dejar a un lado el miedo. Sin embargo, cuando las acciones toman más tiempo del esperado, o se empiezan a poner trabas por parte de las mismas instituciones para que las acciones sean concretadas, entonces el desánimo y la desilusión revientan la esperanza vigente.

La memoria es el factor que determina que las demandas cesen o no, que las exigencias sean parte de la agenda cotidiana para los gobiernos y la propia sociedad civil o no; pero no puede esperarse que el nivel de exigencia sea constante cuando no hay un tiempo de espera definido. Hay momentos en que el tema parece diluirse, pero esto no quiere decir que el trabajo de las organizaciones que están haciendo trabajos en favor de la memoria se detenga. Pero hay momentos, como cuando hay algún hecho específico como juicios o descubrimientos de fosas clandestinas es inevitable, que la memoria y el clamor de justicia se reaviven. “En la mayoría de los países que sufren violaciones masivas de los derechos humanos, las demandas de justicia se niegan a desaparecer” (Centro Internacional de Justicia Transicional, 2014).

Como se mencionó anteriormente, la demanda de la sociedad civil tiene fluctuaciones a través del tiempo. Los factores que incrementan la demanda de justicia son (Elster, 2006: 258):

- a) La atrocidad de los crímenes.
- b) La cantidad absoluta y relativa de los abusos.
- c) La identificación social con las víctimas de los abusos.
- d) Que el régimen pre-democrático haya sido impuesto por alguna potencia extranjera.
- e) La difusión del conocimiento acerca de los abusos.

f) La prosperidad absoluta y relativa de los autores luego de la transición.

Cuando se habla de las víctimas es inevitable hablar de sus demandas. Una de las demandas más importantes es dar a conocer la verdad de los hechos; siendo lo ideal que esta investigación sea llevada a cabo por personas ajenas a los gobiernos, pero sí involucradas en las violaciones a los derechos humanos. Otra de las demandas vitales es enjuiciar a los responsables de los actos atroces en contra de la sociedad civil. En términos de juicios la sociedad espera que sean rápidos, ágiles, exhaustivos, eficaces y justos. Es decir, que inicien lo más pronto posible, hecho que además incrementa la credibilidad en las nuevas instituciones; que el transcurso del juicio no tome tanto tiempo y que las mismas instituciones no se interpongan en el mismo; que los juicios consideren todas las pruebas necesarias disponibles y que no se esconda evidencia que pueda incriminar a otros responsables; que no se malgasten recursos públicos para llevar a cabo los juicios. Entender que no se trata de venganza sino de justicia, así que se espera que el juicio dicte la sentencia correspondiente como conclusión, sin que se hagan concesiones especiales dependiendo de la víctima.

El hecho de que se conozca con exactitud lo sucedido; que se conozca lo que se intuía, pero no se sabía con certeza hace que la gente pierda el miedo y se levante para exigir justicia, verdad y sentir, aunque sea un poco de consuelo. Por lo tanto, para acallar estos factores, es común que la información o registros que se tenían de las víctimas desaparezcan o que los reportes de las comisiones de la verdad no contengan los nombres de los victimarios, aunque existan listados de los mismos. O bien: que se firmen amnistías que favorezcan la impunidad de los ejecutores -pero, sobre todo- autores intelectuales de las violaciones a los derechos humanos.

Aunque parezca incongruente, en muchas ocasiones los gobiernos apuestan a aquellos factores que disminuyen la demanda de justicia (Elster, 2006: 258):

- a) El tiempo transcurrido entre los hechos y los juicios.
- b) La identificación social con los autores de los abusos.
- c) La difusión de la responsabilidad.

- d) El hecho de que los crímenes hayan sido cometidos por opositores al régimen y no sólo por sus agentes.
- e) El tiempo transcurrido entre la transición y los juicios.

Las amnistías, la falta de información o pruebas irrefutables, la falta de recursos para que las investigaciones se lleven a cabo lo más rápido posible, hace, que la desilusión se apodere de las víctimas y pierdan la esperanza para poder conseguir la justicia por la que han luchado. Pero no sólo es el hecho de la falta de justicia sino la impunidad que las “nuevas instituciones” permiten y que termina con su credibilidad. Apostar a que “el tiempo lo cura todo” no colabora para que sociedades que han sufrido crímenes de lesa humanidad o genocidios logren la reconciliación y menos la reconstrucción del tejido social; pues la desesperanza, la verdad y la indignación permea en generaciones enteras, lo que pudiese reactivar ciclos de violencia.

La última demanda de la sociedad civil recae en las reparaciones, lo que pudiera o no facilitar la reconciliación. Existe una variedad de medidas utilizadas como reparaciones que van desde lo económico y material, hasta la memoria personal y colectiva. Esto depende -a su vez- tanto de las demandas de las víctimas como de las conclusiones que se hayan tenido en los reportes de las comisiones de la verdad o acuerdos establecidos por el nuevo gobierno. Las reparaciones que podrían considerarse más sencillas son las de índole económico y material -es decir- se hacen compensaciones económicas, se otorgan becas para hijos de víctimas, se otorgan casas o tierras a cambio de lo que se haya perdido o se devuelve a los familiares lo que se les había arrebatado. El principal factor en contra de estas medidas es la falta de recursos por parte de las instituciones que también están en transición.

Sin embargo, las reparaciones que tienden a ser más significativas son las relacionadas con la memoria porque lleva implícito que el Estado acepta la responsabilidad de los hechos. Estas reparaciones van desde que el líder del poder ejecutivo pida perdón públicamente por los crímenes del pasado, hasta la construcción de monumentos, placas conmemorativas, ceremonias o declaración de días feriados. Aunque estas últimas medidas puedan ser más representativas, tienden a ser las más complejas de concretar. Esto no quiere decir que las reparaciones económicas

no sean necesarias, pero como éstas llegan años después de los hechos, las familias han tratado de reconstruir sus vidas cotidianas por lo que puede ser que lo económico no sea ya lo indispensable pero sí la parte humana.

Resulta fundamental para la memoria colectiva que los hechos del pasado se conozcan sin importar las generaciones que hayan pasado, pues es parte de la misma reconciliación ya que no se debe negar la historia de una sociedad.

La justicia transicional trata de atender las necesidades de las víctimas buscando la reconciliación y la reconstrucción del tejido social. En un corto plazo y a partir de que se inicia la transición lo necesario es dar a conocer la verdad –lo que comúnmente se hace- a través de comisiones de la verdad. También en el menor plazo posible y una vez que la verdad sea de conocimiento público, actuar penalmente en contra de los victimarios sin importar el rango que hayan tenido para que así las reparaciones y las reformas puedan darse en un mediano plazo trayendo consigo la justicia y el desarrollo social indispensable en cualquier sociedad – particularmente en una azotada por la violencia-. Si en casos como Argentina y Guatemala hay juicios después de 20 años a perpetradores, ¿de cuánto tiempo constará ese “corto plazo”? ¿Cuánto puede tardar en llegar la justicia como parte de la transición de un país?

La justicia transicional no se fija plazos. Es por ello que las demandas de las víctimas no son constantes. Por esto también, de acuerdo con el gobierno en turno y su voluntad política, serán las reparaciones a las que se tenga acceso o el número de juicios que habrán de realizarse. Lo anterior implica un rol más activo; tanto de organizaciones internacionales como de la sociedad civil local para que sin importar el plazo haya presión para que en algún momento se haga justicia. La falta de claridad en los plazos conlleva a que las reformas políticas planteadas puedan o no ponerse en práctica o incluso simplemente se queden como iniciativas. Ante este escenario, resulta complicado determinar si en países como los latinoamericanos la transición política ha concluido y -por lo tanto- si la justicia transicional ha sido efectiva.

Comisiones de la Verdad, una opción humana ante la injusticia

“Recordar no es fácil, pero olvidar puede resultar imposible... Resulta casi incomprensible que poder escuchar hasta los detalles más truculentos de la tortura y el asesinato de los seres queridos pueda proporcionar cierta paz.”
(Hayner, 2008: 28).

Esteban Cuya (2001:2) define: “las comisiones de la verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano”. Ante graves violaciones a los derechos humanos y las secuelas de éstas en el tejido social; es pertinente complementar esta definición con los fines que puede tener un organismo de este tipo. La autora Marcela Ceballos (2009: 37) resalta que la investigación del pasado, realizada por las comisiones de la verdad no sólo tiene como fin conocer los hechos, sino hacer un reconocimiento público de los mismos, así como determinar a los responsables para contribuir con la justicia. Sin embargo, la contribución con la justicia resulta estar condicionada por la voluntad del gobierno, pues una comisión no tiene el poder jurídico para hacer justicia.

De acuerdo con la autora Priscilla Hayner (2008: 54), una comisión de la verdad puede tener alguno o cualquiera de los siguientes objetivos básicos:

1. Descubrir, clarificar y reconocer formalmente abusos del pasado.
2. Responder a necesidades concretas de las víctimas.
3. Contribuir a la justicia y al rendimiento de cuentas.
4. Hacer un esbozo de la responsabilidad institucional y recomendar reformas.
5. Alentar la reconciliación y reducir conflictos en torno al pasado.

La mayoría de los objetivos presentados han sido parte de los mandatos en las comisiones de la verdad que se han llevado a cabo. Podrían vislumbrarse –incluso- como una serie de pasos cuyo fin es la reconciliación para evitar que el ciclo de violencia pueda continuar en una sociedad determinada; entendiendo por reconciliación no sólo restablecer los derechos de las víctimas, sino

también aplicar sanciones a los perpetradores y poner en marcha las reformas necesarias para asegurar que graves violaciones a los derechos humanos puedan ser prevenidas.

“Las comisiones de la verdad son contempladas en el derecho internacional como un mecanismo de investigación que tendrá como misión determinar los hechos, con el objetivo de descubrir la verdad, y en particular para evitar la desaparición de pruebas” (Portilla, 2003: 48). El mismo nombre de estos organismos determina su naturaleza: descubrir la verdad sobre hechos del pasado. La búsqueda de la verdad, descubrir actos deleznable, cuya sola existencia podría ser cuestionada, pero sobre todo, lograr ganar la confianza de las víctimas para que se arranquen el miedo y puedan dar su testimonio y ser escuchados por primera vez; es la base para la creación de una comisión de la verdad.

Esta búsqueda de la verdad se convierte en un halo de esperanza para las víctimas que esperan ser reconocidas como tal o que puedan encontrar una paz ante la incertidumbre de un familiar o amigo desaparecido. Estos organismos deben de anteponer las necesidades de las víctimas en un primerísimo plano. Y esto se convierte en un aspecto delicado porque la comisión necesita de las víctimas¹⁵ para conocer la verdad que persigue y a la vez tiene el compromiso de rendirles cuentas y cubrir no sólo su necesidad de reconciliación y justicia, sino sus expectativas sobre el trabajo que deben realizar.

Una vez que se ha encontrado la verdad, entonces colaborar con la justicia, determinar responsabilidades y contribuir a la reconciliación nacional pueden lograrse. Debido al modo de concebir las capacidades de una comisión de la verdad (que se discutirá más adelante), el documento que contiene la verdad encontrada debería de contribuir a estos aspectos. Algunas veces se han utilizado los casos documentados en los textos resultantes del trabajo de alguna

¹⁵ El texto Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer Recursos y Obtener Reparación elaborado por la Organización de las Naciones Unidas determina que: “se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta a las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. El término víctima también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización (ACNUDH, 2005: 3).

comisión como pruebas que determinen la responsabilidad de algún perpetrador dentro de un juicio. La mayoría de las ocasiones se ha determinado no hacer de conocimiento público nombres de perpetradores para evitar nuevos conflictos. Parte del trabajo de una comisión es hacer recomendaciones a los Estados para que puedan hacer las reformas pertinentes en materia política y hacer justicia a las víctimas. Sin embargo, tanto la justicia, como los juicios, como que se respeten las recomendaciones y en realidad pueda lograrse una reconciliación, son aspectos que terminan saliendo de la posibilidad de acción de cualquier comisión de la verdad.

“La superación del pasado supone para la sociedad nacional, el enfrentamiento crítico con los graves hechos de violencia en un periodo determinado, a fin de buscar formas de reparar los daños causados y procurar evitar su repetición en el futuro” (Cuya, 2001: 1). Según José Miguel Vivanco, quien es Director de Human Rights Watch para las Américas desde 1994, “las comisiones de la verdad han sido el mecanismo utilizado con mayor frecuencia para documentar y dejar constancia histórica de abusos cometidos durante regímenes represivos o conflictos armados” (Hayner, 2008: 13). Las comisiones de la verdad, se utilizan como una herramienta para lograr cumplir con el derecho a la verdad que tiene cualquier ciudadano, así como el reconocimiento de la propia historia.

De acuerdo con el documento: *Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han Salido de un Conflicto –Comisiones de la Verdad-* editado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las comisiones de la verdad llegan a investigar los casos de miles de víctimas en un esfuerzo por comprender el alcance y las pautas de las violaciones cometidas en el pasado, así como sus causas y consecuencias” (ACNUDH, 2006: 1). Conocer los hechos es tan importante como saber los motivos que llevaron a tales grados de violencia, además de quiénes permitieron que los derechos humanos fueran omitidos. En caso de no ser posible conocer a los responsables de manera individual, es vital que se haga del conocimiento público –cuando menos- las estructuras del Estado u otras organizaciones que hayan promovido u omitido acciones para evitar que la población padeciera una violencia sistemática.

La verdad es la única herramienta que permite reivindicar la memoria de las víctimas, exigir reparaciones, avanzar hacia la justicia, sancionar a los responsables o al menos evitar que perpetradores continúen en posiciones de poder dentro del Estado y que –por lo tanto- la violencia pueda resurgir o continuar con mayor facilidad. La reconciliación nacional es –sin duda- un objetivo a largo plazo; además de uno muy ambicioso. Las investigaciones de una comisión de la verdad pueden ser un primer paso para alcanzar esa reconciliación nacional dando lugar a la reconstrucción del tejido social. La verdad resulta tan poderosa, que dar a conocer los hechos de violencia públicamente o que los parientes de víctimas directas conozcan el destino de los suyos; ha sido mucho más alentador que las mismas reparaciones. “Las comisiones de la verdad contribuyen con el difícil proceso de reconciliación que es la base de una paz duradera...” (Ceballos, 2009: 42).

La Organización de las Naciones Unidas determina que un país es maduro para una comisión de la verdad cuando (ACNUDH, 2006: 3):

1. Existe la voluntad política que permita, aliente o apoye una investigación seria de los abusos cometidos en el pasado.
2. El conflicto violento, la guerra o las prácticas represivas han llegado a su fin.
3. Existe interés por parte de las víctimas y los testigos en que se realice un proceso de investigación y estén dispuestos a cooperar.

Las circunstancias descritas deben de ser las mínimas existentes para que se inicie la actividad de una comisión de la verdad; aunque el panorama real puede vislumbrarse más complejo. Si bien el conflicto o la guerra han terminado, esto no significa que el trabajo para los investigadores no sea peligroso. Además, la transición a una democracia no implica que las instituciones sean necesariamente fuertes ni que las personas implicadas en las violaciones a los derechos humanos no sigan en puestos de poder como para obstaculizar ciertas acciones. Las víctimas y los testigos no suelen estar dispuestos a cooperar de manera inmediata a pesar de su interés por conocer la verdad; primero hay que vencer el miedo y creer en que la justicia puede ser posible.

“Lo habitual es que las comisiones de la verdad se utilicen en contextos en que el sistema judicial apenas funciona o es muy débil, es corrupto y tiene un sesgo político, y se forme o no una

comisión de la verdad, la perspectiva de procesos judiciales serios es muy tenue...” (Hayner, 2008: 129). Pese a esta circunstancia –y aunque cada país ha tenido situaciones específicas muy diversas- una comisión de la verdad debe iniciar lo más pronto posible una vez que se da por terminado el conflicto. Desde la creación de la comisión, el mandato de su trabajo, cuáles serán sus acciones, el tiempo en que se trabajará, cuándo presentará resultados (aunque los tiempos puedan ser prorrogables); se debe hacer de manera pública no sólo para involucrar a los ciudadanos y a otras organizaciones civiles relacionadas con los derechos humanos, sino para comprometer al gobierno en transición para cooperar con las investigaciones, así como a poner en práctica las recomendaciones que resulten del trabajo.

Por lo general, mientras más público sea el trabajo de una comisión de la verdad, es más probable que tenga un mayor impacto tanto en las estructuras del Estado, como en el aspecto de la reconciliación nacional; aunque esto podría aplicar solamente para aquellos organismos que hayan sido promovidos por los gobiernos en transición. Cuando se habla de comisiones de la verdad es vital considerar al menos dos vertientes en virtud de su objetivo y el momento en que se presentan¹⁶. Priscilla Hayner (2008: 44) hace referencia a la diferencia entre una comisión de la verdad que se da en un periodo de transición política y que pretende buscar esclarecer los hechos de violencia durante un conflicto. Por otro lado, una comisión de la verdad histórica es aquella que no se da en un periodo de transición pero que sí pretende esclarecer hechos de violencia –ya sea sistemática o focalizada- perpetrados por el Estado en un pasado no necesariamente reciente. Una comisión de la verdad histórica –generalmente- es promovida por el propio Estado, pero con objeto más de homenajear a las víctimas que de buscar reparaciones o evitar la impunidad.

A su vez, las comisiones de la verdad se dividen en dos de acuerdo con su origen. “Las comisiones de la verdad pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las creadas por el gobierno

¹⁶ Existen otras investigaciones sobre crímenes de guerra también llamadas comisiones de expertos que tienen características similares a una comisión de la verdad pues investigan crímenes del pasado con base en documentos y testimonios además de presentar un informe final. Sin embargo, la diferencia radica en que el mandato lo establece la Organización de las Naciones Unidas y no buscan conocer las causas y las consecuencias de la violencia, sino que evalúan la evidencia existente de actos criminales y de violaciones al derecho internacional. Esto precede el establecimiento de un tribunal internacional para casos de violencia como Ruanda y Yugoslavia (Hayner, 2008: 49-50).

(o con su participación) y las creadas por iniciativas diferentes (y en ocasiones contrapuestas) a éste” (Orduña, 2008: 72).

“En algunos casos la búsqueda de la verdad surge como un proceso legal, o formal, *encargado* por los gobiernos, bajo la presión de los grupos defensores de los derechos humanos, a un grupo de expertos; tal como se hizo en Argentina, Chile y El Salvador. En estos países las comisiones de la verdad se crearon, tras exigencias masivas, por mandato legal, después de negociaciones y acuerdos políticos. En otros casos, las comisiones de la verdad nacen como fruto del trabajo solidario de las organizaciones de derechos humanos, que para investigar los graves hechos de violencia oficial desarrollan un esfuerzo casi clandestino” (Cuya, 1996: 5-6).

De acuerdo con datos del Centro Internacional para la Justicia Transicional (2015), de 1974 a 2014 se han creado aproximadamente 41 comisiones de la verdad oficiales para rendir cuentas sobre el pasado. La mayor parte de ellas han sido instituidas mediante un decreto presidencial resultado ya sea de la presión de la sociedad civil al gobierno en transición o como parte de Acuerdos de Paz firmados entre las partes en conflicto. El decreto presidencial establece a los comisionados y el mandato bajo el cual trabajará la comisión o al menos se establecen ciertos estatutos para que se inicien los trabajos; de esta manera, las comisiones que emanan de un decreto presidencial son las que suelen iniciar los trabajos con mayor rapidez como el caso de Guatemala. Hay otros casos, como Argentina o Chile, que a pesar de provenir de un decreto presidencial se topan con cuestiones políticas de los poderes legislativos que -al estar divididos- entorpecen el inicio de los trabajos de las comisiones. Los casos de comisiones de la verdad más escasos son los creados por los parlamentos, como el caso de la Comisión Sudafricana que se vio beneficiada por los rangos de acción tan amplios que tuvo; no sólo dar a conocer la verdad sino solicitar comparecencias, por ejemplo.

“La mayor parte de las comisiones de la verdad que se han creado por instancias ajenas al gobierno han nacido de la iniciativa de sectores de la iglesia comprometidos con el trabajo en pro de los derechos humanos” (Orduña, 2008: 80). Es importante destacar la labor que han tenido diferentes organizaciones no gubernamentales ya sea para sumarse a los proyectos promovidos por la iglesia o bien para hacer investigaciones por cuenta propia. En todo caso, tanto los proyectos

de organizaciones civiles como los promovidos por diferentes arquidiócesis han sido proveedores de información vital para los trabajos de las comisiones de la verdad oficiales. Es decir, que los trabajos no han sido, de manera alguna, excluyentes.

Técnicamente, el trabajo es muy similar: en ambos casos se busca la verdad de los hechos, se recurre a documentos oficiales, se hace toma de numerosos testimonios, se elabora un reporte que –generalmente- contiene recomendaciones y se trabaja para lograr la publicación del mismo y que la verdad sea de dominio popular. Sin embargo, puede haber algunas ligeras ventajas de una situación sobre la otra. Cuando una comisión es oficial se tendrán más recursos económicos que pudieran posibilitar un trabajo más amplio pues podrán tener más personal trabajando, así como mayores posibilidades para viajar a diferentes regiones de un país. Las comisiones creadas por otras iniciativas probablemente no tendrán los mismos recursos económicos, pero no tendrán limitante alguna en cuanto al tiempo, por lo que el trabajo puede hacerse a mayor profundidad. Se podría pensar que una ventaja de una comisión oficial sobre una que no lo es sería el acceso a las fuentes de información; sin embargo, la realidad es que –incluso comisiones que han sido creadas por decretos presidenciales- la diferencia entre la información que se puede recabar es mínima pues las instituciones gubernamentales suelen esconder y/o desaparecer la información para que no salga a la luz por lo que la investigación para ambas partes se ve obstaculizada. La mayor diferencia podría darse en los alcances de los reportes finales ya sea para que las recomendaciones sean tomadas en cuenta por el gobierno en transición o en términos de que al ser publicado el informe pueda ser accesible a una mayor cantidad de personas.

“Si una comisión realiza bien su labor y cuenta con los recursos y apoyos necesarios, puede transformar la manera que tiene un país de entender y aceptar su pasado y así con buena suerte, ayudar también fundamentalmente en la configuración de su futuro” (Hayner, 2008: 320). Es por ello que las comisiones de la verdad se pueden encuadrar en metas tanto de corto como de mediano y largo plazo –independientemente del tipo de comisión de la que se trate-. En un corto plazo se debe llevar a cabo la investigación para dar a conocer la verdad de los hechos, dando pie a que en un mediano plazo se puedan realizar juicios y hacer justicia tanto a las víctimas como a sus familias

para que en un largo plazo se pueda dar proceso de reconciliación nacional; siendo esto el principio básico para que no se repita la violencia en las sociedades. “Estos organismos de la verdad pueden estar relacionados con diversos objetivos desde la reconciliación nacional hasta promover la reparación a cada una de las víctimas, desde poner fin a la impunidad hasta instaurar protecciones para impedir la repetición de los abusos en el futuro” (Hayner, 2008: 43).

De acuerdo con Rob Weiner¹⁷, los tres requisitos que debe de cumplir un Estado después de un periodo de abusos generalizados son: investigar los hechos con autoridades competentes, conceder a las víctimas la oportunidad de contar su experiencia, y documentar oficialmente los hechos (en Hayner, 2008: 152). La base para que las metas antes mencionadas puedan cumplirse radica en el derecho a la verdad. La doctrina internacional de los derechos humanos garantiza que cualquier persona, pero particularmente las víctimas de violaciones graves a sus derechos –además de sus familiares-, tiene el derecho a conocer la verdad, a que se le haga justicia y también a una reparación. “El derecho a la verdad es parte de la reparación del daño ocasionado por los agentes del Estado, reparación que además debe incluir medidas de carácter económico, social, médico, jurídico, para trata de revindicar la memoria de las víctimas y aliviar en parte la tragedia ocasionada a los familiares afectados” (Cuya, 1996: 4).

Que la información derivada de la comisión de la verdad pueda ayudar a alcanzar la justicia debería de ser un objetivo -a largo plazo- de una comisión de la verdad. Sin embargo, es importante no confundir a estos organismos como sustitutos de procesos judiciales. Con excepción de la comisión creada en Sudáfrica, el resto no ha tenido capacidad para iniciar juicios por sí solas; pero han contribuido con información y testimonios que han colaborado a dictar sentencias acusatorias. “Por lo tanto, en muchos casos las comisiones de la verdad no son el sustituto de acciones legales, sino el complemento de un sistema judicial muy débil y han ayudado a llenar el vacío creado por la inacción, la incompetencia o la incapacidad de los tribunales para empezar a tratar los miles de

¹⁷ Rob Weiner fue Director del Programa para América Latina del Comité de Abogados por los Derechos Humanos con sede en Nueva York auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas. También se dedicó a la docencia en la Universidad de Massachussets en Boston, actividad de la cual se retiró en 2014.

delitos que exigen que se persiga” (Hayner, 2008: 131). También es importante considerar que son escasos los casos en que el gobierno de transición inicia de inmediato con los juicios; sin embargo, esto no quiere decir que esto conlleve al olvido. Los reportes, resultado del trabajo de las comisiones, recaban información importante que no pierde caducidad y que puede ser utilizada en los juicios, sin importar cuándo se realicen.

El jurista francés Louis Joinet¹⁸...

“hace énfasis en la necesidad de tres condiciones para la implementación de las comisiones: deben ser creadas por ley en un contexto de restablecimiento de la democracia; debe haber garantías de testigos y víctimas, así como la independencia e imparcialidad de las comisiones; y el informe de las comisiones debe hacerse público, refiriéndose a la importancia de los medios de comunicación y otros mecanismos de difusión y legitimación que faciliten el conocimiento de la verdad” (en Hayner, 2008: 38).

El texto de Joinet plantea una situación optimista en relación a las condiciones en que una comisión debe crearse y debiera funcionar. Sin embargo, si bien la mayoría de las comisiones sobre creadas bajo nuevos regímenes democráticos, no son lo suficientemente sólidos como para que el trabajo de la comisión no tenga tropiezos. Pese a que la seguridad a las víctimas y los alcances que puede tener el informe final, quedan estipulados en las especificaciones de la comisión; en la realidad pocas veces se ha apegado a lo signado en el papel. Y si bien los informes de las comisiones se hacen públicos suele haber desdenes de los propios gobiernos -como el caso de Guatemala al momento de recibir el informe-.

“A la hora de responder a los abusos del pasado, un Estado puede tener varios objetivos: castigar a sus autores, establecer la verdad, reparar o abordar los daños y perjuicios, rendir homenaje a las víctimas y evitar más abusos” (Hayner, 2008: 38). Cuando se trata de las víctimas, las comisiones de la verdad pueden beneficiarlas de diferentes formas, además de dar a conocer los hechos gracias a los programas de reparaciones que –generalmente- se diseñan como parte de

¹⁸ Louis Joinet es un jurista francés cuyo trabajo más reconocido se desarrolló en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas particularmente en la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de la Memoria. En 1996 presentó el informe llamado La Cuestión de la Impunidad de los Autores de Violaciones de los Derechos Humanos mejor conocido como el Informe Joinet. Dicho texto se basa en el derecho de saber, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación de las víctimas, así como la garantía de la no repetición de las violaciones.

las recomendaciones y de los compromisos que adquieren los gobiernos con las comisiones y la población afectada. Con el simple hecho de la publicación del informe, el trabajo de las comisiones puede lograr que haya una sociedad más informada capaz de reconocer un nuevo régimen represivo y actos que promuevan que tales grados de violencia regresen (Hayner, 2008: 60).

Las actividades, alcances y limitaciones que tiene una comisión de la verdad están diseñados y claramente establecidos en un documento denominado *mandato* o *marco de referencia*.

“El marco de referencia, se suele crear mediante decreto presidencial o ley nacional, o forma parte de un acuerdo de paz que pone fin a una guerra, puede definir las facultades de una comisión, limitar o fortalecer el alcance de sus pesquisas y determinar ámbito temporal, contenido y marco geográfico de la investigación, definiendo así la verdad que se va a documentar” (Hayner, 2008: 112).

Los mandatos –a diferencia de lo que podría pensarse- deben hacer precisiones, pero a la vez tienen que ser lo suficientemente flexibles para que no se deje una parte de los hechos fuera de la verdad oficial que estará contenida en el documento resultante o bien para que la comisión tenga capacidad de tomar decisiones sobre el curso del trabajo y sus resultados.

De acuerdo con el texto *Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han Salido de un Conflicto. Comisiones de la Verdad* redactado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006); el mandato de una comisión de la verdad debe contener y especificar los siguientes elementos:

<i>Consultas</i>	Las consultas deben de hacerse a las comunidades de víctimas, así como a organizaciones de la sociedad civil. La comunicación con grupos de víctimas y otras organizaciones debe de ser abierta para recibir información durante todo el trabajo de la comisión.
<i>Periodo de funcionamiento</i>	El periodo ideal es entre un año y dos años y medio para que la comisión haga sus trabajos sin que se pierda el interés del público. Es importante considerar que se pueden hacer prórrogas para los trabajos de ser necesario; sin embargo, no es recomendable extender los trabajos por más de seis meses.
<i>Periodo investigado</i>	Es necesario fijar un periodo a investigar. En ocasiones es complicado determinar cuándo se inicia un conflicto armado, pero determina un plazo

	con base en aquellos periodos de la historia en los que se produjeron las infracciones más graves o más numerosas.
<i>Tipos de infracciones</i>	Se debe mantener un mandato flexible, que no enumere los incidentes concretos que se van a investigar, sino que se describan las infracciones que hayan sucedido sin que queden fuera del documento final por no estar dentro del parámetro establecido.
<i>Atención a víctimas</i>	Se debe dar atención especial a las principales poblaciones de víctimas. Sin embargo, se recomienda determinar cuáles son las poblaciones que deben recibir ayuda y de qué tipo, una vez que se hayan realizado las consultas.
<i>Actividades fundamentales</i>	Se debe de enumerar las funciones o actividades que llevará a cabo la comisión de la verdad.
<i>Atribuciones</i>	Se debe determinar la autoridad y ámbito de actuación. Como mínimo debe contemplar: facultades para entrevistar a cualquier persona, tener la cooperación de las autoridades públicas, realizar cualquier tipo de visita sobre el terreno, tener capacidad de citar, registrar e incautar, así como proteger testigos.
<i>Amnistía o enjuiciamiento</i>	La comisión puede recomendar enjuiciamiento, conceder o recomendar la amnistía o bien conceder exención limitada y condicional de responsabilidad penal.
<i>Vía de establecimiento</i>	La comisión puede establecerse por medio de una legislación nacional o por decreto presidencial.
<i>Aplicación de recomendaciones</i>	El mandato de la comisión debe de comprometer al gobierno en todos sus niveles para tener en cuenta las recomendaciones que se incluyan en el reporte final.

(ACNUDH, 2006: 7-13)

El trabajo de una comisión de la verdad es tan extenso que forzosamente requiere de una cantidad importante de personas, así como diversidad de instituciones involucradas en él. Si bien el resultado de la comisión dependerá de una serie de factores –tanto internos como externos- las personas encargadas de gestionar los trabajos tendrán un peso determinante en el éxito o fracaso del trabajo. También es necesario contemplar el rol de los propios gobiernos, las organizaciones civiles nacionales y extranjeras, así como de los organismos internacionales.

La cabeza de una comisión de la verdad oficial son los gestores, quienes cargarán con la presión del trabajo, y serán la cara del proyecto en su totalidad. Los responsables de la comisión

son quienes complementan el mandato de la comisión, establecen las oficinas en donde se trabajará, seleccionarán el personal que colaborará con ellos, harán campañas informativas, no solo para que la gente conozca el proyecto hasta en los lugares más recónditos, sino para ganar la confianza de la gente y que se perciba seriedad en el trabajo. La presión tanto pública como política con la que tienen que lidiar estas personas es digna de mencionarse pues no sólo se trata de liderar las consultas y manejar a la gente sino hasta colaborar en las exhumaciones y ciertas tareas de seguridad. Además de que se tienen registros de diversas amenazas –incluso atentados- en contra de gestores y otros colaboradores.

Los modelos para la selección de los gestores de las comisiones de la verdad pueden variar dependiendo de la circunstancia en que el organismo aparezca. En cualquiera de los posibles casos hay dos constantes: se presentan las candidaturas de los posibles miembros gestores de la comisión y quienes sean elegidos deben ser aprobados por el gobierno en turno. Las candidaturas pueden presentarse por diferentes instancias. A los candidatos los pueden presentar instancias internacionales como las Naciones Unidas, puede ser que un grupo de reconocidas personalidades de la sociedad civil hagan una propuesta en conjunto con organizaciones no gubernamentales, o que lo haga el propio gobierno a través de comités. En cualquier caso, cuando se trata de una comisión de la verdad oficial, el nombramiento definitivo de los gestores está sujeto a un proceso nacional de investigación de cada candidato, así como a una decisión por parte del gobierno.

Una vez que se ha determinado a los personajes que serán los líderes de la comisión de la verdad se tiene que juntar un equipo de trabajo. “Además de abogados e investigadores versados en derechos humanos, se pueden necesitar trabajadores sociales, psicólogos, expertos en computación y sistemas de información, personal para codificar y teclear datos, coordinadores logísticos, intérpretes y agentes de seguridad” (Hayner, 2008: 285).

“Las comisiones recientes han tenido normalmente entre 200 y 500 empleados en su momento de mayor actividad. Esa cifra comprende a decenas de encargados de tomar declaraciones, codificadores y personal de almacenamiento de datos, investigadores, documentalistas y coordinadores de audiencias públicas. Más adelante, se necesitará un equipo mucho más pequeño para redactar y coordinar el informe final” (ACNUDH, 2006: 16).

Generalmente, todos los trabajadores, incluidos los gestores, son ciudadanos del país cuya situación se está investigando; se hace de esta manera para que todos los involucrados estén conscientes y relacionados con el entorno y el contexto que se ha vivido¹⁹.

Debido al importante número de empleados que se necesitan –sobre todo para hacer la recopilación de los testimonios de las víctimas- parte importante son los entes de financiamiento. “El presupuesto de una comisión de la verdad suele ser superior a los 5 millones de dólares estadounidenses, y no es extraño que llegue a los 12 millones o más de 19” (ACNUDH, 2006: 25-26). Lo ideal sería que el gobierno asumiera el financiamiento total de la comisión, pero no es común debido a los altos costo. Es por ello que también se acude a la comunidad internacional que puede ser desde la ONU²⁰ hasta gobiernos de diversos países ²¹y organizaciones internacionales no gubernamentales²² relacionadas con los derechos humanos; aunque ninguna de estas instancias puede tener injerencia ni en el trabajo de la comisión, ni en la redacción del informe, ni en presionar a los gobiernos para la aplicación de las recomendaciones una vez presentado el documento.

Dentro de los roles que pueden tener actores externos en los trabajos de una comisión de la verdad, uno vital es el que juegan las organizaciones civiles nacionales. El papel de estos organismos puede convertirse en esencial para el éxito o fracaso de los trabajos de una comisión porque tienen presencia antes, durante y después de la misma. Ante violaciones generalizadas de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales suelen iniciar trabajos de

¹⁹ En 1992 hubo una excepción con la Comisión de la Verdad de El Salvador en donde ninguno de los tres gestores ni los 25 puestos clave que tuvo esta comisión fueron ciudadanos salvadoreños. Pese a las críticas por parte de la sociedad civil de este país, la Organización de las Naciones Unidas en conjunto con el gobierno de transición lo determinaron así para que el informe fuera imparcial. Sin embargo, una vez que el informe fue publicado, organizaciones civiles dieron cuenta de diversas inexactitudes lo que se atribuyó a la falta de conocimiento sobre el contexto político de los años en que se llevó a cabo la violencia masiva (Hayner, 2008: 287). Cuando se tiene el auspicio de las Naciones Unidas, no es una regla que los involucrados sean ciudadanos del país en cuestión.

²⁰ Además de la cooperación financiera de la ONU también se le ha solicitado recibir los fondos y administrar los gastos de las comisiones. “Esto permite aligerar la carga administrativa de la comisión y al mismo tiempo aumentar la confianza de los donantes” (ACNUDH, 2006: 35)

²¹ La participación de países extranjeros en la financiación o trabajos de una comisión de la verdad no es un común denominador. Sin embargo, se ha dado en casos cuando el país ajeno se ha visto relacionado con financiación para el conflicto, adiestramiento militar para alguna de las partes, o venta de armas, así como asilo político a perpetradores o refugio de víctimas. No sólo se habla de cooperación financiera sino también en términos de información como el caso de la desclasificación de archivos para contribuir con la comisión de la verdad guatemalteca por parte de los Estados Unidos.

²² Organizaciones no gubernamentales internacionales han jugado un papel importante en términos de asesoramiento. Es decir, las organizaciones hacen análisis comparativos de diversas comisiones y presentan esquemas de trabajo posibles para alguna comisión que se esté formando. También pueden colaborar en la capacitación del personal, promoción y supervisión del trabajo de la comisión, hacer o recibir donativos.

investigación, denuncia, documentación de casos, búsqueda de víctimas e incluso asesoría psicológica y legal para las familias; es decir, están haciendo el trabajo que podría corresponderle a una comisión de la verdad, sin serlo. Es por ello que cuando una comisión de la verdad se está formando se les puede pedir apoyo en términos de asesoría sobre los posibles gestores o pueden colaborar directamente como gestores.

Una vez que la comisión inicia los trabajos, es común pedir capacitación a las organizaciones civiles, solicitar la documentación y los testimonios que ya tengan disponibles, o incluso acompañamiento. En muchas ocasiones, la gente desconfía del personal de la comisión de la verdad, pero que haya una organización civil detrás de ellos les brinda confianza; incluso, algunas organizaciones civiles han sido subcontratadas por las comisiones para la recopilación de los testimonios. La ventaja –y de ahí uno de los puntos clave para estas organizaciones sobre las comisiones- es que una comisión desaparece una vez que entrega el informe, pero una organización civil. Entonces es mucho más probable que una organización civil pueda ejercer presión al gobierno para que cumpla con las recomendaciones, para que se celebren juicios y les puedan dar seguimiento utilizando como base los testimonios de la verdad histórica oficial que provee el informe final de la comisión. También, las organizaciones terminan jugando un papel fundamental en la ayuda psicológica que requieren las víctimas, apoyo comunitario o apoyo legal, entre otras labores.

El trabajo de una comisión de la verdad debe de ser exhaustivo y planeado para que no sea una constante lucha contra el tiempo y el agotamiento de los recursos. El periodo de preparación – una vez que se ha conformado la comisión- es básico para que el trabajo sea terminado a tiempo y sea lo más incluyente posible. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006: 15) propone un listado de tareas preparatorias para que una comisión de la verdad pueda llegar a buen término:

- Elaboración de un plan de plantilla y contratación del personal inicial.
- Capacitación del personal encargado de tomar declaraciones y otras personas para la primera fase del trabajo.

- Adopción de un plan de trabajo.
- Estudio de planes detallados para futuras audiencias públicas.
- Establecimiento de un programa de protección de testigos, en caso necesario.
- Preparación del presupuesto y recaudación de fondos iniciales de fuentes nacionales e internacionales.
- Diseño e instalación de una base de datos eficaz para el almacenamiento, organización y recuperación de datos sobre los posibles miles de delitos que se comunicarán en la comisión.
- Diseño de una campaña de divulgación pública.
- Inicio de las investigaciones generales preliminares.
- Acopio de la documentación existente de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, Naciones Unidas, gobiernos extranjeros y otras fuentes.

Las actividades preparatorias llevarán a la comisión a realizar las seis actividades fundamentales que cualquier organismo de este tipo tiene como base (ACNUDH, 2006: 17-20):

1. Toma de declaraciones. La fuente de información primaria de una comisión de la verdad son las declaraciones de víctimas, testigos, o perpetradores. Generalmente se organizan equipos de trabajo que cubren extensos territorios a través de oficinas móviles o diferentes sedes para la toma de testimonios. Un aspecto clave es crear un ambiente propicio para que quienes quieran dar su testimonio se sientan cómodos, seguros y respetados. “Una comisión de la verdad recibe entre 7.000 y 20.000 declaraciones de víctimas, testigos o incluso autores que desean informar sobre su propia participación o la de otras personas en los hechos investigados” (ACNUDH, 2006:17).
2. Creación de base de datos. La cantidad de información que se obtiene es tal, que es indispensable crear bases de datos que codifiquen los testimonios además de poder hacer cruces de información y poder analizar acontecimientos específicos con mayor profundidad. En algunos casos, cuando se ofrecen apoyos económicos o de cualquier índole a cambio

de los testimonios, la gente puede inventar historias por lo que los cruces de información son básicos para eliminar casos falsos.

3. Hacer estudios e investigaciones. Realizar estudios a profundidad de más de 7.000 testimonios –por ejemplo- es, prácticamente, imposible. Es por esto que las investigaciones se centran en eventos específicos o representativos de la violencia que pueden ser desde matanzas hasta la participación de gobiernos extranjeros en el conflicto. Generalmente, los informes finales llevan los nombres de todas las personas que han sido clasificadas como víctimas, pero es poco probable que juicios puedan proceder de manera individual. Se ha encontrado que es mucho más valioso –en términos de juicios o sentencias- si se hace referencia a eventos específicos que sean representativos de los crímenes que la población sufrió.
4. Organización de audiencias públicas. Si bien no todas las comisiones de la verdad llevan a cabo este tipo de audiencias; han probado ser efectivas para lograr que la ciudadanía se entere de los hechos del pasado, que se abra un debate público a nivel de medios de comunicación sobre el tema y así que la comisión pueda tener más apoyo de la sociedad civil. Por lo general, se organizan estas audiencias en radio y/o televisión buscando que se tenga una mayor cobertura. Este tipo de testimonios pueden ser considerados como oficiales y podrían funcionar como evidencia en algún juicio, estuvieran o no incluidos en el documento final.
5. Procurar la información pública. Un aspecto clave del trabajo de una comisión de la verdad es que tenga credibilidad públicamente y que su trabajo tenga difusión. Si esto sucede, es más probable que la ciudadanía quiera dar su testimonio; pero también, si se tiene claro el trabajo que la comisión llevará a cabo entonces se tendrán expectativas dentro de las posibilidades reales de acción. Todo ello será en beneficio de la sociedad civil una vez que el tiempo de actividad de la comisión haya terminado.
6. Redacción de informes y recomendaciones. El informe es la compilación de las investigaciones realizadas con base en los testimonios recopilados. Generalmente los

informes contienen recomendaciones que son acciones que los gobiernos deberían llevar a cabo para asegurar que la violencia no resurja, para dar apoyo a las víctimas, para lograr que el tejido social pueda resarcirse y encaminarse a una reconciliación nacional. La entrega del informe al gobierno es el fin del trabajo de una comisión de la verdad.

Una de las expectativas que –usualmente- tiene la población es que el trabajo de las comisiones de la verdad conlleve al enjuiciamiento de los perpetradores. Sin embargo, esto no es parte del trabajo de las comisiones de la verdad, aunque los juicios generalmente estén presentes como parte de las recomendaciones. “Las comisiones no sustituirán a la justicia ordinaria, sino que su labor abarca un marco de comprensión más amplio con respecto a las condiciones políticas que permitieron la violación sistemática y masiva de los derechos humanos y la reproducción de la estructura mediante las cuales cometieron estos hechos” (Ceballos, 2009: 38). Hay casos muy específicos como el de Sudáfrica, en donde se le otorgó a la comisión la posibilidad de otorgar amnistías²³, pero esto fue acordado tanto por las Naciones Unidas, como por el gobierno en turno y establecido en el mandato del organismo; pero esto no ha sido una práctica común.

Poco afortunado es el hecho de que los juicios se conviertan en un tema complicado pese a ser parte de las recomendaciones de las comisiones porque además de costosos, se enfrentan a cualquier cantidad de obstáculos, pues -en muchas ocasiones- los propios perpetradores han establecido las reglas del juego. “Los juicios en tribunales internacionales también han sido escasos. En comparación con la elevada cifra de acusados de crímenes de guerra, sólo un número relativamente pequeño ha sido procesado por el Tribunal Penal Internacional, particularmente en los casos de Yugoslavia y Ruanda; en ambos casos, gracias a organismos especiales creados por la ONU” (Hayner, 2008: 39). Las comisiones de la verdad no tienen la capacidad jurídica para tomar acciones legales; estas acciones dependerán de la voluntad política del gobierno en turno.

²³ La amnistía supone omitir la responsabilidad penal por la comisión de un delito y esto ha levantado diversas críticas porque podría confundirse con olvido. Sin embargo, hay que destacar que dentro de los delitos que el derecho internacional exime de la posibilidad de una amnistía son: el genocidio, la tortura, las desapariciones forzadas y los crímenes contra la humanidad. Es por esto que no es común que se le otorgue la capacidad de extender amnistías a una comisión de la verdad, pues evitaría que probables perpetradores quedaran impunes.

El documento final de una comisión de la verdad realmente cobra relevancia una vez que el organismo está desactivado, pero su información puede ser utilizada dentro de juicios nacionales o internacionales a perpetradores. “Aunque en el informe de la comisión no se identifique a los autores concretos, la información que contiene puede revelar las características más amplias de las infracciones y mostrar cuál ha sido el grado de participación y de responsabilidad institucional, así como la responsabilidad de los cargos más altos” (ACNUDH, 2006: 27). También es importante considerar que, además de los juicios a los perpetradores en los que una comisión de la verdad puede colaborar a través de los testimonios y las investigaciones, también pueden colaborar en “...detallar el papel que desempeñan los jueces y el conjunto del sistema judicial en la perpetuación o tolerancia de los abusos cometidos por las autoridades” (Hayner, 2008: 148).

Cuando hay casos de violencia generalizada en contra de la población, no se pueden hacer a un lado las afectaciones económicas que pueden generar estos hechos a las familias. Por ello es indispensable tomar acciones relacionadas con reparaciones. Las más comunes son de tipo económico, pero no son las únicas. También hay reparaciones simbólicas como monumentos, que son aceptadas por la sociedad civil. La cuestión más importante sobre las reparaciones es que se entiende que el gobierno está haciéndose responsable por los actos perpetrados; la responsabilidad es del Estado. “Cuando se les preguntó a las víctimas que colaboraron con la comisión sudafricana sobre lo que esperaban en términos de reparación, sólo el 8% respondió que quería dinero, los demás solicitaron acceso a la educación, a la salud y a los servicios públicos (la mayoría se refirió a cambios en las condiciones materiales de vida)” (Ceballos, 2009: 99).

Hay diferentes tipos de reparaciones que pueden tomar lugar de acuerdo con las posibilidades económicas y políticas del Estado y las leyes establecidas. Hay medidas de restitución que se trata de que la víctima recupere la situación que tenía antes de la violencia que lo afectó en términos de libertad, vida familiar, retorno al país, restauración de empleo o propiedad. Las medidas de indemnización son las que pretenden cubrir los daños y perjuicios físicos o morales que haya padecido la víctima como daños materiales o ataque a la reputación. También hay medidas de rehabilitación que hacen referencia a la atención médica, psicológica o psiquiátrica de las víctimas

y de quienes las rodean. Finalmente, hay medidas relacionadas con la no repetición de las violaciones que puede ser desde el fortalecimiento de las instituciones hasta las reparaciones simbólicas como monumentos, homenajes o el perdón público por parte del ejecutivo del gobierno (Portilla, 2003: 41-44).

“En varios países, a menudo con grandes dificultades, se han aplicado programas encaminados a apartar del cargo a miembros del ejército, la policía, el poder judicial o la administración pública que han cometido abusos en el pasado” (ACNUDH, 2006: 29). Estos procesos de depuración son de los pasos más complicados de llevar a cabo porque –en la mayoría de los casos- los propios perpetradores han hecho modificaciones a las leyes para salvaguardar sus intereses. A su vez, la transición a una democracia no implica que los gobernantes anteriores salgan del gobierno, haciéndose aún más complicado removerlos de la vida política del país.

Hay que estar conscientes de que, pese a que las recomendaciones implican ciertas reformas –incluso constitucionales-; solamente en raras ocasiones se llevan a cabo de inmediato. Y, el hecho de que las reformas, los enjuiciamientos, las reparaciones o las depuraciones no se lleven a cabo en breve, hacen que se cuestione la efectividad del trabajo de la comisión. “A menudo resulta difícil valorar el éxito global de una comisión de la verdad. El impacto de una comisión puede sentirse de maneras tan diferentes, en tantos sectores distintos de la sociedad y a lo largo de tanto tiempo, que resulta difícil de medir, cuantificar o evaluar” (ACNUDH, 2006: 32). Puede ser que el éxito del trabajo se pueda determinar con base en la aplicación de las recomendaciones o a cuántas personas ha llegado el informe una vez distribuido. Establecer cómo influye en la población, comprender su historia nacional o la violencia que vivió, se convierte en un verdadero reto.

Las recomendaciones, las medidas de justicia y las reparaciones no deberían de estar sujetas a la voluntad de las autoridades en turno. Todas estas medidas están amparadas por documentos oficiales en consecución del derecho internacional, asentando “la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos...” (ACNUDH, 2005: 3). El documento llamado: *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las*

víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, detalla los derechos de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos “... figuran los siguientes derechos de las víctimas: acceso igual y efectivo a la justicia; reparación adecuada, rápida y efectiva del daño sufrido; acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación” (ACNUDH, 2005: 4). La Asamblea General de las Naciones Unidas (2005) determinó que una reparación plena y efectiva puede seguir alguna de las siguientes formas: restitución, indemnización; rehabilitación; satisfacción, y garantías de no repetición²⁴.

La magnitud de las violaciones a los derechos humanos que se sufre cuando se habla de casos como el genocidio o crímenes de lesa humanidad, pareciera restar importancia a las acciones que pueda llevar a cabo una comisión de la verdad. Asimismo, los retos a los que se enfrenta una comisión de la verdad parecieran dar a entender que lo último que se quiere es lograr una paz verdadera, justicia y una reconciliación nacional. Como se ha mencionado anteriormente, uno de los mayores retos a los que se enfrenta una comisión de la verdad es el tiempo; lo que implica que no se puedan estudiar a profundidad los diversos hechos violentos. Este aspecto es muy relevante, porque puede hacer que la población quede decepcionada al no ver los resultados esperados. Las víctimas suelen esperar que cada caso sea mencionado en los reportes, investigado, analizado, esclarecido y, de ser posible, llegar hasta la posible localización de víctimas o realizar exhumaciones. Los altos costos -y las limitaciones de tiempo- no permiten que esto sea posible, por lo que se tiene que optar por los casos más significativos; incluso dentro de las recomendaciones se pueden proponer procesos de seguimiento a otros casos, pero es raro que los gobiernos lo hagan, porque ellos tendrían que correr con los gastos. El tiempo también puede ser determinante en cuanto al alcance que puede tener la investigación, pues no se puede recopilar testimonios por

²⁴ Cf. Anexo 4 (Pp. 304). Información relevante relacionada con las formas de reparación determinadas en el documento: *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, detalla los derechos de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

siempre. Entonces, si la población no tiene la confianza para dar su testimonio, o no hay traductores, puede ser que su verdad quede fuera de lo documentado.

Otro reto relevante es la cuestión económica. El costo tan alto de las operaciones de las comisiones, la poca cooperación por parte de los gobiernos locales, la intervención financiera de diferentes actores, la petición de apoyo financiero, etc. Las comisiones de la verdad oficiales pueden ser que tengan más opciones para obtener ayuda financiera, pero la realidad es que, con menos recursos y, probablemente, menos personal; las comisiones no oficiales pueden ser capaces de hacer un mejor trabajo. En ocasiones, la falta de ayuda financiera por parte del propio gobierno que está solicitando o llevando a cabo la comisión es una manera de dar a conocer su postura sobre la verdad y la justicia.

Aspectos relevantes para las comisiones, una vez activas, son la confidencialidad y la protección a los testigos. La comisión debe asegurar que exista –desde el mandato- una cláusula de confidencialidad inviolable que incluso, cuando la comisión esté inactiva, no exista la posibilidad de que algún testigo esté en peligro por brindar información. Sin embargo, este es un aspecto sumamente delicado porque una vez que se toma un testimonio debe de tener la firma del declarante, para que en caso de que haya algún juicio, se puedan utilizar los testimonios como pruebas contundentes. Por lo tanto, una vez que el trabajo de la comisión termina, un reto es saber determinar quién tendrá acceso a la documentación resultante del trabajo del organismo que ha concluido sus labores. Esto puede poner en riesgo a quienes han dado su testimonio, pues personas que no concuerden con los intereses de las víctimas, pueden tener acceso a los documentos. Es por esto que debe de haber un plan para proteger –al menos- a testigos clave aunque no es común, debido al alto costo.

Algunos retos se relacionan con el contenido que debe tener el informe final. Cuando se habla de justicia, y la sociedad civil conoce a los perpetradores, lo que se espera es que haya un señalamiento de los responsables de la violencia tras la recopilación de testimonios y así lograr que se haga justicia. Sin embargo, este es uno de los aspectos más delicados que se debe decidir: dar nombres de los responsables o mantenerlos en resguardo. Generalmente, no se hace una lista

pública nombrando a los perpetradores para salvaguardar su integridad, pero también para cuidar el proceso judicial que pueda proceder. Se está en el entendido que el dar a conocer a los perpetradores de manera oficial y pública podría provocar un nuevo brote de violencia. En relación al contenido de los informes, está la perspectiva de género. Los abusos que pueden tener las mujeres –por lo general de tipo sexual- pueden provocar un mayor impacto en las víctimas, lo que conlleva a menos denuncias. Hasta el momento no hay ninguna comisión en América Latina que haya presentado un informe con perspectiva de género.

“Para algunas víctimas y supervivientes, el hecho de volver a relatar su historia ante una comisión de la verdad puede suponer un apoyo o incluso una terapia; para otros, en cambio, se trata de una experiencia dolorosa y traumática” (ACNUDH, 2006: 23). Por esto debe haber apoyo psicológico para quienes regalan su testimonio a la comisión o para quien lo necesite, pues el mismo proceso de trauma lo pueden tener quienes recopilan los testimonios. El reto es que el apoyo psicológico siga dándose a pesar de que la comisión esté inactiva. Como se mencionó anteriormente, este papel lo toman las organizaciones civiles -de manera voluntaria- porque son quienes pueden seguir proveyendo el servicio.

Desde antes de la creación de la comisión y tiempo después de su inactividad puede ser que tenga que enfrentar reacciones en su contra. Generalmente, los detractores utilizan los medios de comunicación a su alcance para desacreditar el trabajo de la comisión y que entonces la sociedad civil no quiera cooperar; y a falta de información, será poco probable que pueda procederse a juicios. La violencia en contra de las comisiones puede ser que no termine en acusaciones y puede convertirse en atentados en contra de los gestores, colaboradores o incluso testigos. Siempre el objetivo será debilitar a la comisión de la verdad para que el trabajo no trascienda y no pueda perjudicar intereses de ciertos personajes.

“La labor de estos organismos de la verdad nunca será fácil. Las comisiones de la verdad son entre difíciles y controvertidas a las que se encomienda una tarea colosal, casi imposible y, en general, sin tiempo ni recursos suficientes para llevarla a cabo. Han de enfrentar mentiras flagrantes, negaciones y engaños, así como recuerdos dolorosos y casi indecibles de las víctimas, con el fin de

revelar verdades que todavía son peligrosas y a las que es probable que se sigan resistiendo muchos de los que están en el poder” (Hayner, 2008: 53).

Y es que la mayor parte de las críticas que reciben estos organismos recaen en términos de tiempo, justicia, influencia del régimen anterior, recursos económicos, verdad y satisfacción de las expectativas creadas. Las comisiones de la verdad oficiales están en una constante pugna en contra del tiempo estipulado por el mandato que determina su creación. Es muy probable que se tengan prórrogas, pero, ante la cantidad de información recabada, se tienen que establecer límites para el trabajo, que también pueden traducirse en dejar fuera de la verdad oficial casos o testimonios igualmente valiosos que los incluidos. Es por esto que algunas comisiones de la verdad oficiales - como el caso de Guatemala- también incluye la información ya procesada por las comisiones no oficiales, de ahí puede derivar un trabajo más incluyente.

El hecho de que tenga que dejarse información o testimonios fuera de los informes finales ha costado la crítica relacionada con verdades parciales. Es prácticamente imposible que cualquier organismo –como una comisión de la verdad oficial o no- sea capaz de recabar todos los testimonios y la información relacionada con poblaciones de países enteros. Sin embargo, hay aspectos delicados, como testimonios incompletos, o resumidos, que han resultado en quejas por parte de las víctimas, quienes pasan por un proceso complicado para ofrecer la verdad a un entrevistador. Los casos que se terminan estudiando son muy reducidos en comparación con el número de víctimas que se registran. Y, aunque se podría alegar que es más sencillo recabar información y/o pruebas para juicios de un número de casos limitado²⁵; las víctimas lo confunden relacionándolo con el valor de los testimonios; tienden más a interpretarlo en términos de si hay testimonios más valiosos que otros afectando la imagen del trabajo de la comisión.

La voluntad política es vital para el trabajo de la comisión de la verdad, pero es aún más determinante cuando la comisión ha entregado su informe. No es posible hablar de voluntad política

²⁵ El caso del expresidente General Efraín Ríos Montt en Guatemala fue un ejemplo. Se trató del primer presidente guatemalteco en llegar a un tribunal acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza de 1771 indígenas ixiles; así como de genocidio. El total aproximado de víctimas entre muertos y desaparecidos en Guatemala es de 200,000; sin embargo, existía mayor posibilidad de llevar un juicio en casos más específicos, con evidencia científica de por medio, así como testimonios tomados del informe final de la comisión de la verdad y 130 testigos que se presentaron en la corte.

sin considerar la influencia del régimen anterior. Este hecho implica que – pese a lo que se promete al inicio de los trabajos de la comisión- no haya pleno acceso a la información oficial sobre los hechos. Y una vez que las recomendaciones se han dado a conocer en el informe final, que éstas se pongan en práctica. Si bien es cierto que muchas de las recomendaciones implican una inversión monetaria que probablemente un gobierno en transición no tenga; también hay algunas otras que no requieren un centavo y tampoco se ponen en práctica.

“Es difícil para una comisión hacer progresos en el camino de la reconciliación porque su desarrollo depende enormemente del interés, la voluntad y la participación del conjunto de la sociedad, y a veces de los propios perpetradores. Del mismo modo, es difícil fomentar políticas o reformas institucionales serias porque este tipo de medidas dependen también de la voluntad de los dirigentes políticos y a menudo de los mandos militares” (Hayner, 2008: 223).

El que la comisión de la verdad no tenga manera de obligar a ningún gobierno a que ponga en práctica las recomendaciones que han sido el resultado de un análisis minucioso de los hechos y que podrían lograr la reconciliación nacional, provoca una generalizada decepción y que la sociedad civil considere que no haya logros significativos. Que se dé a conocer la verdad es importante, pero sólo es una parte del largo proceso para que el tejido social logre reestructurarse. Si al no poner en práctica las recomendaciones hechas por la comisión de la verdad se le agrega el hecho de que este organismo también carece del poder para castigar a los responsables de las atrocidades, la decepción es mayor.

La mayoría de las veces, dentro de las recomendaciones, se encuentra la realización de juicios en contra de los involucrados, pero no hay manera de ejercer ninguna presión para que esto suceda. En algunos casos se establecen medidas –incluso constitucionales- para que los altos mandos responsables sean eximidos de cualquier responsabilidad. Generalmente, el número de juicios a perpetradores es mínimo en comparación con el número de involucrados. Es por esto, que solamente hay casos aislados –como la comisión de la verdad de El Salvador- donde se incluye un listado de los perpetradores; ya que, si el gobierno no toma las acciones que se consideran pertinentes, la sociedad civil puede tomar justicia por mano propia en contra de la gente que oficialmente fue un perpetrador; reiniciando el ciclo de violencia.

“Los factores que permiten medir el impacto de las comisiones son: la recepción del informe por parte de la sociedad civil y del gobierno; el cumplimiento de las recomendaciones; el enjuiciamiento o prosecución de los culpables; el poder de los perpetradores en el post conflicto; el clima político y la situación de los derechos humanos; la difusión y la publicidad del informe y el contacto posterior de la comisión con las víctimas que colaboraron” (Ceballos, 2009: 97).

El trabajo de una comisión de la verdad tendría que ir más allá de dignificar a las víctimas a través de sus testimonios. El verdadero impacto de las comisiones de la verdad se da una vez que éstas han concluido su mandato. Por ello estos organismos tienen diversas áreas de oportunidad, pues gran parte de los aspectos que podrían funcionar para medir su efectividad están fuera de su rango de acción.

“Desde el inicio de los años ochenta los países latinoamericanos experimentaron una oleada continua de transiciones de regímenes militares a ordenamientos constitucionales democráticos” (Portilla, 2003: 13). América Latina ha tenido una intensa actividad cuando de comisiones de la verdad se trata -tanto oficiales como no oficiales- en gran medida gracias a la presión que ha ejercido la sociedad civil hacia los gobiernos en transición. A continuación, se muestra una tabla que presenta los países latinoamericanos que han tenido comisiones de la verdad –oficiales o no- así como el nombre de la comisión y el informe desprendido de la misma en caso de haberlo:

País	Nombre de la Comisión de la Verdad	Nombre del Informe Final
Bolivia	Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos	No terminó su informe; se disolvió antes
Argentina	Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)	Nunca Más (1985)
Uruguay	Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron	Informe Final de la Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron (1985)
Chile	Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig)	Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991)
El Salvador	Comisión de la Verdad de El Salvador	De la Locura a la Esperanza (1993)
Ecuador	Comisión Verdad y Justicia	No terminó su informe; se disolvió antes
Guatemala	Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca (CEH)	Guatemala: Memoria del Silencio (1999)

**Guatemala	Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala	Guatemala: Nunca Más. Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (1998)
Honduras	Comisión de la Verdad y la Reconciliación	Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2011)
**Honduras	Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos	Los Hechos Hablan por sí Solos: Informe Preliminar sobre los Desaparecidos en Honduras (1994)
Perú	Comisión de la Verdad y la Reconciliación	Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003)
Brasil	Comisión Nacional de la Verdad	Informe de la Comisión de la Verdad (2014)
**Brasil	Proyecto Brasil Nunca Más	Brasil Nunca Más (1985)
Paraguay	Comisión Verdad y Justicia	Informe Final Comisión Verdad y Justicia (2008)
**Paraguay	Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia	Paraguay Nunca Más (1990)
Panamá	Comisión de la Verdad de Panamá	Informe Final de la Comisión de la Verdad de Panamá (2002)
**Puerto Rico	Comisión por la Verdad y la Justicia	No hay ningún informe disponible desde su creación en 2001.

(**) Los asteriscos hacen referencia a comisiones de la verdad no oficiales.

(Hayner, 2008: 379-384) y (United States Institute for Peace, sitio web consultado en 2016)

Solamente siete países no han tenido comisiones de la verdad en todo América Latina – Nicaragua, Colombia²⁶, República Dominicana, México²⁷, Cuba, Costa Rica y Venezuela-. Se trata de una actividad que no es extraña para la región, considerando la cruenta represión a la que se enfrentaron la mayor parte de los países latinoamericanos; particularmente entre los años sesentas y ochentas del siglo pasado. Existen varios países que han tenido más de una comisión de la verdad oficial o no. La necesidad de conocer la verdad ante crímenes perpetrados –en su mayoría- por el

²⁶ En Colombia no ha existido una comisión de la verdad para investigar violaciones a los derechos humanos en el transcurso de un lapso específico. Sin embargo, ha habido diferentes esfuerzos para contribuir con la verdad y la paz en este país. Está la Ley de Justicia y Paz (2005) con el fin de contribuir a la desmovilización de las fuerzas paramilitares dando pie a testimonios públicos sobre sus acciones, estructura y respaldo gubernamental. Esta ley generó una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (inicia labores en 2007) que incluye un grupo de trabajo sobre la memoria histórica, así como una Comisión de la Verdad (2005) para investigar específicamente la toma de rehenes de 1985 en el Palacio de Justicia (Hayner, 2008: 367-368).

²⁷ En México tampoco ha habido una comisión de la verdad. Sin embargo, en 2006 se concluyó el trabajo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos que tenía la responsabilidad de buscar la verdad sobre violaciones a los derechos humanos. Tras muchos problemas para obtener información, desclasificar archivos se presentó el Informe Histórico sobre la Sociedad Mexicana en donde se establece que bajo el mandato de tres presidentes -desde 1964 y hasta 1982- tuvieron lugar “masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática y genocidio”. No hubo mayores acciones derivadas de este informe; por el contrario, el informe completo nunca ha salido a la luz pública (aunque de manera desorganizada se puede encontrar incompleto en internet) (Hayner, 2008: 371-172).

Estado, así como que se haga justicia, que haya un castigo para los responsables y reparaciones para las personas afectadas; están latentes.

Las críticas a las que pueden someterse las comisiones de la verdad latinoamericanas son las mismas de estos organismos alrededor del mundo. La existencia de estas comisiones no es sinónimo de justicia para las víctimas y castigo para los perpetradores. La realidad de las comisiones de la verdad puede ser menos halagadora de lo esperado:

“...Los logros alcanzados por las comisiones de la verdad en América Latina, respecto al derecho a la justicia, han sido ínfimos, teniendo en cuenta el número de víctimas, las violaciones y sobre los responsables. Es decir, en general, en estos países no ha existido justicia y cuando ha habido avances han sido mínimos los vinculados al proceso iniciado por las comisiones” (Portilla, 2003: 106).

Sin embargo, hay que tener en consideración que estos organismos de la verdad sí han tenido logros –por pequeños que sean- y se han convertido en la respuesta ante el poder que en muchos países del continente se ha empeñado en esconder y hasta negar las atrocidades realizadas por las mismas personas que deberían preocuparse por la población a la que deberían de servir. “La mayoría de las comisiones de la verdad en América Latina se han creado cuando la justicia ordinaria ha sido incapaz de juzgar oportunamente a los culpables de crímenes de lesa humanidad y en contextos de violencia o represión estructural” (Ceballos, 2009: 38). En situaciones de violencia extrema, como las propiciadas por las dictaduras latinoamericanas, o los conflictos con las guerrillas en el marco de la teoría de Seguridad Nacional impuesta por los Estados Unidos en el centro y sur del continente; es para destacar la existencia de tantos organismos preocupados por la verdad, la justicia y la reconciliación nacional.

Para el caso concreto de América Latina, pueden identificarse aportes que han tenido los trabajos de las comisiones considerando los contextos tan violentos que vivieron las sociedades latinoamericanas, en donde las propias transiciones de dictaduras a democracias fueron complejas. El primer paso es establecer la verdad sobre el pasado; hacer pública una realidad ignorada u ocultada. “En estos años hemos aprendido que las comisiones son el inicio de procesos a más largo plazo, no sólo de la verdad que se investiga sino de cómo esa verdad se asume” (Beristain, Carlos,

2007: 1). Pero la verdad que se hace pública sí puede tener un efecto reparador para la sociedad; empodera a la gente, hace que la gente no se sienta sola o como la única víctima y esto implica una mayor exigencia por parte de esa misma sociedad civil agredida. Además, se pueden derivar estudios más precisos, una vez que se sabe la magnitud de los hechos. En la realidad, hay informes de las comisiones de la verdad que pretenden ser refutados por los perpetradores –como en Guatemala-, pero los testimonios y documentos transforman a esos hechos en incuestionables.

Otro de los aportes de las comisiones latinoamericanas, –y directamente relacionado con el conocimiento de la verdad- es identificar los sectores que estuvieron involucrados en los hechos de violencia. Si bien se habla de las dictaduras militares que implican estructuras complejas de organización militar, también hay que considerar a los actores dentro de los gobiernos y los responsables de la ejecución de la justicia en cada sociedad. Sin duda es importante conocer los hechos violentos perpetrados por otros actores, como el caso de los grupos guerrilleros; aunque se ha identificado mayor responsabilidad de los gobiernos que de las guerrillas. Las comisiones de la verdad –salvo en algunos casos en cuyo mandato se establece lo contrario como en Argentina- han presentado la visión global de la violencia que implica diversidad de perpetradores.

“Otra función importante desempeñada por las comisiones de la verdad en América Latina, es poner rostro a las víctimas, devolverles sus nombres y apellidos, y así superar la etapa de recordarlos en la sociedad como números del horror o datos estadísticos” (Cuya, 2001: 6). No solamente se trata de dar voz a los hechos sino de humanizar a las víctimas. Y una vez que las víctimas son reconocidas, entonces es más sencillo que se impulsen programas de reparación para ellas o sus parientes. Si bien este es uno de los rubros más polémicos por la falta de cumplimiento de los gobiernos, a paso lento, pero ha habido logros en momentos concretos. La experiencia guatemalteca brinda un panorama puntual sobre la situación de las reparaciones –sin importar su índole-, en donde, dependiendo del partido que esté en el poder, se puede hablar de logros o de que los programas se han detenido.

No solamente en América Latina, sino hablando de las comisiones de la verdad en general, tanto el conocimiento de la verdad como las formas de reparación que han sido promovidas pueden

derivar en la reconciliación nacional y en prevenir que la violencia reviva. Es probable que la voluntad política sea aún insuficiente para que se pueda hablar de mayores logros; pero la sociedad civil está jugando un papel fundamental para que la verdad no sea olvidada. No hay recetas para que una comisión de la verdad sea exitosa; cada comisión es diferente, desde su mandato hasta sus alcances que además son impredecibles. El trabajo de una comisión termina con la entrega de un informe; pero la experiencia indica, que solamente pasan la estafeta a organizaciones y personas que trabajan constantemente para que la comisión de la verdad realmente tenga logros significativos. Para que las comisiones de la verdad puedan tener un papel de mayor relevancia dentro de la justicia transicional se necesita tener una visión más amplia para su trabajo. Todo lo que pasa después del informe queda fuera de su rango de acción, sin embargo, las víctimas no esperan quedar en las mismas condiciones después de atreverse a dar su testimonio.

CASO GUATEMALA



Fotografía tomada por la autora en una de las paredes de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) donde aparecen cientos de personas desaparecidas durante la dictadura militar (abril de 2013).

COMISIONES DE LA VERDAD: HERRAMIENTAS NECESARIAS AUNQUE INCOMPLETAS
PARA ALCANZAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
CASOS LATINOAMERICANOS: GUATEMALA Y ARGENTINA

Guatemala en Conflicto

*“No puede entenderse el concepto de derechos humanos,
si no se entiende primero el concepto de dignidad”
(Balsells, 2009: 11)*

Resulta complejo reducir más de tres décadas de guerra civil en Guatemala a dos actores: Estado y guerrilla. Sobre todo, cuando se alcanzaron grados de violencia inimaginables sobre la población en general. En un país como éste, en donde más del 63.2% de la población total se asume como indígena²⁸, no es difícil pensar que haya sido el grupo más afectado por la violencia. Pero cuando -de acuerdo con el reporte *Guatemala Memoria del Silencio* (1999)- sólo el 6% de la población afectada estaba relacionada con el conflicto, entonces sí se puede asumir que hay más elementos involucrados en este problema social.

Se debate, incluso, para determinar el inicio del conflicto. Autores como Marta Elena Casaús Arzú (2011:11) hablan de 36 años de guerra civil; mientras que la fecha oficial de inicio, de acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico, fue el 26 de febrero de 1962. Fue en este día cuando “fue tomada la Radio Internacional y leída la proclama con la que se anunció la instalación del Frente Rebelde Alejandro de León Aragón en el oriente del país por el Movimiento 13 de Noviembre” (Balsells, 2009: 73). Esta última fecha reduce el conflicto a menos de 34 años, pero resultó necesario tener un acontecimiento base para iniciar una investigación formal. En cualquier caso, es tiempo más que suficiente para devastar, empobrecer (aún más) y desgastar hasta el extremo el tejido social de un país entero que aún lucha por recuperarse.

La violencia que impactó en todos los aspectos de la vida en Guatemala, no tuvo gran explicación, pero sí el cobijo y la justificación de una campaña anticomunista auspiciada por los Estados Unidos aunados a los intereses de la oligarquía del país. Ante la revolución cubana y los movimientos sociales que habían brotado en otros países latinoamericanos, la instrucción del país del norte era clara y el apoyo se tradujo en adiestramiento militar y entrega de armamento al ejército

²⁸ Información obtenida por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida reportada a través de la UNESCO en octubre de 2016.

de Guatemala. El involucramiento de Estados Unidos fue tan evidente que la Comisión de Esclarecimiento Histórico logró, a través de una petición al entonces presidente Bill Clinton, que se desclasificaran archivos confidenciales en poder del Archivo de Seguridad Nacional (NSA) sobre el comportamiento militar guatemalteco conocido, pero no condenado.

Las células de la guerrilla se diversificaron, pero una de las más importantes fue el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). El Ejército y el gobierno no veían a la guerrilla como peligro hasta que les vieron posibilidades de ganar bajo la batuta del EGP. De acuerdo con testimonios, el General Efraín Ríos Montt, quien llega a ser presidente a través de un golpe de estado, con un objetivo preciso: contener a la guerrilla; marca la diferencia. Se logró el debilitamiento de la guerrilla gracias a la tortura y confesión del cura -y guerrillero- Luis Eduardo Pellecer Faena. “Se considera que el sometimiento de este padre que era un guerrillero hace que las posibilidades de ganar la guerra desaparezcan por completo”²⁹.

Sin embargo, autores como Carlos Sabino (2008), plantean que la guerrilla nunca se vio como un verdadero peligro para el Estado. Este planteamiento se justifica a través de acciones concretas, así como con el apoyo de la población civil. “Los guerrilleros no emprendieron nunca acciones de real envergadura” (Sabino, 2008: 33); sus acciones se centraron en ataques específicos a patrullas o destacamentos del ejército y se retiraban al campo. También en ocupar poblaciones, por ciertas horas, para hablar con la comunidad y tratar de reclutar a más gente. Muchos se unieron, pero los ideales no eran los mismos. Algunos peleaban simplemente por tener una vida digna y otros peleaban por alcanzar el socialismo a través del *foquismo*³⁰.

En la capital del país, las marchas demandando mayor participación y el fin de la dictadura militar estaban a la orden del día. En el campo las demandas eran la mismas que hacía décadas: tierra y mejores condiciones de vida. Y es que, aunque hasta las comunidades más pobres habían padecido el conflicto, particularmente las acciones del Ejército; las necesidades inmediatas

²⁹ Cf. Apéndice #4 (Pp. 327). Entrevista con Neptalí Monterroso.

³⁰ El *foquismo* fue una idea que se impregnó en los ideales latinoamericanos, pues permitiría la construcción del socialismo. Este ideal consistía en la organización para construir el socialismo partiendo de que las condiciones de pobreza y dependencia al imperialismo norteamericano garantizaban que las masas buscarían el camino revolucionario para lograr el socialismo (Sabino, 2008: 37).

apremiaban. La situación política pasaba a un segundo término, mientras que la pobreza no permitía comer a la gente.

Cuando se dio la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, había quienes no estaban al tanto de que la guerra había terminado. En los Acuerdos de Paz sólo aparecen dos partes: el Estado y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Este último organismo representaba a todos los frentes y grupos guerrilleros, quienes, al verse debilitados, trataron de unirse para fortalecerse sin el éxito esperado. “El debilitamiento de la guerrilla no fue el motivo directo de la firma de los Acuerdos de Paz, sino más bien el estancamiento del conflicto y la presión internacional” como indicara el entrevistado Dr. Neptalí Monterroso³¹.

Para tratar de entender la situación en Guatemala, es indispensable hacer mención de la situación política inestable que, en general, ha tenido el país³². Iniciando por la casi permanente presencia de militares al mando en el último siglo. Además de golpes de Estado y nombramientos de mandatarios sin elecciones libres; es decir, la constante ausencia de prácticas democráticas. Todo esto aunado a la situación mundial relacionada con la Guerra Fría, la presión de los Estados Unidos, tanto por la lucha en contra del comunismo, como por sus intereses agrícolas en la zona, así como una oligarquía dispuesta a lo que fuese necesario para mantener al país en su poder. Por todo esto, el resultado del caos y miles de víctimas por el conflicto no resulta sorprendente.

Guatemala es uno de los países de América Latina que más ha padecido problemas relacionados con la vulnerabilidad de la democracia. La realidad es que hablar de democracia en este país es algo relativamente reciente, pues hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996; era casi inexistente. Además de todos los golpes militares, renunciadas e incluso asesinatos de presidentes, es preciso determinar que el hecho de que se organice una votación no es sinónimo de un proceso democrático. Elecciones o no, era la tradición que el Ministro de Defensa fuera el

³¹ Cf. Apéndice #4 (Pp. 327). Entrevista con Neptalí Monterroso.

³² Cf. Anexo 5 (Pp. 305). La tabla muestra la situación política que ha padecido Guatemala desde 1920 y hasta el 2016.

sucesor del presidente, esto hizo que la presencia militar en el gobierno se exaltara. El Ministro de Defensa renunciaba a su cargo con un tiempo de antelación y se convertía en candidato; en caso de haber candidatos con posibilidad de triunfo, se pactaba la elección.

Si bien, de acuerdo con los datos oficiales, el conflicto armado guatemalteco inicia en 1962, en 1920 se da el primer golpe militar del siglo. Entonces, a partir de este año (1920) y hasta 1962, se habla de gobiernos al mando de juntas militares y de miembros de esta misma institución; excepto por seis años entre 1945 y 1951. La presencia militar dentro del gobierno escaló el entramado gubernamental por completo, llegando al grado de cambiar la Constitución del país para dar mayor poder a las fuerzas militares, al crear la Jefatura de las Fuerzas Armadas y el Consejo Superior de la Defensa Militar.

El Coronel Jacobo Árbenz Guzmán, militar y presidente de 1951 a 1954 fue un ejemplo de que no todos los presidentes pertenecientes a las fuerzas armadas obedecían a intereses diferentes de aquellos de las mayorías. El programa de reforma agraria que puso en marcha en su gobierno, estaba cambiando el *status quo* del país; pero expropiar tierras para entregarlas a las comunidades indígenas no estaba dentro de lo permitido. De esta manera, la oligarquía guatemalteca, así como los Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia, apoyaron una contrarrevolución para terminar con las reformas. Así, el presidente Árbenz fue derrocado por un golpe de estado.

No era el primer golpe de estado en el país y los militares imperaban en el gobierno desde los años veinte. La junta militar en turno decidió organizar una elección a través de un plebiscito de la que resultó ganador el Coronel Carlos Castillo Armas. Una vez más, se trató de un presidente con rango militar, pero con intereses más allá de los personales y militares. El Coronel Castillo Armas concluyó algunos de los programas iniciados por Jacobo Árbenz. Sin embargo, tres años después murió asesinado en el Palacio Presidencial. Y nuevamente —otros tres meses más tarde— el presidente interino fue derrocado por Juntas Militares que estarían en el poder por cuatro años.

La situación social ante las Juntas Militares que presidían el país se ponía cada vez más tensa. Es por esto que la misma Junta estableció al Coronel Guillermo Flores Avendaño como

mandatario durante un año; su asignación: organizar elecciones. El triunfo electoral fue para el General Miguel Ydígoras Fuentes. A pesar de que este último también tuviera una formación militar cometió un gran error: permitió que cubanos se entrenaran dentro de su territorio para poder invadir Cuba en la acción de Bahía de Cochinos. El General Ydígoras estuvo en la presidencia por cinco años, pero fue derrocado a través de otro golpe de Estado. Durante este periodo (1962) es cuando se considera la fecha de inicio oficial del conflicto.

“El golpe militar del 31 de marzo de 1963 al presidente Ydígoras Fuente no causó sorpresa” (Sabino, 2008: 27). Guatemala no podía tener un presidente que estuviera a favor del comunismo abiertamente. El Coronel Enrique Peralta Azurdia es quien toma el poder tras el golpe de Estado, aunque tampoco resultó como se esperaba. Si bien, el presidente en ese momento mostró su oposición al comunismo también estaba al tanto de la preocupante situación social del país. La represión en este periodo aumentó; sin embargo, tampoco se puede hablar de una escalada importante de violencia, pues este gobierno terminó por inclinarse hacia la voluntad de los ciudadanos en términos de prestaciones para los trabajadores, por ejemplo. Sin embargo, su mandato sólo duró 3 años.

El clima de tensión fue aumentando poco a poco, pero el presidente Peralta Azurdia tuvo el acierto de convocar a elecciones. De esta manera -y mediante elecciones democráticas- fue electo como mandatario del país un civil: Julio César Méndez Montenegro (1966- 1970); quien tenía un pasado universitario revolucionario. Sin embargo, el presidente estuvo más preocupado por no ser derrocado por las fuerzas armadas a lo largo de su mandato; incluso, altos jefes militares fueron sustituidos. Además, mantuvo al Ejército muy ocupado en acciones antiguerrilleras y tomando el control de los grupos paramilitares. Es importante destacar dos acciones en este gobierno: el aumento en asesinatos políticos y el “contagio” hacia otros departamentos del conflicto armado.

El General Carlos Manuel Arana Osorio gobernó por un periodo de cuatro años (1970-1974). El país tenía severos contrastes en términos de desigualdad económica, la violencia iba en aumento y carecía de desarrollo. Sin embargo, había algunos programas funcionando y obras en progreso que, según el gobierno, estaban llevando a Guatemala por la senda del progreso. La

violencia aumentó, en parte, gracias a que el gobierno incrementó el grado de violencia tomando Ciudad Universitaria en 1970, tras decretar un estado de sitio en el país. Hubo allanamientos, cateos de domicilios, ejecuciones, expulsiones del país, la guerrilla empezó a ser reprimida con mayor severidad y las acciones paramilitares se confundían con las de órganos oficiales.

El sucesor (1974- 1978) fue el General Kjell Eugenio Laugerud García electo de manera democrática pero controvertida. El opositor, como candidato del Partido de la Democracia Cristiana, con apoyo de la izquierda, fue el General Efraín Ríos Montt, quien pierde las elecciones; pero los rumores de un arreglo económico de por medio corrieron por todo el país, aunque sean negados. El gobierno del General Laugerud es “conocido por ser de los gobiernos más militares de la época, pues no tenía las características ni de dictadura ni de militar” (Sabino, 2008: 145). Incluso se llegó a pensar que el conflicto armado se iba diluyendo y las estadísticas relacionadas con actos violentos lograron disminuir, aunque no significase que el conflicto había terminado.

Tal vez los terremotos del 4 y 6 de febrero de 1976 -que provocaron la muerte a 22.000 guatemaltecos- hayan hecho que la gente se concentrara en algo diferente al conflicto, y de ahí la mejora en los niveles de violencia. Pero también hizo visible los grados de pobreza que había en el país que antes pasaban inadvertidos por la población de las ciudades. En las elecciones - después del terremoto- los tres candidatos eran militares, pero la elección fue ganada por el General Fernando Romeo Lucas García, quien fungía como Ministro de la Defensa en la anterior administración. Este gobierno, casi de inmediato, se adentró en la lucha en contra de la guerrilla. El Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica califica a este gobierno como “una de las etapas más negras de la historia” (Brett, 2007: 62).

La violencia y la persecución habían aumentado sin medida. Sin embargo, lo que el gobierno sería capaz de hacer quedó claro en enero de 1980, con la quema de la Embajada de España. En este hecho, las fuerzas del Estado quemaron vivas a 30 personas, en su mayoría indígenas, quienes se manifestaban en su interior en contra de la represión política y militar. Si bien las personas estaban atrincheradas en el interior, el Estado no dio oportunidad a ningún diálogo. A

partir de este momento, la violencia tuvo un incremento significativo tanto en la ciudad como en las áreas rurales.

La violencia en la ciudad radicó en desapariciones de estudiantes y líderes de organizaciones que eran acusados de comunistas. La violencia selectiva en la ciudad hacía cada vez más complicado vivir en el país por lo tanto la gente que no fue desaparecida o asesinada prefirió salir del país, como es el caso del Doctor Carlos Figueroa, a quien se le hizo evidente su persecución en 1979. En este caso, él junto con sus hermanos y otros parientes, pudieron salir del país, pero sus padres fueron asesinados a sangre fría³³. Hubo otros como Oliverio Castañeda de León, quien era líder estudiantil, que mataron en la Plaza Central disparándole a quema ropa después de dar un discurso en un mitin aprobado por el propio gobierno³⁴.

En el campo la violencia escaló, de manera inimaginable, a través de masacres de pueblos enteros. Para este momento, el General Lucas García ya había creado el cuerpo de kaibiles³⁵, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)³⁶, se había iniciado la estrategia de “tierra arrasada”³⁷ y las masacres estaban a la orden del día. “En el departamento del Quiché, durante el último año del régimen de Lucas García, pelotones militares llevaron a cabo 97 masacres, 16 de ellas tuvieron la participación por primera vez de las PAC y el resto fueron cometidas por pelotones militares solos” (Sanford, 2012: 61).

A pesar de todas las acciones violentas en contra de la guerrilla y de la población civil, se consideró que el General Lucas García no tenía control del país, por lo que fue obligado a renunciar, y en su lugar tomó el poder el General en retiro Efraín Ríos Montt. En realidad, el General Ríos Montt, había llegado al poder como parte de una nueva junta militar. Sin embargo, a las pocas semanas de haber tomado el poder, rompió nexos con la junta impuesta y se quedó él bajo el

³³ Cf. Apéndice #2 (Pp. 321). Entrevista testimonio de vida con Carlos Figueroa Ibarra.

³⁴ Cf. Apéndice #4 (Pp. 327). Entrevista con Neptalí Monterroso.

³⁵ Los kaibiles era la fuerza especial contrainsurgente del ejército; se consideraban máquinas de matar. (CEH, 2004: 32)

³⁶ Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron grupos de indígenas obligados a trabajar bajo el mando militar cometiendo los mismos crímenes que las fuerzas armadas.

³⁷ La estrategia de tierra arrasada contemplaba la masacre o asesinato multitudinario de todos o el mayor número de miembros de una comunidad sin consideración de edad, sexo o compromiso político e incluye la destrucción de viviendas y lo que contengan, así como la matanza del ganado, quema de cosechas y cualquier otro elemento de supervivencia para los guerrilleros o desplazados que pudieran pasar por ese lugar (CEH, 2009: 46).

mando total. Bajo su tutela, el poder que se otorgó a las fuerzas armadas para que actuaran sin consecuencia alguna, se maximizó.

En un principio, pareció que este nuevo régimen disminuiría la violencia, pero sucedió lo contrario. Este nuevo gobierno continuó con lo que se había empezado en cuanto a la violencia en las zonas rurales; de hecho, la estrategia de tierra arrasada se recrudeció. "...incluso el asesinato de mujeres, ancianos y niños, y la violación sexual sistemática de mujeres indígenas como parte de las masacres" (Brett, 2007: 96). Dentro de la violencia rural, también se crearon los Escuadrones de la Muerte³⁸ que asesinaban todo a su paso. A la población que le perdonaba la vida los obligaban a participar en las PAC, o bien era reubicada en "aldeas modelo"³⁹. Las acciones, efectivamente, disminuyeron el poder de la guerrilla, pero cobró más vidas de inocentes que de guerrilleros.

En la ciudad capital parecía que la violencia disminuía, sin embargo, las cifras mostraban lo contrario. La ilusión de esta disminución en la violencia se debía a que bajo este régimen también se prohibía divulgar cualquier noticia que hiciera referencia a la violencia política. Asimismo, "los Tribunales Militares reemplazaron a los tribunales constitucionalmente legales y así el régimen de Ríos Montt enjuició y ejecutó a guerrilleros y a colaboradores en forma supuestamente legítima" (Brett, 2007: 98). Afortunadamente, este régimen no duró más de un año y cinco meses, pero las cicatrices que dejó siguen vigentes.

Efraín Ríos Montt fue derrocado a través de otro golpe militar realizado por el General Óscar Humberto Mejía Víctores, quien quedó al mando durante tres años (8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986). La violencia continuó de maneras muy claras: desapariciones forzadas en las ciudades,⁴⁰ y continuaban las masacres en el campo; pero fueron decreciendo. Este gobierno cobra importancia por iniciar el camino para los Acuerdos de Paz, por ser el último gobierno militar del siglo XX y por restaurar la democracia formal.

³⁸ Los escuadrones de la muerte eran grupos criminales integrados por particulares que contaban con la tolerancia y encubrimiento de las autoridades estatales. (CEH, 2004: 56).

³⁹ Las aldeas modelo era comunidades creadas y resguardadas en todo momento por las fuerzas armadas en donde a la gente se le obligaba a servir al Ejército.

⁴⁰ Cf. Apéndice #1 (pp. 319). Entrevista con Blanca Hernández, madre de un desaparecido en 1984.

Si bien los gobiernos que siguieron fueron todos elegidos democráticamente y fueron encabezados por civiles, resulta condenable el hecho de que no hayan buscado hacer justicia. Los gobiernos que siguieron de: Marco Vinicio Cerezo Arévalo, Jorge Serrano Elías, Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú Irigoyen, estuvieron encaminando los Acuerdos de Paz hasta firmarlos en 1996. Sin embargo, no se preocuparon por juzgar crimen alguno, ni siquiera mencionarlos. Incluso, ejemplos como el que dio el presidente Arzú Irigoyen, en donde, a pesar de manifestar todo su respaldo para cumplir con una paz firme y duradera, no se presentó a recoger el documento más importante derivado de la Firma de los Acuerdos de Paz: el informe *Guatemala Memoria del Silencio* sólo puede interpretarse como una voluntad para la paz, pero con reservas.

“El fracaso de la administración de justicia en Guatemala es doble, falló la protección de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno; y falló no castigar a quienes los violentaron” (CEH, 2009: 41). En su momento, quien intentó proteger a los derechos humanos fue asesinado, quien intentó hacer justicia fue desaparecido. Guatemala ha padecido no sólo las peores atrocidades sino también una falta de voluntad democrática. Pasaron la “estafeta del poder” según su conveniencia, esto no puede más que asegurar que la justicia habrá de retrasarse, pero no por ello, que será omitida en tanto que la sociedad civil tenga esta exigencia.

El periodo más álgido del conflicto y el momento en donde se registraron mayores grados de violencia, fue entre 1980 y 1984. Esto involucra a tres presidentes: los últimos dos años del General Lucas García, el mandato del General Ríos Montt, así como el primer año del General Mejía Víctores. “En Guatemala se instauró todo un sistema de impunidad que todavía pervive. En el campo la población no tuvo casi ningún acceso a los tribunales y el Ejército estableció sus propias reglas que le permitió justificar todos los medios en su anunciada lucha contra la subversión, lucha que se extendió en contra de gente que no participaba en el combate armado” (Balsells, 2009: 124-125).

Durante estos años de intensa violencia se identifican dos campañas genocidas. La primera se conoce como el *Plan Victoria*, que a pesar de que se puso en marcha durante el gobierno de

Ríos Montt, las acciones del mismo ya se estaban realizando, simplemente le adjudicaron un nombre. Durante esta campaña miles de indígenas fueron reclutados y obligados a participar con el Ejército en las Patrullas de Autodefensa Civil. Al tener más soldados en el campo, las masacres, que ya se estaban realizando, triplicaron su efectividad (número de víctimas).

La segunda campaña genocida que se puso en marcha se conoció como *Cazando el Venado*. La técnica de ataque a la población consistía en enviar a varios pelotones de soldados a rodear un área. Todos abrían fuego a la vez, pero no disparaban hacia un espacio en específico. Esto significaba que la gente correría hacia este lugar que no estaría bajo fuego. En el momento en que la gente corría por su vida, llegaban soldados a dispararles a quemarropa, o bien, helicópteros o bombarderos aéreos -que solían acompañar las misiones- dejaban caer alguna bomba o colaboraban con la metralla (Sanford, 2012: 70).

De acuerdo con el reporte REMHI, una masacre es la ejecución arbitraria de más de tres personas, realizada en un mismo lugar y como parte de un mismo operativo, cuando las víctimas se encontraban en un estado de indefensión absoluta o relativa. A esta definición la Comisión de Esclarecimiento Histórico agregó que parte de las masacres también pueden considerarse actos como tortura y violación, no sólo las muertes. En ambas campañas genocidas se presentaron masacres. En un principio las masacres se hacían de manera selectiva; para la segunda campaña las masacres se dieron de manera masiva para acompañar la represión con reorganización y control de la población a través de las PAC y las aldeas modelo.

Una vez que las atrocidades fueron investigadas, la CEH determinó que “el Ejército, inspirado en la doctrina de Seguridad Nacional, definió un concepto de enemigo interno que fue más allá de los combatientes, militantes o simpatizantes de la guerrilla, incluyendo la pertenencia de las personas a determinados grupos étnicos” (Balsells, 2009: 162). La figura del enemigo que se construyó, realmente, abarcaba a casi cualquier persona que no fuera parte de la oligarquía, del régimen o de las Fuerzas Armadas. Esta idea se fue impregnando en el ideal de los combatientes al grado de que los mismos soldados de origen indígena, llamaban “animales” a quienes tenían la misma sangre maya en las venas.

Durante un conflicto armado es difícil saber de qué lado está la gente; pero, esto no justifica la cantidad de sangre derramada y lo peor, que a la fecha el ejército considere sus actos como necesarios⁴¹. La propia violencia del Ejército hizo que la gente tuviera una mayor simpatía hacia la guerrilla. Esto no quiere decir que la gente apoyara a la guerrilla, ni entendiera el concepto de comunismo o las múltiples causas de la lucha. Sin embargo, tenían claro que los soldados traían violencia y robaban sus pertenencias; los guerrilleros pagaban por la comida o los animales, los soldados simplemente lo tomaban.

El total aproximado de víctimas es de 200.000 entre asesinatos y desapariciones forzadas. Esta cifra se basa en los casos registrados en diversos organismos (particularmente organizaciones no gubernamentales y las comisiones de la verdad); sin embargo, hay que considerar que no existe una cifra oficial, pues hay víctimas de las que no se ha dado testimonio. De este total aproximado de víctimas el 83% fueron mayas y solamente el 17% ladinos. Menos de 12.000 estaban relacionadas con el conflicto (Casaús, 2011:58).

En total, las fuerzas del Estado y sus grupos paramilitares fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas por la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Esto incluye el 92% de las ejecuciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas. Por su parte, las acciones de los grupos insurgentes produjeron el 3% de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia, que es un 5% de las ejecuciones arbitrarias, y un 2% de desapariciones forzadas. Además, una de cada cuatro víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos fueron mujeres. (CEH, 2004: 20-26).

Se tiene registro de “440 masacres en aldeas incendiadas por el ejército, un millón y medio de desplazados, 150 mil refugiados interiores y alrededor de 150 mil muertos y desaparecidos, de los cuales el 8% lo fueron en combate. El Informe de la CEH habla de 626 poblados borrados del mapa y lleva el número de muertos y desaparecidos a más de 200 mil personas, de las cuales al menos el 83% eran indígenas” (CEH, 2004: XVIII-XIX). Además de más de un millón de desplazados

⁴¹ Cf. Apéndice #6 (Pp. 331). Entrevista con Andrés.

internos, hubo 400,000 exiliados en México, Belice, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. México y Estados Unidos fueron los países que tuvieron un mayor número de refugiados con 145.000 y 200.000 respectivamente ya que las Naciones Unidas y el gobierno mexicano instalaron campos de refugiados (Brett, 2007:199-200). También, hubo hacendados que ayudaron a guatemaltecos haciéndolos pasar como jornaleros mexicanos; esto porque tropas guatemaltecas se internaban en nuestro país (no se sabe si con o sin el consentimiento del Estado Mexicano) a atacar a sus compatriotas.

Desafortunadamente, llegó un momento en que los refugiados se convirtieron en un problema para México, pues empezaron a organizarse como grupo campesino. “Los refugiados fueron reubicados forzosamente por las autoridades mexicanas en 1984 en Campeche y Quintana Roo” (Brett, 2007: 226). El argumento -o pretexto- para esta acción fue la seguridad de los mismos pobladores, sin tomar en cuenta que esto dificultó aún más que se pudieran reencontrar con sus familias. Además, no hubo una diferenciación entre los desplazados legales (45.000) de los ilegales (100.000); tampoco se le consultó a las Naciones Unidas sobre tal reubicación.

La persecución en Guatemala, llevó años. No solamente durante las masacres, sino también se perseguía a los refugiados, a la gente que buscaba ayudar a las víctimas, a la gente que empezaba a organizarse, abogados que brindaban apoyo legal, médicos que ayudaban a las víctimas; todos eran acusados de estar con la guerrilla y automáticamente se convertían en blancos. En muchas ocasiones, la gente que no moría en las masacres moriría más tarde durante la persecución, ya sea en ataques posteriores, o bien por hambre y enfermedades; la estadística es que 30% de los sobrevivientes de masacres murieron después por estas causas (Sanford, 2012: 74). “En Guatemala lo que parecía una guerra civil se convirtió en una guerra contra los civiles” (Edelberto Torres Rivas en Brett, 2007: XIX).

“A comienzos de los 80 se produjo una *masificación de la guerra* que debe ser entendida en su sentido real, informativo, como una ampliación del número de víctimas civiles, al punto que el 93%

de las muertes en el trecho de las casi cuatro décadas fueron no combatientes” (Brett, 2007: XXIV). Esto no quiere decir que la violencia en escalas graves no haya estado presente antes de este año, pero el inicio de la década marca un parteaguas. Las estrategias de violencia que fructificaron a lo largo del territorio guatemalteco durante el conflicto fueron cuatro: la estrategia de tierra arrasada, los kaibiles, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y las aldeas modelo.

La estrategia de tierra arrasada inició con el General Lucas García y fue reforzada por el General Ríos Montt. Esta estrategia consiste en arrasar los lugares de los que el enemigo pueda tener algún beneficio, ya sea comida, alojamiento, agua o simpatizantes. En el momento en que el enemigo pasa por esos lugares se topa solamente con devastación y por lo tanto tiene que continuar, logrando su debilitamiento. “En Guatemala, se ha llamado tierra arrasada a la acción represiva que efectuó el ejército en algunas zonas, por medio de la cual se quemaron o bombardearon aldeas enteras y se destruyeron siembras o se sacrificaron animales domésticos” (Sabino, 2008: 322).

“En el campo fue quitarle el agua al pez, el pez es la guerrilla y el agua las poblaciones que apoyaban o callaban su presencia”⁴². Sin embargo, los afectados podían o no ser enemigos. Si bien la guerrilla podría quedarse sin alimento, también los desplazados, quienes iban huyendo de la oleada de violencia. Para incrementar el efecto en zonas como el Quiché, además, se dejaba a propósito alimento o sal envenenada esperando fuera consumida por el “enemigo”. Los soldados de bajos rangos eran enviados a cumplir con estas tareas, sin embargo, las fuerzas fueron insuficientes y la estrategia fue complementada con más efectivos.

“En Guatemala, el régimen y el ejército crearon una institución especial para el asesinato, los kaibiles, que estaba oficialmente concebida como una fuerza contra la insurgencia. “Su decálogo afirmaba abiertamente <<el kaibil es una máquina de matar>>” (Goldhagen, 2011:131). De acuerdo con el informe REMHI (1998), los kaibiles formaban la Fuerza de Tarea Kaibil Balam (FTKB) y eran entrenados en el Curso de Operaciones Especiales Kaibil (COEK) que dependía directamente del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). Este último organismo se encargaba de “formular la

⁴² Cf. Apéndice #4 (Pp. 327). Entrevista con Neptalí Monterroso.

política militar y la estrategia general que es aprobada por el Ministro de Defensa. El Jefe del Estado Mayor de Defensa Nacional (EMDN), el Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional forman el Alto Mando del Ejército” (REMHI, 1998: 81 Tomo 2)⁴³.

La Fuerza de Tarea Kaibil Balam fue establecida para desarrollar actividades militares a gran escala en contra de la guerrilla del Ejército Guerrillero de los Pobres, pero también se les dieron tareas de coordinación entre las zonas de mayor conflicto. La actividad de la FTKB se conoció, en un inicio, como la operación Ixil al norte de Huehuetenango. Pero, sus actividades se fueron extendiendo hasta liderar la estrategia de *tierra arrasada*. Los kaibiles se consideraron como “la punta de lanza de la capacitación militar y tienen la reputación de ser los mejores luchadores en la selva Centroamericana” (REMHI, 1998: 101 Tomo 2); esto como resultado de la participación en su adiestramiento de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Hasta hoy las Fuerzas Especiales -en particular la unidad de paracaidistas- conservan el nombre de Fuerza Kaibil a pesar de su inmediata relación con la sangre derramada.

Además de los kaibiles y los miembros formales del ejército, el número de efectivos se incrementó gracias a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Cuando el ejército entraba en alguna comunidad, los hombres sanos eran separados para formar parte de estas Patrullas; y, aunque teóricamente la participación era voluntaria, no hacerlo implicaba simpatía con la guerrilla y, por lo tanto, la muerte. Las PAC funcionaron, entonces, como un sistema de autoridad y control que militarizó a las comunidades. La vigilancia no fue la misión principal de las PAC sino las masacres, “...se convirtieron en el instrumento de masacres y de asesinatos selectivos de aquellos acusados de colaborar con la insurgencia” (Brett, 2006:115).

Según el informe REMHI (1998), no hay un registro fidedigno del número de efectivos que llegaron a tener estas patrullas. Sin embargo, la estimación para los años 1982 y 1983 es de aproximadamente 900.000 lo que representaría casi el 10% de la población total del país. Los daños causados por las PAC no sólo tuvieron un impacto directo mientras estaban a las órdenes de los

⁴³ Cf. Anexo 6 (Pp. 307). Estructura de la cadena de mando para la Fuerza de Tarea Kaibil Balam.

militares, sino incluso después de terminado el conflicto. Después de la Firma de los Acuerdos de Paz, algunos desplazados internos iniciaron el retorno a sus comunidades, mismas que estaban ocupadas por las PAC y sus familias, quienes habían sido obligados a reubicarse de acuerdo con las necesidades de los pelotones del ejército a los que servían. Después de casi 20 años de habitar nuevas tierras no quisieron ceder sus nuevas comunidades, por lo que los desplazados iniciaron nuevas comunidades o bien se unieron a aquellas habitadas por las PAC pese al miedo tras la violencia vivida.

Comunidades enteras fueron desmembradas; los hombres fueron a trabajar a las Patrullas de Autodefensa mientras que las mujeres se encargaban de la comida y otros menesteres relacionados con la limpieza de los soldados. Estos desplazamientos orillados por las fuerzas armadas fueron parte del Plan de Acción de las Áreas de Conflicto que establecieron las denominadas “aldeas modelo”. El objetivo establecido por el régimen era “...reestructurar la vida cotidiana en el campo, posibilitaron el control absoluto de la institución militar y violaron todos los derechos humanos fundamentales de poblaciones enteras” (Brett, 2007:133).

Las aldeas modelo fueron formadas por gente que era obligada a asentarse en estas nuevas comunidades, o bien, por gente que ante la violencia y la necesidad fueron deslumbradas por las “comodidades” con que fueron dotadas, como luz eléctrica y agua potable. En cualquiera de los casos, y como parte de las actividades de estas comunidades era el trabajo para el ejército, sin paga, pero también el enlistarse en los programas sociales como *Fusiles y Frijoles* que consistía en el intercambio de armas por comida o el programa *Techo, Tortilla y Trabajo* en donde se les proporcionaban estos bienes. La realidad de los programas giraba en torno a la represión y el desmantelamiento de la guerrilla eliminando sus bases.

La violencia en Guatemala no daba tregua. Estados Unidos vendía armas al Ejército guatemalteco y luego lo haría Israel. El número de muertos y desaparecidos a raíz del conflicto armado continuaba aumentando. Pero la mirada internacional viró hacia Guatemala después de la matanza de Panzós.

Esta masacre no fue la primera ni la última, pero sí fue una de las más cubiertas por los medios de comunicación -principalmente internacionales-, logrando que diversas organizaciones no gubernamentales y gobiernos denunciaran las muertes que estaban tomando lugar.

“Ellos nos dijeron que la tierra ya no era nuestra, entonces fuimos al Instituto Nacional para la Transformación Agraria (INTA) porque toda la tierra nos la quitaron y ya no dejaron nada de tierra. Nos dijeron que esa tierra ya era hacienda” (Sanford, 2010: 23). Diferentes campesinos empezaron a organizarse para exigir sus tierras de vuelta, realizando la primera manifestación en la plaza central de Panzós el 1 de mayo de 1978. La falta de respuesta ocasionó que las marchas continuaran y el tono de las demandas incrementara. Sin embargo, ni un grupo nutrido de campesinos, ni algunos palos con punta, ni algunos machetes en mano pueden justificar una matanza tan atroz como la que ocurriría días más tarde.

El 29 de mayo de 1978 llegó un grupo nutrido de campesinos en demanda de sus tierras a la plaza central de Panzós. Pidieron hablar con el alcalde, quien aceptó dialogar con tres de sus líderes. Los tres campesinos entraron a la alcaldía, pero cuando un cuarto empujó a un soldado, supuestamente para poder entrar también, el soldado lo golpeó con un culatazo. Otro miembro de la marcha usó su machete en contra del soldado que había agredido al compañero; el enfrentamiento comenzó, pero un balazo perdido detonó el caos.

Los soldados, apostados en las azoteas, dispararon sus ametralladoras en contra de la multitud. El caos no duró más de 15 segundos mientras las balas mataban, herían y algunos más se ahogaban en el río, a donde corrieron despavoridos. El caos terminaba rápidamente, mientras que la tragedia comenzaba. “Decir Panzós es decir Guatemala, abrir los ojos y tener miedo de cerrarlos” (Sanford, 2010: 167) se lee en un panfleto publicado 19 años después para dar a conocer la versión más cercana a la realidad de lo sucedido.

La realidad es que hay muchas especulaciones ante hechos tan lamentables. Por un lado, la parte oficial dice que no había en realidad ningún problema con las tierras, salvo por el alcalde y algunos más que habían ampliado sus haciendas. Por otro lado, se dice que esta masacre fue la culminación de que la guerrilla motivara a los campesinos para hacer esas marchas. “La guerrilla

entonces podía justificar sus acciones armadas señalando que no había más camino que la violencia para poder terminar con un régimen brutalmente represivo” (Sabino, 2008:196). Sin embargo, ninguna de estas versiones incluye a las víctimas, como si fuera lo menos importante.

Si es que los campesinos fueron “utilizados” para beneficio de alguna parte o de ambas; la masacre no puede considerarse como “consecuencia de...” ni como un hecho justificable. La tragedia que siguió a este evento no tiene nombre, pareciera que la masacre no había sido suficiente. La violencia selectiva que se emprendió por parte del Ejército, policía local y escuadrones de la muerte terminó por matar o desaparecer a los líderes y otros campesinos que habían sobrevivido a la masacre. Entonces, estos acontecimientos permiten cuestionar si es que había manipulación de la guerrilla o fue una respuesta violenta más de los gobiernos de la época.

“Los que sobrevivieron al tiroteo y huyeron de la plaza tenían miedo de regresar a sus aldeas porque había helicópteros del Ejército persiguiendo a la gente. La mayoría huyeron hacia el río para esconderse. Algunos pasaron hasta 36 horas en el agua, escondiéndose de los soldados que los buscaban en la orilla del río” (Sanford, 2010: 143). Periodistas de diferentes medios fueron a cubrir lo que parecía un éxodo de indígenas q’eqchi’s que huyeron a los cerros para sobrevivir. Pocos testimonios hay de sobrevivientes directos de la masacre pues fueron perseguidos hasta matarlos o desaparecerlos siendo amenazados primero. Algunos parientes sobrevivientes de las víctimas conocen a los victimarios.

La violencia no se detuvo, incluso cuando la sociedad civil organizada exigía justicia y esclarecer estos hechos a pocos días después de la masacre. El 7 de junio de 1978 hicieron una marcha “que tardó más de una hora en pasar frente a Palacio Nacional” (Sanford, 2010: 113). Se demandaba la renuncia del General Otto Spiegler porque, lejos de investigar la matanza y castigar a los culpables, estaba justificando la acción armada.

Desafortunadamente, la sociedad civil nacional o internacional no logró avance en cuanto a justicia se refiere. El discurso justificativo resultó más poderoso; y es que bajo la mirada del aparato de seguridad nacional; quien era abatido por el Ejército, lo tenía merecido. En el caso de Panzós, los indígenas eran “agresores” y los soldados actuaron en legítima defensa; así no hay culpables

que castigar ni cuentas por rendir. Los comunicados emitidos, tanto por la Presidencia como por las Fuerzas Armadas después de la masacre, lo demuestran. El primero responsabiliza de las muertes a las organizaciones de extrema izquierda por utilizar a los campesinos, mientras que los segundos muestran a los campesinos como capaces de vencer a las fuerzas armadas de no ser por la pronta acción militar.

“No es cierto que las víctimas fatales sean más de 100, otros hablan de 30 o 35 cadáveres sin contar algunos que se ahogaron en el río” (Sabino, 2008: 196). De acuerdo con el comunicado de las Fuerzas Armadas hubo “34 muertos, 17 heridos de los agresores y 7 soldados gravemente heridos” (Sanford, 2010: 68). Los registros de defunción en Panzós hacen referencia a 36 personas fallecidas el día de la masacre, pero no hay nombres revelados, todos son anónimos. Se habla sin cesar de las víctimas de la masacre, pero no de las muertes derivadas de la violencia selectiva posterior a los hechos en la plaza central.

Los registros de defunción entre enero de 1978 y diciembre de 1982 señalan un total de 230 muertos solamente en Panzós y sus alrededores, sin contar las comunidades más alejadas, que también padecieron la violencia (Sanford, 2010: 154). Es importante considerar que a pesar de que se trata de las actas de defunción a las que los números hacen referencia, sigue siendo un aproximado de las víctimas; que pueden dar una idea de la violencia sistemática que sufrió la región.

No fue sino 19 años después de la masacre que las víctimas y sus sobrevivientes dejaron de ser un número más de la violencia del país. En julio de 1997 miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala junto con representantes del Ministerio Público de Cobán y representantes de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), iniciaron las labores de exhumación de cuerpos. La tarea se completó con la toma de testimonios para tener un estimado de las víctimas, así como un mejor panorama de los acontecimientos⁴⁴. Hasta este momento, 19 años después, las víctimas indirectas de la masacre de Panzós hablaron, expresaron su verdad y su dolor.

⁴⁴ Estos testimonios fueron entregados a la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en donde fueron incluidos como parte de su reporte final y hay recomendaciones específicas ante la matanza de Panzós.

Se exhumaron solamente 35 esqueletos de la fosa clandestina ubicada en el panteón de Panzós. Esas 35 osamentas fueron enterradas 20 años después de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo q'eqchi'. A pesar de que sólo 35 de casi más de 200 viudas tuvieron este privilegio; haber dado sus testimonios brindó una dimensión humana a una situación que como dijo una mujer –sin dar su nombre- en su testimonio “la violencia reemplazó el tejido social basado en la colaboración por la traición y el recelo” (Sanford, 2010: 131).

En 1991 llega a la presidencia Jorge Serrano Elías, quien de inmediato inició las conversaciones de paz para terminar con el conflicto interno. Con apenas cuatro meses al frente del país, el presidente se reunió con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) quien representaba a las diferentes fracciones y frentes del movimiento guerrillero en Guatemala. Abril de 1991 marca el inicio de un largo paso para alcanzar la paz, plagado de pactos, acuerdos y comisiones que han trabajado para dar lugar a recomendaciones que marquen diferencia en la historia del país, aunque han sido -en su mayoría- ignoradas.

No fue sino hasta el 29 de diciembre de 1996 que el proceso de negociación de la paz se concretó con la firma del *Acuerdo de Paz Firme y Duradera*, que fue el último acuerdo firmado por las partes representantes del conflicto. El objetivo más importante de este documento fue dar validez a todos los demás acuerdos que ya se habían firmado y que no habían entrado en práctica. “Tanto el Acuerdo de Paz Firme y Duradera como los demás acuerdos de paz expresan consensos de carácter nacional y establecen que su cumplimiento constituye un compromiso histórico e irrenunciable” (Acuerdo de Paz, 1996). Los Acuerdos más relevantes fueron:

No.	Nombre del acuerdo	Lugar y fecha de suscripción
1.	Acuerdo global sobre derechos humanos	México, D.F. (México), 29 de marzo de 1994
2.	Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado	Oslo (Noruega), 17 de junio de 1994
3.	Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca	Oslo (Noruega), 23 de junio de 1994

4.	Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas	México, D.F. (México), 31 de marzo de 1995
5.	Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria	México, D.F. (México), 6 de mayo de 1996
6.	Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática	México, D.F. (México), 19 de septiembre de 1996
7.	Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego	Oslo (Noruega), 4 de diciembre de 1996
8.	Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral	Estocolmo (Suecia), 7 de diciembre de 1996
9.	Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad	Madrid (España), 12 de diciembre de 1996
10.	Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz	Guatemala (Guatemala), 29 de diciembre de 1996

Acuerdo de Paz, 1996: 418

De los Acuerdos mencionados en la tabla anterior, hay tres que, por su trascendencia, hay que destacar: *Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca y el Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego*. Esto es, porque el resto de los Acuerdos fueron reafirmados con el *Acuerdo de Paz Firme y Duradera* que creara Comisiones de Paz que se enfocan en cada uno de los temas incluidos en los Acuerdos.

El *Acuerdo Global sobre Derechos Humanos* fue firmado por el Gobierno Guatemalteco y la Unión Revolucionaria Nacionalista de Guatemala (URNG) el 29 de marzo de 1994 en la ciudad de México. Esto quiere decir que este documento abrió paso para los Acuerdos de Paz que habrían de firmarse en 1996 por las mismas partes. Este Acuerdo trataba de esclarecer la buena voluntad que habría, sobre todo, por parte del gobierno para terminar con la violencia ejercida durante el conflicto y para determinar que una vez firmada la paz se trabajaría por la justicia.

El documento tuvo como base dos compromisos generales (Acuerdos Globales de Derechos Humanos, 1994: 1):

- Garantizar y proteger la observancia de los derechos humanos dejando en claro la voluntad política de hacerlos respetar.

- Impulsar medidas orientadas a promover y perfeccionar las normas y mecanismos de protección de los derechos humanos.

Ambos compromisos están sustentados por garantías que terminaban siendo la base de propuestas para poder alcanzar el respeto a los derechos humanos que ya habían sido violentados de manera por demás suficiente. Sin embargo, el documento no diferencia a la población ladina e indígena de Guatemala que, si bien ambos sufrieron violencia, el grado de la misma y el entorno en que se da, no tuvo comparación.

Además de los compromisos generales, hay otros dos que resultaban vitales pero que a la fecha no se han cumplido:

- No propiciar medidas para evitar el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones de los derechos humanos.
- No brindar ningún fuero o jurisdicción privativa para escudar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.

Los dos compromisos mencionados resultaban básicos para poder ver hacia el futuro, para hacer justicia y para buscar la reconciliación, pero sólo se quedaron en el papel. Dos años después en los mismos Acuerdos de Paz ambos compromisos se toparon con limitaciones. En el caso del primero, Guatemala no fue de los países que permitiera amnistías, pero en el momento en que se crea la Comisión del Esclarecimiento Histórico, se condiciona el revelar los nombres de perpetradores; haciendo más complicado el acceso a la justicia. El segundo se anula en el momento en que perpetradores conocidos por la sociedad guatemalteca siguen teniendo cargos públicos lo que conlleva un fuero que impide llevarlos a juicio.

Este Acuerdo Global sobre Derechos Humanos fue un primer intento por mejorar la situación del país, abrió paso a otros acuerdos y al involucramiento de otras organizaciones, como el caso de las Naciones Unidas. Resulta curioso que la mitad del documento esté destinado al pacto que se logró para tener a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), cuando las mismas recomendaciones fueron rechazadas. De hecho, tras alargar su estancia y

trabajar en el país por 10 años la Misión indica, en su reporte final, las numerosas recomendaciones que han sido dejadas a un lado por parte del gobierno.

Uno de los documentos de mayor relevancia fue el *Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca*. Este Acuerdo firmado el 23 de junio de 1994 establece las directrices a seguir para la Comisión. Tiene elementos clave, como el periodo de estudio, la protección de los testigos, quiénes constituirían este organismo; la posibilidad de hacer recomendaciones que colaboraran con el desarrollo de la paz en el país y hacer énfasis en “la justicia como elemento obligado para llegar a la reconciliación, derecho fundamental” (Balsells, 2009: 95).

Hay elementos que en el momento de la firma de este Acuerdo no estaban bien definidos, como el periodo de estudio pues en un inicio sólo se establecía “desde el inicio del conflicto”; después fue necesario establecer este punto de partida y un final, hasta la “Firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera” que tomaron 2 años más en firmarse. Hubo otros elementos que terminaron definiendo la naturaleza de la Comisión, como hacer recomendaciones que a la fecha no han sido cumplidas, o bien, el hablar de justicia “a medias”. Y es que definir que las recomendaciones o el informe producto de la Comisión “no individualizará responsabilidades, ni tendrá propósitos legales” podría considerarse como una merma para la justicia en sí; aunque no sea el trabajo de la comisión propiamente.

Más tarde, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera establecería: “es un derecho del pueblo de Guatemala conocer plenamente la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia ocurridos en el marco del enfrentamiento armado interno. Esclarecer con toda objetividad e imparcialidad lo sucedido, contribuirá a que se fortalezca el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país” (Acuerdo de Paz, 1996).

A pesar de que había Acuerdos ya firmados y de las conversaciones para alcanzar la paz, la violencia –aunque en menor proporción- seguía estando presente en la sociedad guatemalteca. Por eso la importancia de la firma del *Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego*, firmado hasta 1996. El

documento inicia por definir en qué consiste un cese al fuego “consiste en el cese de todas las acciones insurgentes de parte de las unidades de la URNG y el cese de todas las acciones de contrainsurgencia por parte del ejército de Guatemala” (Acuerdo de Paz, 1996). Adicionalmente, también se incluiría cualquier acción de propaganda política. Todas estas acciones serían verificadas por la Organización de las Naciones Unidas.

Con el objetivo de cumplir con el resto de los Acuerdos se crearon Comisiones de Paz que trabajarían con objetivos específicos, contribuyendo al desarrollo del país. Algunas de las más importantes fueron:

- Comisión Paritaria de Reforma Educativa. El objetivo de esta Comisión era hacer una reforma educativa en donde la población maya estuviera incluida, promoviendo su identidad y derechos. Impartir educación bilingüe para satisfacer las necesidades de un país multiétnico y multicultural.
- Comisión de Oficialización de los Idiomas Indígenas en Guatemala. Esta Comisión se enfoca en dos rubros: educación y justicia; partiendo de una realidad de discriminación racial. Como parte de la educación, hacer hincapié en la diversidad cultural del país y promover una población bilingüe e impartir justicia en las lenguas existentes.
- Comisión de Fortalecimiento de la Justicia. Se centra en que exista justicia sin contemplar la condición social o económica. Pero, sobre todo, dar castigo a transgresores y reparar los daños causados.
- Comisión de Reforma Electoral. Las propuestas giraron en torno a empadronar a la población guatemalteca de manera adecuada, hacer campañas informativas, y no sólo políticas, así como promover votaciones que habrán de ser transparentes.

Tristemente, muchas de las propuestas que estas comisiones hicieron sólo quedaron en eso: propuestas. En su momento, los observadores de las Naciones Unidas documentaron que las recomendaciones no estaban siendo tomadas en cuenta, que la voluntad de cambiar era prácticamente inexistente en las autoridades del país. Hoy, se puede ver que la situación no ha

tenido cambios significativos. Comisiones, tratados, acuerdos, investigaciones o recomendaciones son insuficientes cuando no se tiene la voluntad de hacer cambios verdaderamente significativos y que beneficien a la sociedad en general; no a unos cuantos.

El 29 de marzo de 1994, en la ciudad de México, se firmó el *Acuerdo Global sobre Derechos Humanos* entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) con el aval de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lideradas en ese entonces por Koffi Annan. Estos acuerdos dieron paso a que, incluso antes de que se firmaran de manera oficial los Acuerdos de Paz, se estableciera la Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos. Uno de los objetivos era: “ubicar al marco de los derechos humanos como eje central de la transición” (Brett, 2006: 204).

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) se instaló en el país en noviembre de 1994. “La misión debió otorgar especial atención al derecho a la vida; a la integridad y seguridad; a la libertad individual; al debido proceso; libertad de expresión; libertad de movimiento; libertad de asociación y derechos políticos. A este grupo de derechos se les designó como *derechos prioritarios*” (MINUGUA, 2004: 7). Esto se logró de diferentes maneras, pero es importante recalcar el acercamiento que hubo con los familiares o víctimas del conflicto que depositaron un halo de esperanza en la Misión.

El conflicto aún no había terminado; las negociaciones de paz seguían, pero la realidad de las víctimas, cada vez más empobrecidas, no parecía mejorar. De este modo, MINUGUA se convirtió en una *semilla de esperanza* como el autor Roddy Brett (2006) lo llegó a calificar. Eran evidentes los fondos de las Naciones Unidas dentro de la Misión, pues la gente trabajando para ella, se hizo visible en casi todos los rincones del país. Se entablaron diálogos con las víctimas, con organizaciones civiles nacionales e internacionales, así como con miembros de las diversas instituciones gubernamentales para fortalecerlas en materia de derechos humanos. Pero lo más

importante, es que se abrió un espacio para la denuncia con garantía de confidencialidad, lo que parecía terminar con la larga historia de impunidad.

Los Acuerdos de Paz se firmaron en 1996, pero la violencia parecía no terminar. Uno de los reportes de MINUGUA da cuenta de ello:

“Entre el período entre enero de 1997 y julio de 1999 la Policía Nacional (PN) y la Guardia de Hacienda (GH) fueron responsables de un 68% del total de las violaciones del derecho a la vida, integridad y libertad, seguida por el Ejército con un 22%. En el período entre julio de 1999 y junio de 2001, la Policía Nacional Civil (PNC) aparece como responsable del 52% del total de las violaciones a estos tres derechos y autoridades municipales con un 22%”. Las denuncias recibidas ante estos hechos eran investigadas hasta ser corroboradas para que procedieran. Se recibieron 2,568 denuncias y se corroboraron 1,393” (MINUGUA, 2004: 10-13).

El cese al fuego había sido firmado, pero la violencia, si bien había disminuida, no paraba por completo. Entonces MINUGUA encaminó sus esfuerzos hacia el fortalecimiento institucional y las reparaciones a las víctimas; ambos temas incluidos dentro de los Acuerdos de Paz. “Las acciones de apoyo al fortalecimiento institucional abordaron cinco temas considerados como prioritarios: seguridad pública, igualdad ante la ley y acceso a la justicia; independencia judicial; protección de derechos humanos en el sistema judicial y una cultura de los derechos humanos” (MINUGUA, 2004: 17).

El fortalecimiento institucional requería de más que un nuevo gobierno con la disposición y el recurso financiero de los Acuerdos de Paz. Por lo tanto, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Noruega, Suecia, España y Venezuela fueron países que se comprometieron con este objetivo. Algunos de ellos participaron de manera económica y algunos más lo hicieron con apoyo de personal. Uno de los países más activos fueron los Estados Unidos, cuando –irónicamente- ellos habían vendido armas para que el conflicto se recrudeciera; ahora estaban comprometidos con fortalecer las instituciones en cuyo debilitamiento colaboraron.

Las víctimas se convirtieron en el segundo aspecto primordial. Además de dar seguimiento a las denuncias y corroborar información sobre muertos y desaparecidos. Las víctimas exigían –y con todo derecho- justicia. Si bien a la impunidad se le relacionó de manera directa con el

fortalecimiento de las instituciones, el peligro que corrían los defensores de los derechos humanos, e incluso los mismos trabajadores de las Naciones Unidas obligaron a proceder de manera diferente. Para poder lograr la justicia que las víctimas buscaban, se necesitaba de más información para que las demandas procedieran. Pero también era indispensable el resarcimiento a las víctimas, que no era parte del fortalecimiento del gobierno, sino una cuestión de voluntad del mismo.

Por ello, el 7 de enero de 2004, el Gobierno de Guatemala, en acuerdo con las Naciones Unidas, firmó el establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS)⁴⁵. Además de la implementación de diversos Programas Piloto de Resarcimiento y Asistencia a víctimas que empezaron a funcionar desde 1996, aunque un trabajo de mejor calidad, no se vio sino hasta 1999. Esto concluyó en el 2002, cuando diferentes organizaciones de la sociedad civil pactaron con el gobierno en turno la creación del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).

Es evidente que MINUGUA tuvo una labor importante dentro de diferentes ámbitos para que un clima de paz pudiera propagarse -en mayor o menor medida- a lo largo del territorio guatemalteco. Esto no quiere decir que el personal no se haya topado con “trabas” gubernamentales y peligros para realizar su trabajo. Sin embargo, viendo el trabajo de la Misión, a detalle, los resultados pueden ser cuestionables, pero no porque la Misión no se haya desempeñado de manera correcta, sino porque dependían de la buena voluntad del gobierno. Y a pesar de todo el apoyo que las Naciones Unidas y otros actores internacionales le brindaron al gobierno de transición, no fue suficiente para sensibilizarlo ante las necesidades de la población.

“La estructura de poder no ha cambiado significativamente en Guatemala: el Ejército, aunque no se manifiestan de la misma forma, tiene todavía mucho poder y control en la sociedad guatemalteca” (Brett, 2007: 246). Esto puede verse en la manera en que el trabajo de la Misión de las Naciones Unidas fue simplemente hecho a un lado a pesar del dinero invertido en las mejoras

⁴⁵ A pesar del Acuerdo firmado en el 2004 entre el Gobierno Guatemalteco y las Naciones Unidas, era necesario esperar el “visto bueno” del Congreso. De esta manera, la CICIACS fue uno de los varios acuerdos no cumplidos hasta la fecha ni por el gobierno de transición ni por aquellos democráticos.

propuestas. Pero es que uno de los aspectos clave y en contra de toda lógica entra en juego; en el momento en que la Organización de las Naciones Unidas no puede obligar a ningún gobierno a implementar ningún programa y recae en su “buena voluntad”. Esto ha llevado a que ni el fortalecimiento institucional, ni el resarcimiento a las víctimas hayan sido programas sólidos.

La Misión constató -e incluyó- dentro de sus reportes, las carencias del gobierno guatemalteco en torno a la administración de justicia, aunada a la impunidad. Esto llevó a un seguimiento estrecho del compromiso hecho por el mismo gobierno para cambiar y fortalecer las instituciones. Sin embargo, “los distintos gobiernos, pese a conocer estos antecedentes, no diseñaron ni implementaron una política dirigida a prevenir y combatir este fenómeno... por lo tanto la inacción estatal ha profundizado el sentimiento de indefensión personal y falta de apoyo hacia jueces, fiscales y peritos” (MINUGUA, 2004: 18).

De todos los compromisos incluidos en el *Acuerdo Global de Derechos Humanos*, la impunidad –estrechamente relacionada con el fortalecimiento de las instituciones- ha presentado severos obstáculos para evadirla. Esto hace que las personas que se han atrevido a denunciar enfrenten riesgos, pues no ha habido voluntad del gobierno para hacer justicia; sobre todo si los victimarios son miembros del gobierno o de las fuerzas armadas. Entonces, la impunidad sigue siendo parte transcendental de la historia de este país como lo demostró la negación de la creación del CICIACS por parte del Congreso, pues el hecho de que esta comisión tuviera acceso a toda la información de las fuerzas armadas pareció no agradarles.

Desde 1996 y hasta el 2004 (al menos), se han aumentado los recursos destinados para el sector justicia. MINUGUA hizo hincapié en elementos clave: “proveer de un presupuesto adecuado a un sistema de justicia; establecer un proceso de selección abierta y transparente; promover la capacitación permanente hacia sus funcionarios; realizar un proceso de depuración institucional y establecer el principio de la carrera funcionaria” (MINUGUA, 2004: 18). A pesar de existen los presupuestos y han pasado años como para notar algún cambio, -como también la Misión apunta en su reporte final- “el fortalecimiento fue prácticamente abandonado” (MINUGUA, 2004: 18). Entonces, ¿se trata de dinero o de voluntad?

En cuanto a las víctimas, si bien se aplicaron los *Programas Piloto de Resarcimiento y Asistencia*, tampoco tuvieron el éxito deseado. Se construyeron algunas viviendas para viudas, pero se tendió a favorecer el resarcimiento colectivo a través del mejoramiento de bienes públicos; este último tipo de resarcimiento no fue propuesto originalmente. Pero, además, estos “beneficios” no llegaron ni a un 20% de las víctimas, pues al tratarse de programas piloto, los alcances fueron muy vagos; “sólo cuatro municipios de los 22 departamentos del país” (MINUGUA, 2004: 22).

Gracias a los esfuerzos de MINUGUA, de organizaciones civiles y (para ese momento) ya como consecuencia de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, se firmó el *Programa Nacional de Resarcimiento* en 2002. Sin embargo, la falta de voluntad por parte del Gobierno estuvo presente una vez más y no fue sino hasta finales del 2003 cuando por fin se le asignó un titular. Hasta la entrega del reporte de MINUGUA (noviembre de 2004) el programa no ha tenido éxito porque sigue sin tener presupuesto propio.

Si bien el *Programa Nacional de Resarcimiento* ha beneficiado a algunas familias, el alcance ha sido mínimo debido a la falta de personal, entre otros aspectos. El presupuesto de este programa depende de la Secretaría de la Paz (SEPAZ) creada después de la firma de los Acuerdos de Paz; misma que ha sido inestable pues -por ejemplo- sufrió en años recientes despidos ilegales de varios de sus principales integrantes y defensores desde enero de 2012 por parte del entonces Presidente, el General en retiro, Otto Pérez Molina (Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos, 2012).

Si bien MINUGUA declara en su reporte final, publicado en noviembre de 2004, que valora el compromiso que el Gobierno Guatemalteco ha tenido para poner en marcha el programa de reparaciones, se puede leer que el compromiso no se ha cumplido del todo. Sin embargo, MINUGUA interpreta que el hecho de que exista un programa de este tipo implica que el Estado ha reconocido su responsabilidad en los hechos y que asuma el “...reparar los daños causados mediante la sistemática violación a los derechos humanos que tuvo lugar en el pasado. Sin embargo, es necesario continuar brindando soporte económico y apoyo político a este programa de

resarcimiento, e instar por su creación a través de una ley” (MINUGUA, 2004: 25); ley que tampoco ha llegado.

En lo que no se ha puesto atención es en las consecuencias que la falta de justicia ha conllevado y que los reportes sobre derechos humanos de la Misión también contemplan: linchamientos. No es coincidencia que los linchamientos se estén llevando a cabo en los lugares más golpeados por el conflicto armado, así como los más pobres; lo que podría interpretarse como justicia por propia mano. “Entre 1996 y 2003, la misión totalizó 255 personas muertas por causa de linchamientos” (MINUGUA, 2004: 9). Se trató de llamar la atención de las autoridades sobre estos casos, pero no hubo la respuesta esperada, llevando una vez más a la impunidad. Los responsables de los linchamientos no han recibido castigo.

Pese a todos los esfuerzos y la poca voluntad que ha tenido el Gobierno para este cambio necesario dentro del país, la realidad es que siguen estando pendientes de atención la mayor parte de las víctimas. Las recomendaciones de MINUGUA no se han puesto en marcha, el reforzamiento de diferentes programas se ha hecho a un lado; las reparaciones a las víctimas han fluido a “cuenta gotas” y los victimarios siguen sin ser enjuiciados. “En breve, sin justicia no habrá desarrollo social, político, institucional y cultural en Guatemala” (Brett, 2007: 247). Lo preocupante es que parezca que no hay nada por hacer; no hay ninguna organización, ningún acuerdo que pueda evadir la falta de voluntad de quienes gobiernan.

En 1999, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú denunció en la Audiencia Nacional de España ante el Juzgado Central de Instrucción por Genocidio, Tortura, Terrorismo, Asesinato y Detención ilegal por estos mismos crímenes a los siguientes personajes:

Nombre	Puesto	Años en cargo
General Efraín Ríos Montt	Presidente	1982-1983
General Oscar Humberto Mejía Víctores	Presidente	1983-1986
General Fernando Romeo Lucas García	Presidente	1978-1982

General Angel Anibal Guevara Rodríguez	Ministro de Defensa	1978-1982
Licenciado Donaldo Alvarez Ruiz	Ministro de Gobernación	1978-1982
Coronel Germán Chupina Barahona	Director de la Policía Nacional	1978-1982
Pedro García Arredondo	Jefe de Comando de la Policía Nacional	1978-1982
General Benedicto Lucas García	Jefe del Estado Mayor del Ejército	1978-1982

Fuente: Goikoelea, 2002: 51

Cuando llegaron miembros de la corte española a hacer investigaciones, ni siquiera tuvieron oportunidad de entrevistar a los acusados. En 2006, se emitieron órdenes de captura, pero además del fervor de los guatemaltecos por un dejo de justicia que se asomaba, "... los frutos de dichas acciones aún son imprecisos e indefinidos" (Brett, 2007: 248).

Aparentemente, no hay pruebas suficientes dentro de ningún documento que revele la verdad y la crueldad del conflicto guatemalteco como para hacer justicia de alguna manera. Las Fuerzas Armadas siguen defendiendo su postura; o bien, siguen justificando o defendiendo las órdenes de sus superiores bajo cualquier pretexto. El genocidio se sigue negando. "La intensidad de la matanza y la identidad de las víctimas de la región entre 1981 y 1983, y la forma de masacrar, lo que incluye su naturaleza sistematizada y planificada como parte de las campañas militares, ha significado que la CEH definiera la violencia estatal como "genocidio" en un mínimo de cuatro áreas del país" (Brett, 2007: 238).

La justificación -a la fecha- es que las matanzas ocurrieron en un contexto de reacciones inmediatas y precipitadas por el miedo. Los soldados, debido a la cadena de mando, no tienen más opción que recibir órdenes de sus superiores y acatarlas; aunque, esto no los exime de responsabilidad. El hecho de que las masacres fueran "espontáneas" es una justificación poco creíble por las características comunes que presentan entre sí. Generalmente, se buscaban momentos en que hubiera gran concentración de gente en un solo lugar como "días de mercado" o bien, la madrugada cuando la gente estuviera durmiendo en las comunidades con poca posibilidad de huir; dividían a los pobladores según su género, buscaban personas específicas a quienes asesinaban, violaban a mujeres y niñas de manera colectiva mientras los varones observaban; los

varones, además, eran torturados para finalmente matar a todos los que hubieran sobrevivido. Esto se repitió en muchas comunidades del país. ¿Esta sistematización de la violencia puede ser espontánea?

Guatemala ratificó la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio (ONU, 1948) en enero de 1950. Dicha convención prohíbe la aplicación de leyes de amnistía en los casos de genocidio (Brett, 2007: 9). Tristemente, ningún alto rango de las Fuerzas Armadas o del gobierno ha sido realmente castigado por genocidio. Contemplando incluso, que, de acuerdo con el derecho penal, “quien da una orden genocida comete genocidio; y quien la cumple, también” (Sanford, 2012: 17). Según la interpretación de la CEH, una política genocida tiene el genocidio como fin, mientras que los actos genocidas son parte de un plan que usa estas prácticas, pero con objetivos diferentes al genocidio mismo –como acabar con los comunistas guatemaltecos-. De esta manera, y según la CEH, el genocidio pudo haber sido un medio y no un fin; sin embargo, en cualquier caso, no debería haber discusión ante los hechos.

Guatemala, Memoria del Silencio.

“Al miedo hay que sacarlo y sólo la certeza de que no volverá a suceder, de que el terror no volverá nunca más tal vez podría liberar los recuerdos. Son decenas de miles de guatemaltecos los que necesitan un tratamiento curativo para superar el miedo que los aflige. ¿Cuántos años llevamos de estar con miedo? La historia de Guatemala es una larga crónica de horrores.”

(Edelberto Torres-Rivas en Sanford, 2004: XXV).

Los Acuerdos de Oslo, firmados el 23 de junio de 1994, establecieron la necesidad de crear la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala. Los autores de estos acuerdos -quienes también fueron un pilar para la Firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996- pensaron que era indispensable conocer y hacer pública la verdad si es que se quería llegar a la reconciliación. “...a pesar del choque que puede sufrir la nación al mirarse en el espejo de su pasado, es necesario conocer y hacer pública la verdad” (CEH, 1999: 16). Si bien la verdad era necesaria, lo que se ha convertido en un verdadero reto ha sido la justicia. Es por esto que los alcances y logros de la CEH pueden entrar en debate.

Los diferentes puntos de vista pueden verse reflejados en el momento en que hay perspectivas tan contradictorias. “En Guatemala y en el ámbito internacional, se ha valorado el informe de la CEH como uno de los mejores productos que han arrojado las distintas comisiones de la verdad establecidas en diversos países que han sufrido graves conflictos internos” (Goikoelea, 2006: 47). “La complejidad del proceso de paz en Guatemala es enorme y encuentra en la difusión del trabajo de la CEH una patética muestra de dificultades, porque en ello se evidencia la actitud cerrada de una sociedad que se ha negado a aceptar las conclusiones de la *Memoria del Silencio*” (Balsells, 2009: 17)⁴⁶.

De acuerdo con los estatutos de la creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el resultado era entregar el informe con la verdad de los hechos violentos durante el periodo del conflicto; por lo tanto, los resultados son palpables. Sin embargo, la realidad es que la CEH empezó

⁴⁶ Esta cita es relevante porque está contenida en el libro *Olvido o Memoria* de Edgar Alfredo Balsells Tojo quien fue uno de los tres miembros a cargo de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

a verse mermada en su actuar desde su propia naturaleza. “En Guatemala el presidente presentó una propuesta de ley de amnistía aun cuando en los Acuerdos de Paz se estableció que el gobierno no impediría la persecución de las violaciones a los derechos humanos” (Orduña: 2008: 83). Si bien los Acuerdos de Oslo determinaron su creación, uno de los instrumentos que más influyeron en establecer los estatutos y la dinámica de la comisión fue la Ley de Reconciliación Nacional que se firmó el 18 de diciembre de 1996.

En términos generales, la Ley de Reconciliación Nacional a través de sus 13 artículos plantea la necesidad de la reconciliación para lograr una paz firme y duradera. Sin embargo, también plantea la extinción total de la responsabilidad penal por delitos políticos cometidos durante los 36 años de conflicto armado interno. La responsabilidad penal exime tanto a autores, como cómplices, encubridores, autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cualquier otra fuerza establecida por la ley, así como a miembros de la guerrilla. Los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada son los únicos que no están exentos de responsabilidad penal; aunque son los mismos que a la fecha se discute si es que existieron o no.

Por otra parte, esta ley también contempla que es un deber humanitario del Estado asistir a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el enfrentamiento. La asistencia sería a través de los programas gubernamentales instaurados por la Secretaría de la Paz, de acuerdo con las recomendaciones hechas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Y en este aspecto, se hace hincapié en que dicha Comisión tendrá todo el apoyo por parte del Estado con el objetivo de hacer posible el conocimiento y reconocimiento de la verdad histórica a fin de que no se repitan hechos de violencia de esa magnitud⁴⁷.

Lo irónico es que el estatuto que establece la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca, fue establecido dentro de los Acuerdos de Oslo en 1994. Esto quiere decir, que la creación, el modo de operar y la instalación de la Comisión ya estaban determinados

⁴⁷ Cf. Anexo 7 (Pp. 308). Artículos clave de la Ley de Reconciliación Nacional.

en un documento. Sin embargo, a pesar de la apertura mostrada en el momento, la propia naturaleza de la comisión determina varias limitaciones que impiden el completo conocimiento de la verdad; incumpliendo así el objetivo principal⁴⁸.

Una de las determinaciones con las que se inicia el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca es que el Acuerdo se crea “considerando el derecho del pueblo de Guatemala a conocer plenamente la verdad sobre hechos graves de violencia cuyo esclarecimiento contribuirá a que no se repitan estas páginas tristes y dolorosas y que se fortalezca el proceso de democratización en el país” (CEH, 1999: 23). Sin embargo, la verdad (completa) queda en tela de juicio en el momento en que dentro del apartado del *funcionamiento de la CEH* se hace la aclaración que no se individualizarán responsabilidades, ni se revelarán nombres de perpetradores. Además, la justicia no sólo queda en tela de juicio sino en un segundo o tercer plano pues se establece que tanto los trabajos como las recomendaciones no tendrán efectos judiciales.

Las finalidades del trabajo de la comisión eran claras: esclarecer los hechos de violencia, entregar un informe y hacer recomendaciones. Para que los objetivos se cumplan la Comisión estaría integrada por tres miembros: uno designado por el Secretario General de las Naciones Unidas quien a su vez elegiría a un ciudadano de conducta intachable y a un académico. Para la elección tanto del ciudadano como del académico, el gobierno y la URNG tendrían que estar de acuerdo. Para el trabajo la CEH tendría un plazo de seis meses prorrogable a un año. El plazo era muy breve, por lo tanto, se tomó el año completo para hacer trabajo de investigación (recolección de información) y se tomaron seis meses adicionales para la redacción del informe y las recomendaciones.

⁴⁸ Cf. Anexo 8 (Pp. 309). Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca

Como primer objetivo se tuvo el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos a través de información proporcionada por diferentes fuentes como los testimonios de víctimas. Se decreta también que las partes involucradas en el conflicto trabajarán de manera colaborativa con la CEH proporcionando cualquier tipo de información requerida. El grado de participación fue variado, pero hubo involucrados como el Ejército que pusieron cualquier cantidad de trabas para entregar información⁴⁹. En el caso de la URNG, alegaron no tener documentos que avalaran las estrategias seguidas por la naturaleza del movimiento.

Una vez obtenida la información, se elaboraría un informe que no contendría nombres de los señalados como perpetradores, aunque hubiese pruebas, y que respetaría en todo momento el anonimato de las fuentes. Dentro del informe habría recomendaciones, que, si bien no tendrían ningún propósito o efecto legal, serían propuestas para mejorar las condiciones de la sociedad guatemalteca en ámbitos de paz y desarrollo social. El informe y las recomendaciones serían entregadas en una ceremonia oficial tanto al presidente como a los representantes oficiales de las Partes del conflicto y al Secretario General de las Naciones Unidas.

“La CEH por lo menos ayudó a aclarar la historia. No son organismos deliberativos ni ejecutivos sino de investigación y de generar conciencia. Los afectados vieron como una tabla de sanación para que algo pudiera lograrse. Cuando has perdido seres queridos sólo se puede buscar justicia. Muchos pensaron que la CEH podía ser un elemento para alcanzarla, que no se haya usado por la justicia guatemalteca es otra cosa. La CEH no iba a hacer justicia, pero se caminaba hacia ella”⁵⁰.

Para algunas personas como los miembros de la ODHAG, el hecho de no dar nombres, de remitirse a sólo un relato de los hechos y a terminar su trabajo con la entrega del informe sin ayudar

⁴⁹ Tanto MINUGUA en el reporte final como la CEH coincidieron en que tanto las instituciones oficiales como la guerrilla no fueron tan colaboradores con sus trabajos como se esperaba. Incluso el Informe Final de MINUGUA acusa directamente al gobierno guatemalteco de falta de voluntad política para hacer cambios significativos para la sociedad.

⁵⁰ Cf. Apéndice #4 (Pp. 327). Entrevista con Neptalí Monterroso.

a la sociedad ante los traumas o sus denuncias, se consideraban limitaciones del organismo que trataron de subsanarse a través del Proyecto REMHI⁵¹.

La sociedad guatemalteca a través de las múltiples organizaciones de derechos humanos estaba lista para conocer la verdad y para poder emprender un verdadero proceso de paz y reconciliación. Algunas de las organizaciones que dieron su total apoyo para la creación de una comisión de la verdad en Guatemala fueron: Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos (CALDH), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), Equipo de Antropología Forense en Guatemala (EAFG), Fundación Rigoberta Menchú, Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG). Estos organismos incluyen organizaciones mayas; pero también brindaron su apoyo la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) y el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG).

“Casi todas las organizaciones guatemaltecas se pronunciaron abiertamente para que las Partes aceptaran una Comisión de la Verdad, instancia a la que se oponía rotundamente el Ejército pero que tampoco era asunto del agrado de la guerrilla. Uno y otro de los protagonistas del enfrentamiento armado tenían –con sobrada razón- que las atrocidades cometidas en y con pretexto de la contienda salieran a la luz” (Balsells, 2009: 93). Sin embargo, la comisión al estar incluida como parte de los Acuerdos de Paz, se convirtió en algo inevitable. Además, hay que reconocer que la opinión internacional tuvo un papel relevante para incluir una comisión de la verdad para alcanzar la paz.

Los diferentes gobiernos e instancias internacionales no sólo presionaron para la creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico; también tuvieron injerencia en su financiamiento. La

⁵¹ El proyecto REMHI se considera a sí mismo más integral porque no se limitó a un informe de los hechos sino a una ayuda para las víctimas que a la fecha se lleva a cabo en diferentes dimensiones. Además, el no dar nombres no sólo implica que la verdad esté incompleta, sino que merma el uso del informe como evidencia en los juicios mientras que informe Guatemala Nunca Más se usa actualmente. Cf. Apéndice #5 (Pp. 329). Entrevista con Nery Rodenas.

CEH recibió apoyos financieros, materiales, de expertos e informativos de tres instancias principales: gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales:

Gobiernos	Organismos internacionales	Organizaciones no gubernamentales
<p>Alemania Austria Bélgica Canadá Dinamarca Italia Japón Noruega Países Bajos Reino Unido Suecia Suiza Unión Europea Argentina Estados Unidos⁵²</p>	<p>Organización de las Naciones Unidas</p> <p>Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS)</p> <p>Secretaría General de las Naciones Unidas</p> <p>Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)</p> <p>Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)</p> <p>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)</p> <p>Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia</p> <p>Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA)</p>	<p>Fundación Ford</p> <p>Asociación Americana para el Avance de las Ciencias y el Centro para los Derechos Humanos Robert F. Kennedy</p> <p>Fundación Soros- Guatemala</p>

Fuente: CEH, 1999: 20.

Una vez que se firmaron los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, Kofi Annan entonces Secretario General de las Naciones Unidas inició su trabajo para la conformación de la CEH. De acuerdo con lo establecido en los Acuerdos de Oslo, la Comisión funcionaría con tres integrantes como base. El primero de ellos debía estar relacionado directamente con las Naciones Unidas y sería el Moderador en las negociaciones de los Acuerdos de Paz. De acuerdo con esto, el francés Jean Arnault debió de haber sido designado, sin embargo, él ya tenía el cargo de Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). Por lo tanto, en febrero de 1997, el Secretario Annan designó al Doctor Christian Tomuschat quien era Experto Independiente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Guatemala y estaba relacionado con la complejidad de la situación del país.

⁵² La participación de Estados Unidos fue significativa en términos de información. El expresidente Bill Clinton desclasificó archivos de las más importantes agencias de seguridad de este país en donde se admite la participación en entrenamiento y venta de armas de los Estados Unidos a Guatemala. A pesar de que la información desclasificada fue clave para conocer la verdad, ninguna responsabilidad fue asumida ni mucho menos acciones penales fueron llevadas a cabo.

“La conformación de la Comisión reflejó claramente el balance de poder: uno de los tres comisionados fue un extranjero nombrado por las Naciones Unidas, y los otros tres guatemaltecos designados por una de las partes involucradas en el conflicto bélico” (Orduña, 2008: 96). Con base en el Acuerdo para el Establecimiento de la CEH, además de la persona designada por las Naciones Unidas, debería de haber un ciudadano guatemalteco de conducta irreprochable y un académico. El 22 de febrero de 1997 se designó a la Licenciada Otilia Lux de Cotí (ciudadana) y al Licenciado Alfredo Balsells Tojo (académico).

Se pensó en Otilia Lux de Cotí para ser miembro de la CEH por su origen y para que ayudara a representar la causa indígena que había sido tan golpeada por las masacres. De las pocas indígenas con estudios superiores (Licenciada en Administración de la Educación) y maya k'iche', no sólo participó en la CEH sino que ha tenido una carrera dedicada a la lucha por los derechos de las mujeres indígenas en su país. Por su parte, Alfredo Balsells Tojo fue elegido de entre una terna propuesta por los rectores de las universidades guatemaltecas. Quien había sido en algún momento líder estudiantil e incluso después de fallecido tachado de “comunista” por algunos sectores; el abogado dedicó su vida a la verdad y al resguardo de los derechos humanos.

No fue sino hasta el 31 de Julio de 1997 cuando la CEH inició sus trabajos. El equipo de trabajo se fue ampliando hasta tener a 273 profesionales (142 guatemaltecos y el resto de 31 diferentes nacionalidades) asignados a diferentes áreas (CEH, 1999: 31). Todos los colaboradores dirigidos por los tres Comisionados: Christian Tomuschat, Otilia Lux y Alfredo Balsells quienes, a su vez, eran los únicos autorizados para hacer declaraciones públicas a medios de comunicación (esto se hizo también por cuestiones de seguridad). Es interesante destacar que la organización de la CEH se tornó flexible pues de acuerdo con la etapa del trabajo en que se estaba, las labores del equipo de trabajo eran reasignadas.

En todo momento los Comisionados encabezaron los organigramas. De ahí, la estructura base se dividió en el Secretario Ejecutivo, el Coordinador del Informe Final, el Director de Investigaciones y el Jefe de Operaciones. Además de los Comisionados y el Secretario Ejecutivo, lo único que se mantuvo estable en el transcurso de todo el trabajo de la comisión fue el Jefe de

Operaciones⁵³. En un primer momento se le dio más peso a la organización de las sedes para la recepción de testimonios y hacer investigación, una vez que se tenía la información se dividió al equipo de trabajo por áreas incluidas en el informe y dividir los insumos informativos; más tarde se abocó a la edición del informe y la información relacionada con casos ilustrativos contenidos en el mismo así como un grupo de personas trabajando de manera exclusiva en las recomendaciones para terminar con revisores del informe y traductores.

Una de las primeras y más importantes labores fue el establecimiento de las oficinas en los departamentos del país para poder hacer de manera eficiente el trabajo de campo necesario. “Al decidir la ubicación de las oficinas, se priorizaron especialmente las áreas más afectadas por las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia derivados del enfrentamiento armado interno y, por otra parte, las áreas más difícilmente comunicadas del país” (CEH, 1999:32). Se establecieron cuatro subsedes –Ciudad de Guatemala, Cobán, Santa Cruz del Quiché y Huehuetenango-. La Comisión trabajaría, también, a través de 10 oficinas cubriendo gran parte del territorio nacional:

Oficina	Departamentos Cubiertos
Barillas	Norte de Huehuetenango
Cantabal	Ixcán (Norte del Quiché)
Ciudad de Guatemala	Chimaltenango, Guatemala, Jalapa, Sacatepéquez
Cobán	Alta Verapaz, Baja Verapaz
Escuintla	Escuintla, Jutiapa, Santa Rosa, Suchitepéquez
Huehuetenango	Sur de Huehuetenango
Nebaj	Ixil (Departamento de El Quiché)
Poptún	Sur del Petén
Quetzaltenango	Quetzaltenango, Retalhuleu, Totonicapán
San Marcos	San Marcos
Santa Cruz	Centro y Sur de El Quiché
Santa Elena	Norte del Petén

⁵³ La relevancia que se le dio en todo momento al Jefe de Operaciones no era solamente por cuestiones logísticas para poder realizar los trabajos en gran parte del territorio guatemalteco sino más bien por motivos de seguridad. Si bien, supuestamente el país estaba en un periodo bastante más calmado, algunos de los trabajadores de la CEH sufrían acoso permanente por diferentes sectores de la sociedad. Incluso cuando se trabajaba en el informe se dio prioridad a la seguridad pues justo en el periodo en que se empezaron a hacer las bases de datos y a trabajar con la información que ya se tenía recopilada fue el asesinato de Monseñor Gerardi dos días después de haber presentado el informe *Guatemala Nunca Más*.

Sololá	Sololá
Zacapa	Chiquimula, El Progreso, Izabal, Zacapa

Fuente: CEH, 1999: 33

Una vez instaladas las oficinas y antes de empezar con el proceso de los testimonios, las oficinas se dieron a la tarea de informar a la población sobre el proyecto y cómo podían colaborar. La información sobre la CEH se daba de manera directa acudiendo a las cabeceras municipales y organizando reuniones, pero también se hizo a través de las autoridades tradicionales y locales, así como diversas organizaciones no gubernamentales que trabajaron como colaboradoras. Los medios de comunicación también colaboraron de manera importante para convocar a la gente a dar sus testimonios o dar a conocer los lugares en donde se podían reunir con personal de la comisión en las diferentes regiones. Esto colaboró a que la gente sintiera mayor confianza al considerar más complicado que hubiera represalias al ser tan público.

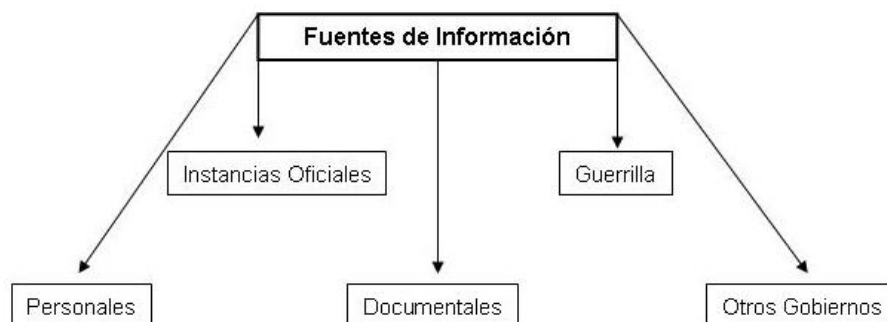
Los medios masivos de comunicación se utilizaron para convocar y para dar a conocer el proyecto. Se hizo una especie de campaña publicitaria en radio y televisión para brindar información sobre la colaboración que se requería por parte de la sociedad. Con el paso del trabajo, los medios fueron clave para dar a conocer los avances del proyecto a través de los voceros oficiales. No obstante, los medios alternativos de comunicación resultaron ser más eficaces debido a la situación social y al nivel socioeconómico (el grueso de la población no contaba con una televisión o un radio). Se produjeron posters, volantes, trípticos e historietas basadas en imágenes para las personas que no supieran leer.

Los resultados de las campañas de información y mediáticas fueron positivos. Miles de ciudadanos acudieron a las oficinas a dar sus testimonios, o bien se solicitó que personal de la Comisión asistiera a las comunidades a recoger los testimonios de manera individual o colectiva. Incluso hubo casos de zonas muy alejadas que no estaban cubiertas por alguna oficina o que la gente no estaba dispuesta o en posibilidad de desplazarse a donde acudieron equipos móviles. Además, se tomaron testimonios a través de diferentes organizaciones no gubernamentales en

Canadá, Estados Unidos y algunos países europeos. También se trabajó con personal guatemalteco en México sobre todo en Chiapas y Yucatán.

Se dispersaron, solamente, a lo largo de territorio guatemalteco 200 trabajadores sociales para pedir testimonio de los hechos. Desde septiembre de 1997 hasta abril de 1998 –en algunos casos hasta el mes de mayo- los investigadores visitaron cerca de 2,000 comunidades algunas más de una vez. En total se registraron 7,338 testimonios, 500 de los cuales se hicieron de manera colectiva. Por lo tanto, la CEH interactuó directamente con alrededor de 20,000 personas incluyendo al menos a 1000 testigos considerados clave: miembros y ex miembros del Ejército Nacional y de otras instituciones gubernamentales, miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil, ex combatientes de organizaciones guerrilleras, políticos, líderes sindicales, miembros de la sociedad civil e intelectuales entre otros (CEH, 1999: 33-34).

Debe hacerse hincapié en las fuentes de información que fueron consideradas en el informe:



Fuente: CEH, 1999.

La fuente primaria de información fueron las fuentes personales, es decir, los testimonios de víctimas de la violencia por cualquiera de las partes involucradas y/o violaciones de sus derechos humanos. Estos testimonios colaboraron para la reconstrucción del contexto en el que se desarrolló la violencia y también para tener datos duros relacionados con eventos tan deleznable como masacres. En todo momento -salvo por quienes dieron su testimonio que lo decidieran así- se ha mantenido el anonimato; incluso cuando se hace referencia a testigos clave. “La multitudinaria

acumulación de testimonios otorgados, permitió a la CEH tomar contacto directo con miles de guatemaltecos que depositaron su confianza en ella” (CEH, 1999: 55).

Lamentablemente las fuentes documentales más importantes no provinieron de las Partes involucradas en el conflicto, sino que los insumos principales a este respecto lo brindó tanto la sociedad civil como organizaciones no gubernamentales. Algunos testigos clave hicieron entrega de importantes documentos algunos privados que fueron de utilidad. La sociedad civil a través de organizaciones sociales que incluyen tanto a víctimas como a sus familiares incluso a militares retirados. Las fuentes proporcionadas por las organizaciones sociales fueron documentos relacionados con hechos de violencia que se documentaron, pero más bien se enfocaron a listas y bases de datos relacionados con desaparecidos o muertes registradas.

Una buena cantidad de fuentes documentales provinieron del extranjero. Ya sea a través de organizaciones no gubernamentales que estaban asentadas en territorio guatemalteco y que incluso también se convirtieron en víctimas o algunas otras que seguían el conflicto de cerca. También se unieron al esfuerzo organismos del sistema internacional e interamericano de derechos humanos a través de informes -que traducidos en denuncia- se habían dado a conocer incluso mientras el conflicto estaba en marcha. Las fuentes de información en Guatemala estaban completamente controladas así que fue más sencillo utilizar la prensa internacional como fuente de información que la prensa nacional.

En términos de fuentes de información el principal reconocimiento a gobiernos de otros países colaboradores es para Estados Unidos. Este país hizo un esfuerzo importante al responder con creces la solicitud de información hecha por la CEH, pues el expresidente Bill Clinton dio la orden para que se desclasificaran tantos archivos como fuera necesario, sin contemplar que los archivos mostrasen la activa colaboración de su país en términos de entrenamientos y entrega de armamento⁵⁴. Hubo países que colaboraron con testimonios de nacionales que habían sido víctimas

⁵⁴ También hay que considerar que a pesar de que los documentos desclasificados muestran la participación activa del gobierno estadounidense en el conflicto guatemalteco, no ha habido ninguna sanción ni investigación (solicitada o no) hacia este país.

de la violencia o testigos de la misma en Guatemala. Asimismo, hubo países que recibieron la solicitud de colaboración como Cuba, Argentina y Nicaragua sin ser respondida. O, países como Israel que, pese a haber vendido armamento al gobierno guatemalteco, negaron su participación.

La URNG que representa a diversas organizaciones guerrilleras colaboró con la CEH; en la medida de lo posible aparentemente. En la mayoría de los casos los ex comandantes fueron quienes dieron los testimonios de la guerrilla, lo que se consideró algo positivo porque no sólo se remitieron a los actos en su contra sino también comentaron sobre sus propios actos violentos. Sin embargo, a pesar de la voluntad de cooperar con la CEH, esta fuente informativa contó con algunas limitantes. Debido a las condiciones del entorno en que se desenvolvían no se contaba con documentación física relevante (también se argumentó que fue destruida por ellos mismos o el Ejército y hay quien asegura que no quiso ser entregada) por lo que los testimonios fueron sólo orales en su mayoría y sin un modo fehaciente de corroborar información; lo que implicó varias imprecisiones en el momento de cotejar los testimonios. Además, la URNG representa a diversas organizaciones guerrilleras por lo tanto las acciones eran muy dispersas y no había un modo de operar único.

Por el contrario, la información por parte de las instancias oficiales se entregó de manera física. Esta información colaboró a construir el modo de operar del Ejército y a poder fincar responsabilidades a éste gracias a consistencias en los operativos en contra de la guerrilla y la sociedad civil. Desafortunadamente, la información entregada por las instancias oficiales necesitó de mucho análisis y corroboración en otras fuentes debido a lo incompleto de los documentos. Podría pensarse que las instancias oficiales al haber firmado el Acuerdo para la creación de la CEH y mostrar un cierto grado de voluntad, colaborarían, aunque la historia fue diferente. “La información entregada por el Gobierno de Guatemala, en particular su Ejército, ha sido calificada como precaria y no satisfactoria” (CEH, 1999: 56).

Se considera que uno de los factores que complicó la adquisición de información del Ejército fue su centralización. “La mayoría de las peticiones no fueron resueltas, o lo fueron parcialmente y hasta con cuatro meses de retraso” (CEH, 1999: 49). Algunas otras peticiones nunca fueron respondidas como las relacionadas con los prisioneros de guerra de la URNG y las bajas del Ejército.

Los documentos que el Ejército puso a disposición de la Comisión fueron a partir de 1987 (evitando los periodos álgidos del conflicto) sin que haya documentación relacionada con el Estado Mayor Presidencial. Además, el Ejecutivo utilizó al Ejército para negar el acceso a diversos documentos que primeramente argumentó, estaban bajo resguardo constitucional y después la versión fue que nunca habían existido (cuando se comprobó su existencia en dependencias del Ejército Nacional). La buena voluntad se fue poniendo poco a poco en tela de juicio.

De acuerdo con la región, los testimonios fueron tomando más o menos tiempo. Por lo tanto, se fueron concentrando de manera paulatina en la sede central para ser procesados, cambiando los roles de los trabajadores sociales para darle paso a la concentración, a la organización y a la clasificación de la información para redactar el informe. La información fue analizada de manera meticulosa para que el informe sólo contuviera casos registrados que ya habían sido validados. Los casos no serían esclarecidos en términos policiales o judiciales, sino en términos de determinar si había habido o no violaciones a los derechos humanos de alguna índole; entonces las situaciones que demostraran esto serían incluidas en el informe, incluso como casos ilustrativos.

Los casos que están registrados en el informe son aquellos que la Comisión consideró que contenían elementos suficientes para sostener la certeza de lo sucedido y que, de algún modo, algunos autores fueran identificables o que lo fueran las víctimas. Esto quiere decir que hay un lugar y una fecha determinada a la cual remitirse y que hubo al menos una violación a algún derecho humano en contra de una o más personas. En la mayoría de las situaciones "... no había otra constancia que la memoria de las víctimas, a partir de cuyos testimonios, que fueron cotejados con otras fuentes, fue posible llegar a los elementos de convicción del caso" (CEH, 1999: 60). Por lo tanto, los casos registrados en el informe, además de las características mencionadas, se basaron en que los testimonios relacionados con la misma situación tuvieran las menos discrepancias posibles. Si bien la percepción de un mismo hecho puede ser diferente de una persona a otra, los hechos tendrían que ser lo más semejantes entre sí.

Al igual que el proyecto REMHI, para dar seriedad al trabajo, los testimonios tenían que ser firmados (en casos en que la persona no supiera escribir, la firma era la huella digital) sin que esto

representara una violación al anonimato de lo dicho. Los casos que no fueran debidamente firmados no fueron presentados en el informe ni forman parte de las bases de datos que dieron vida a las estadísticas de ese trabajo. Al emplearse el mismo procedimiento utilizado por el proyecto REMHI, los testimonios brindados a este proyecto que no se habían repetido pudieron ser incluidos. Además, la percepción que tiene la gente de un testimonio firmado gira en torno a la seriedad y honestidad del mismo, y sobre todo los testimonios colectivos, en donde todos tuvieron la voluntad de firmar, dieron paso a investigaciones.

El grupo de profesionales trabajando para la CEH, solicitó la ayuda de diferentes instituciones como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) pues las investigaciones implicaron otro tipo de trabajo. Bajo el mando de la CEH se realizaron algunas exhumaciones como la de Panzós en la Alta Verapaz, Belén en Suchitepéquez, así como Acul y Chel en el Quiché. Pero durante el mando de la Comisión también participaron en algunos otros procesos de exhumación liderados por otros organismos como la ODHAG. Los informes de las exhumaciones realizadas por ellos y en las que participaron se convirtieron en importantes insumos para los casos registrados.

El período de estudio es muy extenso, desde el mes de enero de 1962 -mes que la CEH estableció como el inicio del conflicto, aunque esta fecha se prestó a debate- y hasta diciembre de 1996. Esto hizo que a pesar de las prórrogas⁵⁵, la excesiva carga de trabajo obligara a la Comisión a hacer uso de trabajos antes realizados para tener un informe más completo. El informe *Guatemala, Nunca Más*, que es resultado del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) auspiciado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, fue el reporte incluido casi en su totalidad como complemento de las entrevistas. Esto se hizo porque el tiempo no era suficiente, los fondos empezaron a escasear y había nuevas comunidades formadas por

⁵⁵ El Acuerdo que establece la creación de la CEH le daba 6 meses para concluir su trabajo prorrogable a 1 año. Sin embargo, la sola toma de testimonios tardó aproximadamente 9 meses, por lo que era indispensable tener tiempo para procesar la información y poder hacer el informe con las recomendaciones que se establecen como parte de la naturaleza del informe. Finalmente, la Comisión tomó un año y medio.

sobrevivientes que no querían hablar al menos que fuera con gente relacionada con la iglesia pues sentían que su identidad y relato sería mejor resguardada⁵⁶.

Independientemente de la fuente utilizada, para que los casos estuvieran dentro del informe y pudieran ser contemplados como parte de las estadísticas incluidas en el mismo, se aceptó lo que denominaron *grados de convicción*. Esta nomenclatura se basó en tres niveles: *plena convicción*, en donde los testimonios los hicieron testigos directos. No hubo discrepancias entre ellos y hay pruebas documentales del hecho y su autoría que lo soportan. *Presunción fundada*: se trata de hechos cuyos testimonios tuvieron discrepancias y además que no fueron observados únicamente por testigos directos. *Presunción simple*: en este caso no hay testigos directos, pero el conocimiento colectivo es suficiente para que el hecho se considere de valor.

Estos *grados de convicción* sirvieron, a su vez, como un primer filtro para su validación. La plena convicción de casos registrados se encontró en el 32.63% de ellos. Los casos con presunción fundada alcanzaron el 42.54% y los casos de presunción simple fueron el 24.82% (CEH, 1999: 63). Para identificar los casos dentro de un grado de convicción, la información registrada tenía que ser analizada y corroborada con algunas otras fuentes. Los casos se sometieron a depuración de información repetida, sobre todo la relacionada con nombres de víctimas o desaparecidos. Finalmente, y tras una última revisión, los casos entraron en las bases de datos para conformar tanto el informe como sus estadísticas.

Dentro del informe, además de los casos registrados, también hay una sección de casos ilustrativos. Este tipo de casos contaron con el mayor grado de convicción y, por lo tanto, se dio lugar una investigación a mayor profundidad. Para realizar esta selección se tomaron en cuenta las siguientes características: que marcaran un cambio importante en las estrategias o tácticas empleadas por alguna de las Partes; que por su gravedad tuvieran un impacto elemental dentro de

⁵⁶ Cf. Apéndice #5 (Pp. 329). Entrevista con Nery Rodenas. “La ODHAG siente satisfacción porque la CEH haya incluido su trabajo dentro del informe. Esto a su vez logró que uno de los objetivos primordiales del Proyecto REMHI se cumpliera al convertirse en un insumo para la CEH”.

la conciencia social; o que ilustraran pautas de violencia de cualquiera de las Partes características de alguna época o región (CEH, 1999: 64). Ochenta y cinco casos están en este apartado.

Si bien el informe tiene como objetivo fundamental esclarecer los hechos de violencia en Guatemala, se determinó que sería indispensable complementar los testimonios (principal insumo) con elementos que contextualizaran la situación. De esta manera, de los cinco capítulos que conforman el informe *Guatemala Memoria del Silencio* el primero se dedicó para un análisis histórico de la situación en el país, incluso antes del conflicto (desde la revolución de 1944). La segunda parte se refiere específicamente a las violaciones de derechos humanos y diferentes hechos violentos en el contexto propio del conflicto. En el tercer capítulo se hace un análisis de las consecuencias que el conflicto armado y la violencia trajeron al país, enfocándose al aspecto social. El cuarto apartado hace un condensado del informe a través de las conclusiones en donde se le asigna responsabilidad de los hechos tanto al Estado Guatemalteco como a la guerrilla.

La responsabilidad que se le asigna al Estado Guatemalteco -principalmente- ante los hechos de violencia se basa en un estudio que se le solicitó a la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS). La información utilizada en este estudio no sólo contempló las cifras y las bases de datos que la CEH logró recabar sino también de algunas otras organizaciones como la ODHAG, Amnistía Internacional, textos científicos y fuentes periodísticas. Se tenía la necesidad de reflejar, con números, los hechos de violencia, por lo tanto, después del estudio, la CEH estima que en términos aproximados tuvieron lugar más de 160,000 ejecuciones y 40,000 desapariciones (CEH, 1999: 73)⁵⁷.

En total, las fuerzas del Estado y sus grupos paramilitares fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas por la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Esto incluye el 92% de las ejecuciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas. Por su parte, las acciones de

⁵⁷ A pesar de la contundencia de la cifra y que la mayoría de las instituciones que han hecho este tipo de investigación tienen cifras similares; han existido autores como Carlos Sabino quien en su texto *Guatemala, La Historia Silenciada (1944-1989)* dedicó un capítulo completo (*Balance de un Enfrentamiento Mortal*) tratando de desacreditar estas estimaciones. El cuestionamiento a las cifras es desglosado de diversas maneras hasta hacer una estimación propia de 37,000 muertes (Sabino, 2008: 389). Sin embargo, el recuento de testimonios tanto por parte de la CEH como la ODHAG evidencia un número mayor.

los grupos insurgentes produjeron el 3% de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia que es un 5% de las ejecuciones arbitrarias y un 2% de desapariciones forzadas. Además, una de cada cuatro víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos fueron mujeres. (CEH, 2004: 20-26). Del total aproximado de víctimas el 83% fueron mayas, y solamente el 17%, ladinos. Menos de 12,000 estaban relacionadas con el conflicto. Además, el Estado fue responsable de 626 masacres y de la aniquilación de más de 450 aldeas en operaciones militares y paramilitares realizadas entre 1980 y 1983 que fue el periodo en que se recrudeció la estrategia de *Tierra Arrasada* (Goikoelea, 2006: 51).

El capítulo quinto comprende las recomendaciones que la CEH formuló de acuerdo con lo establecido en los Acuerdos de Oslo. A la par de la recopilación de testimonios, la CEH consultaba las opiniones y sugerencias a este respecto tanto a las víctimas como a organizaciones colaboradoras de la sociedad civil. Sin embargo, en términos de recomendaciones la Comisión fue un paso más allá, contemplando las necesidades de la sociedad civil como prioridad; por eso se convocó el 27 de mayo de 1998 al Foro Nacional sobre Recomendaciones. Al llamado llegaron alrededor de 400 personas entre miembros de la sociedad civil, académicos, líderes sindicales, miembros de partidos políticos, ex guerrilleros, víctimas y familiares de las mismas. Nunca se pensó en la participación de tanta gente y que tuvieran el entusiasmo y la paciencia de trabajar en largas sesiones. La gente se sintió tomada en cuenta, escuchada y con el aliento de que tal vez la justicia habría de llegar.

Las recomendaciones del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico cubren cinco rubros: medidas para preservar la memoria de las víctimas, de reparación de las víctimas, para fomentar la cultura del respeto mutuo, para fortalecer el proceso democrático y los derechos humanos y medidas para favorecer la paz (CEH, 2004: 12).

Las medidas en torno a la memoria de las víctimas se consideran parte de la identidad nacional. Esto se lograría a partir de la construcción de monumentos, parques o poner nombres de víctimas a lugares públicos. El objetivo es no olvidar y como parte de estas medidas se decretó el 29 de diciembre como el Día de la Reconciliación. Además de conservar la memoria, se trata de un

resarcimiento moral. Pocos presidentes han tomado la iniciativa de hacer ceremonias solicitando el perdón de los familiares por acciones cometidas por el Estado guatemalteco a través de un homenaje; puede ser porque esto implica asumir la responsabilidad⁵⁸.

Se consideró que, era necesario tener programas de reparación o compensación a las víctimas. Básicamente, se habló de reparación moral y material de los daños para las víctimas directas de las violaciones a los derechos humanos o sus familiares directos. La ayuda psicosocial ha sido activa en las comunidades a donde alcanza a llegar. Pero, la búsqueda de cuerpos y la exhumación de osamentas ha sido el programa más socorrido a la fecha. La gente cree más importante -que la parte económica-, llorar a sus muertos y darles una sepultura digna.

Sin embargo, tampoco se puede dejar a un lado la parte económica. Esto considerando el cambio de roles que han tenido muchas familias en donde las víctimas fueron los hombres y las mujeres se han convertido en sostenes de la familia, o bien las familias que adoptaron a los hijos de sus parientes fallecidos. A diferencia de la parte moral, la ayuda económica y material es la que ha tenido un pobre desempeño. Para ese trabajo se creó el Programa Nacional de Reparación (PNR) pero hasta el 2006 seguía sin estar claro cuáles eran los mecanismos que se debían seguir para determinar si una persona puede ser o no beneficiaria del programa. A partir del 2002 se le asignó un presupuesto de 300 millones de quetzales cada año, pero de estos, cada año se utilizan en pagos a las víctimas unos 33 millones solamente. Hasta agosto de 2006, solamente fueron beneficiadas 623 personas, que es menos del 5% del total de las víctimas documentadas. Y según Miguel Itzep, Coordinador del Movimiento Nacional de Víctimas Q'Nil Tinamit, indica que el programa hasta el año 2017 solamente ha dado respuesta al 30% de los expedientes archivados y pese al bajo avance en la labor del Programa, de acuerdo con el acuerdo gubernamental establecido desde la creación del mismo, el PNR dejará de funcionar en el año 2023 (Paredes, 8 de mayo de 2018).

⁵⁸ En entrevista con Carlos Figueroa, se narra el homenaje que se le hace a sus padres, asesinados en octubre de 2011 encabezado por el entonces Presidente Álvaro Colom. Se hace hincapié en que estas actividades dependen directamente de quien esté al mando y en el caso del gobierno de Otto Pérez Molina (militar de rango en los periodos más álgidos del conflicto y relacionado con matanzas además de representante de las Fuerzas Armadas en la Firma de los Acuerdos de Paz); estos hechos están detenidos; no se asume responsabilidad alguna. Cf. Apéndice #2 (P. 321). Entrevista testimonio de vida con Carlos Figueroa sobre su testimonio de vida.

Para fortalecer los derechos humanos, la democracia y la paz, se hicieron al menos 20 recomendaciones. La realidad es que muy pocas se han puesto en práctica; pues estos son planes a largo plazo. Uno de los más importantes está relacionado con la educación para las generaciones venideras. Se considera importante que el contenido del informe y la verdad de los hechos se dé a conocer como parte de la historia del país. Se requería que en carreras relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades hubiera materias relacionadas para que las nuevas generaciones aprendan y comprendan lo que el país vivió. La ODHAG ha hecho diversas propuestas para incorporar esta historia reciente del país como parte de los programas educativos con poco éxito, pues sólo algunas escuelas lo han incorporado como una iniciativa propia⁵⁹.

Como parte de los trabajos para la construcción de la paz, se han continuado los trabajos de exhumación de restos, sobre todo con base en los testimonios de víctimas o perpetradores. “El objetivo de las investigaciones antropológico forenses que lleva a cabo la FAFG, es ayudar a las comunidades y a los familiares de las víctimas para que recuperen los restos de sus familiares para darles un entierro legal y según sus costumbres; al mismo tiempo, disminuir el número de cementerios clandestinos donde yacen las víctimas del conflicto armado interno” (FAFG, 2013). Estos hallazgos, han contribuido con algunos juicios, como el del General Ríos Montt, presentando evidencias. Por lo tanto, se apoya a la sociedad en la reconstrucción de la historia y la dignificación de las víctimas.

Una de las conclusiones de la Comisión fue que la mayor parte de las violaciones graves a los derechos humanos se llevaron a cabo por órdenes -o al menos con pleno conocimiento- de los altos mandos militares y gubernamentales. A través de testimonios, declaraciones voluntarias de perpetradores, documentos oficiales y osamentas se han tratado de llevar a cabo juicios. Si juntáramos a las comisiones de Guatemala, Haití y Uganda, en total han logrado colaborar en 20 o 30 juicios por asesinato, tortura o violaciones de los derechos humanos perpetrados por gobiernos anteriores. La gran mayoría de estos juicios han sido contra soldados de bajo rango que, si bien

⁵⁹ Cf. Apéndice #5 (Pp. 329). Entrevista con Nery Rodenas.

participaron en los hechos, no fueron quienes planearon o dirigieron las atrocidades. Casos como el juicio al expresidente Ríos Montt, que tuvo una sentencia sospechosamente anulada, permitiendo que muriera impune.

Como parte de las recomendaciones se planteaba la creación de la Fundación por la Paz y la Concordia. Esta fundación tendría como única labor vigilar e impulsar que las recomendaciones planteadas por la Comisión se pusieran en práctica. No obstante, y siendo una contribución con la aparente voluntad del gobierno de colaborar en la construcción de una sociedad justa y con paz, este proyecto nunca se concretó. Algunas organizaciones como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), formada por parientes de víctimas y víctimas del conflicto armado, aseguran que el dictamen fue negativo porque la mayoría de los diputados son del “partido del Gobierno” quien ni siquiera acepta que hayan sucedido tales atrocidades. La fundación nunca pudo ser creada ni las recomendaciones impulsadas realmente.

El órgano legislativo rechazó la propuesta de crear esta fundación el 5 de mayo del 2000 con el objetivo de que las recomendaciones se pudieran en práctica. El alegato ante esta negativa fue la contradicción de crear una Comisión y también una Fundación. Y es que la CEH planteaba el mandato de la Fundación, su composición, procedimientos, instalación, sede, recursos humanos, financieros y materiales. Esto no era conveniente para el gobierno pues tendrían que atender a las recomendaciones del informe; pero para evitar el repudio total de la sociedad civil, el grupo del senador Ríos Montt propuso la creación de una Comisión para la Paz y la Concordia cuyo objetivo es “coordinar las acciones necesarias para lograr la reconciliación de los guatemaltecos” (Balsells, 2009: 151). En apariencia, se trataba de lo mismo; sin embargo, la diferencia era que no había nada escrito relacionado con las recomendaciones, por lo tanto, podrían ignorarse.

Para cuando la Comisión terminó su informe, *Guatemala Memoria del Silencio*, se decidió que la entrega del informe se haría de manera pública en el Teatro Nacional de Ciudad de Guatemala el 25 de febrero de 1999. Al magno evento asistieron alrededor de 2,000 invitados entre miembros del gobierno, de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, algunas víctimas, y algunas personas involucradas en los trabajos de la Comisión. En el evento se dio lectura a las

partes más emotivas y representativas del informe. Se habló de la importancia de la memoria y de los pasos para la reconciliación en diferentes momentos. Sin embargo, “el 25 de febrero de 1999 el gobierno y la sociedad sufrieron en Guatemala un choque emocional del cual no logran reponerse durante la entrega del reporte” (Balsells, 2009: 29). Lo más representativo del evento no pudo llevarse a cabo pues el presidente, Alvaro Arzú Irigoyen no asistió a la ceremonia para recoger el informe dejando en claro la postura gubernamental: sin voluntad para asumir responsabilidades o para apoyar a las víctimas y sus familias.

Los doce tomos de *Guatemala Memoria del Silencio* pudieron darse a conocer. Sin embargo, no se puede negar que después de todo el entusiasmo que hubo alrededor de la comisión, un desplante de esta especie por parte de quien sería el responsable de poner en práctica las recomendaciones, generó desilusión entre la sociedad civil. La CEH cumplió con los fundamentos que le dieron vida: el derecho del pueblo a conocer la verdad, la esperanza de que este conocimiento evite que la violencia vuelva a estar presente, evitar venganzas y fortalecer el proceso de democratización. Gracias a la Comisión -aunque no como proyecto único- el pueblo pudo conocer la verdad y se ha logrado que la verdad sea conocida a nivel internacional. Los últimos tres fundamentos, puede ser que sean complejos, aunque no imposibles, sobre todo porque salen de la capacidad de acción de la propia Comisión.

El objetivo primordial de la CEH, que era esclarecer los hechos de violencia, se ha cumplido. De acuerdo con Carlos Figueroa⁶⁰, se trata de un documento vital para la preservación de la memoria y plantea una verdad “oficial” de la cual se puede partir para la exigencia de justicia. Para Nery Rodenas⁶¹ la Comisión cumplió con las expectativas planteadas; logró que la gente contara su propia historia, que la gente se desahogara y logró formar nuevos espacios para la verdad, justicia y reconciliación. Blanca Hernández⁶² comenta que cualquier documento basado en investigación

⁶⁰ Cf. Apéndice #3 (Pp. 324). Entrevista con Carlos Figueroa.

⁶¹ Cf. Apéndice #5 (Pp. 329). Entrevista con Nery Rodenas.

⁶² Cf. Apéndice #1 (Pp. 319). Entrevista con Blanca Hernández.

del conflicto resulta importante y útil. Se coincide en que los logros de la CEH fueron importantes para la sociedad guatemalteca.

Sin embargo, también se coincide en que la verdad contenida en el documento, y sobre todo las recomendaciones, que es uno de los aspectos más relevantes del informe final, no han sido cumplidos en su mayoría, por lo tanto, los alcances parecen estar truncados. La realidad es que el mandato de la CEH termina en el momento en que se entregó el informe y no es parte de su trabajo asegurar que las recomendaciones sean cumplidas. De manera irremediable, esto obliga a enaltecer las dos principales limitaciones de este organismo: la no individualización de responsabilidades y la falta de efecto judicial del informe y las recomendaciones.

A pesar del optimismo y del apoyo con el que se contaba, el entusiasmo hizo un alto en cuestión de juicios y de listas de perpetradores. Mario Enríquez, entonces Ministro de Defensa reunido con defensores de derechos humanos estableció: "...damos nuestro total apoyo a la creación de una Comisión de la Verdad. Como en, Chile: verdad, pero no procesos judiciales" (Hayner, 2008: 128). Se pactó, finalmente, que "los trabajos, recomendaciones e informe de la Comisión no individualizarían responsabilidades, ni tendrían propósitos o efectos judiciales" (Hayner, 2008: 81). Ambas medidas fueron repudiadas por la sociedad civil. Al final, la CEH cumplió su trabajo, aunque con estas limitaciones que pudieron cambiar la historia del país.

Los entrevistados mencionan que tal vez faltó hacerle más promoción para que más gente pudiera conocer el informe, haciendo referencia a comunidades alejadas. El informe debería de ser más relevante para la educación de las nuevas generaciones guatemaltecas. Hubiera sido un gran acierto que el informe pudiese ser utilizado como elemento clave para enjuiciar y no solamente como complemento de testimoniales que tienen que ser ratificados por quienes los compartieron. Lo mencionado hubiera sido un gran acierto, pero el mayor hubiera sido que se hubiera contemplado obligar el respeto a las recomendaciones. El hecho de que muy pocas hayan sido realmente cumplidas ha logrado que el entusiasmo de la población vaya mermándose.

La realidad es que pocos son los responsables del genocidio que han sido castigados; pero ninguno fue nombrado por la Comisión. La impunidad sigue siendo la constante en Guatemala. Esto

ha derivado en que se siga reproduciendo el clima de miedo y se opte por el silencio, pues víctimas y victimarios siguen viviendo -en algunas regiones- con una pared de por medio. No hay una lista que nombre a los perpetradores, como la había para quienes serían perseguidos por los escuadrones de la muerte, pero la gente los reconoce. Ojalá y fuera diferente, pero, el no poder acceder a la justicia parece que sólo queda mirar para otro lado.

Guatemala Nunca Más

“¿Quién fue el vencedor de esta guerra? Todos perdimos. No creo que alguien tenga el cinismo de subirse al carro de la victoria sobre los despojos de miles de guatemaltecos: padres de familia, madres, hermanos, niños de la más tierna edad, inocentes del infierno al que fueron sometidos. El tejido social de nuestra patria fue destruido y de eso queda constancia en los miles de testimonios de este informe.”
(ODHAG, 1998: X, tomo I)

A pesar de todas las atrocidades vividas por la población guatemalteca, se buscaba cobijo bajo el manto de la iglesia católica. La iglesia se convirtió en algo más que un oído para escuchar a la gente y brindarle alivio; se convirtió en un organismo para denunciar las tragedias aunadas al conflicto armado. De esta manera, la Arquidiócesis tomó la iniciativa -en 1990- de formar la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala (ODHAG). Esta oficina tiene como objetivo “generar y fortalecer procesos de empoderamiento, promoción y defensa de los derechos humanos para contribuir a la construcción de una sociedad menos excluyente con base en la Doctrina Social de la iglesia” (ODHAG, 2013).

La primera iniciativa para conocer la verdad en Guatemala estuvo a cargo de la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de este país (ODHAG). El objetivo de este proyecto era hacer una investigación a fondo para “documentar las décadas de abusos y masacres, con la esperanza de complementar y reforzar las labores de la oficina de derechos humanos” (Hayner, 2008: 50). El resultado fue el Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) llamado *Guatemala Nunca Más* publicado en 1998 y dirigido por Monseñor Juan José Gerardi Conedera.

Es importante destacar que la iglesia tuvo una participación activa a lo largo del conflicto armado; no como institución, pero sí de manera individualizada. “Desde los 70’s el movimiento de la teología de la liberación es asumido por muchos religiosos de Guatemala y algunos teólogos de la liberación se hicieron revolucionarios”⁶³. Esto no quiere decir que la iglesia, en general, era

⁶³ Cf. Apéndice #4 (Pp. 327). Entrevista con Neptalí Monterroso.

revolucionaria, pero sí que algunos catequistas y padres optaron por participar con la guerrilla. Otros simplemente siguieron con un pensamiento sino revolucionario, sí democrático, que reprochaba que la iglesia también se hubiera convertido en un blanco militar y fuera considerada subversiva por hacer reuniones en donde pudiera hablarse de la dignidad humana⁶⁴.

En 1988, la Conferencia Episcopal de Guatemala nombró al Obispo Rodolfo Quezada Toruño y a Monseñor Juan José Gerardi Conedera para que participaran en la Comisión Nacional de Reconciliación. Se trataba entonces de participar directamente en el proceso de paz que el país habría de enfrentar. Es por esto que se crea la ODHAG, pues la iglesia a través de sus representantes, tomaron como responsabilidad contribuir a la paz a través del perdón y la reconciliación. De esta manera, el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica vino a fortalecer el vínculo que ya existía entre las víctimas y la iglesia católica. Hay que hacer hincapié en que no todos los obispos participaron en este trabajo; hubo algunos bastante críticos.

La iglesia logró ser un participante activo en el proceso de paz guatemalteco. Pero el papel tan relevante que alcanzó la ODHAG se debió a su relación primaria con los derechos humanos y la dignidad humana; y entonces su vínculo eclesial pasaría -aparentemente- a ser secundario. Esto porque la ODHAG ante el proyecto que emprendía, asumió los mismos peligros que cualquier otra organización no gubernamental relacionada con la verdad y los derechos humanos en ese momento. El seguimiento estrecho por parte de la ODHAG a la firma de los Acuerdos de Paz se dio a partir de 1994, año en que se decide emprender este proyecto al presentarlo a los Obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala obteniendo su “visto bueno”.

Dentro de los Acuerdos de Paz, se contempló la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). Sin embargo, la simple creación de la misma ya imponía importantes limitaciones empezando por el tiempo que se tendría para hacer el trabajo (inicialmente seis meses), además de no individualizar responsabilidades. La ODHAG decide echar a andar el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) antes de la Firma de los Acuerdos de Paz y que la CEH empezara

⁶⁴ La situación de persecución vivida por la iglesia y por Monseñor Juan José Gerardi Conedera se puede ver reflejada en el documento audiovisual *Gerardi* de los directores Sammy Jimmy Morales (2010) producida por la propia ODHAG.

sus trabajos. “Uno de los objetivos primordiales, entonces, del REMHI fue generar insumos para la CEH para tratar de minimizar las limitaciones de la misma”⁶⁵.

“Durante muchos años los familiares y sobrevivientes no pudieron compartir su experiencia, dar a conocer lo sucedido ni denunciar a los responsables” (ODHAG, 1998: XIX *Tomo 1*). Esto haría el REMHI. Debido a que el objetivo primordial era adelantar el trabajo que tendría que hacer la CEH en su momento; la tarea que habría de realizarse era escuchar la verdad de la gente y recopilar testimonios. Se dio prioridad a las comunidades indígenas lejanas, porque la CEH no tendría el tiempo para ir a lugares tan alejados y porque el idioma podría ser una barrera. Pero –seguramente- ya habría una iglesia y catequistas que pudieran participar en este arduo trabajo de ir ganando la confianza de las personas para que dieran su testimonio.

En abril de 1995 se echó a andar el proyecto en territorio guatemalteco. Los estratos de la iglesia participantes cubrieron la mayor parte del territorio nacional:

- Arquidiócesis de Guatemala
- Arquidiócesis de Los Altos
- Diócesis de El Quiché
- Diócesis de La Verapaz
- Diócesis de Huehuetenango
- Diócesis de San Marcos
- Diócesis de Sololá
- Diócesis de Escuintla
- Diócesis de Jalapa
- Vicariato de Petén
- Vicariato de Izabal

Fuente: ODHAG, 1998: XIX tomo 1

La estrategia para desarrollar el trabajo se realizó en cuatro etapas: la preparación, la recolección de testimonios, el procesamiento y análisis de la información, así como la devolución y el seguimiento. Cada una de estas etapas tuvo sus importantes complejidades; pero la primera fue particularmente difícil porque además de la capacitación de los participantes, requería de un minucioso trabajo de organización. Durante la recolección de testimonios, lo complejo fue hacer que la gente tuviera confianza y soportar amenazas por parte del ejército. El procesamiento y análisis se hizo en las oficinas de la ODHAG con un impecable trabajo organizativo, pues la cantidad de

⁶⁵ Cf. Apéndice #5 (Pp. 329). Entrevista con Nery Rodenas.

información acumulada era muy alta. La devolución y el seguimiento era la presentación del trabajo y verificar el uso que se le daba al mismo -cuestión que se hace hasta hoy-.

El proyecto era a todas luces ambicioso. Por lo tanto, desde un inicio, se contó con diferentes organismos nacionales e internacionales que se solidarizaron de diferentes maneras. Algunos cooperaron con dinero; algunos más con mano de obra, pero sin duda cada uno en su medida, logró conjuntarse a este esfuerzo. Algunos de los organismos participantes fueron: Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Noruega (NORAD), la Unión Europea (UE), Asociación Protestante de Cooperación para el Desarrollo (EZE), MISEREOR de Alemania, DANIDA, Oxfam del Reino Unido, Consejería de Proyectos, Fundación Heinrich Böll, Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica (DED), Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Gobierno de Suiza e INKOTA-Médico Internacional de Alemania.

La primera etapa del proyecto -la preparación- se basó en la capacitación y la organización del territorio para el trabajo. La capacitación se desarrolló en tres módulos: manejo del conflicto armado, salud mental y manejo de la entrevista. De acuerdo con el reporte *Guatemala Nunca Más* (1998) el proceso de capacitación involucró a unas 800 personas. Estas personas participaron en el proyecto en diferentes instancias, aunque no todos recolectaron entrevistas. Los *animadores* como se les llamó a los entrevistadores, no conocieron lo complejo de la situación hasta que la gente revivió su historia a través de sus testimonios. Ninguna capacitación puede preparar a alguien para ponerlo frente a una verdad, y sentir lo que sufrió quien la vivió.

Del total de las personas capacitadas, aproximadamente la mitad (400) trabajaron ya sea recolectando entrevistas o haciendo trabajo voluntario. Finalmente, no sólo escuchar era el objetivo sino parte del perdón y la reconciliación que el proyecto buscaba; dar a conocer la verdad, pero también promover los derechos humanos, la educación y la salud entre otros aspectos. Esto logró, a su vez, que el trabajo fuera aún mayor –y en ocasiones más peligroso- en las comunidades del país. Se presentaba el proyecto REMHI y cuáles eran sus objetivos; la gente poco a poco se animó a dar sus testimonios incluso de manera pública, y además se pusieron en práctica diferentes proyectos como las Comisiones para Encontrar Familiares.

En cuanto a la organización, se planteó un esquema en donde la base de la pirámide serían las parroquias que ya de por sí estaban organizadas en regiones geográficas o lingüísticas. Esto haría el trabajo más sencillo y fácil de controlar por parte de los organismos (diócesis, vicariatos y arquidiócesis) participantes, pues se establecieron coordinaciones en las cabeceras departamentales. En total se abrieron trece oficinas en donde se llevó a cabo la capacitación y donde más tarde la gente acudiría a dar su testimonio. La siguiente tabla muestra las oficinas que estuvieron activas en cada departamento:

DEPARTAMENTO (Coordinación)	REGIÓN (Ubicación de oficina)
Quiché	Santa Cruz, Chajul, Ixcán
Alta y Baja Verapaz	Cobán, Rabinal
Petén	San Benito
Huehuetenango	Huehuetenango
Quetzaltenango	Quetzaltenango
Izabal	Puerto Barrios, El Estor
San Marcos	San Marcos
Escuintla	Escuintla
Guatemala	Guatemala (ODHAG)

Fuente: ODHAG, 1998: XX Tomo 1.

Las oficinas fueron los lugares en donde se concentró el trabajo. Pero, la atención llegó a más gente pues las oficinas ofrecían servicio también a los alrededores como el caso de la oficina de Quetzaltenango que también brindó atención a los departamentos de Totonicapán y Retalhuleu. Hubo algunas localidades en donde no se abrieron oficinas, pero la Diócesis trabajó directamente con la gente en su propio espacio. Este es el caso de los departamentos de Chimaltenango y Suchitepéquez que fueron atendidos por la Diócesis de Sololá con apoyo de organizaciones sociales. Paradójicamente, hubo departamentos en Guatemala como Zacapa y Jalapa que quedaron casi desatendidos por el proyecto; mientras que hubo incluso esfuerzos internacionales como el trabajo que se hizo en los campos de refugiados en Campeche, por parte del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).

La segunda etapa fue la recolección de los testimonios en cada una de las oficinas y organismos anexos ya mencionados. Este proceso, que tuvo una duración de entre cuatro y seis meses en todas las regiones, hizo frente a un gran número de adversidades. Además de la

metodología, el tiempo o el convencer a la gente de lo importante de su participación, "...a pesar de la mejora del clima de miedo en los últimos tiempos, la permanencia del poder militar y la actuación de los grupos insurgentes y paramilitares en el área rural hacían de este esfuerzo una experiencia difícil, que tenía que enfrentarse a las presiones y amenazas contra la población que podía dar su testimonio" (ODHAG, 1998: XX tomo 1).

Es importante recalcar, que esta segunda etapa no se hubiera podido llevar a cabo en tan poco tiempo si no hubiera habido detrás una campaña para dar a conocer el proyecto. De esta manera, durante la última etapa de la capacitación se hizo una campaña para que las personas estuvieran familiarizadas con el proyecto y amortiguar un poco el miedo de dar sus testimonios. La primera campaña se dio en radio y televisión con anuncios breves; esto sirvió para que la gente empezara a conocer la existencia de este proyecto. Sin embargo, los espacios de radio y televisión -además de costosos- eran breves por lo que se optó por otro tipo de acción para que la gente no sólo conociera el proyecto sino se involucrara con él y tuviera un mayor alcance.

Con el fin de tener una mayor penetración en las comunidades se optó por los medios impresos. Se hicieron tirajes importantes de trípticos de carácter informativo en siete idiomas mayas que, bajo el lema de *Ahora es el momento* daban a conocer el origen, los objetivos del proyecto, cómo se trabajaría, quién estaba involucrado, etc. Sin embargo, esto dejaba fuera de alcance a las personas que no sabían leer. Por lo tanto, se desarrollaron a la par cuadernillos que, con lenguaje sencillo, pero con mayor énfasis en ilustraciones cumplían con el objetivo de informar. Adicionalmente, materiales como posters fueron regalados a grupos populares, después de una presentación formal del proyecto para que pudieran dar a conocer el trabajo entre sus comunidades.

"Una de las valoraciones iniciales sobre la viabilidad del proyecto era el impacto del miedo" (ODHAG, 1998: XXV tomo 1). La campaña que se hizo previa a la toma de testimonios fue de gran utilidad para que la gente conociera el proyecto; pero se necesitó más que una campaña para motivar que la gente venciera el miedo. Un punto clave para que el proyecto funcionara fue que la iglesia estuviera detrás del mismo, lo que contribuyó a que la gente se sintiera más segura. Por lo tanto, la iglesia participó, de lleno, haciendo campaña para la participación de la gente en el proyecto

con un programa de radio para las comunidades que se transmitía a través de las radios católicas. “Durante quince minutos, *Doña Remhi y Don Olvido*, discutían sobre lo conveniente o no de recordar la historia de hechos tan atroces” (ODHAG, 1998: XXV tomo1); enfatizando la necesidad de dar a conocer la verdad.

El ánimo de la gente para participar en este trabajo aportando su testimonio, se dio de manera lenta pero efectiva. Sin embargo, se llegó a hablar de una crisis metodológica en la toma de los testimonios porque se empezaron a usar los testimonios como moneda de cambio para obtener “apoyos” promovido por el gobierno en turno y el aparato militar. Además, algunos testimonios dieron paso a denuncias; esto no se había contemplado dentro de la capacitación que los *animadores* habían recibido.

“... la memoria se mueve a su propio ritmo, por eso las formas de movilización colectiva fueron distintas. En algunos lugares la gente fue llegando desde el inicio –a veces abrumadoramente- a dar su testimonio; en otros pasaron meses hasta que se quiso hablar; en unos, fueron las personas individualmente las que llegaron a dar su historia; en otros, fueron grupos enteros los que dieron su testimonio colectivo” (ODHAG, 1998: XXII tomo 1). En ocasiones en cuanto se veía que alguien de la comunidad había acudido con los *animadores* la gente hablaba y motivaba a los demás. Hubo algunos líderes religiosos de otros credos que amenazaban a la gente porque promulgaban que lo sucedido era porque “Dios lo había querido”⁶⁶.

Asimismo, hubo regiones en donde miembros del Ejército negaron la entrada a la gente trabajando para el proyecto REMHI. En estos casos, los propios soldados dentro de los cuarteles tomaron los testimonios de la gente. Esto hacía que poca gente quisiera hablar por miedo, pero “misteriosamente” después de unos días, mucha gente acudía a los cuarteles – donde antes la gente procuraba ni acercarse- a dar su testimonio. El Ejército inició una dinámica que a la fecha no se ha logrado erradicar: “ayuda” a cambio de su testimonio. A partir de ese momento, el testimonio se

⁶⁶ Durante el gobierno del General Ríos Montt, mucha gente se convirtió en evangélica, que era la religión del entonces presidente. La gente se vio motivada a cambiarse de religión pues se les prometía seguridad. Bajo este credo, lo sucedido fue culpa de la misma gente y porque “Dios así lo dispuso”. Hay comunidades enteras que cambiaron su fe, a quienes no se les permitió dar su testimonio y quienes se han convertido en un problema para hacer las exhumaciones. Cf. Apéndice #1 (Pp. 319). Entrevista con Blanca Hernández.

convirtió en una moneda de cambio por despensas, por materiales para construcción, etc. Incluso hoy en casos de exhumaciones o declaraciones para algún juicio, algunas personas han preferido lucrar a encontrar el perdón, la reconciliación y que se les haga justicia.

Se llegó a hablar de una crisis metodológica en la toma de testimonios, sin embargo, no se trató propiamente de una crisis sino de ajustar la parte teórica a la parte práctica. Como parte de la capacitación y para homogeneizar la toma de testimonios la propia Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado produjo un documento breve denominado *REMHI: Guía de la entrevista* (ODHAG, 1996). Desde el inicio de la toma de testimonios se dieron cuenta que no era posible homogeneizar las entrevistas, que cada entrevistado tenía tiempos para hablar y llorar; que las actitudes del entrevistador eran fundamentales; que los entrevistadores también tenían un impacto psicológico ante lo que escuchaban. Si bien el documento contemplaba aspectos fundamentales del proceso y los *animadores* lo habían estudiado; la realidad superaba cualquier documento.

El documento *REMHI: Guía de la entrevista* (ODHAG, 1996), aclara las posibilidades de testimonio: personas que hayan sufrido personalmente violaciones o algún familiar directo (muerte, torturas, desapariciones forzadas, violaciones, destrucción de casas, robo de tierras, etc.) y testigos o perpetradores de violaciones que quieran decir su verdad. Las personas inmiscuidas en el proyecto debían tener como base la importancia de los testimoniales. Tener en mente al testimonio como: un compromiso para vencer el miedo; un paso para abolir la impunidad; un medio para recordar y honrar el nombre de los muertos; una manera de unir a la gente, pero sobre todo un esfuerzo para alcanzar la paz y que las violaciones no se repitan. El significado del testimonio, se transformó en un gran reto tanto para los entrevistados como para los entrevistadores⁶⁷.

Algo que tampoco se había contemplado, fue que el trabajo no terminaría una vez que la gente diera su testimonio. Los testimonios dieron paso a denuncias que ellos no estaban preparados para dar seguimiento, pero tampoco estaban en posición de coartar los ánimos de la gente. Es por ello que la ODHAG se convirtió -con el paso del tiempo- en un organismo de acompañamiento para

⁶⁷ Cf. Anexo 9 (Pp. 311). Información más relevante para los entrevistadores dentro del documento *REMHI: Guía de la Entrevista*. (ODHAG, 1996).

las demandas de verdad y justicia de la gente sin importar origen o posición económica. Hasta la fecha, esta Oficina sigue trabajando para que la verdad se sepa a través de publicaciones anuales sobre diferentes casos. También se encamina a la gente por la vía legal y como acompañamiento en las exhumaciones⁶⁸.

La siguiente fase a la toma de testimonios fue concentrarlos para hacer su clasificación. Esta acción fue un trabajo desgastante por el simple hecho de determinar cuáles serían los rubros a clasificar. Por lo tanto, lo primero fue analizar los resúmenes de acuerdo con las regiones, entonces se validó la repetición de la información y los nombres que la gente daba para así transcribir entrevistas consideradas clave. Se hizo el análisis de 6.494 testimonios recogidos de los cuales 1 de cada 5 fueron transcritos. La clasificación de los testimonios se dio con base en cinco áreas temáticas: sociopolítica; psicosocial; cultural; jurídica y de género (ODHAG, 1998: XXVII tomo 1).

La última parte del proceso denominada “devolución y seguimiento” consistía en una primera instancia en la entrega a la sociedad del documento completo. El documento resultado del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica fue llamado *Guatemala Nunca Más*. El 24 de abril de 1998 el director de este proyecto Monseñor Juan Gerardi dentro de la Catedral de Guatemala ubicada en la capital del país hizo la presentación oficial del proyecto destacando “la paz es la verdad, no el temor ni el terror... mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán sin cicatrizar” (Morales, 2010).

Guatemala Nunca Más, resultó ser un documento que consta de cuatro tomos en donde se va más allá de la historia cruel del conflicto armado; se habla de gente con nombres y apellidos que trascienden el hecho de ser un número más de la población afectada para transmitir su experiencia, su sentir, su dolor y su clamor de justicia. Cada uno de los tomos tiene una temática específica, pero todos están plagados de la parte humana a la que sólo un testimonio puede acercar. Los tomos y sus temáticas son las siguientes:

⁶⁸ Cf. Apéndice #5 (Pp. 329). Entrevista con Nery Rodenas.

- *Tomo I- Impactos de la Violencia*- Como su nombre lo indica este tomo se centra en los episodios de violencia a los que la mayor parte de la población guatemalteca fue expuesta en diferentes medidas. Este tomo intenta dar una explicación relacionada con los móviles de la violencia, y por qué en momentos se disparó a grados casi increíbles. Sin embargo, se centra en las consecuencias de la violencia en diferentes ámbitos: el individual, el familiar y el colectivo; haciendo énfasis en la violencia sistemática en contra de la infancia y las mujeres. Se incluyen también los cambios sociales que sufrieron las comunidades con la militarización de las mismas, la adaptación y la resistencia a circunstancias extremas de los desplazados, que formaron nuevas aldeas para subsistir. Finalmente, se habla de la reparación y las demandas específicas de la población derivadas de la violencia.
- *Tomo II – Los Mecanismos del Horror*- “Las características de la violencia masiva ponen de manifiesto que los efectos descritos no sólo han formado parte de la dinámica de enfrentamiento armado entre dos bandos, sino que se derivan de una estrategia de guerra en la que la gente se convirtió en el objetivo central” (ODHAG,1998: VII tomo 2). En este tomo se hace una descripción minuciosa de la organización de las policías y del ejército que permitieron esos grados de violencia. El tener una estructura como base y su funcionamiento riguroso se plantea la forma en que la población se convirtió en el objetivo principal de manera sistemática. Esto se logra no sólo a través del análisis de las masacres sino de la infiltración, de la participación obligada de civiles en las patrullas (PAC); los trabajos forzados; en términos generales; el resquebrajamiento del tejido social a través de la violencia, ya fuera como víctima o como actor.
- *Tomo III – El Entorno Histórico*- “... es notable que la historia del conflicto armado en Guatemala es todavía una tarea pendiente” (ODHAG, 1998: VII tomo 3). Como su nombre lo indica, la información contenida en el tomo 3 del informe REMHI contiene una narración de la vida en Guatemala desde finales del siglo XIX y hasta finales del siglo XX. Si bien la narración no pretende exponer los motivos del conflicto, a través de los capítulos se puede tener un

panorama más claro de la situación que el país ha enfrentado desde diferentes perspectivas -no sólo sociales- y que pudieron haber desencadenado los diferentes tipos de violencia.

- *Tomo IV – Víctimas del Conflicto*- En éste, que es el tomo más extenso, se pueden encontrar listados de víctimas de masacres; de desapariciones forzadas; de personas que nunca aparecieron o que reaparecieron muertas; de torturas; de maltratos, o víctimas de muerte por enfermedad, hambre, accidente o suicidio durante alguna persecución; incluso la tristeza, el susto, la pena u otras causas no identificadas. Además del intenso trabajo de filtración de nombres que pudieron haber sido repetidos a través de los testimonios, se hace un trabajo de análisis sobre las víctimas, sus orígenes, las violaciones más comunes, las fuerzas responsables, etc. Historia, testimonios, listados, estadísticas que al final recaen en un conjunto de recomendaciones generales presentadas por el proyecto REHMI.

Además de los testimonios que retratan el sentir de la gente; el recorrido histórico que promueve el entendimiento de la violencia sufrida y las estadísticas que reflejan los alcances del conflicto; las recomendaciones marcan la pauta para una verdadera regeneración del tejido social guatemalteco. Si bien este proyecto no se trata de una comisión de la verdad o de esclarecimiento histórico oficial, las recomendaciones propuestas en este documento se pueden encontrar en el trabajo realizado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de manera casi idéntica. Las recomendaciones logran que el trabajo se convierta también, en una propuesta de cambio social que promueve la justicia y la dignidad de los guatemaltecos víctimas -o no- del conflicto armado.

“...el Estado debe tomar medidas como una forma mínima de restitución y de aliviar los daños. En esas medidas se deberá incluir el resarcimiento, la atención a las víctimas, la reparación moral, la restitución de la verdad y la memoria colectiva de las víctimas” (ODHAG, 1998: 531 tomo IV). Las recomendaciones se hacen de manera directa al Estado (en su mayoría), no sólo por haber sido quien ejerció la mayor violencia sistemática en contra de la población, sino porque como órganos de justicia social es el rol que le corresponde ante la sociedad. Esto no exime a la URNG de recibir las propias.

Cuando se habla de resarcimiento y reparación moral se contemplan dos perspectivas. La restitución material, que se trata de devolver a las víctimas lo que perdieron en el conflicto. Es decir, devolver la vivienda que abandonaron por huir o que fue quemada dentro de la estrategia de tierra arrasada, dar animales que pudieron haber sido robados, abandonados o muertos; así como semillas para que reinicien las siembras. También se habla de medidas de indemnización que se trata de compensaciones económicas por los daños sufridos; ya sea daños físicos y/o morales provocados por la violencia o la pérdida de oportunidades como no asistir a una escuela por huir. Todas estas medidas haciendo hincapié en que no se trata de medidas asistencialistas sino de resarcimiento y en el hecho de que hay que poner especial atención en el desvío de recursos para que éstos lleguen a las víctimas y no se conviertan en moneda de cambio político.

La atención a las víctimas contempla tres aspectos clave: atención médica, psicológica o psiquiátrica y servicios jurídicos. De inicio, se habla de la prestación del servicio a cualquier persona sin importar su origen étnico y la cobertura de gastos por parte de las instancias estatales. Como consecuencia de las torturas o de los ataques perpetrados por ambos bandos del conflicto -aunque en mayor medida por parte del Ejército y sus escuadrones de la muerte- hay gente mutilada o con daños a tratar de por vida, que no reciben la atención médica adecuada. Una vez que la gente ha sido valiente y ha reabierto las heridas para dar su testimonio la ayuda psicológica o psiquiátrica es vital para que las atrocidades -a modo de venganza- no se repitan. Y, teniendo como base la verdad y la justicia, colaborar con el derecho jurídico de la población.

Sin embargo, la recomendación que más matices e implicaciones tiene es aquella relacionada con la memoria colectiva. Esto porque en gran medida, depende de que “el Estado debe reconocer públicamente los hechos y sus responsabilidades en las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos de la población guatemalteca” (ODHAG, 1998: 533 tomo IV). Aunque esto no implica únicamente al Estado, sino también a los miembros de la URNG. Si se toma en consideración que hasta el día de hoy hay personajes quienes siguen negando la existencia de un genocidio, la complejidad de aceptar la responsabilidad resulta evidente -uno de ellos el Presidente del periodo anterior Otto Pérez Molina quien era militar activo durante el conflicto-.

Aceptar la responsabilidad implica entonces, hacer importantes reformas que van más allá de la ayuda inmediata a las víctimas: la memoria colectiva. Esto conlleva desde la investigación de casos hasta posibles reformas educativas. Se recomienda que haya una verdadera investigación y colaboración en los casos de desaparecidos; ambas partes del conflicto deben colaborar para encontrar la verdad. Esta colaboración implica los costos relacionados con las exhumaciones y dar testimonios para encontrar más tumbas clandestinas. En lo relacionado con las víctimas, hacer ceremonias conmemorativas, monumentos y homenajes en su memoria. Para las nuevas generaciones, incluir los acontecimientos reales dentro de las clases de historia para que la gente esté consciente y no vuelvan a darse hechos de violencia.

Asimismo, se hacen algunas últimas recomendaciones relacionadas con el rol de diferentes actores sociales dentro de la sociedad guatemalteca víctima del conflicto. Se motiva a la iglesia católica (que tiene el deber de continuar de acuerdo con el proyecto REMHI) -y a otros credos- para trabajar de manera activa haciendo trabajo comunitario en cualquier lugar afectado por la violencia. Se marca una pauta en el rol de las organizaciones internacionales -sobre todo las dedicadas a ayuda humanitaria- dejando en claro que la ayuda es bienvenida, "...pero sus proyectos de desarrollo no deben convertir al apoyo internacional en nuevos sistemas de dependencia económica" (ODHAG, 1998: 537 tomo IV).

Finalmente, todas las recomendaciones se basan en la recuperación de la verdad, la justicia y la dignidad humana como base para reconstruir el tejido social de la sociedad guatemalteca independientemente de origen y credo. Por lo tanto, se plantea el hecho de que "sin sanción social la posibilidad de que se reproduzcan hechos de violencia es mucho mayor, dado que se rompen las normas sociales básicas de convivencia" (ODHAG, 1998: 538 tomo IV). Esto quiere decir, que para prevenir la violencia nuevamente, es indispensable el sentimiento de justicia que contraponga la impunidad que se ha vivido en el país. De esta manera, se plantea no sólo el respeto y la defensa

de los derechos humanos como necesidad inmediata, pero también la desmilitarización del país y enfrentar el problema de la tierra⁶⁹.

El proyecto REMHI, de por sí ambicioso, tuvo diferentes obstáculos y casi todos fueron superados excepto la violencia ante la verdad. El informe se hizo público el 24 de abril de 1998 por parte del líder del proyecto Monseñor Juan José Gerardi Conedera dentro de la catedral de Ciudad de Guatemala. Dos días después de presentado el informe *Guatemala Nunca Más*, Monseñor Gerardi fue asesinado en su residencia tras destrozarle el rostro con una piedra. A pesar de las teorías sobre su muerte de haber sido atacado por un perro, o haber tratado de resistir un robo de arte sacro, las evidencias apuntaron a un crimen político.

“Han pasado 15 años y, a pesar de las sentencias contra tres implicados, aún persisten sombras en el caso, pues no se logró establecer la autoría intelectual del crimen” (Castillo, 2013: 2). No fue sino hasta julio del 2001 que un tribunal condenó a 30 años de cárcel por ejecución extrajudicial a tres implicados: General Byron Lima Estrada y su hijo el Capitán Byron Lima Oliva, así como el Especialista Obdulio Villanueva. También se condenó a 20 años de cárcel al sacerdote Mario Orantes por complicidad⁷⁰. No es de sorprenderse que los culpables hayan sido militares pues las amenazas a los jueces y fiscales, así como las irregularidades en el caso provenían de las mismas instituciones⁷¹; aunque, por otro lado, siempre existe la posibilidad de “chivos expiatorios”.

A pesar de que el informe REMHI se presentó en épocas de un gobierno “en transición a la democracia”, que el documento liderado por Monseñor Gerardi relacionara a militares con nombres y apellidos a masacres y otras violaciones a los derechos humanos; es la teoría que ha convencido

⁶⁹ Si bien el país ha sufrido problemas con las tierras desde épocas coloniales, cuando el conflicto terminó los conflictos relacionados con tierras se han incrementado porque el Ejército a través de “aldeas modelo” (por ejemplo) reorganizó las comunidades del país. Las tierras tenían dueño y cuando los desplazados regresaron a sus lugares de origen, ya había otras personas que habían tomado posesión de las tierras. Esto ha llevado incluso a linchamientos dentro de las comunidades, sobre todo cuando los perpetradores se quedaron con las tierras de víctimas que los han reconocido.

⁷⁰ El único que sigue encarcelado cuando sólo han pasado 15 años del asesinato es el Capitán Byron Lima Oliva. Su padre el General Byron Lima Estrada recobró su libertad en julio de 2012 por redención de pena. Obdulio Villanueva fue decapitado en un motín en febrero de 2003. El sacerdote Mario Orantes recobró su libertad en enero de 2013. (Castillo, 2013:2)

⁷¹ Las primeras irregularidades se dieron en la escena del crimen cuando el Estado Mayor Presidencial fue la instancia encargada de tomar las fotografías del suceso o bien, cuando el Ministerio Público obligó a lavar la sangre en la escena del crimen borrando evidencias. Al menos tres fiscales fueron obligados a renunciar al caso ya sea por ser cesados o por amenazas como encontrar un arreglo fúnebre en su cama o sufrir un atentado de bomba. (Castillo, 2013: 2)

a la gente y que lo ha convertido en mártir y uno de los personajes más queridos y respetados en Guatemala. En entrevista para el diario Prensa Libre, Nery Rodenas (director de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHAG) declara “Paradójicamente, el crimen le dio una mayor relevancia al informe *Guatemala, Nunca Más*, que es hasta la fecha material de referencias para conocer la barbarie que vivió el país” (Castillo, 2013:2).

A diferencia de la Comisión de Esclarecimiento Histórico que por decreto terminaba su función con la entrega del informe, la presentación del informe por parte del proyecto REMHI era sólo el principio del trabajo que a la fecha continúa. En entrevista para esta investigación Nery Rodenas señala “El REMHI fue un diagnóstico de las secuelas que había dejado la guerra en el país. Los procesos de reconstrucción vinieron después”⁷². Gracias al trabajo realizado por los animadores en las entrevistas se pudieron dar cuenta que la gente tenía diferentes síntomas de trauma post-conflicto como pesadillas o llanto incontrolable; necesidad de saber lo que había sucedido con sus familiares o procesos de duelo alterados.

El trabajo que ha realizado la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ha sido integral. El trabajo ha ido desde la reparación de las víctimas, búsqueda de niñez desaparecida, ayuda psicosocial, colaboración en las exhumaciones, hasta acompañamiento y asesoría en demandas y juicios. “Todos los documentos que se han publicado como resultado de las investigaciones han sido muy importantes para la sociedad guatemalteca. El reporte del REMHI ha sido muy útil porque, de hecho, ahora lo están utilizando para los juicios”⁷³. Este trabajo posterior a la entrega del informe ha marcado una de los logros más grandes del proyecto.

Ni Monseñor Gerardi ni ninguno de los entonces o actuales colaboradores de la ODHAG, pudieron haber siquiera imaginado los alcances que ha tenido este proyecto. El hecho de que el informe *Guatemala, Nunca Más* esté incluido casi en su totalidad dentro del informe entregado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico recalca la importancia que este documento tiene para la historia reciente del país. Los logros que se han tenido, tampoco han sido casualidad; el hecho de

⁷² Cf. Apéndice #5 (Pp. 329). Entrevista con Nery Rodenas.

⁷³ Cf. Apéndice #1 (Pp. 319). Entrevista con Blanca Hernández.

que el proyecto no haya impuesto limitantes para el trabajo, ha marcado la pauta para su éxito. Es decir, se tomó el tiempo necesario para diseñar el proyecto y el reporte, las narraciones contienen nombres; no sólo hechos y por eso tiene validez en los juicios. Además que el trabajo posterior realizado con las víctimas ha marcado diferencia.

A pesar de los obstáculos, los aciertos fueron mayores. Sobre todo, porque este proyecto plantó la semilla en la gente para entender que la verdad es un paso necesario para la reconciliación. Si bien sus seres queridos no van a regresar, algún día se hará justicia y entonces el riesgo de hablar habrá valido la pena. Esta tierra fértil que contemplaba a la verdad como una necesidad y a la justicia como una obligación fue aprovechada por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) que es la comisión de la verdad oficial resultado de los Acuerdos de Paz entre el Estado y la URNG. Ambos trabajos forman parte fundamental para alcanzar la paz en Guatemala, sin embargo, como la misma ODHAG declara: “Uno de los objetivos primordiales, entonces, del REMHI fue generar insumos para la CEH y tratar de minimizar las limitaciones de la misma”⁷⁴.

⁷⁴ Cf. Apéndice #5 (Pp. 329). Entrevista con Nery Rodenas.

Guatemala, Entre la Memoria y la Impunidad

“La memoria histórica existe. Ni una sola de sus páginas puede ser borrada con la negativa o con la mentira. Doloroso es el olvido que de ella se mantiene, el cual puede ser roto con la decisión de la sociedad civil para debatirla de manera constante hasta que se logre el objetivo de justicia como base indispensable de la reconciliación nacional.”
(Balsells, 2009: 169)

Hasta el día de hoy, Guatemala sigue debatiéndose entre la lucha por conseguir la tan anhelada justicia para las víctimas; y la impunidad que los políticos y la oligarquía se aferran en mantener. Parte de la sociedad civil apuesta a seguir luchando para que sus muertos puedan descansar en paz y ellos mismos –a su vez- al encontrar a sus desaparecidos. Algunos perpetradores siguen estando en posiciones de poder; otros han dejado a sus familias con cargos políticos que parecen vitalicios dentro de una democracia; y la mayoría de ellos sigue negando o justificando hechos atroces en contra de población civil -en su mayoría- ajena al conflicto armado.

La memoria juega aquí un papel relevante y de ahí la importancia de los trabajos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI). Algunos de los perpetradores han tomado todas las medidas posibles para continuar impunes. A su favor tienen el paso del tiempo, pues los parientes de las víctimas también se han hecho viejos y el desconocimiento de lo sucedido por las nuevas generaciones hace que el clamor por la justicia disminuya. Se apuesta porque la memoria de las nuevas generaciones sea de muy corto plazo y conserve a la oligarquía -que no ha cambiado mucho desde la Colonia- en su posición de poder y continúe la impunidad. Los documentos *Guatemala: Nunca Más* y *Guatemala, Memoria del Silencio* no pueden modificar de manera directa las estructuras del poder; pero sin duda, pueden combatir al olvido.

La memoria no sólo tiene como oponente a la impunidad sino también al olvido. Y es que tanto el Proyecto REMHI como la CEH cumplieron sus objetivos; incluso pudieron haber rebasado las expectativas. Pero los documentos terminan siendo insuficientes. El mismo Edgar Alfredo Balsells Tojo, quien fuera miembro electo de la CEH, afirma:

“Ahora, a más de dos años después de haberse recibido el Informe y publicadas miles de páginas que documentan los execrables crímenes cometidos durante el enfrentamiento armado interno, Guatemala se debate aún entre una débil actividad de quienes apuestan por la verdad y la justicia a través del conocimiento de la memoria histórica y aquellos que prefieren el olvido, conseguido por la pasividad de los que desde el poder contemporizan con los actores del infame pasado y niegan a las víctimas la justicia a la que tienen derecho” (Balsells, 2009: 30).

Los documentos que resultaron de las Comisiones han sido de ayuda para la sociedad guatemalteca, principalmente porque han logrado que víctimas y sus familiares se sientan acompañados y reconozcan que su caso no fue algo aislado. El mayor logro es el conocimiento de la historia; de la verdad. No se trata de organismos deliberativos, por lo que no se les puede exigir algo que sale de sus posibilidades. Aun así, ambos documentos se han utilizado en juicios -con algunas limitaciones- pero han servido de evidencia a través de los testimonios. No hay que dejar a un lado que la CEH es quien planteó la verdad oficial de este país. La generación de conciencia no se trata de una hazaña que deba demeritarse; por el contrario, es bastante ambicioso en sí mismo⁷⁵.

Si bien el mayor acierto de ambos proyectos fue relatar la verdad de las víctimas y entonces plantear la historia oficial desde la perspectiva de la sociedad civil y no de los represores⁷⁶; hay elementos que plantean interrogantes sobre los alcances de los trabajos. Diferentes personajes entrevistados⁷⁷ para esta investigación coincidieron en que los esfuerzos incluso rebasaron las expectativas, pero flaquearon en la divulgación por múltiples factores. Los documentos son bien conocidos por miembros de organizaciones civiles de derechos humanos nacionales e internacionales, pero el grueso de la población guatemalteca es difícil que conozca a fondo los contenidos. Desde limitaciones como la lengua o saber leer, hasta tener acceso a los documentos.

Los motivos para que la divulgación no haya sido tanta, van desde los aspectos económicos, hasta voluntad gubernamental e incluso violencia. Si se analiza por separado, hay importantes

⁷⁵ Cf. Apéndices #4 (Pp. 326), #1 (Pp. 318), #3 (Pp. 323). Entrevistas con Neptalí Monterroso; Blanca Hernández; y Carlos Figueroa.

⁷⁶ Es importante hacer hincapié en que la historia oficial con base en los testimonios de víctimas y sus parientes, así como de algunos victimarios, pasó por rigurosos procesos de corroboración por lo tanto se descarta la subjetividad de tener sólo una versión de los hechos.

⁷⁷ Cf. Apéndices #4 (Pp. 326), #1 (Pp. 318), #3 (Pp. 323). Entrevistas con Neptalí Monterroso; Blanca Hernández; y Carlos Figueroa.

diferencias entre un caso y otro. Para el trabajo de la CEH las limitaciones fueron mayores pues el trabajo de la Comisión termina con la entrega del informe y no hay modo de dar seguimiento. El documento de la CEH –con sus 12 volúmenes- puede ser localizado solamente en algunas librerías y el costo es alto pues son doce libros. Se puede adquirir de manera digital para disminuir el costo, pero para leer los cientos de páginas se necesita una computadora. Por otro lado, a través de diferentes iniciativas de organizaciones no gubernamentales extranjeras el texto de REMHI ha sido traducido a diferentes idiomas y lenguas, pero no a todas las variantes del maya que existen en Guatemala. La adquisición es más complicada pues únicamente puede hacerse en las Oficinas del Arzobispado y aunque el costo no es tan elevado; no cualquiera puede pagar 240 Quetzales⁷⁸ para conocer la historia. De acuerdo con la ODHAG, más extranjeros adquieren el texto que nacionales.

El elemento económico puede ser un factor limitante en los alcances del trabajo para la conservación de la memoria. Tal vez, a sabiendas de esto, ambos trabajos plantean la necesidad de incluir estos temas dentro de la educación de cualquier guatemalteco. “También faltó trabajo con el Ministerio de Educación para que la información y este pedazo de la historia -que no es la mejor- pero que es parte del país se difunda como parte de la educación escolar asegurando que no se olvide, que se mantenga en la memoria y también que la gente esté consciente de lo que pasó para que no se repita”⁷⁹. La ODHAG propuso un programa al Ministerio de Educación⁸⁰ y aunque se han capacitado a algunos docentes, se trata de iniciativas propias y no generalizadas. A nivel nacional, no ha habido voluntad para adoptar ninguna propuesta en el área educativa; “hay pocas escuelas que siquiera tratan el tema, la historia contemporánea de Guatemala no se estudia en las escuelas, gente joven no está bien enterada o siquiera enterada de lo sucedido”⁸¹.

Diversas organizaciones de derechos humanos como FAMDEGUA o la ODHAG siguen trabajando con las víctimas desde juicios hasta exhumaciones. Sin embargo, aún hoy, la violencia

⁷⁸ El precio del texto fue consultado en mayo 2018.

⁷⁹ Cf. Apéndice #1 (Pp. 319). Entrevistas con Blanca Hernández.

⁸⁰ “Se ha hecho una propuesta pedagógica al Estado, a varios gobiernos, llamada Educarse para el Nunca Más que trata de integrar la historia de Guatemala reciente para que desde cuarto de primaria y hasta la secundaria se incorpore lo sucedido para divulgar la memoria histórica” en Apéndice #5 (Pp. 329). Entrevistas con Nery Rodenas.

⁸¹ Cf. Apéndice #5 (Pp. 329). Entrevistas con Nery Rodenas.

está en contra de los defensores de los derechos humanos y/o cualquier persona involucrada en proyectos que parezcan buscar justicia. La violencia fue evidente desde que apareció a la luz pública el informe *Guatemala: Nunca Más* con la muerte de Monseñor Gerardi. Si bien ahora el nivel de violencia no es tan alto; amenazas, anónimos, demandas, vidrios rotos, intentos de asalto sin robo de pertenencia alguna, amedrentamientos o robos dentro de las oficinas son acciones con las que una persona se topa de manera recurrente si se busca justicia en Guatemala. La violencia también varía de acuerdo con los momentos que se viven, si hay algún juicio contra algún perpetrador se espera aumento de las acciones violentas; y, la violencia suele incrementar su nivel dependiendo del rango militar o la posición política que haya tenido el enjuiciado.

No hay ningún trabajo en favor de los derechos humanos que pueda ser verdaderamente efectivo y pueda tener frutos tangibles, si tienen a la impunidad como mayor adversario. Durante los años del conflicto y de gobiernos autoritarios no causaba sorpresa que hubiera impunidad; y aunque la sociedad civil pensó que la situación podría ser diferente con una democracia, la justicia sigue sin lograrse del todo, aunque sí se han dado algunos pasos. Cuando la impunidad ha permeado dentro de las instituciones estatales, parece que la sociedad civil se queda con las “manos atadas”, pues hay una desproporción entre lo que se hace y lo que se logra en términos de búsqueda de la justicia. “La impunidad parece añadir al sufrimiento de la agresión violenta y aberrante, la destrucción de creencias y valores y la alteración de normas y reglas de convivencia social” (Goikoelea, 2006: 159).

La impunidad ha provocado que Guatemala siga sin vivir un clima de paz. Como se ha mencionado, las nuevas generaciones tienen una perspectiva diferente; pero las víctimas sobrevivientes, familiares de víctimas de la violencia o gente que sufrió la incertidumbre del *cuándo no volveré a casa*, sigue viviendo con miedo. Tanto el miedo como el decir que “no pasa nada” han sido motivo para que el clamor de justicia se convierta en una especie de ciclo. “La efervescencia y el entusiasmo que se vivió en esa época con respecto a la verdad y a la justicia, no se tiene en la sociedad civil actual. La demanda continúa en la gente que fue afectada”⁸². La demanda de justicia

⁸² Cf. Apéndice #5 (Pp. 329). Entrevistas con Nery Rodenas.

aumenta en el momento en que hay una coyuntura, es decir, que hay algún tipo de logro o situación específica. Por ejemplo, en 2012 se encontró la fosa clandestina de Cobán donde se dijo había 40 cuerpos y han sido exhumados más de 500; entonces, la gente vuelve a tener esperanza de encontrar a los suyos y recurre a diferentes organismos buscando ayuda “...la gente aparenta tener memoria corta pero el dolor permanece...”⁸³

La gente piensa dos veces antes de salir a las calles a pedir justicia o incluso hacer las denuncias a pesar del tiempo transcurrido. Tal vez esto sucede porque la mayoría de los perpetradores están libres en el país y con capacidad de tomar represalias. ¿Para qué hacer todo el proceso de llevar a juicio a un militar (de cualquier rango) si uno expone la vida durante el proceso y después seguramente terminará siendo inocente por falta de pruebas? Sin importar los testimonios y pruebas se puede ser inocente. Esto sucede porque las leyes fueron modificadas a conveniencia de los perpetradores, un militar con evidencia de su culpabilidad es juzgado en una fiscalía militar, en una base militar y por un juez militar: el juez es elegido por el Ministerio de la Defensa Nacional quien a su vez paga su salario. La mayoría de los militares sentenciados han sido juzgados en tribunales especiales denominados Tribunales de Alto Riesgo que dependen de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)⁸⁴.

De acuerdo con cifras de la CICIG, hasta el 2012 hay aproximadamente 6.000 homicidios por año en Guatemala incluida la matanza generalizada de mujeres y niños; y sólo el 2% de los casos llegan a juicio (CICIG, 2013). Si el porcentaje de juicios es tan bajo y esto se trata del pasado reciente; ¿qué se puede esperar de delitos cometidos hace más de 30 años? Esto no quiere decir que no haya casos exitosos en donde perpetradores de la época del conflicto armado hayan sido sentenciados. Los casos son tan complejos y las acusaciones tan serias que forzosamente estos juicios los debe llevar a cabo en los Tribunales de Alto Riesgo. La CICIG apoya a las instituciones del Estado en la investigación de las actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de

⁸³ Cf. Apéndice #1 (Pp. 319). Entrevistas con Blanca Hernández.

⁸⁴ Cf. Anexo 10 (Pp. 312). Información básica relacionada con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que da vida a los Tribunales de Mayor Riesgo.

seguridad definidos como grupos que cometen actos ilegales y que afectan el gozo y ejercicio de los derechos fundamentales de la población guatemalteca; y que tienen enlaces directos e indirectos con agentes del Estado o la capacidad de bloquear acciones judiciales concernientes a sus actividades ilegales (CICIG, 2013). Por esto, los casos de desaparición forzada o crímenes de lesa humanidad son competencia de la CICIG a través de sus Tribunales.

Es preciso mencionar que el número de casos que han sido acogidos por estos Tribunales relacionados con la memoria histórica no son cuantiosos, pero se consideran como avances para reconstruir el tejido social. Ha habido sentencias por desapariciones forzadas que varían su pena de acuerdo con la gravedad de la situación. Por ejemplo: por la desaparición forzada de un estudiante universitario, Héctor Bol de la Cruz y Jorge Gómez –ex jefes policiales de la extinta Policía Nacional- fueron sentenciados a 40 años de cárcel; o, Felipe Cusanero sentenciado a 150 años de prisión en 2009 por la desaparición forzada de 6 indígenas en la comunidad de Choatalun.

Hay otros casos que han cobrado mayor relevancia como el de la *masacre de las 2 Erres* en el Petén. Varias organizaciones de derechos humanos encabezadas por FAMDEGUA demandaron al Estado Guatemalteco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La demanda fue ganada por la sociedad civil y por lo tanto se obligaba al Estado a hacer arrestos de miembros de las fuerzas de élite. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala no permitió el arresto, pero tras la creación de la CICIG en el 2006, no hubo opción más que seguir el proceso. Uno de los mayores logros de la sociedad civil fue que en agosto de 2011 se sentenciara a 4 de los 18 *kaibiles*⁸⁵ que participaron en la masacre. Este grupo de militares perteneciente al cuerpo de élite violó, torturó y asesinó a 201 personas que fueron enterradas en fosas clandestinas encontradas en 1994 y de donde 160 cuerpos fueron recuperados (Cardozo, 2011). A los cuatro sentenciados –entre ellos Carlos Antonio Carías teniente y líder de la unidad- se les dio una pena de 6060 años de cárcel.

Si bien se han presentado avances hacia la justicia, sigue siendo insuficiente. Estos Tribunales de Alto Riesgo abrieron la posibilidad para que perpetradores, sobre todo aquellos con

⁸⁵ Del grupo de 18 *kaibiles* que cometieron los crímenes dos ya habían muerto para el momento del juicio, cuatro fueron sentenciados y para el resto no hubo pruebas suficientemente claras para determinar su participación.

alguna relación directa con el Estado pudieran ser procesados. Sin embargo, las verdaderas “cabezas” del conflicto, las mentes que decidieron llevar a cabo una estrategia como la de *tierra arrasada* parecían no tener posibilidad de un proceso. “Por ejemplo en el caso del Monseñor Gerardi se encarceló a los actores, pero no a la gente del Estado Mayor Presidencial; se llega a ciertos niveles de responsabilidad, pero ya no sigue a los más elevados”⁸⁶. En enero de 2013, la historia pareció tomar un giro inesperado cuando uno de los más importantes perpetradores el General en retiro y ex presidente Efraín Ríos Montt llegó a los Tribunales.

“Impunidad ni ayer, ni hoy” se escuchaba por las calles aledañas a los juzgados en ciudad de Guatemala en enero de 2013. Y es que el 26 de ese mes se presentó a comparecer por primera vez ante la justicia el ex presidente Efraín Ríos Montt. Después de más de 30 años, por fin se esperaba que la justicia llegara. La acusación era genocidio y crímenes contra la humanidad por la matanza de 1.771 indígenas ixiles de las cuales –de acuerdo con la fiscalía- se tienen pruebas científicas de 267. Además de 1.465 violaciones de mujeres y un aproximado de 29.000 desplazados de 54 comunidades como parte de un plan contrainsurgente bajo su mando. Las víctimas y sus parientes debieron de esperar tres décadas para al menos ver al principal perpetrador en un juzgado, y es que la inmunidad de la que gozaba como diputado lo mantenía a salvo y en la cúpula del poder como líder del partido Frente Republicano Guatemalteco.

Ya en 1999 Rigoberta Menchú había intentado demandar a las “cabezas” de los años más cruentos del conflicto militar en donde se llevaba a cabo la estrategia de *tierra arrasada*. Ninguna de las denuncias pudo proceder: Romeo Lucas García (1978-1982) estaba fuera del país y en malas condiciones de salud muriendo siete años después; Efraín Ríos Montt (1982-1983) tenía inmunidad por pertenecer al gobierno guatemalteco y Óscar Mejía Vítores (1983-1986) por padecer Alz Heimer y no tener facultades físicas o mentales no llegó a juicio. “El procesamiento de un general por estos delitos aberrantes a 30 años de ocurridos constituye un testimonio de la valentía y la

⁸⁶ Cf. Apéndice #3 (Pp. 324). Entrevistas con Carlos Figueroa.

tenacidad de las víctimas y organizaciones humanitarias de Guatemala” declaraba Reed Brody de la organización Human Rights Watch (La Jornada, 20 de marzo de 2013: 32).

El juicio tuvo varios tropiezos desde el comienzo. El día del inicio del juicio histórico para Guatemala parecía no llegar cuando hubo una demora de más de dos horas para que se pudiera iniciar la comparecencia debido a seis amparos y objeciones presentadas por la defensa del ex dictador. Sin embargo, ni su sonrisa a lo largo del juicio, ni su rechazo a la existencia de un genocidio junto con su declaración o alegato de que a lo más podría ser juzgado por omisión; fueron suficientes ante los 130 testigos y casi un centenar de peritos que declararon en su contra. Finalmente, el 10 de mayo de 2013 se declararía a un Efraín Ríos Montt -que hasta el momento parecía invencible- culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad con una sentencia de 80 años de cárcel.

“El reconocimiento del delito de genocidio afecta a todos los guatemaltecos. Al reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado. La aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas. Estos hechos no deben volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz” fueron las palabras de la magistrada antes de dictar la sentencia (Petrich, 11 de mayo de 2013: 20). Además de la histórica condena, el Tribunal ordenaba al Ministerio Público continuar con las investigaciones en contra de las demás personas que pudieran haber participado en los hechos juzgados. La sentencia se recibió entre júbilo y lágrimas de felicidad por parte de las víctimas y organizaciones de derechos humanos mientras que el ya declarado culpable amenazaba con apelaciones y planteaba una farsa internacional.

Desafortunadamente, el logro no se pudo disfrutar por mucho tiempo. El 22 de mayo –apenas 12 días después de que se terminara el juicio- la alcaldesa indígena de Nebaj declaraba “la anulación significa una burla más hacia el pueblo Ixil” (La Jornada, 23 de mayo de 2013: 24). La sociedad que recién había leído los titulares en donde la justicia guatemalteca reconocía el genocidio a través de la sentencia a uno de los más importantes perpetradores, veía esas páginas como espejismo. La Corte Constitucional de Guatemala daba una resolución en donde la sentencia quedaba anulada y el juicio tendría que reiniciarse alegando errores procesales. Parecía que Ríos Montt era invencible

después de todo; y la sociedad guatemalteca recibió un importante revés volviendo a la impunidad que ha imperado en el país centroamericano.

No sólo se logró desaparecer los 50 años de prisión por genocidio y los 30 años por crímenes contra la humanidad, sino que además el reinicio del juicio pospuesto por casi un año sería con jueces y magistrados diferentes pues la defensa consideraba parciales a los anteriores. Por si no fuera suficiente, el juicio que debía reiniciarse en abril de 2014 –hasta enero del 2016- sigue detenido. Esto porque la defensa del ex presidente insiste en apegarse al Decreto de Ley 8-86 que otorga amnistía a militares y guerrilleros por hechos ocurridos durante el conflicto armado. Este Decreto no se trata de la Ley de Reconciliación Nacional pues ella exime de amnistía a los acusados por delitos de genocidio o crímenes contra la humanidad. La Ley 8-86 es anterior pues fue decretada en 1986 por el ex Presidente Óscar Mejía Víctores acusado por Rigoberta Menchú de estos mismos delitos, pero que logró cubrir las espaldas legalmente de él y los demás perpetradores. De acuerdo con la Corte Constitucional es posible que bajo el Decreto de Ley 8-86 el ex dictador –ya reconocido públicamente por la justicia guatemalteca como genocida- vaya a casa a disfrutar sus últimos días de vida en paz.

El pasado 11 de enero de 2016 –una vez más- el juicio en contra del exdictador Efraín Ríos Montt fue suspendido sin que haya una fecha de reinicio. El alegato de esta suspensión es que se tienen procesos legales interpuestos por la defensa del ex militar que no han sido resueltos. Entre estos procesos, los más destacados son: la separación de la jueza Janeth Valdéz –quien estuvo involucrada en el juicio anterior en donde se había dictado ya una sentencia- así como la petición del cese del juicio por la demencia que presenta el acusado a causa de su avanzada edad. Efraín Ríos Montt quien el próximo junio de 2016 cumpliría 90 años de edad, probablemente quedará impune pues pareciera que su defensa estuviera haciendo todo lo posible para que primero muera antes de ser sentenciado por los crímenes que cometió⁸⁷ (La Jornada, 11 de enero de 2016).

⁸⁷ Efraín Ríos Montt murió impune a los 91 años de edad en su casa tras ser uno de los más sangrientos y temidos perpetradores, así como convertirse en un político influyente del país por al menos tres décadas. Sin embargo, su muerte sale del periodo de estudio (La Jornada, 1 de abril de 2018).

“Los guatemaltecos siguen padeciendo al día de hoy, un sistema judicial, que no ataja la impunidad, sino que muchas veces imposibilita la obtención de justicia, que supone en muchos casos, que organismos de derechos humanos se enfrentan a obstáculos de enormes proporciones, por su determinación de exigencia y solicitud de justicia” (Goikoelea, 2006: 18). Los trabajos para conservar la memoria histórica, así como la transición –si es que ésta ha terminado- a una verdadera democracia parecía traer consigo la justicia que era un requisito para que la sociedad cerrara simbólicamente el ciclo de violencia que vivieron durante el conflicto interno. El panorama que se planteaba en Guatemala incluso después de la transición a la democracia sigue sin parecer alentador como lo muestra la tabla:

Contexto de transición en Guatemala (2003)

Estancamiento y retrocesos en logros jurídico políticos de casos emblemáticos de lucha contra la impunidad.
Crisis política, episodios de desestabilización e ingobernabilidad. Reactivación de imaginarios sociales: pobres contra ricos/ indios contra ladinos.
Aumento de la censura pública y la polarización política alrededor de la libertad de expresión.
Pérdida de credibilidad de la política del Estado y de las instituciones por los ciudadanos.
Escepticismo y desencanto político.
Automarginalizarse del Estado en la medida de lo posible.
En Guatemala la democracia no está protegida, pues que existe de manera formal y frágil. Persiste de modo creciente la violación de los derechos humanos.
Las víctimas mantienen la lucha por la justicia, aunque debilitada por la coyuntura preelectoral, y el clima de desprotección e incertidumbre social a causa de la impunidad en muchos ámbitos públicos.

Fuente: Goikoelea, 2006: 161

La democracia en Guatemala parece seguir siendo frágil pues los derechos humanos siguen siendo un tema complejo. Desafortunadamente, acciones como la impunidad y la corrupción hacen relucir las debilidades del sistema y el poco interés que se tiene sobre la población civil hacen que la lucha por la justicia se vea debilitada. Tal parece que los nuevos gobiernos están esperando a que las generaciones nuevas prevalezcan para que el grito de justicia sea silenciado de una vez.

Los logros que se han tenido en términos de justicia parecen estancarse o incluso retroceder dependiendo de la persona al mando.

En el caso de Guatemala, y a pesar de la tan nombrada transición política, el último presidente fue un ex militar Otto Pérez Molina. El presidente saliente tuvo un rango militar de General y participó en los años más cruentos del conflicto, incluso fue representante de las Fuerzas Armadas en la Firma de los Acuerdos de Paz. Hay documentos que podrían acusarlo, incluso videos de fácil acceso en medios electrónicos en donde se observa dentro de los batallones. Sin embargo, ganó a través de las urnas como lo dicta la democracia. No es de sorprender que, durante el juicio de Ríos Montt, si bien no le dio su apoyo abiertamente, sí negó públicamente la existencia de un genocidio. A su vez programas relacionados con el resarcimiento a víctimas, conservación de la memoria y acciones para favorecer el perdón estuvieron detenidos. Aunque el escándalo que lo obligó a renunciar al cargo el 4 de septiembre de 2015 –irónicamente- no tiene nada que ver con los crímenes del pasado sino con hechos de corrupción que están pendientes de ir a juicio (Reuters, 9 de septiembre de 2015: 23).

En 2016 hubo otro momento importante en términos de justicia cuando varios militares retirados fueron arrestados en relación al caso CREOMPAZ, un centro militar en Cobán, Alta Verapaz que fue conocido como la Zona Militar 21. Los militares fueron arrestados por estar relacionados con desapariciones forzadas y delitos de tortura que se llevaron a cabo en dicho sitio. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) ha encontrado 558 osamentas, todas con huellas de tortura, en cuatro fosas confirmando que hay coincidencia con personas desaparecidas durante el conflicto interno (NISGUA, 2018). Lamentablemente, los juicios están estancados y no ha habido sentencias para ninguno de los militares relacionados con el caso; tal vez por ser el más grande de toda América Latina en cuanto a desaparición forzada.

Hasta diciembre de 2017, la historia de Guatemala no ha tenido cambios sustanciales, organismos civiles de derechos humanos como FAMDEGUA, siguen luchando por justicia y por encontrar a sus desaparecidos. Algunos mandos militares siguen apelando a la Ley de Amnistía, el Decreto 8-86 para que no puedan ser enjuiciados por crímenes en contra de la humanidad o

genocidio. Algunas masacres como la de las “Dos Erres” han tenido algunos sentenciados. Hay casos que necesitan enjuiciarse en Guatemala como el de Mardoqueo Ortiz Morales quien fue sentenciado a menos de un año de prisión en una corte estadounidense en septiembre de 2017 por no decir que perteneció al cuerpo de *kaibiles* al iniciar un proceso de naturalización en ese país; y aunque en Guatemala se pide se haga un proceso de extradición para que pueda ser juzgado por los delitos de ejecución extrajudicial y crímenes contra la humanidad, el gobierno federal no ha hecho ningún movimiento diplomático que proceda a ello.

El presidente Jimmy Morales, quien se jactaba de ser un férreo defensor de los derechos humanos no ha marcado diferencia en el país, y siguen siendo los esfuerzos independientes de organismos civiles quienes marcan la diferencia. Muestra de la voluntad política en favor de las víctimas del actual presidente es “que en julio de 2015 las autoridades del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) se comprometieron a resarcir a 12 mil víctimas de 550 comunidades de 10 departamentos de Guatemala bajo una estrategia anual que concluirá en el 2020, pero el acuerdo “está archivado” por falta de recursos” (Agencia EFE, 24 de febrero de 2016). La situación empeoró cuando para abril de 2016, el PNR cerró sus oficinas al interior del país cuando no recontrató a unos 239 empleados dejando a miles de víctimas en el abandono (Hernández, 2 de abril de 2016).

Sin embargo, para mediados de 2017, diferentes organismos en favor de víctimas del conflicto interno lanzaron una nueva campaña llamada “Me Faltan a Mí, Te Faltan a Vos” que pretende que el Órgano Legislativo apruebe la iniciativa de ley 3590 -que lleva aproximadamente 10 años esperando ser discutida- para la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición (FAMDEGUA, 2018). Puede ser que los gobierno volteen para otro lado, pero la sociedad civil seguirá insistiendo hasta obtener la justicia que permita un real resarcimiento del tejido social guatemalteco.

“Aunque haya terminado hace tiempo la etapa de eliminación física de las personas y grupos a quienes se dirigió la represión, la subsistencia de la impunidad implica, en buena medida, la realización de los objetivos que se plantearon los perpetradores, manifestada en la enorme dificultad para construir el estado de derecho...” (Goikoelea, 2006: 197). La impunidad sigue siendo una

constante que no permite que el tejido social guatemalteco pueda ser reconstruido. Tal pareciera que la única manera de sanar las heridas recae en las generaciones venideras. Se trataría de que nuevas generaciones tanto de indígenas como de ladinos (la violencia afectó a ambos) que no sufren del miedo del que se sigue padeciendo y que tienden a desconocer la historia reciente de Guatemala terminen por “parchar” el tejido social de Guatemala.

Los documentos publicados tanto por el REMHI como por la CEH son la única herramienta posible que se tiene ante el desconocimiento de las nuevas generaciones. La lucha constante que tienen las organizaciones de derechos humanos apuesta a que a través del conocimiento se siga exigiendo justicia para los muertos. La realidad también, es que cada vez esto se hace más complicado pues las generaciones de perpetradores también se están perdiendo. Como se ha mencionado, por eso es tan importante apoyar las propuestas educativas de enseñar esta parte de la historia a los estudiantes guatemaltecos; para hacer frente a la opción oficial: optar por el olvido.

Uno de los aspectos más complicados es lidiar con la indiferencia. Se trata de un mal mayor pues ha logrado que el trabajo de la CEH a través de sus recomendaciones no haya tenido grandes efectos. Uno de los programas más esperanzadores era el programa de resarcimiento que al final, fue utilizado con fines electorales, transformándose en el programa denominado *Bolsa Solidaria* que daba despensas a cambio de empadronarse en el partido político del entonces presidente Álvaro Colom quien buscaba reelegirse a través de su esposa⁸⁸. Irónicamente, él mismo ha sido el único presidente guatemalteco en pedir perdón públicamente a la sociedad, aunque no por un genocidio sino a casos particulares como el de Carlos Figueroa (entrevistado para este trabajo)⁸⁹.

Otros pocos casos más relacionados en términos de memoria, se han hecho eventos relacionados con el resarcimiento moral. En el caso de Carlos Figueroa⁹⁰, el ex presidente Álvaro Colom ofreció un homenaje a sus padres quienes fueron emboscados y asesinados mientras que la mayoría de la familia se exiliaba en otros países. Por lo general, se hace una ceremonia pública,

⁸⁸ Cf. Apéndice #1 (Pp. 319). Entrevista con Blanca Hernández.

⁸⁹ Cf. Apéndice #4 (Pp. 327). Entrevista con Neptalí Monterroso.

⁹⁰ Cf. Apéndice #2 (Pp. 321). Entrevista testimonio de vida con Carlos Figueroa.

asisten miembros del Estado incluido el presidente y la familia. En este caso particular una biblioteca de la ciudad lleva el nombre de los padres del Doctor Carlos Figueroa. Sin embargo, hay elementos que hay que tomar en cuenta cuando el entrevistado asegura que se aceptó el homenaje porque venía de un presidente cuya familia también padeció la represión, pero no lo hubiera hecho proviniendo de cualquiera. La gente sí tiene memoria; las heridas no sanan con el tiempo.

“El ser sobreviviente implica muchas cosas, entre ellas lidiar con la culpa de estar vivo” decía Carlos Figueroa⁹¹. “La desaparición forzada es el peor crimen. Si se asesina se puede hacer un funeral para la víctima y se le da una sepultura digna. Pero con un desaparecido el duelo no termina hasta que no se encuentra, pero, ¿por dónde empezar a buscar?” decía Doña Blanca Hernández mientras veía la fotografía que mostraba de su hijo quien sigue desaparecido⁹². “Buena parte de las víctimas siguen teniendo esperanza en encontrar a sus desaparecidos y se busca hacer trabajo para que la historia no se olvide” explicaba Nery Rodenas⁹³. Todas estas declaraciones hacen pensar que el tejido social de Guatemala sigue sin resarcirse.

Los informes *Guatemala: Nunca Más* y *Guatemala Memoria del Silencio* muestran la realidad del país durante los años de una cruenta guerra civil que involucró a gente inocente que, de pronto, tuvo la etiqueta de comunista impuesta. No se trata sólo del asesinado o del desaparecido, sino se trata de la familia que lo lloró o que está esperando para llorarlo; se trata de la familia rota porque uno de ellos fue señalado y no querían correr la misma suerte; se trata de gente que dejó todo y empezó una nueva vida con raíces adquiridas lejos de las propias... El dolor se refleja en los reportes, los números que después se traducen en nombres son perturbadores, pero la realidad es que la lucha sigue.

Mientras la justicia cada vez parezca más lejana pues los perpetradores, víctimas y sus familiares se están yendo junto con su generación; mientras que la verdad a través de estos medios no sea ampliamente difundida y el olvido sea más fuerte que la memoria el panorama no parece

⁹¹ Cf. Apéndice #2 (Pp. 321). Entrevista testimonio de vida con Carlos Figueroa.

⁹² Cf. Apéndice #1 (Pp. 319). Entrevista con Blanca Hernández.

⁹³ Cf. Apéndice #5 (Pp. 329). Entrevistas con Nery Rodenas.

muy halagador. Pero, sobre todo, mientras los trabajos tan serios como los de las Comisiones de la Verdad no representen ninguna presión para los gobiernos, los informes permanecerán como narraciones con logros contados.

CASO ARGENTINA



Fotografía tomada por la autora de una de los cuadros que muestran a los hijos desaparecidos en la organización Abuelas de Plaza de Mayo que buscan a sus nietos, hijos de las personas en las fotografías (junio, 2014).

COMISIONES DE LA VERDAD: HERRAMIENTAS NECESARIAS AUNQUE INCOMPLETAS
PARA ALCANZAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
CASOS LATINOAMERICANOS DE GUATEMALA Y ARGENTINA

Argentina ante la Última Dictadura

Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana...
(CONADEP, 2006: 15)

Hablar de la historia reciente de Argentina es tener que considerar golpes de estado constantes y gobiernos militares autoritarios; cada uno más cruento que el anterior. Pero también es hablar de movimientos sindicales, de multitudinarias manifestaciones; algunas espontáneas y otras organizadas, así como de una sociedad -en lo general- involucrada con las políticas del país y con un grado educativo mayor, comparado con gran parte de los países latinoamericanos. Es preciso mencionar la cuestión social de involucramiento político y el nivel educativo, porque han sido importantes en el curso de la historia en términos de justicia, reconciliación y políticas contra el olvido tras la última dictadura militar, que dejara más de 46.000 víctimas de las cuales cerca de 9.000 siguen desaparecidas, según el informe *Nunca Más*, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (2006:479).

Argentina, al igual que la mayor parte de los países de América Latina, sufrió dictaduras militares. El pueblo argentino padeció seis golpes de Estado en el siglo XX, dando lugar a dictaduras que truncaron la vida democrática del país de manera constante. Sin embargo, el último golpe de Estado exitoso no solamente llevó a una dictadura, sino a establecer el Terrorismo de Estado como la base del gobierno de facto⁹⁴.

Como en otros casos, la violencia se da en escalada; no aparece de la noche a la mañana. El caso argentino no es diferente, pero la particularidad se da en el involucramiento político que tenía la ciudadanía. Hubo personajes clave de la historia que jugaron con ese rol de la sociedad a

⁹⁴ Cf. Anexo 11 (Pp. 313). La tabla muestra los presidentes que ha tenido Argentina desde 1916 hasta el 2017.

su favor como Juan Domingo Perón -militar y presidente en tres ocasiones diferentes gracias al voto ciudadano-. El poder que tenían los sindicatos, salir a las calles a manifestarse en favor o en contra de los gobiernos en turno han sido icónicos. Sin embargo, llegó en punto en donde las masas sindicales se percataron que los líderes se habían convertido en parte de la clase política codeándose con las altas esferas mientras que los intereses de los trabajadores funcionaban como moneda de cambio. Esa organización de los sindicatos se volcó en contra del gobierno y los líderes en el momento en que partiendo de estas organizaciones surgieron grupos guerrilleros que empezaron a asolar la vida política, pero también a la población civil en general. La represión hacia y desde estos grupos -sindicales y guerrilleros- fue incrementando.

Las Fuerzas Armadas en su totalidad estuvieron de acuerdo con un nuevo golpe militar a la viuda de Perón. El mismo 24 de marzo de 1976 tomó posesión una Junta Militar formada por tres comandantes que representaban cada una de las más icónicas divisiones de las fuerzas del orden: General Rafael Videla representante del ejército, Almirante Eduardo Massera representando a la Marina y el Brigadier Ramón Agosti a la Aviación. “Su intervención no se limitaría a *poner orden* ni a excluir a un sector civil *desviado*, apuntaría a curar una nación enferma de pies a cabeza, inyectándole por la fuerza los remedios necesarios” (Novaro, Marcos en Yankelevich, 2014: 324). Esta postura la dejaría clara la Junta Militar desde sus primeros comunicados a la nación en donde advertía que el país estaba bajo el estricto mando militar desde las condiciones de tránsito y de reuniones, hasta la comunicación como lo muestran los siguientes ejemplos de comunicados:

«Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones».

(Comunicado Nº 1 de la Junta Militar, 24 de marzo de 1976)

«Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales».

(Comunicado Nº 19 de la Junta Militar, 24 de marzo de 1976)
«Se recomienda a la población abstenerse de transitar por la vía pública durante las horas de la noche, a los efectos de mantener los niveles de seguridad general necesarios, cooperando de este modo con el cumplimiento de las tareas que las fuerzas en operaciones intensificarán a partir de dicha oportunidad».
(Comunicado Nº 24 de la Junta Militar, 24 de marzo de 1976)

Hasta este momento, no era extraña la presencia militar en las más altas esferas del gobierno; incluso los golpes militares parecían -ya- parte de la historia política del país. Los años setenta marcaron un hito en la historia argentina, pues no se trataría de un golpe militar más, sino del que vendría acompañado de los años con mayor represión militar y los peores niveles de violencia en contra de la población civil. Si bien la violencia por parte de los grupos guerrilleros había aumentado, la violencia sistemática que se ejercería en contra de la sociedad no puede tener explicación coherente; ni siquiera la aprobación del nuevo golpe militar por parte de algunos sectores de la población con el único afán de que se pusiera “mano dura” a los actos con violencia desmedida de los grupos guerrilleros. Miles de desapariciones forzadas, asesinatos, torturas y las peores violaciones imaginadas a los derechos humanos tuvieron lugar en un nuevo episodio de la historia del país argentino cuyo pueblo desearía que nunca hubiera pasado.

Octubre de 1975 fue un mes clave para la historia argentina; momento en que el gobierno de *Isabelita* le dio mucho más rango de acción a las fuerzas armadas para contrarrestar las acciones violentas de la guerrilla. Este plan denominado Proceso de Reorganización Nacional queda oficialmente inaugurado el 24 de marzo de 1976 tras el golpe de estado. Aunque, también previo al golpe militar -en noviembre de 1975-, queda acordado el Plan Cóndor en todo el cono sur del continente motivado y auspiciado por los Estados Unidos (la CIA y el FBI particularmente). La aparición de grupos guerrilleros y una importante militancia política tendiente a ideas de izquierda soportadas y enriquecidas por la revolución cubana; el Plan Cóndor surge como una respuesta para detener estas acciones *subversivas* que ponían en peligro los intereses de las élites latinoamericanas aferradas a su relación con los Estados Unidos.

El Plan Cóndor⁹⁵ surge el 28 de noviembre de 1975 en Chile, tras una reunión entre el Jefe de la Policía Secreta chilena -Manuel Contreras-, con militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, esta estrategia, se trataba de "un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del 70 hasta mediados los años 80 para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña" (BBC, 2016). Esto puede ser una de las razones por las cuales las fronteras parecían desaparecer para que los Estados sudamericanos pudieran llevar a cabo sus acciones violentas. Además, este plan fue clave para la aparición de cruentas dictaduras militares en el cono sur; como la argentina.

"El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el General Jorge Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, se hizo cargo del poder, dictó los instrumentos legales del llamado Proceso de Reorganización Nacional y designó presidente de la Nación al General Videla, quien además continuó al frente del Ejército hasta 1978" (Romero, 2001: 207). Aunque el plan inicial era que la Junta gobernara al país, se optó por elegir de entre sus miembros la figura de presidente pues había diferencias entre ellos. En ese mismo momento, se inicia el Proceso de Reorganización Nacional que perduraría hasta finales de 1983 cuando termina la dictadura militar. Este plan de acción tenía impacto en todos los ámbitos del país buscando transformar al país en uno sin militancia política y alineado al orden dictado por los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría.

"Ahora el enemigo ya no era el peronismo y la guerrilla, que estaba prácticamente liquidada debido a enormes fracasos en su estrategia y luego de una gran ofensiva del ejército en 1974/75. Los distintos grupos revolucionarios como el Partido Socialista de los Trabajadores pasaron a la clandestinidad en esta etapa. Directamente era toda persona que cuestionara el régimen. Y con

⁹⁵ No fue sino hasta 1992 que se conocieron públicamente detalles sobre el Plan Cóndor. A diferencia de otros crímenes contra la humanidad en diferentes países del mundo, en este caso, se tiene mucha documentación al respecto en los países en donde el plan se puso en práctica y la información fue complementada con los archivos desclasificados por el gobierno de Bill Clinton en los Estados Unidos. Numerosos perpetradores sudamericanos han sido sentenciados por haber participado en este plan de acción; en Argentina el expresidente -miembro de la Junta Militar de 1976- fue enjuiciado (2001) y encontrado culpable por esto en 2010 (BBC, 2016).

la excusa de eliminar las tendencias subversivas se desató un arsenal represivo nunca antes visto en la historia de nuestro país” (Fucík, 2017).

El Proceso de Reorganización Nacional tenía un objetivo claro: terminar con la violencia a costa de un nivel superior de la misma, hasta que desaparecieran los opositores y los subversivos. Tal como sucedió en otros países latinoamericanos, el concepto de *subversivo* fue haciéndose tan amplio hasta abarcar a casi cualquier persona: “...La noción de “subversivo” ha sido suficientemente amplia para incluir en la persecución prácticamente a quien quiera que actuase demostrando cualquier forma de militancia o de empatía” (Andreozzi, 2011: 22). El Ejército no sólo se enfrentó contra la guerrilla, sino de cualquiera que pensara diferente a lo establecido por la dictadura militar.

“La mayor parte de los *desaparecidos* fueron dirigentes y miembros de las organizaciones revolucionarias, armadas y no armadas” (Novaro, Marcos en Yankelevich, 2014: 325). Sin embargo, la *Reorganización* de la nación se impuso a través del terror de la población en general, pues la violencia del Estado tampoco parecía tener un alto, incluso cuando guerrillas como la ERP declararon su derrota en 1977. No había ninguna fuerza *subversiva* que tuviera la capacidad para enfrentar a las fuerzas armadas en un combate directo; y para 1977, las guerrillas habían prácticamente sido aniquiladas, ya sea por la muerte de los militantes, por su desaparición o bien por miedo que los había llevado a esconderse o a exiliarse. Pese a esto, la violencia no cesó; y es que lo *subversivo* fue tan vago, pero a la vez abarcó tanto, que los ataques en contra de la población civil no parecían terminar. Si todas las muertes eran “justificadas” -pues se trataba de militantes y guerrilleros en medio de un conflicto armado- ¿Por qué la clandestinidad?

“La imposición de la disciplina por el terror hizo caso omiso de las leyes... Se concretaría en el secuestro, tortura y asesinato de más de 10.000 personas de acuerdo con la CONADEP” (Novaro, Marcos en Yankelevich, 2014: 325); aunque esta cifra puede variar debido a la falta de denuncia, ya que las organizaciones no gubernamentales documentan alrededor de 30.000 casos.

“...Se trató en su mayoría de jóvenes entre 15 y 35 años. Cayeron militantes de organizaciones políticas y sociales, dirigentes gremiales de base, con actuación en las comisiones internas de fábricas, y junto con ellos militantes políticos, sacerdotes, intelectuales, abogados relacionados con la defensa de los presos políticos, activistas de organizaciones de derechos humanos, y

muchos otros, por la sola razón de ser parientes de alguien, figurar en una agenda o haber sido mencionados en una sesión de tortura. Las víctimas fueron muchas, pero el verdadero objetivo eran los vivos, el conjunto de la sociedad que, antes de emprender su transformación profunda, debía ser controlada y dominada por el terror y la palabra” (Romero, 2001:210-211).

No sólo la sociedad civil vivía bajo un constante terror, esperando a ver quién desaparecería después, sino que desaparecieron las instituciones, la actividad política, la libertad de expresión. Todas las actividades estaban prohibidas o podrían parecer sospechosas; era una persecución. La Junta Militar se encargó de prohibir cualquier muestra en su contra por lo que las multitudinarias marchas desaparecieron; las organizaciones sindicales y cualquier otra actividad gremial fue prohibida. Profesores, artistas e intelectuales eran constantemente asediados y vigilados por las fuerzas armadas. Los medios de comunicación sufrieron una censura inimaginable, teniendo terminantemente prohibido hacer mención sobre algún acto terrorista o cualquiera de las víctimas que aparecía muerta en alguna calle; mucho menos hacer mención de los desaparecidos o cualquier tipo de denuncia sobre este respecto. “Sólo quedó la voz del Estado, dirigiéndose a un conjunto atomizado de habitantes” (Romero, 2001:211).

Si bien es justo hablar de la violencia perpetrada por la dictadura en contra de la sociedad civil, también es relevante plantear que el contexto social se vio envuelto en un círculo de violencia, volviéndose más cruenta con el paso de los años. Parte importante del entorno fue la Guerra Fría que llevaría a que los Estados Unidos tomaran acciones políticas en toda América Latina para evitar que los movimientos de izquierda tomaran el poder y pudieran poner en peligro los ideales imperialistas. Pero, también, este mismo contexto internacional propició que innumerables sectores de la sociedad tuvieran un activismo político intenso, buscando un cambio de rumbo para los países de la región; algunos de estos grupos -incluso- radicalizándose hasta convertirse en grupos armados y guerrilleros dispuestos a tomar el poder a través de las armas.

Argentina no fue ajena a estos eventos y se convirtió en uno de los países latinoamericanos con mayor número de grupos armados activos en contra de los gobiernos en turno. La mayor parte

de estos grupos nacieron en el umbral de los sindicatos, los cuales -a fines de los años sesentas y a principios de los setentas-, se fueron radicalizando al ver que varios de los líderes de estas organizaciones lejos de defender a los gremios, se convirtieron en parte de los grupos de poder dispuestos a negociar con los gobiernos buscando el beneficio propio, a costa de las necesidades de sus representados. Aproximadamente a partir de 1969, y hasta 1979, los grupos armados tuvieron un periodo de actividad más álgida y también más violenta. Si bien mucha gente apoyaba los ideales de los gremios y los grupos de izquierda, los actos terroristas empezaron a tener un impacto destacado en la vida del argentino promedio, logrando que en el momento en que el gobierno dio más libertad a las fuerzas nacionales para enfrentar a la guerrilla, no hubiera repudio por parte de la sociedad en general. Y, esto llevó, también, a que la Junta Militar que entrara en 1976 se viera como una opción para terminar con los actos violentos.

Los movimientos que estaban contra el gobierno no siempre actuaron de manera violenta; la inconformidad se hacía a través de protestas multitudinarias, huelgas, sabotajes a la infraestructura y algunas insurrecciones urbanas menores; la respuesta gubernamental pocas veces fue en favor de la gente -al menos así lo sentían-, por lo que se percibió que la violencia sería la solución. En el inicio de los sesentas, la juventud activista buscaba incorporarse de manera activa a la política, pero fueron excluidos por regímenes totalitarios -que eran los más comunes en el país-. En la revista *Estrella Roja* -órgano informativo del Ejército Revolucionario del Pueblo-, se publicó: “El Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores, dirección político-militar del Ejército Revolucionario del Pueblo, tomó la grave determinación... de responder con una ejecución de oficiales indiscriminada...” (Manfroni y Villaruel, 2014: 81).

Durante la década de los setentas se registraron atentados de diversos grupos armados en diferentes lugares del país; dependiendo del año, algunos grupos tuvieron más, o menos, actividad. Sin duda, el hecho de que, en 1973, al ganar Héctor Cámpora la presidencia, le diera una amnistía y liberara a los guerrilleros que estaban cumpliendo condenas en las cárceles, no benefició la pacificación del país. La siguiente tabla presenta algunos de los grupos armados que más presencia

tuvieron; sin embargo, los últimos dos fueron de los más activos, y durante periodos más prolongados:

Siglas	Nombre del Grupo Armado
BRPO	Brigadas Rojas del Poder Obrero
CALA	Comité Argentino de Lucha Antiimperialista
ELN	Ejército de Liberación Nacional
FAL	Fuerzas Armadas de Liberación
FAR	Fuerzas Armadas Revolucionarias
FAP	Fuerzas Armadas Peronistas
MRA	Movimiento Revolucionario Argentino
OCPO	Organización Comunista Poder Obrero
PRT	Partido Revolucionario de los Trabajadores
PVP	Partido por la Victoria del Pueblo
VC	Vanguardia Comunista
ERP	Ejército Revolucionario del Pueblo
--	Montoneros

Fuente: Manfroni y Villaruel, 2014: 190

Mostrar su poderío y castigar al enemigo eran los objetivos principales de los grupos armados. “...entre 1969 y 1979, los medios de prensa registran 4.380 bombas colocadas por organizaciones clandestinas en distintos lugares; a eso hay que sumar tiroteos en vía pública, copamientos de edificios, desvíos de aeronaves y tantos otros hechos que afectaron a sectores indiscriminados de la población. Todo ello, sin contar que existen miles de atentados y víctimas no registradas por la prensa” (Manfroni y Villaruel, 2014: 13). La mayoría de los asesinatos iban acompañados de comunicados no sólo adjudicándose el hecho, sino también dando una explicación de los motivos por los cuales la persona había sido ultimada. En un principio los actos violentos tenían como blanco diferentes sectores gubernamentales; sin embargo, llegó un punto, en donde algunas organizaciones tomaron el secuestro de civiles -incluso niños- como una manera de obtener recursos para continuar con la lucha. El hecho de que hubiera blancos civiles, así como víctimas colaterales, logró que la causa de la guerrilla se fuera deslegitimando en diferentes sectores sociales; y, que las fuerzas armadas entraran en el mismo círculo de violencia que más parecía tener motivos de venganza que de seguridad nacional.

El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) (2013) presenta registros de, al menos, 17.000 víctimas, obtenidas del análisis de cuatro diarios nacionales de la

época: La Nación; Clarín; Crónica y La Prensa, así como del cruce de información entre dichos diarios y las revistas *Estrella Roja*, del ERP, o *Evita Montonera*, de la agrupación Montoneros. La cifra presentada por CELTYV se trata de un aproximado en cuanto al número de víctimas que tuvo la guerrilla, porque hubo muchos casos no documentados por la prensa. Tampoco están incluidas personas que fallecieron días, o meses, después de los atentados, o casos en los que se generó un impacto a largo plazo debido a algún acto terrorista, como el caso de trauma o discapacidad.

Si bien la cifra puede no ser oficial, al considerar el número de atentados que hubo en diferentes localidades del territorio por parte de los grupos guerrilleros, tampoco puede considerarse como descabellada. Irónicamente, el número de blancos civiles, fueron mayores que los propios blancos gubernamentales, quienes estaban directamente involucrados en la violencia. La siguiente tabla presenta el número de atentados en contra de personas físicas durante los diez años en que mayor actividad hubo por parte de la guerrilla:

AÑO	MUERTOS	HERIDOS	SECUESTRADOS	TOTAL ANUAL DE VÍCTIMAS
1969	36	98	1	135
1970	28	146	80	254
1971	56	336	16	408
1972	53	129	64	246
1973	107	421	323	851
1974	148	256	115	519
1975	240	397	121	758
1976	283	428	25	736
1977	112	110	9	231
1978	21	28	3	52
1979	10	19	1	30
TOTAL	1.094	2.368	758	4.220

Fuente: Manfroni y Villaruel, 2014: 70

Víctimas como el General Pedro Eugenio Aramburu, quien fue secuestrado y asesinado por el grupo Montoneros; el General Cesáreo Cardozo, asesinado por una bomba colocada bajo su cama por una amiga de su hija, o el Capitán Humberto Viola, ejecutado frente a su familia, donde también mataron a una de sus hijas e hirieron a la otra; son algunos casos icónicos y muy recordados. Sin embargo, la mayoría de los “golpes” no tuvieron a víctimas reconocidas y conforme pasaron los años, los motivos de los asesinatos, ataques o secuestros fueron teniendo menos

relación con la situación política directamente. Es por ello que se tienen números como: 142 víctimas -entre muertos, heridos o secuestrados- menores de edad (Manfroni y Villaruel, 2014: 36). Ni tampoco se consideran las ocasiones en que grupos clandestinos entraron a las escuelas solamente con el fin de atemorizar a los estudiantes. También, 145 empresarios víctimas de terrorismo -la mayoría secuestrados-, que si bien, algunos de ellos estaban ligados al sector gubernamental, o apoyaban las políticas totalitarias por sus propios intereses, otros solamente fueron víctimas, como una manera de generar ingresos para las fracciones guerrilleras.

Si el objetivo de la guerrilla era venganza en contra de las fuerzas gubernamentales, es irónico ver que solamente aproximadamente 653 efectivos de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad murieron víctimas de ataques terroristas -sin contar aquellos que murieron en combate-. El número aproximado de civiles secuestrados fue de 700, mientras que, por parte de las fuerzas armadas y de seguridad, es menor a 50 (Manfroni y Villaruel, 2014: 81). Ningún tipo de violencia es legítima ni aceptable; tan reprobable es la violencia ejercida por los grupos guerrilleros como aquella por parte de las fuerzas armadas. Sin embargo, de acuerdo con el CELTYV (2013) "...las víctimas del terrorismo en la Argentina quedaron olvidadas para la historia". "...no hay distinción entre las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos y las que cayeron mientras estaban llevando a cabo un ataque, por su propia iniciativa, contra una instalación civil o militar" (Manfroni y Villaruel, 2014: 11). A pesar de ello, el trato que han recibido las víctimas de cada uno de los bandos en confrontación ha sido muy diferente.

Dependiendo del punto de vista que se considere, el gobierno militar que estuvo vigente entre 1976 y 1983 puede ser descrito de diferentes maneras: la parte militar lo llamó *guerra sucia*, *guerra antirrevolucionaria* o *lucha contra la subversión*. Los grupos guerrilleros llamaron a este periodo como *guerra sucia*, *guerra de liberación* o *lucha antiimperialista*; mientras que las organizaciones de derechos humanos la llamaron *terrorismo de estado*, *represión* o simplemente *dictadura militar* [traducción de la autora] (Robben, 2007: 171). Sin importar el nombre que se le otorgue a este periodo, lo que imperó fue la violencia. De algún modo, una contraofensiva por parte de las fuerzas

armadas hacia los grupos guerrilleros era de esperarse, pues el orden y terminar la subversión fueron dos de las claves para que se llevara a cabo el golpe militar.

El Proceso de Reorganización Nacional estaba basado en una sola ideología: la sociedad debe estar dividida en jerarquías y clases sociales -opuesto al ideal revolucionario de explotación y la necesidad de luchar por la igualdad-; por lo tanto, era indispensable terminar con la subversión que se consideraba como el cáncer de la sociedad argentina. Desde los primeros comunicados de la dictadura, la idea de confrontación hasta terminar con la oposición quedó establecida al dar el ultimátum a la sociedad argentina de entregar todas las armas en un plazo máximo de 48 horas; de lo contrario todos los actos violentos en contra del gobierno serían castigados con la muerte. Mientras tanto, se establecieron organismos llamados Consejos de Guerra Especial Estables. “Estos tribunales fueron concebidos hacia fines del siglo XIX como fueros diferenciados destinados a mantener la disciplina de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, desde comienzos de la década del sesenta, más tarde, en los primeros años setenta y especialmente desde el golpe de Estado militar de marzo de 1976, se convirtieron en cuerpos extrajudiciales concentrados en acusar y juzgar a civiles por medio de la figura del delito político” (D’Antonio, 2016:1).

“The military junta emphasized time and again that this revolutionary war was not between armed forces and guerrillas, but between the Argentine people and the subversives, be they combatants or not” (Robben, 2007: 184)⁹⁶. El hecho de que la subversión no solamente hiciera referencia a las personas involucradas directamente en el conflicto armado, hizo que el término se aplicara a casi cualquier persona que tuviera ideales, o que participara en alguna movilización sin importar que las causas fueran políticas o sociales. Un ejemplo del alcance del término *subversión* es lo que las fuerzas armadas dijeron al padre Yorio antes de ser secuestrado por al menos cinco meses, lo que lo llevó al exilio una vez liberado “...vos no sos un guerrillero, no estás en la violencia, pero vos no te diste cuenta que al irte a vivir allí (en la villa⁹⁷) con tu cultura, unís a la gente, unís a

⁹⁶ La Junta Militar enfatizó en varias ocasiones que la guerra revolucionaria no era entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas, sino entre la Argentina y los *subversivos*, sean o no combatientes. [Traducción de la autora] (Robben, 2007: 184).

⁹⁷ El término villa se refiere a los barrios más empobrecidos de las ciudades argentinas.

los pobres y unir a los pobres es represión” (CONADEP, 2006: 352). Incluso profesiones como psicología, psiquiatría o docencia se convirtieron, también, en actividades *subversivas*.

El hecho de que estuvieran las Fuerzas Armadas en el gobierno fue legitimado por diferentes actores: la Iglesia, para restaurar los principios de la “nación católica”; la administración norteamericana, que impulsaba la resolución de conflictos de izquierda en el continente; las empresas nacionales e internacionales, buscando imponer un nuevo modelo económico en donde los sindicatos no tuvieran tanto peso; e incluso, los sectores medios, quienes reclamaban orden y autoridad (Crenzel, 2008: 31-32). Tras algunos actos en contra de líderes guerrilleros y sindicales por parte de las Fuerzas Armadas antes del golpe de Estado, y la amenaza de muerte al no entregar las armas, los sectores que apoyaban a la Junta Militar asumieron que tal vez algunos habrían de morir para terminar el conflicto. Sin embargo, ningún sector pensó que el nivel de violencia que pudiera ejercer el Estado hacia sus propios connacionales llegara a niveles tan exorbitantes. “La represión fue una acción sistemática realizada desde el Estado” (Romero, 2001: 208).

Los Consejos de Guerra Especial Estables cumplieron con la tarea de retomar investigaciones sobre diversos atentados que estaban pendientes en los juzgados. Si bien ellos no podrían llevar ante las autoridades los casos o realizar detenciones, se trataba de ubicar a personas que habían estado directamente involucradas en las acciones o simplemente militantes - independientemente de su edad y grado de involucramiento-. Como lo muestra este testimonio, el gobierno tenía bien estudiado a quién tendrían que ir a buscar; los Consejos habían cumplido con su trabajo “...entraron 10 matones armados hasta los dientes y mi hijo -tenía 21 años-, estaba por ir a dormir y lo llevaron a la rastra, le pegaron, nos encerraron y se lo llevaron... Tengo otros hijos, pero con ellos no pasó nada porque el que militaba era mi hijo. No eran bobos, eran chicos que estaban militando, luchando por un ideal; y ellos vinieron a buscar al que sabían que militaba, no al otro. El otro era más chico, tenía 15 años y era un estudiante que no participaba”⁹⁸.

⁹⁸ Cf. Apéndice #9 (Pp. 339). Entrevista con Evel Petrini de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo.

“Pese a que la Junta Militar estableció la pena de muerte, nunca la aplicó, y todas las ejecuciones fueron clandestinas... De ese modo, no hubo muertos, sino *desaparecidos*” (Romero, 2001: 209). Los cadáveres aparecían muertos en la calle aparentando ser el resultado de enfrentamientos o intentos de fuga de los subversivos. La mayoría de los casos los cuerpos eran enterrados en cementerios sin haber sido identificados, aventados al mar o quemados en fosas clandestinas; sin que los familiares supieran qué había sido de sus hijos. “Desde el golpe el número de *desapariciones* se multiplicó por diez. Su práctica se concentró entre 1976 y 1977, años en que se produjeron el 76.6% de ellas, y tuvo por epicentro las principales ciudades del país, donde las fracciones y grupos de la clase obrera y el movimiento estudiantil alineados con las corrientes de la izquierda peronista y marxista tenían una presencia más relevante” (Crenzel, 2008: 3)⁹⁹.

“A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto; secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos” (CONADEP, 2006: 11). El hecho de considerar esta violencia de Estado como sistemática se debe a que hay patrones bien identificados en el accionar militar en contra de la subversión. Quienes fueron víctimas de las fuerzas castrenses vivieron cuatro etapas: el secuestro, la tortura, la detención y la desaparición. Cada etapa fue marcada por elementos bien delimitados que presentan evidencia de una organización específica y reconocida por cada una de las partes del aparato militar y gubernamental. Así lo evidenció el General Videla -en posesión de la presidencia- en 1977, cuando en una conferencia de prensa señaló:

“En toda guerra hay personas que sobreviven, otras que quedan incapacitadas, otras que mueren y otras que desaparecen [...] La desaparición de algunas personas es una consecuencia no deseada de esta guerra. Comprendemos el dolor de aquella madre o esposa que ha perdido a su hijo o marido, del cual no podemos dar noticia, porque se pasó clandestinamente a las filas de la subversión, por haber sido presa de la cobardía y no poder mantener su actitud subversiva, porque ha desaparecido al cambiarse el nombre y salir clandestinamente del país o porque en un encuentro bélico su cuerpo al sufrir las explosiones, el fuego o los proyectiles, extremadamente

⁹⁹ El periodo más álgido de las desapariciones puede variar dependiendo del autor que se consulte pues algunos otros indican fue un periodo denominado *trienio sombrío* que abarca desde 1976 hasta 1978.

mutilado, no pudo ser reconocido, o por exceso de represión” (Videla, diciembre 1977 en Crenzel, 2008: 37).

La dictadura controlaba los medios de comunicación, así que ese vacío de información hizo que la sociedad en general se sintiera vulnerable. Apenas medios clandestinos, como la *Agencia de Noticias Clandestina*, parte de la organización Montoneros se atrevió a mediados de 1976 a hacer una denuncia pública sobre las desapariciones responsabilizando a las Fuerzas Armadas. La dictadura no llevaba mucho tiempo en el poder y quienes se enteraron de esta información dudaron de su veracidad, ya sea por la fuente o por considerar que eran exageraciones. Sin embargo, conforme fueron pasando los meses, cuando los medios clandestinos habían sido acallados, pero que había un número mayor de víctimas y familias que habían sido afectadas, no se dudó de la credibilidad, sino que el miedo obligó a legitimar. “En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuere, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor, y de otros, una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror: “por algo será”, se murmuraba en voz baja, [...] mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido” (CONADEP, 2006: 13).

El secuestro era el primer paso del círculo de violencia en contra de la subversión. “Si bien constan en los archivos de la CONADEP denuncias acerca de aproximadamente 600 secuestros que habrían producido antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, a partir de ese día que son privadas ilegítimamente de su libertad decenas de miles de personas en todo el país, 8.960 de las cuales continúan desaparecidas” (CONADEP, 2006: 20). Los secuestros eran planeados con anticipación y quienes lo realizaban sabían por quién iban.

“La constitución de las desapariciones en política de estado durante la última dictadura militar (1976- 1983) supuso dos cambios sustantivos con respecto a los grados y formas que asumió la intensa historia de violencia política que atravesó la Argentina durante el siglo XX. En primer lugar, a diferencia de la represión estatal contra militares políticos o sindicales, las desapariciones objetivaron una decisión de exterminio político. En segundo lugar, implicaron el ejercicio de una forma novedosa de la muerte por causas políticas: su práctica clandestina. Estas particularidades distinguieron, además, a la dictadura argentina del resto de las que, en los años setenta, se establecieron en el Cono Sur de América Latina” (Crenzel, 2008: 27).

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional de Desaparecidos, el 62% de los secuestros sucedió en la noche y ante presencia de testigos:

Tipo de abducción	Porcentaje de casos
Detenidos en su domicilio ante testigos	62%
Detenidos en la vía pública	24.6%
Detenidos en lugares de trabajo	7%
Detenidos en lugares de estudio	6%
Desaparecidos secuestrados de establecimientos penales, militares o policiales	0.4%

Fuente: CONADEP, 2006: 21

Los encargados de este acto eran dos grupos diferentes, conformados todos por las Fuerzas Armadas. El primero, llamado *la Patota* o *Grupo de Tareas*, se encargaba de realizar las abducciones en los domicilios, mientras que autos llamados Falcon de la marca Ford, conocidos como *los falcons verdes* -el segundo grupo- se dedicaba a hacer los secuestros en las calles. En ambos casos se utilizaban grupos de al menos 5 o 6 personas, y hasta 50, fuertemente armados, quienes llegaban y se iban -usualmente- en vehículos sin placas. En algunas ocasiones se contaba con el apoyo de fuerzas regulares, que podrían estar uniformadas; llegaban en camiones o camionetas oficiales y eran apoyados por el patrullaje de helicópteros de alguna corporación policial o militar. Ya sea que llegaran a sacar de su domicilio al subversivo, a quien sacarían a golpes y lo subirían a alguno de los vehículos; o si no estaba en casa, lo esperarían en una estrategia que llamaban *la ratonera* en donde el operativo podría durar horas o días hasta que “el ratón” llegara a la trampa. Mientras tanto, quienes habitaban la vivienda, serían sometidos a todo tipo de vejaciones al considerarse rehenes y mecanismo de presión.

La gente reconocía fácilmente tanto a los vehículos como a los comandos dedicados al secuestro, pues sobre todo en el caso de los secuestros realizados en los domicilios, se solía cortar la energía eléctrica de la zona o bien cerrar manzanas completas, evitando el paso de cualquier vehículo o peatón. Podrían utilizarse megáfonos para insultar y amenazar; reflectores e incluso bombas y granadas. En la mayoría de las ocasiones, estas acciones eran desproporcionadas para la persona que iban a secuestrar -generalmente joven, desarmada, viviendo con su familia y que,

para salvaguardarla, no tomaría ninguna acción-. Sin embargo, había un propósito detrás "... la intimidación y el terror no sólo apuntaban a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de respuesta ante la agresión. Estaban dirigidos también a lograr el mismo propósito entre el vecindario" (CONADEP, 2006: 22). *La Patota* tenía "luz verde" para hacer lo que fuera necesario para capturar al subversivo; esto implicaba que, si acaso algún vecino se ponía en contacto con alguna fuerza policial solicitando ayuda, cualquier organismo policial o militar tenía la obligación de decir que estaban al tanto y que no podrían actuar.

Los cuerpos de tarea dedicados a las abducciones tenían establecidas ciertas reglamentaciones sobre su actuar en caso de que hubiera niños en la familia que era *chupada* o secuestrada. En el mejor de los casos los niños serían dejados en casa de algún vecino, mientras llegara algún otro familiar responsable a la casa ya vacía o bien -en el mismo vehículo en donde llevaban a la persona secuestrada- pasaban a dejar al infante a casa de algún pariente. Otra opción sería dejar al niño en el domicilio sin nadie que se hiciese responsable lo que hacía que los niños terminaran en la calle o podrían ser llevados a Institutos de Menores en donde podrían ser adoptados después. El peor escenario para los menores era que fueran secuestrados también para que algún represor los adoptara de manera ilegal o que fueran llevados juntos con sus padres o familiares al Centro Clandestino de Detención donde presenciarían la tortura de los adultos o ellos mismos serían objeto de tortura como forma de presión para que los padres dieran información.

"It was mostly through abduction, rather than arrest, that detainees were apprehended. Most captives were not treated as criminal suspects or as prisoners of war, and were neither formally charged nor officially acknowledged as in the custody of the government forces" (Robben, 2007: 191)¹⁰⁰. Durante el primer mes en que la Junta Militar tomara posesión y enviara tropas a las calles para "reordenar al país", se podría pensar que los primeros afectados fueran los grupos guerrilleros. Si bien la guerrilla recibió ataques certeros, sus miembros no encabezaban las listas negras sino los

¹⁰⁰ Era principalmente mediante abducciones y no arrestos que los detenidos eran aprehendidos. La mayoría de los cautivos no eran tratados como criminales sospechosos o prisioneros de guerra; tampoco eran juzgados ni considerados en los archivos oficiales del gobierno. [Traducción de la autora] (Robben, 2007: 191).

sindicatos. Las primeras acciones no trataban de acabar con el conflicto bélico, sino aterrorizar a la población a tal grado, que nadie quisiera unirse a ningún grupo guerrillero. Por ello, el primer objetivo de la Junta Militar fue tomar el control de los principales sindicatos, deteniendo o abduciendo a cientos de líderes sindicales. La clase obrera -tan activa políticamente- sufrió terribles golpes en sus filas al punto en que poco menos de la mitad del total de desaparecidos eran trabajadores y no guerrilleros (CONADEP en Robben, 2007: 198).

Una vez que pretendían haber debilitado el eslabón entre los sindicatos y la guerrilla, los segundos se convirtieron en el blanco de los ataques. Se pretendía eliminar a toda la guerrilla del país, y aunque se quería acabar con todas las agrupaciones independientemente de su tamaño y alcance, las acciones más severas fueron en contra de los grupos más activos: Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Las Fuerzas Armadas actuaron de diversas maneras en contra de estos grupos siendo la vía armada fue la más relevante pues el armamento, entrenamiento y organización marcó la diferencia entre uno y otro grupo. Además, la guerrilla fue diezmada en términos financieros, y aunque estos factores lograron que las células armadas unieran fuerzas en contra de los militares, los últimos marcaron la pauta. Las persecuciones de los miembros activos de la guerrilla fueron más allá de los encuentros armados, hubo bombardeos vía aérea, de guaridas y casas de seguridad, sobre todo en destacamentos al interior del país como Tucumán, en ocasiones la persecución -que terminaba en abducción- llegaba hasta lugares públicos o casas particulares. Cada célula de la guerrilla tomó ciertos modos de operar, por ejemplo, Montoneros repartió una pastilla de cianuro entre sus filas para evitar ser capturados vivos mientras que el ERP decidió que esto desmoralizaría a sus filas. De acuerdo con un informe militar, para el 10 de mayo de 1978 el brazo armado de la guerrilla habría sido aniquilado en un 90%, a manos de las Fuerzas Armadas.

Después de la primera ola represiva, focalizada en los sindicatos y la guerrilla, continuaron con aquellos que parecían *subversivos* por ser cercanos a ciertos grupos o por presunción. Las operaciones que continuaron pretendían hacer una “limpieza ideológica”, por lo que los siguientes blancos fueron: empresas, centros educativos, sectores de la iglesia y vecindarios de la clase

trabajadora. Dentro de las empresas privadas o estatales se planeaba terminar con los conflictos laborales ya que se entendía una relación entre tener demandas laborales y la subversión. Algunos sectores de la iglesia, sobre todo los relacionados con la teología de la liberación, y que tenían relación estrecha con los sectores más necesitados de la población, se vieron involucrados; ya sea por creer que estaban inmersos en los movimientos o bien, por educar a los ciudadanos con ideas subversivas. El último objetivo fueron los vecindarios de la clase trabajadora, sobre todo si se sabía que había algún tipo de descontento en contra del régimen. En lo general, cualquier actividad que implicara algo de vida social podría convertir a la gente en un blanco para el secuestro, detención o abducción; el motivo principal es que cuando la guerrilla se vio mermada trató de levantar una revuelta social, aunque nunca se concretó.

Los centros educativos entraron también dentro de los objetivos subversivos. La milicia pensaba que tanto las universidades como las escuelas preparatorias eran un nicho para el reclutamiento de nuevos miembros para las guerrillas, así como de adiestramiento ideológico. Como consecuencia, muchos estudiantes y profesores fueron abducidos por tener ideas contrarias a las establecidas. Uno de los ejemplos más claros que fue la llamada *Noche de los Lápices* el 16 de septiembre de 1976 en la provincia de La Plata cuando "... siguiendo las correspondientes órdenes de detención expedidas por el servicio de inteligencia del Ejército argentino, un contingente militar del régimen represor de Jorge Rafael Videla acudió a los domicilios de seis estudiantes de educación secundaria que residían en La Plata y, tras presentarse como policías, los sacaron de allí de forma violenta, agrediéndoles y amenazando a sus padres con armas en mano. Se los llevaron consigo y, hasta el día de hoy, pese a todos los esfuerzos de sus familias por recuperarlos, nadie les ha vuelto a ver" (Noragueda, septiembre 2016). El delito de estos jóvenes fue haber participado un año antes en una marcha para que restituyeran el *boleto estudiantil* que no era más que una especie de beca para que una parte de la colegiatura fuera descontada y los estudiantes pudieran usar ese dinero para transporte. Aunque muchos estudiantes estaban politizados, ¿sus ideales serían una verdadera amenaza para el régimen militar?

El propósito de las abducciones era erradicar la subversión, más en términos ideológicos que por su capacidad de acción, y así dejar un legado de terror que impidiera que personas pudieran adherirse a la misma:

“Most political opponents targeted by the Argentine military were neither guerrilla combatants nor support troops which gave shelter, provided logistic support for attacks, or assembled, hid and transported weapons. The majority consisted of politically involved but unarmed civilians. They were sympathizers who distributed ilegal pamphlets and painted slogans, Third World priests, critical journalists and defense lawyers, and left-leaning teachers. They were student and labor union representatives, political activists and grass roots workers, young men and women who taught slum dwellers literacy skills, ran a public dispensary, or provided assitant to the poor. Most were never charged with any particular offense. Some people were abducted because they had relatives or friends considered subversive” (Robben, 2007: 205)¹⁰¹.

Una vez que las personas eran privadas de su libertad de manera ilegal, se pasaba a la segunda etapa de la abducción. Desde que las personas eran encontradas por la *Patota* o algún otro grupo de tareas, era sometida al *tabicamiento*, que no era otra cosa más que mantenerla privada de la visión para que la víctima no supiera a dónde estaba siendo llevada. “En casi la totalidad de las denuncias recibidas por la CONADEP se mencionan actos de tortura. No es casual. Los Centros Clandestinos de Detención fueron concebidos, entre otras cosas, para poder practicarla impunemente” (CONADEP, 2006: 30). Este también era el momento en que iniciaba el vagar de los familiares buscando alguna información que los llevara a encontrar algún rastro y así localizar a sus seres queridos.

Los Centros Clandestinos de Detención eran propiedades tomadas por las Fuerzas Armadas o bien que ya eran propiedad de ellos y eran convertidas en cárceles clandestinas, a donde quienes eran abducidos fueron llevados. Menos de un tercio de estos centros estuvieron localizados dentro de instalaciones militares; la mayoría estuvieron en edificios pertenecientes a la Gendarmería

¹⁰¹ La mayoría de los oponentes políticos elegidos por las Fuerzas Armadas argentinas no eran ni guerrilleros, ni personas que le dieron techo a estas tropas, apoyo logístico para ataques, o que ensamblaran, escondieran o transportaran armas. La mayoría consistía en civiles desarmados políticamente activos. Eran simpatizantes que distribuían panfletos ilegales o hacían pintas, sacerdotes del tercer mundo, periodistas críticos y abogados o maestros con tendencia izquierdista. Eran estudiantes y representantes sindicales, activistas políticos y trabajadores de abajo, hombres y mujeres jóvenes que enseñaban a leer en los barrios más pobres, tenían un dispensario o ayudaban a los menos favorecidos. A la mayoría nunca se les culpó de algo ilegal en particular. Algunas personas fueron abducidas por ser familiares o amigos de aquellos considerados subversivos. [Traducción de la autora] (Robben, 2007:205).

(Robben, 2007: 244). Esto tenía sentido, pues las instalaciones ya tenían celdas y, debido a la tradición represora de la policía, incluso había lugares dedicados a violentos interrogatorios. De esta manera no había registros oficiales de quién se lo habría llevado o a dónde, haciendo más complicado encontrarlos. “Los centros de detención, que en número aproximado fueron 340 existieron en toda la extensión de nuestro territorio, constituyeron el presupuesto material indispensable de la política de la desaparición de personas. Por allí pasaron millares de hombres y mujeres, ilegítimamente privados de su libertad, en estadías que muchas veces se extendieron por años o de las que nunca retornaron” (CONADEP, 2006: 59).

“Yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o detenidos en establecimientos militares más allá del tiempo indispensable para indagar a una persona capturada en un procedimiento y antes de pasar a un establecimiento carcelario” (Jorge Rafael Videla, 22 de diciembre de 1977 en Kirschbaum, 2004). Mientras que la versión oficial negaba la existencia de estos centros, testimonios y denuncias de sobrevivientes a estos lugares aseguran la presencia de altos mandos militares en los centros de detención. La logística que tenían estos lugares de reclusión no pudo haber existido sin el consentimiento de todo el aparato gubernamental y sin los recursos financieros del mismo. La clandestinidad en que el régimen mantuvo estos establecimientos se relacionó con la impunidad de lo que sucedía ahí dentro.

“No se trataba solamente de la privación de la libertad no comunicada oficialmente, sino de una siniestra modalidad de cautiverio, que trasladaba la vida cotidiana a los confines más subterráneos de la crueldad y la locura” (CONADEP, 2006: 64). Como se mencionó anteriormente, los abducidos llegaban *tabicados* y así -sin poder ver- se quedarían todo el tiempo que estuvieran en cautiverio. La tortura empezaba desde ese momento, pues hacía que el prisionero perdiera casi por completo el sentido del espacio, del tiempo, ciclos de sueño, además de las consecuencias como conjuntivitis severas que dejaron secuelas permanentes en quienes pudieran salir vivos de la reclusión. Una vez que el prisionero estaba en el establecimiento, le era asignado un número que sería de ese momento en adelante su identificación. Esto cumplía dos funciones; por un lado, se

mantenía la secrecía de la identidad de los prisioneros y -la razón fundamental- era para iniciar con el proceso de deshumanización de las personas.

Los Centros Clandestinos de Detención (C.C.D.) eran establecimientos acondicionados para la tortura. En estos lugares se concentraba el personal especializado y ámbitos acondicionados a tal fin, llamados eufemísticamente *quirófanos* donde había toda una gama de instrumentos utilizados para el tormento de los retenidos. Cada centro de detención tenía una clasificación y en cada región habría al menos uno de cada tipo para poder cumplir con el “proceso” para el detenido. Así, los centros de detención podrían ser de dos tipos (CONADEP, 2006: 67,83)¹⁰²:

1. Lugar de Reunión de Detenidos (LRD): Centros donde los detenidos eran mantenidos por periodos considerables de tiempo hasta que se decidía su destino definitivo -que podría ser otros centros de detención, la muerte o, en raras ocasiones, la liberación-.
2. Lugar Transitorio (LT): El tiempo de transición era corto. A estos lugares el detenido llegaba después de ser secuestrado; o bien ahí eran trasladados a quienes serían liberados o a quienes se dejaría a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y serían trasladados a un LRD.

A la llegada de los abducidos empezaban las primeras sesiones de tortura con el objetivo de “ablandarlos” y que dieran información. Una vez que se sabía que la persona podría proporcionar información, entonces interrogadores profesionales continuaban con el trabajo de tortura y obtención de datos relevantes. Pero, la realidad es que hubo más gente torturada sin motivo que la gente que realmente podría dar información valiosa. Esta situación conllevó a que la tortura de las personas en cautiverio tuviera cierta temporalidad, habiendo quienes no soportaron las vejaciones; y, por otro lado, no sólo los “subversivos”, sino parientes o amigos corrieron la misma suerte con el fin de obtener una información que no existía en realidad.

Parte de la tortura y de la estancia en los C.C.D. era mantener a los abducidos al margen de cualquier actividad que pudiera existir en estos lugares. Es decir, las personas generalmente eran

¹⁰² Ver Anexo 12 (Pp. 314) donde se presenta un listado de los Centros Clandestinos de Detención más importantes de acuerdo con la zona del país que abarcara.

mantenidas siempre con los ojos cubiertos, sentados, o de pie, en lugares oscuros que podrían compartir con más personas, pero como no se les permitía hablar -salvo por algunos custodios que sí lo permitían- era difícil saber quiénes o cuántas personas estaban padeciendo lo mismo. Salvo excepciones, como los Centros de Detención en Formosa y Base Aérea de El Palomar, no se les permitía a los conscriptos participar en ninguna actividad que se desarrollara en el lugar; ni siquiera participaba cualquier sector del personal militar. Una característica fundamental para que estos lugares permanecieran en la clandestinidad era que sólo un número reducido de personal conociera tanto de su existencia como de lo que acontecía dentro. Por lo tanto, “el personal destinado a efectuar guardias en tales centros estuvo compuesto por efectivos de la Gendarmería Nacional, del Sistema Penitenciario Federal o de la Policía, siempre al mando de oficiales de las Fuerzas Armadas” (CONADEP, 2006: 70).

El estado físico de las personas cautivas en los C.C.D. era paupérrimo. No sólo por la tortura y las lesiones físicas que esto conllevaba -y que rara vez eran curadas por algún médico-, además de las consecuencias que el vendaje provocaba en los ojos, sino por las condiciones en que se les mantenía con vida. Lesiones, quemaduras, derrames e infecciones eran comunes, debido a los tormentos; pero el estado sanitario del lugar tampoco era idóneo. Los cautivos estaban limitados a mantenerse en colchonetas sucias, en algunos casos se proporcionaban bandejas para desechar heces y orina o cada detenido tenía que solicitar que lo llevaran al sanitario a los guardias en turno, quienes esperaban a que varios reos lo pidieran para proceder a llevarlos con los ojos vendados, en filas y en ocasiones amarrados entre sí, -esto dependía de cada centro-. La alimentación también era limitada a una o dos veces al día; y una vez más, dependiendo del lugar de detención podían tener alimentos un poco más decorosos, pero podría ser agua con harina o vísceras crudas. Tanto la alimentación como la higiene se fueron convirtiendo en un reto mayor conforme fueron pasando los meses y la sobrepoblación alcanzó a los centros de detención.

De acuerdo con los testimonios presentados en el texto de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP, 2006), las torturas físicas a las que eran sometidos los cautivos parecieran indescriptibles. El común de la tortura en los C.C.D. era el uso de la *picana* que

no es sino sesiones de tortura a través de descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, desde encías hasta genitales. “The electric prod was the standard and preferred equipment in every interrogation because the pain was excruciating but left no visible marks on the body other than two small inflamed dots which went away over time” (Robben, 2007: 217)¹⁰³. Quienes sobrevivieron a tales atrocidades también dan testimonio de golpizas, despellejamiento de plantas de los pies con hojas de rasurar, violaciones tumultuarias, individuales o con objetos, encadenamiento de las extremidades con el objeto de estirarlas, colgamientos (después de alguna sesión de tortura solían amarrar de las muñecas a las víctimas a ganchos que colgaban del techo). De acuerdo con médicos sobrevivientes o que supieron de los hechos, consideran que, probablemente, muchas de las víctimas no sobrevivieron a tales actos de tortura ya que mientras las golpizas ablandan los músculos, las descargas los tensan provocando infartos fulminantes. Si bien los testimonios indican desmayos, no se sabe con certeza de la cantidad de personas que hayan perdido la vida en las sesiones de tortura.

La tortura tenía propósitos deshumanizantes, por lo que, aunado a los tormentos físicos, se tienen severos traumas a causa de la tortura psicológica, que parece un mecanismo aún más perverso. Las personas empezaban a padecer este trauma desde el momento en que no sabían a dónde eran llevados; pero una vez que tenían las primeras sesiones de *picana* (era el “recibimiento” a los C.C.D.) la situación se tornaba intolerable. Además de lo físico, se ejercía tortura psicológica pues a los apresados se les hacía creer que lo mismo que ellos estaban viviendo, lo estaba padeciendo su familia o les enseñaban ropa con sangre -la ropa la robaban de sus casas, pero la sangre no era del familiar- la tortura de no saber qué era lo que realmente pasaba podría ser peor que la física. Hubo, también, quienes fueron obligados a ver a sus parientes ser torturados. A su vez, se hacían simulacros constantes de ejecuciones, sólo para demostrar a los presos que no tenían ningún control sobre sus propias vidas.

¹⁰³ La picana era el estándar y equipo preferido para los interrogatorios porque el dolor es terrible pero no deja marcas visibles en el cuerpo salvo por dos puntos inflamados que desaparecen con el tiempo. [Traducción de la autora] (Robben, 2007: 217).

Parte fundamental de la tortura que ejerció la dictadura en contra de la población argentina implicó también infundir terror entre la gente que no estaba cautiva; traumatización social. El enemigo tan perseguido, pero a la vez invisible podría estar en cualquier parte, y para detenerlo, había que fracturar el tejido social por completo. Para ello se trabajaba desde dentro de los centros de detención hacia afuera; por ejemplo, a través de algunos sacerdotes, quienes pedían una confesión a los cautivos antes de su ejecución; muchas veces tal ejecución era ficticia pero se utilizaba esa información -violando el secreto de confesión- para amedrentar a los parientes. O bien, matrimonios entre miembros de las fuerzas del Estado y víctimas de tortura, quienes reaparecían en la vida pública teniendo que vivir con algún perpetrador y usualmente bajo amenaza.

“If the Argentine military Junta and its diplomats denied the disappearances, then why were disappeared Argentines set free? ... The stories of torture and abuse would give rise to a culture of fear and restrain others from engaging in political protest” (Robben, 2007: 237)¹⁰⁴. La “aparición del desaparecido”, si bien ponía en duda a las versiones oficiales en torno a la inexistencia de desaparecidos, también esparcían el miedo. Las torturas eran tan extremas, los liberados estaban tan afectados que pese a convertirse en la palabra del gobierno contra la palabra de un civil; la gente dudaría, y, claramente, no querían vivir lo mismo. Si a esto se le suma, que algunos liberados eran utilizados después como carnadas para atrapar a más subversivos; o bien, se obligaba a exguerrilleros torturados a atrapar a otros de su mismo grupo; las relaciones sociales se resquebrajaron. Ningún familiar de algún detenido, ningún compañero, ningún conocido, quería tener nada que ver con la persona liberada por temor a que el testimonio de aquel fuera una realidad. Como se cita en el texto *El Señor Galíndez y Pablo* (Pavlovsky, 1986, citado en Robben, 2007: 237) “Tienes que entender que, por cada trabajo bien hecho, hay mil personas paralizadas por el miedo. Actuamos por irradiación. Es el gran mérito de nuestra técnica...”.

¹⁰⁴ Si la Junta Militar Argentina y los diplomáticos negaban las desapariciones, entonces, ¿Por qué había desaparecidos libres? ...Las historias de tortura y abuso dieron lugar a una cultura de miedo que hacía que otros desistieran de involucrarse en protestas políticas. [Traducción de la autora] (Robben, 2007: 237).

Dentro de los secuestrados para ser llevados a los C.C.D. también había mujeres. La CONADEP (2006: 298) establece que del total de desaparecidos que fueron registrados en este documento, el 70% fueron hombres y el 30% mujeres de las cuales el 3% aproximadamente fueron *chupadas* estando embarazadas. En este momento es donde se abre un capítulo aún más oscuro en la historia argentina. La mayoría de las embarazadas fueron llevadas a un solo centro de detención: La Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires. Aunque mujeres embarazadas hubieran sido capturadas en el interior del país; todas serían llevadas al mismo lugar para dar a luz donde eran atendidas por un par de médicos del Hospital Naval, un enfermero perteneciente a la ESMA y otras prisioneras a quienes se les permitiera apoyar o estuvieran en condiciones para hacerlo.

Las condiciones de las mujeres, próximas a ser madres, no eran muy diferentes a las del resto de los cautivos. Mientras parían, las reclusas estaban tiradas en el suelo en sus respectivas colchonetas, recibían la misma escasa comida que el resto, algunas también estaban amarradas, no tenían ninguna relación con el exterior; ni quienes estaban afuera buscándolas sabían en dónde estaban. La única diferencia era que no recibían torturas físicas. En el momento en que empezaran a tener contracciones serían ubicadas en algún lugar -sala de torturas, cocina, enfermería- donde recibirían alguna atención médica si es que los guardias avisaban a tiempo o los médicos estaban disponibles. No hay un patrón específico de acción cuando las mujeres parían y la atención que recibían podría depender de múltiples factores incluso el humor de los guardias. Algunas mujeres “privilegiadas” fueron llevadas al Hospital Campo de Mayo, en donde la entrada y la salida de la paciente siempre fue negada, así como los registros del recién nacido.

Lo que sí parecía tener un patrón eran dos factores: obligar a la mujer a firmar una carta dirigida a los familiares a quienes les sería entregado el recién nacido para su cuidado; y el segundo punto fue que, a más tardar ocho días después del parto, el bebé les sería arrebatado. Lo que no sabían las cautivas era que la carta era usada como un amparo por las Fuerzas Militares para que la reclusa cediera los derechos de su hijo y que ni las cartas ni los recién nacidos serían entregados a sus familiares. La mayoría de los bebés nacidos en cautiverio fueron entregados a familias -en su

mayoría de militares de rangos medios y altos- que no podían tener hijos ya sea dentro o fuera del territorio argentino; algunos más fueron llevados a orfanatos. La mayoría de las familias de las mujeres *chupadas* embarazadas nunca conocieron a los bebés, ni volvieron a ver a las madres.

No sólo se violaron los derechos humanos mínimos de las madres, sino también de los pequeños. Algunos tuvieron suerte de tener una familia -aunque no lo era en realidad-, algunos más fueron maltratados en los hogares a donde fueron llevados. Algunos más tuvieron la fortuna y el shock de saberse niños nacidos en cautiverio ya en su adultez y otros nunca han tenido certeza sobre su propia identidad. Rosa Tarlovsky de Roisinblit -actual vicepresidenta de la organización Abuelas de la Plaza de Mayo- vivió este martirio con su hija. La hija de Rosa –Patricia Roisinblit, fue secuestrada junto con su hija de 15 meses de edad y su compañero José Manuel Pérez Rojo. La niña –Mariana Eva- fue devuelta a sus abuelos paternos quienes la criaron; pero Patricia tenía un avanzado embarazo al momento de su secuestro. Tanto Patricia como José Manuel fueron desaparecidos y el bebé –un niño que nació en un Centro Clandestino de Detención y a quien Patricia nombró Rodolfo Fernando- fue entregado a otra familia. El nieto desaparecido –Rodolfo Fernando- quien llevaba por nombre Guillermo y vivía en Estados Unidos fue ubicado gracias a una denuncia anónima a la organización en el año 2001:

“Hace 36 años que estoy sentada en este sillón buscando todos los nietos; pero hace 14 años que yo encontré a mi nieto. Lo encontré siendo un muchacho de 21 años con un metro y ochenta y uno de alto; ese era mi nieto. ¿Yo a ese nieto podría llevarlo al jardín de infantes? ¿Podía llevarlo a la plaza a jugar? ¿Podía llevarlo a la calesita o al tobogán? No, eso no se recupera jamás. Y tengo que empezar a conquistar el cariño de un hombre de 21 años que hasta ese momento creía que esas personas que lo criaron eran sus padres. No fue fácil. Mi experiencia no fue fácil. Me dio mucho trabajo y el problema se acrecentó cuando la justicia citó a los apropiadores –a sus padres- los juzgó por ladrones porque robaron a un chico recién nacido y se presentaron ante el registro civil con una falsa partida de nacimiento, diciendo que ellos son los padres, que el parto se efectuó en su casa. Así que son delincuentes; han delinquido y entonces la justicia los condenó. Y ahí fue más terrible para mí porque el muchacho estaba encariñado con esa gente”¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Cf. Apéndice #10 (Pp. 344). Entrevista con Rosa Tarlovsky de Roisinblit vicepresidenta de la organización Abuelas de la Plaza de Mayo.

Ya la persona considerada subversiva había sido capturada por la *patota*, había sido llevada a un Centro Clandestino de Detención y ya había sido torturada para la obtención de información - como justificación- por *el grupo de inteligencia*. Durante todo este proceso, para el cual no había un tiempo de duración definido, a los familiares se les negaba cualquier información en relación al paradero del *chupado*. Cualquiera de los hechos antes mencionados, no tiene justificación alguna. Sin embargo, las Fuerzas Armadas estaban convencidas de que este era el camino a seguir no sólo porque era dictado por sus superiores, sino porque la guerra que estaban peleando era una guerra especial, no convencional; para la cual no estaban preparados y por lo tanto no había ética, ni directriz. El proceso de cautiverio -a excepción de los pocos que fueron liberados por múltiples factores- terminaba en la muerte de la víctima. Así como había diferentes maneras de torturar a los subversivos, también hubo prácticas diversas para darle muerte a las víctimas; pero, la atención no se fijaba en cómo darles muerte sino en cómo desaparecerlos.

“Se estima que por los C.C.D. pasaron entre 15 mil y 20 mil personas, de las cuales aproximadamente el 90 por ciento fueron asesinadas” (Calveiro, 2001: 29). Se podría pensar que la mayoría de las víctimas morían debido a las torturas, pero no fue así. El cuerpo de inteligencia que realizaba las torturas lo hacía con tal precisión, que los cautivos que no soportaban la tortura se debía a algún problema físico potenciado por la violencia; había personal médico que se dedicaba a “curar” a los cautivos con el único fin de mantenerlos con vida. El proceso de violencia terminaba con el *traslado* del prisionero lo que implicaba su muerte.

La información que se tiene sobre los *traslados* está basada en testimonios ya sea de quienes se enteraron de los hechos por terceros, o bien, por miembros de las Fuerzas Armadas que decidieron dar su testimonio tiempo después. En un principio, los militares lo negaron todo y hay sectores que lo siguen negando. “Un Acta Institucional reiteró que todas las operaciones fueron ejecutadas conforme a planes aprobados o supervisados por los mandos superiores... La clave que el documento no revelaba era precisamente qué había ocurrido en ese tránsito que va desde la detención de una persona viva, con nombre y apellido que los militares le obligaban a revelar, hasta su conversión en un muerto anónimo cuyo cadáver flotaba en el limbo” (Verbitsky, 1995: 42). La

mayor parte de la documentación en relación a estas estrategias para desaparecer fueron borradas. Sin embargo, como puede leerse en el texto de la CONADEP (2006: 226) ...Los ejemplos, las comprobaciones, se multiplican sin dejar duda sobre esta conclusión: no fue un exceso en la acción represiva, no fue un error. Fue la ejecución de una fría decisión.

Todos los *traslados* implicaban la muerte del *subversivo*; las formas de hacerlo variaron. Las primeras evidencias de que los cautivos estaban siendo matados fue la aparición cada vez más constante de cadáveres en las costas de Uruguay. Si bien el gobierno de este país no daba mayor explicación, había elementos clave en la mayoría de los cuerpos que arribaban como la falta de uñas en pies y manos, mutilaciones, cortes, heridas o rastro de encadenamiento de pies y manos. Después se supo que los C.C.D. que estaban cerca del Río de la Plata fusilaban a las víctimas y las tiraban al río. Cuando las matanzas fueron más constantes y multitudinarias, entonces los cuerpos derivados de fusilamientos eran cremados en algunas instalaciones, quemados en fosas dentro de los mismos centros de detención o llevados a los panteones para que los cremaran o los enterraran haciendo alusión a que eran víctimas de la guerra sin identificar. Lo último implicaba que tal vez los cuerpos podrían ser reconocidos, por lo que las huellas digitales eran borradas; los fallecidos sin identificar eran considerados dentro de los registros oficiales como NN (Ningún Nombre).

Dependiendo del rango del cautivo, es decir, qué tan activo había sido o se creía había sido en algún grupo guerrillero; no se usaba el fusilamiento sino lo que se conocía como “muerte en enfrentamiento armado” o “intento de fuga”. No existía ningún enfrentamiento, ni intento de fuga, la muerte se le daba dentro de los C.C.D. pero en las calles de la ciudad o en algunas cárceles se armaba toda una escena en donde se acomodaban los cuerpos de las víctimas para hacer creer que habían muerto durante un combate con los militares. Este tipo de actos tenían dos propósitos: por un lado, se invitaba a la prensa para que tomara fotografías y fueran publicadas en medios de comunicación para desacreditar a la guerrilla y para justificar los actos del poder militar; y, por otro lado, se podrían justificar algunas desapariciones. Esta técnica se utilizaba sobre todo con los cautivos que por algún motivo no eran parte de esos desaparecidos que permanecían en el limbo, sino de aquellos para los que sí había algún registro de ingreso en alguna cárcel o confinamiento.

Se usaban dos estrategias en términos de los prisioneros. Los casos más sonados, de guerrilleros reconocidos y que podrían tener un impacto en las filas del enemigo se hacían públicos y no había necesidad de esconder los cuerpos. Y, los más comunes, usada en contra de los cautivos que permanecían en clandestinidad, quienes eran negados en cualquier documento oficial y para sus familiares. En ambos casos, se borraban las huellas dactilares y los cuerpos que no eran cremados; quienes eran enterrados o aventados al río se les despojaba también de los objetos personales, de señas particulares y su ropa. “¿Dónde está la ropa de los occisos? ¿Por qué los mismos fueron enterrados desnudos? ¿Por qué no se obtuvieron fotografías de los cadáveres para permitir su posterior identificación? Estos procedimientos permiten presumir que respondían a una estrategia general de no identificar a los muertos para evitar que se pudiera diferenciar entre los que morían en enfrentamientos y los que eran ultimados estando prisioneros” (CONADEP, 2006: 235).

Ni el fusilamiento, ni el enfrentamiento armado o intento de fuga, ni siquiera la cremación fueron los métodos predilectos de desaparición. El método de desaparición de cuerpos que se generalizó fue el lanzamiento de detenidos al mar que fueron conocidos como *vuelos de la muerte*. “Cuesta creerlo. Sin embargo, hay numerosas declaraciones que hacen mención a ello. Algunos por haberlo oído, otros por referencias directas de sus captores; y también los cuerpos que las corrientes marinas arrojaron a la costa” (CONADEP, 2006: 238). Años después todos los testimonios cobraron sentido cuando el ex militar Adolfo Scilingo¹⁰⁶ decidió -en 1993- hacer una confesión pública sobre las órdenes que recibió y los actos atroces que él mismo realizó durante la dictadura a través de una entrevista otorgada al periodista Horacio Verbitsky que fuera publicada como libro bajo el título *El Vuelo* publicado un año más tarde. A continuación, un párrafo de una carta que Scilingo hace

¹⁰⁶ “El pasado septiembre de 2009, el ex capitán de corbeta argentino Adolfo Scilingo fue condenado en España a 640 años de prisión por el juez Baltasar Garzón, bajo el principio de Justicia Universal, por haber participado en los denominados “vuelos de la muerte”, durante la última dictadura militar. El juicio que duró ocho años estuvo rodeado de controversias ya que el acusado afirmó sufrir mareos y hasta desmayos luego de ser interrogado y refutar lo que había sido publicado en el libro. La sentencia que lo condenó a 640 años de prisión se fundamentó en la confesión que el ex capitán de corbeta hizo hace 16 años al periodista Horacio Verbitsky, donde narra cómo participó en dos vuelos de la muerte. Si bien no reconoce sentir culpa ya que consideraba que solo obedecía órdenes de sus superiores al mando” (Gómez, 2010).

llegar años después cuando se iniciaron los juicios a miembros del ejército y la Junta Militar; particularmente, al entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas José Rafael Videla así como a otros altos mandos sin que hubiera respuesta:

"En 1977, siendo Teniente de navío, estando destinado en la Escuela de Mecánica, con dependencia operativa del Primer Cuerpo de Ejército, siendo usted el Comandante en Jefe y en cumplimiento de órdenes impartidas por el Poder Ejecutivo cuya titularidad usted ejercía, participé de dos traslados aéreos, el primero con 13 subversivos a bordo de un Skyvan de la Prefectura, y el otro con 17 terroristas en un Electra de la Aviación Naval. Se les dijo que serían evacuados a un penal del sur y por ello debían ser vacunados. Recibieron una primera dosis de anestesia, la que sería reforzada por otra mayor en vuelo. Finalmente, en ambos casos fueron arrojados desnudos a aguas del Atlántico Sur desde los aviones en vuelo. Personalmente nunca pude superar el shock que me produjo el cumplimiento de esta orden, pues pese a estar en plena guerra sucia, el método de ejecución del enemigo me pareció poco ético para ser empleado por militares, pero creí que encontraría en usted el oportuno reconocimiento público de su responsabilidad en los hechos" (Carta a Videla de Adolfo Scilingo en: Verbitsky, 1994: 8).

Algunos de los presos que lograron sobrevivir a sus captores escucharon historias sobre los *vuelos de la muerte*. Algunos militares testificaron que las evidencias de dichas acciones estaban en los planes escritos de la Armada como operaciones militares especiales; pero en los planes de la Armada que se conocieron al terminar la dictadura, los vuelos no aparecieron. Es por ello, que la cifra de víctimas de esta particular forma de desaparición resulta incierta. "Forensic anthropologists have estimated that between 2.000 and 3.500 army and navy captives met this fate" (Robben, 2007: 269)¹⁰⁷. Si bien estos miles que los antropólogos forenses estimaron parecen un exceso; en la entrevista del exmilitar Scilingo para el libro *El Vuelo* (1994) se hace un cálculo con base en las órdenes que él siguió y la información a la que tuvo acceso: cada miércoles por alrededor de 2 años fueron asesinadas entre 15 y 20 personas lo que conllevaría a considerar entre 1.500 y 2.000 personas en 100 miércoles (Verbitsky, 1994: 30). Se considera que los vuelos solamente fueron realizados desde el aeropuerto Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires; sin embargo, no se sabe si hubo algunas provincias que llevaron a cabo esta misma práctica. También, se llegó a hablar del

¹⁰⁷ Antropólogos forenses han estimado entre 2.000 y 3.500 cautivos de la armada y la naval que sufrieron este fatal destino. [Traducción de la autora] (Robben, 2007: 269).

arrojamiento de cuerpos al océano por parte de buques de la Marina, aunque esto nunca fue comprobado.

Como ya se ha mencionado, las desapariciones no iniciaron con la última dictadura militar; pero lo que sí puede comprobarse a través de los párrafos anteriores es la crueldad y la manera sistemática de ejercer violencia en contra de una *subversión*, cuyo concepto se amplió a casi cualquier persona a partir de la llegada de la Junta Militar encabezada en ese lapso por el General Videla. La dictadura, a través de los miles de muertos y desaparecidos estableció: "...Es que además del objetivo político de exterminio de una fuerza de oposición, los militares buscaban la demostración de un poder absoluto, capaz de decidir sobre la vida y la muerte, de arraigar la certeza de que esta decisión es una función legítima del poder" (Calveiro, 2001: 44). La mayor parte de las desapariciones, de acuerdo con las denuncias recibidas y la CONADEP, se dieron entre 1976 y 1977¹⁰⁸ y es que los militares tenían que "reorganizar" el país.

La Junta Militar, comandada desde 1976 y hasta 1981 por el General Jorge Rafael Videla, tenía claro que la lucha antissubversiva implicaría la destrucción física del enemigo, entre otros motivos por una estrategia hacia el exterior del país. "La clandestinidad procuraba evitar las denuncias de la comunidad internacional que recibió la dictadura chilena, y permitía extender sin límites la tortura y eliminar a los opositores sin obstáculos legales o políticos. No quedarían huellas, los secuestrados perderían visibilidad pública, se negaría su cautiverio y su asesinato no tendría responsables" (Crenzel, 2008: 33). Sin embargo, y pese a las dificultades que planteaba el mismo régimen para que hubiera una prensa libre y sin controles; hubo casos que salieron a la luz y conforme fueron pasando los meses, las denuncias empezaron a mermar el control del propio líder Videla.

Las preguntas y los rumores sobre desapariciones empezaron a hacerse desde el mismo año en que la Junta Militar asumió el mando del país. Pero, ante las atrocidades que se decían, la ciudadanía parecía no poder creer que un régimen, -aunque fuera militar-, fuera capaz de realizar

¹⁰⁸ Cf. Anexo 13 (Pp. 315). Gráfica que muestra los casos de desapariciones registrados por año y una gráfica adicional con las profesiones de los desaparecidos.

tales actos de violencia. Algunos más, justificaban los actos represivos al ser una respuesta ante el terrorismo ejercido por diferentes grupos guerrilleros.

En noviembre de 1976, la organización Amnistía Internacional hizo una visita al país tras recibir centenares de denuncias en relación a terribles violaciones de derechos humanos por parte del régimen militar. La visita de A.I. produjo un informe en relación a la existencia de asesinatos políticos, así como de desapariciones y tortura. Si bien presentó una lista de desaparecidos desde el golpe con base en las denuncias presentadas por familiares así como una relación que daba cuenta de la existencia de 18 centros de detención y un número aproximado de 15.000 desaparecidos; al no tener acceso a fuentes oficiales y al serles negada la visita a toda instalación militar no se logró obtener evidencia física alguna, "... se presentaba cierta ambigüedad sobre los responsables, lo cual disminuía la contundencia asertiva al afirmar que el golpe de Estado de 1976 no puso fin a la violencia parapolicial" (Amnistía Internacional en Crenzel, 2008: 40).

Una de las primeras denuncias ciudadanas hechas públicamente acusando a la dictadura de desaparición forzada y asesinato de los cautivos, la realizó Rodolfo Walsh a través de la *Agencia de Noticias Clandestina*, justo en el primer aniversario del golpe militar -marzo de 1977-. El periodista y escritor hizo público su texto llamado *Carta Abierta a la Junta Militar* donde plantea en seis puntos una serie de reflexiones sobre el actuar del régimen militar con acusaciones puntuales en su contra sobre hechos concretos de violencia, manejando cifras de masacrados y desaparecidos¹⁰⁹. No es que quienes leyeron el documento no consideraran la información relevante; pero, al estar, la agencia noticiosa de Walsh, ligada a Montoneros, se pensó que solamente se estaba dando una visión parcial y exagerada de los hechos por ser afín a la guerrilla.

Paralelamente a Walsh, algunos organismos de derechos humanos conocieron la existencia no sólo de las desapariciones, sino de rumores sobre asesinatos en masa. A diferencia de Walsh, estas organizaciones no asumieron que la responsabilidad sería del régimen sino de bandas paramilitares. Lo que no les fue ajeno, ni a las organizaciones de derechos humanos, ni las personas

¹⁰⁹ Cf. Anexo 14 (Pp. 316). Recuento de los seis puntos mostrados en el documento *Cara Abierta a la Junta Militar* por Rodolfo Walsh.

de a pie, es que la situación se estaba generalizando. Comisarías, juzgados, destacamentos militares, oficinas gubernamentales, hospitales, morgues y hasta despachos jurídicos empezaron a buscar alguna explicación para la desaparición de sus hijos, sobrinos, nietos, hermanos, colegas...

“Mi hermano está desaparecido, lo secuestró la dictadura también en noviembre del '76; antes de que ella se jubilara en Tribunales de la zona norte del conurbado de San Isidro. Cuando desapareció Daniel, lo primero que hizo mi madre, que hicimos fue –yo al lado todo el tiempo– esperar en casa un día. Al segundo día ya salimos y fuimos preguntando en hospitales, en cuarteles, en iglesias; y nos íbamos encontrando con otra gente. Entonces en el momento en que una señora dijo “por qué no nos reunimos en la Plaza de Mayo”; mi madre fue y la secundó. Esa señora era la fundadora –Azucena Villaflor– una señora también ama de casa, pero que estaba buscando a su hijo Néstor”¹¹⁰

Este fue el momento preciso cuando el descontento de cientos de familiares se hizo público. En abril de 1977 se hizo la primera ronda en la Plaza de Mayo por parte de madres de desaparecidos (el rol de las Madres de Plaza de Mayo se tratará en otro apartado). Para finales de 1977, diferentes grupos de familiares, ciudadanos comunes y corrientes empezaron a salir a las calles en busca de la verdad. Unidos solamente por la necesidad de saber el paradero de sus familiares desaparecidos, grandes sectores de la sociedad civil lograron sobreponerse al miedo y a la represión. “The Argentine military who had so carefully and rationally planned the elimination of thousands of political opponents, and felt cocksure about its lasting success with the luminous idea to make them disappear, failed to understand the strength of family ties and the emotional bonds and feelings of trust and protection between parents and children” (Robben, 2007: 284)¹¹¹.

A fines de 1977, la Comisión Argentina de Derechos Humanos¹¹² publicó un reporte denominado *Argentina: Proceso al Genocidio*. El reporte se produjo con base en cientos de testimonios recolectados en el extranjero con relación a las violaciones a los derechos humanos

¹¹⁰ Cf. Apéndice #7 (Pp. 332). Entrevista con Adela Antokoletz miembro de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora y hermana de un desaparecido.

¹¹¹ Las Fuerzas Armadas argentinas que tan cuidadosa y racionalmente planearon la eliminación de miles de opositores y que alardeaban del éxito de la brillante idea de hacerlos desaparecer; fallaron en entender la fortaleza de los lazos familiares, las emociones y sentimientos de confianza, así como la protección entre padres e hijos. [Traducción de la autora] (Robben, 2007: 284)

¹¹² La CADHU (Comisión Argentina de Derechos Humanos) fue una organización que nació en 1976 con el objetivo de centralizar las denuncias en el exterior sobre los crímenes del terrorismo de Estado que se estaban cometiendo en la Argentina. En este sentido, llevó adelante una enorme tarea de difusión masiva, que buscó sensibilizar y movilizar a la opinión pública internacional. Con sedes en Madrid, París, Washington, México y Ginebra, la CADHU funcionó hasta 1984.

cometidos por las Fuerzas Armadas Argentinas. A diferencia del reporte producido por Amnistía Internacional, las descripciones de los centros de detención, las torturas, el cautiverio de los detenidos, así como el asesinato y posterior desaparición de miles estaba muy bien documentada. Tal vez haya sido que el tiempo estuviera aclarando más la situación, ya había muchos exiliados, las acciones represivas eran más del dominio público y la sociedad civil se involucraba cada día más, pese a las amenazas represivas y hasta desapariciones. Pero este documento, sí tenía evidencias contundentes a través de testimonios y daba a conocer que "... estos hechos eran parte de una política sistemática ejecutada por las Fuerzas Armadas" (CADHU en Crenzel, 2008: 41). El reporte tuvo cierto eco en el extranjero, pero nunca llegó a difundirse en Argentina.

Tal vez el impacto de las denuncias podría ser controlado a través de más terror dentro del país; sin embargo, la imagen del régimen argentino se fue tornando cada vez más negativa. Al gobierno argentino sí le interesaba tener una buena imagen en el exterior, después de todo, gran parte de la recuperación económica se la debían a los mercados extranjeros cuyos acuerdos podrían verse afectados por esa mala imagen. Cuando tachar de calumnias todas las protestas y las denuncias fue insuficiente, hubo una mejor apuesta: Argentina sería sede del Mundial de Fútbol de 1978. Si bien la Junta Militar vio esta oportunidad como una manera de mostrar una mirada diferente de la Argentina hacia el mundo; no contaron con el hecho de que de manera obligada la prensa internacional -hasta entonces con la entrada muy restringida al país- también tendría acceso. Mientras hubo quien se quedó con la parte futbolística, también hubo organizaciones como las Madres de la Plaza de Mayo quienes por primera vez tuvieron un impacto internacional.

Estela de Carlotto -Presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo- comentó en 2013 su pensar sobre la contienda mundialista al Diario *El Clarín*: "Mientras se gritan los goles, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados". Y es que esa era la realidad, "Los gritos de gol en el Monumental y los festejos ante cada triunfo que acercaba a la Selección a la final del Mundial parecían tapar aquellos gritos desgarradores de quienes, a menos de 1000 metros de allí, en la ESMA, sufrían en lo más cruel de la palabra las torturas de la dictadura militar más sangrienta que vivió Argentina" (Kirschbaum, 2013). Si bien la voz de las organizaciones civiles demandando la

verdad sobre sus familiares desaparecidos fue algo no previsto por la dictadura; lo que sí fue cierto es que logró calmar el malestar social de las mayorías y la majestuosidad del evento acalló algunas voces del exterior también. “Así, con secuestrados por todo el país, en junio del 78 los argentinos que podían caminar sin preocupaciones por la calle se sentaban en un sillón para ver los partidos del Mundial, ese en el que la dictadura gastó 700 millones de dólares, una cifra sideral y envuelta de corrupción” (Kirschbaum, 2013). Corrupción en los resultados, en los gastos, desaparecidos, reclamos... no fueron relevantes para la sociedad argentina, pues el equipo nacional se coronaba campeón del mundo.

Ya que la euforia mundialista había pasado, arribó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La vista parecía obligada tras centenares de denuncias, pero, sobre todo, por la “preocupación” de algunos sectores del gobierno norteamericano a quienes la mala imagen les estaba preocupando más que la propia dictadura. “La comisión entrevistó a autoridades militares, miembros de las entidades religiosas, organismos de derechos humanos, dirigentes políticos, empresarios, periodistas y expresidentes” (Crenzel, 2008: 41). A diferencia de los reportes anteriores, el gobierno permitió la inspección de diferentes dependencias militares y policiales como la ESMA o algunas otros reconocidos por denunciantes como Centros Clandestinos de Detención. Las áreas visitadas fueron limpiadas y no hubo gran evidencia de los hechos, por lo tanto, no se pudo responsabilizar directamente a la dictadura, pero sí se hizo pública la participación de la fuerza pública en los secuestros y desapariciones. Una vez terminado el reporte, la Comisión hizo entrega del mismo al gobierno para su aprobación a finales de 1979. La Junta Militar tardó tanto tiempo en dar una respuesta, que el reporte salió a la luz pública en abril de 1980.

El gran mérito que tuvo la CIDH fue validar las denuncias. Si bien no se logró atribuir las atrocidades a la dictadura militar, sí evidenció que altos mandos de las Fuerzas Armadas estaban tomando decisiones que sobrepasaban los límites establecidos por la legalidad, aunque hubiera una cadena de mando para su ejecución. A su vez, fue el primer informe que determinó que los desaparecidos, podrían -en su mayoría- haber muerto; al menos 5.000. Adicionalmente, recomendó enjuiciar a los responsables. Este informe tuvo una gran circulación en la Argentina; por un lado, en

el ámbito de la sociedad civil, dio validez a los testimonios y las demandas de víctimas y familiares. Algunos familiares de desaparecidos rechazaron el informe o -como también podría verse- negaron una realidad ineludible.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas, también tuvieron su reacción correspondiente a través de dos publicaciones y una campaña publicitaria. Se publicó un libro con una crónica de la violencia guerrillera desde 1959 así como un listado de 790 personas asesinadas por la guerrilla -aunque después se sabría que al menos 100 personas de ese listado habrían sido víctimas de las propias fuerzas federales-. Aunado a los documentos, se realizó una campaña publicitaria en contra de la CIDH teniendo como lema: "Somos Derechos y Humanos"; con el afán de "...combatir la supuesta "campaña antiargentina" proveniente del exterior" (Trinidad, Zunilda, 2016).

La realidad es que la sociedad civil empezaba a hacerse poderosa a pesar del miedo y la represión; esto debilitaba al régimen. 1980 se convirtió en un año particularmente difícil para la dictadura pues las atrocidades se conocieron internacionalmente. En este año la organización de las Madres de la Plaza de Mayo fue nominada para el Premio Nobel de la Paz. Las Madres no recibieron este reconocimiento, pero sí lo hizo Rodolfo Pérez Esquivel, quien no sólo era militante en favor de los derechos humanos sino -en ese momento- Director del Servicio Paz y Justicia¹¹³. El gobierno replicó a este hecho de la siguiente manera: "El gobierno declara que esta designación forma parte de la "campaña antiargentina", organizada desde el exterior por exiliados de "origen extremista" (Trinidad, Zunilda, 2016). Sin importar la interpretación que el régimen le haya otorgado, la realidad es que tanto la sociedad civil como la situación económica y política del país, se les escapaba de las manos.

Argentina, económicamente hablando, estaba teniendo problemas serios nuevamente. Pero lo peor, es el desencuentro que tienen dentro de la misma Junta Militar. Mientras que Videla pronunciaba públicamente que era "inminente un nuevo tiempo político" lo que se interpretó como

¹¹³ El Servicio Paz y Justicia de Argentina es una organización social, de inspiración cristiano-ecuménica, que tiene como finalidad promover los valores de la Paz, la No violencia y una cultura fundada en el reconocimiento pleno a los Derechos Humanos. Funciona en Argentina desde 1974 que dio origen a toda una red que bajo el mismo nombre funciona en casi todos los países de América Latina.

que podría abrirse la posibilidad de una elección. El Jefe del Ejército, el General Galtieri, cerraba este dicho aseverando que “las urnas estaban bien resguardadas”. Tal vez Videla estaba siendo un tanto realista, pero tampoco ningún miembro de las Fuerzas Armadas estaba dispuesto a dejar el poder. Para octubre de 1980, la Junta Militar determinó que el General Videla dejaría el cargo y el General Roberto Viola asumiría el cargo a partir de marzo de 1981.

La nueva cabeza de la Junta Militar recibió un país a punto de colapsar tanto en términos sociales como económicos y políticos. Aparece en la escena un político de nombre Raúl Ricardo Alfonsín que es muy seguido por la sociedad civil pues inicia la presión para reorganizar elecciones y sacar a los militares del poder. Recién tomado el poder, el peso argentino sufre dos devaluaciones y empresas importantes como Ford anuncian que se retiran del país dejando a miles de desempleados. A pesar de todas las dificultades, el peor error del General Viola fue ser menos estricto en términos del Proceso de Reorganización Nacional y permitir a ciertos civiles tener acceso al poder. La versión oficial fue un problema de salud -de índole cardíaco- aunque el enfermo amenazó con decir la verdad sobre el movimiento político. De esta manera, Viola no estuvo en el cargo de presidente de la nación ni siquiera un año tras “enfermarse”.

La Junta de Comandantes le otorgó el mando del país al ex Jefe del Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri quien tomaría el cargo el 22 de diciembre de 1981. La gente había vuelto a las calles y lo que quedaba de algunos sindicatos habían empezado a reorganizarse; ya se había reprimido la primera manifestación multitudinaria con un saldo de al menos un muerto y 10 heridos. El clima social parecía insostenible, por lo que el nuevo presidente decide que se requiere de una acción que pudiera reunir a los argentinos en una sola causa. Galtieri ordena la recuperación de las Islas Malvinas. “El 2 de abril, el país se conmueve con la noticia de que tropas argentinas habían desembarcado en Port Stanley (rebautizado Puerto Argentino), capital de las Islas Malvinas. Las tropas ocupan la ciudad, con una única baja, la del jefe del desembarco, capitán Pedro Giacchino” (Trinidad Zunilda, 2016). “Galtieri hoped that the Argentine people would close ranks behind his historic move, that the economic and human rights problems would receive less national and

international attention, and that a conventional war would restore the military honor lost in the dirty war” (Robben, 2007: 313)¹¹⁴.

Como se esperaba, “La novedad vuelca totalmente la situación y una enorme multitud se congrega en Plaza de Mayo para apoyar al gobierno. Una encuesta registra un 90 por ciento de adhesiones a la acción militar” (Trinidad, Zunilda, 2016). Con lo que no contó el gobierno fue que la Gran Bretaña movilizara toda su flota; el Ejército argentino no tuvo otra opción más que rendirse al verse completamente en desventaja numérica, de armamento y hasta capacidad de acción. Ese 90% que apoyó el audaz movimiento de Galtieri, era el mismo que pedía su renuncia. Las protestas no se hicieron esperar sobre todo porque el gobierno parecía dar a conocer versiones sobre exitosa diplomacia y acciones militares cuando la realidad pareció ser muy diferente. Tras la derrota en la guerra, el presidente salió al balcón de la Casa Rosada a tratar de explicar los eventos mientras una enardecida muchedumbre era reprimida con gas pimienta. No hubo otra opción, Galtieri renunció al día siguiente dejando su lugar al General Reynaldo Bignone.

Bignone tomó el poder para hacerse cargo de la transición y liquidar el Proceso de Reorganización Nacional. Como parte de este cierre, la Junta Militar “...dicta un Acta Institucional que da a los desaparecidos por muertos y remitiendo los “excesos” cometidos al “juicio de Dios” (Trinidad, Zunilda, 2016). Es decir, antes de que los militares dejaran el poder se estaban otorgando a ellos mismos una amnistía para que no pudieran ser acusados por ningún delito. Como era de esperarse, esto detonó el enojo de la sociedad civil quien se había adueñado de las calles nuevamente. Esta vez no pudieron ni siquiera llegar a la Plaza de Mayo debido al desplegado militar: tanquetas, helicópteros, oficiales a caballo, a pie, vehículos de asalto...; los militares no tenían otro plan que dejar el poder y quedar impunes.

Para octubre de 1983 se organizaron elecciones. El nuevo presidente asumiría el cargo en diciembre de ese mismo año. El país estaba debilitado política y económicamente; aunque

¹¹⁴ Galtieri esperaba que los argentinos cerraran filas en torno a su “jugada histórica”, que los problemas económicos y de derechos humanos recibieran menos atención nacional e internacional y que la guerra convencional restaurar el honor militar perdido en la guerra sucia. [Traducción de la autora] (Robben, 2007:313).

socialmente la historia parecía diferente. La sociedad había probado y se había probado a sí misma, que unida podía superar cualquier horror. Ahora, lo que seguía era demandar al nuevo gobierno que cumpliera no sólo sus promesas de campaña, sino que investigara la verdad sobre sus familiares, la sociedad demandaba respuestas; pero, sobre todo, justicia. Esa sociedad civil que había vivido los peores horrores entre torturas y desapariciones, era la misma que empezaba a marcar una nueva historia: la lucha por la verdad, la memoria y la justicia se pelearía en la Plaza de Mayo.

Argentina entre la Verdad y la Justicia

Enfrentar sin retaceos el tema de la desaparición forzada de personas en la República Argentina y determinar lo sucedido con las víctimas constituyó una de las grandes tareas del resurgimiento de la democracia...”
(CONADEP, 2006: 447)

Para el inicio de los años ochenta la situación social de la Argentina empezó a tomar un vuelco interesante. Si bien legalmente las manifestaciones multitudinarias estaban prohibidas y el terror vivido con las numerosas desapariciones había desalentado la actividad política de la sociedad, para el inicio de la nueva década, el disgusto y las demandas ciudadanas cobraron una nueva fuerza. Es importante reconocer que los sindicatos habían sido fuertemente golpeados por la violencia, así como las organizaciones guerrilleras y sus simpatizantes que -prácticamente-, para 1978, fueron acabadas; sin embargo, aquellos civiles como las Madres de la Plaza de Mayo, buscando a sus hijos desaparecidos, o las Abuelas de Plaza de Mayo, buscando a sus nietos, inyectaron una nueva fuerza a la sociedad. Las demandas, tal vez, ya no estarían relacionadas - como en el pasado-, con mejores sueldos o prestaciones, sino con la necesidad de conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas por el gobierno y una constante demanda de justicia para las víctimas.

El 1 de julio de 1982 tomó posesión el General Reynaldo Bignone, que se convertiría en el último presidente del Proceso de Reorganización Nacional. Además, se reformó toda la Junta Militar; pero esto no sería suficiente para que la demanda por la verdad y la justicia no permeara la esfera política, obligando a cambios en el país; el cambio fue inminente. “La derrota de Malvinas permitió salir a la luz, en forma más intensa, el tema de los desaparecidos. Los defensores de los derechos humanos intensificaron sus campañas” (Trinidad, Zunilda, 2016). La sociedad civil, en general, salió a tomar las calles nuevamente, al punto en que unas 100.000 personas realizaron una marcha el 16 de diciembre de 1982 que fue reprimida severamente. Pese a la violencia en contra de esta multitudinaria movilización, el gobierno en turno ya no tenía mucho por hacer. Por ello, durante poco

más de un año -que fue lo que duró el gobierno de Bignone- se buscaron diferentes acuerdos con el único fin de justificar los actos aberrantes realizados por las Fuerzas Armadas.

El discurso gubernamental en este periodo versó en el siguiente tenor: “En ese marco casi apocalíptico se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechos fundamentales” (Verbitsky en Andreozzi 2011: 34). Lo que la Junta Militar y las Fuerzas Armadas buscaban al finalizar su régimen lo establecieron en un documento llamado *Documento Final de la Junta Militar*, que publicaron el 28 de abril de 1983, resumido en cinco puntos:

1) Que la información y explicaciones proporcionadas en este documento es todo cuanto las Fuerzas Armadas disponen para dar a conocer a la Nación, sobre los resultados y consecuencias de la guerra contra la subversión y el terrorismo.
2) Que en este marco de referencia, no deseado por las Fuerzas Armadas y al que fueron impelidas para defender el sistema de vida nacional, únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud, a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes.
3) Que el "accionar" de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones relacionadas con la guerra librada constituyeron actos de servicio.
4) Que las Fuerzas Armadas actuaron y lo harán toda vez que sea necesario en cumplimiento de un mandato emergente del Gobierno Nacional, aprovechando toda la experiencia recogida en esta circunstancia dolorosa de la vida nacional.
5) Que las Fuerzas Armadas someten ante el pueblo y el juicio de la historia estas decisiones que traducen una actitud que tuvo por meta defender el bien común. Identificado en esa instancia con la supervivencia de la comunidad y cuyo contenido asumen con el dolor auténtico de cristianos que reconocen los errores que pudieron haberse cometido en cumplimiento de la misión asignada.

Y, en lo general, el documento negaba y justificaba diferentes hechos. Desde el momento en donde se establece que, en una guerra, en donde el enemigo no usaba uniforme, se prestaba tanto a equivocaciones en cuanto a señalar culpables y también obligaba a técnicas no ortodoxas. Negaba la existencia de los Centros Clandestinos de Detención, pero sí reconocía desapariciones, y se aseguraba que los “desaparecidos” que no estuvieran exiliados o en la clandestinidad, estarían muertos. De acuerdo con la ideología castrense argentina, en donde la religión jugaba un papel fundamental, pedía por el perdón de Dios hacia sus enemigos. La presentación de este *Documento Final de la Junta Militar* solamente provocó mayor escozor entre los familiares de las víctimas y los organismos de la sociedad civil que repudiaban el accionar de la dictadura y exigían justicia.

Al final, “los militares argentinos se vieron forzados a devolver el poder a los civiles” (Portilla, 2003: 54); no fue una acción planificada, sino fruto del acorralamiento, del fracaso de la política económica, la derrota de la guerra de las Malvinas y de la recuperación de las calles por parte de la sociedad civil que, pese al terror, ya tenía una actitud de “nada más por perder”, que se convirtió en su verdadera fuerza. Desde 1930, las Fuerzas Armadas habían jugado un papel fundamental en la vida política del país, aunque en esta ocasión, no parecía haber opción para volver o seguir con el arraigo político. Por ello, cuando faltaban cinco semanas para las elecciones, el General Benito Bignone firmó un decreto de autoamnistía, so pretexto de ser la base para la pacificación del país. En realidad, el documento fue un decreto en favor del olvido denominado *Servicio de Reconciliación*, con apoyo del Episcopado Católico, promoviendo el enjuiciamiento de la subversión, lo que implicaba que la represión no terminaría.

A partir de la sociedad civil se inició una inminente reorganización, el partido de centro-izquierda: Unión Cívica Radical (UCR) buscó su renovación y así surgió el candidato que parecía el candidato perfecto: Raúl Alfonsín quien no sólo se había opuesto a la invasión de Las Malvinas, sino que había denunciado violaciones a los derechos humanos. El candidato opositor, Ítalo Lauder, un peronista, quien ya había sido presidente brevemente en 1975, validaba las condiciones impuestas en la autoamnistía y en su paso como líder del país, había firmado los decretos para la aniquilación de los subversivos. Es complicado indicar si Alfonsín era realmente ese candidato ideal, pero sí el que presentaba la propuesta que la sociedad civil ansiaba escuchar y podría cambiar la historia de los gobiernos militares en el país. La clave del discurso del candidato de la UCR fue la promesa de que no habría impunidad para los crímenes realizados por la dictadura militar. Mientras tanto, en la mentalidad del partido peronista, se confiaba en que los gremios lo elegirían, a pesar de haber sido golpeados por la propia dictadura y el abierto apoyo hacia la milicia.

El 30 de octubre de 1983, el candidato de la UCR, Raúl Alfonsín, ganó el voto popular por un 52%, en tanto Ítalo Lauder, quedó con el 40%. La elección terminó siendo más cerrada de lo esperado y encausada por los “indecisos”, quienes, por un lado, dudaban de una verdadera posibilidad de justicia, pues el ejército llevaba décadas en el poder; pero, por otra parte, recordaban

lo desastroso y violento que había resultado el último gobierno peronista, que no sólo había mermado la economía del país, sino que conllevó a enfrentamientos entre facciones del mismo peronismo. “Alfonsín se planteó tres prioridades: juzgar el terrorismo de Estado, democratizar las instituciones, en particular las sindicales, y reactivar la economía para recuperar empleos y salarios” (Novaro en Yankelevich, 2014: 332).

Si bien Alfonsín se planteó como una de sus prioridades juzgar el terrorismo de Estado, la realidad era más compleja. A diferencia de cualquier otro momento en la historia del país, los organismos de derechos humanos inundaban las calles con la exigencia de justicia para los militares asesinos. Sin embargo, el gobierno sentía -a su vez- la presión de las Fuerzas Armadas y la amenaza de organizar otro golpe de Estado, particularmente de un sector del ejército conocido como los “carapintada”, quienes al menos cuatro veces intentaron sublevarse. De esta manera, el gobierno estaba contra la pared. Por un lado, tenía poderosas organizaciones civiles ahora reconocidas a nivel internacional con demandas y exigencias que, además, habían sido promovidas por su propia campaña electoral; y, por otro lado, tenía a la milicia amenazada con juicios, buscando que sus acciones en contra de la subversión fueran legitimadas debido al tipo de conflicto “no tradicional”. “Como expresión del cambio operado durante la dictadura, a diferencia de la anterior transición política, los denunciante no clamaban venganza, no manifestaban odio ni expectativas de cambiar el orden social, sino que exigían justicia al estado por las violaciones sufridas” (Crenzel, 2008: 54).

Algunas de las agrupaciones, quienes presionaban al gobierno de Alfonsín y que hasta el día de hoy continúan su lucha por la verdad, la memoria y la justicia en la Argentina son:

Abuelas de la Plaza de Mayo
Asociación Madres de la Plaza de Mayo
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas
Madres de la Plaza de Mayo -Línea Fundadora-

Fuente: Equipo Nizkor¹¹⁵, 2017.

¹¹⁵ Equipo Nizkor es un organismo de derechos humanos que tienen una red dedicada a la difusión de las causas relacionadas con la violación de derechos humanos en más de 90 países. Su trabajo de digitalización de documentos relacionados con juicios e informes sobre diferentes causas la hacen una fuente de información importante que puede ser consultada en: www.derechos.org/nizkor

Para poder hablar de las demandas sobre justicia y verdad manifestadas por la sociedad civil al gobierno de transición de Alfonsín, es preciso ahondar de manera breve en una de las agrupaciones icónicas de los derechos humanos en la Argentina, que marcó una diferencia no sólo durante la transición política sino desde la dictadura: Las Madres de la Plaza de Mayo. En el cuadro anterior se puede observar que hay dos organismos con nombres similares; la diferencia es que el primero contiene la palabra *Asociación*, mientras que el segundo indica ser la *Línea Fundadora*. En sus inicios no había división en la organización, sin embargo, las diferentes opiniones y modos de actuar -una fracción más radical que otra-obligó a una separación.

“Cuando desapareció Daniel, lo primero que hizo mi madre; que hicimos, fue –yo al lado todo el tiempo- esperar en casa un día. Al segundo día ya salimos y fuimos preguntando en hospitales, en cuarteles, en iglesias; y nos íbamos encontrando con otra gente. Entonces en el momento en que una señora dijo “por qué no nos reunimos en la Plaza de Mayo”; mi madre fue y la secundó. Esa señora era la fundadora –Azucena Villaflor-, una señora también ama de casa, pero que estaba buscando a su hijo Néstor”¹¹⁶.

Y así, esta primera reunión sucedida el 30 de abril de 1977 dio origen a una de las asociaciones de derechos humanos más reconocidas a nivel mundial, con un alto impacto en su país de origen.

Respecto a sus hijos desaparecidos, las madres no tenían otra opción que la de buscarlos. La inocencia de una madre y de una sociedad civil que en los inicios de la dictadura no entendía bien qué era lo que pasaba, llevó a varias madres que se encontraban de manera continua en el peregrinar, por encontrar a sus hijos, a asistir a la iglesia Stella Maris que era la iglesia de la Marina y, por lo tanto, donde se podían acercar a las grandes esferas militares. Al no recibir respuesta, decidieron agruparse en la Plaza de Mayo, para ser vistas y poder solicitar una audiencia. La primera vez no fue exitosa, las 14 mujeres que se congregaron no fueron escuchadas; pudo haber sido el terror que obligaba a la gente a mirar para otro lado, o, como relata Hebe de Bonafini “...en esa

¹¹⁶ Cf. Apéndice #7 (Pp. 332). Entrevista con Adela Antokoletz miembro de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora y hermana de un desaparecido.

época éramos despreciadas, las familias nuestras pasaron a ser familias de los “terroristas”, se nos cerraban las puertas, así que era poca la gente con la que se podía conversar. Pero con las madres éramos todas iguales; nos pasaba lo mismo, veíamos a la misma gente” (Vázquez, 2010: 17).

Al ser casi invisibles, no había acción policial en contra de ellas, hasta que la convocatoria empezó a ser más amplia. Algunas señoras, amas de casa, con cierta edad, podrían pasar desapercibidas, pero 60 o 70 de ellas... entonces sí se consideró una reunión -prohibida legalmente por la dictadura- y la policía trató de desalojarlas de la plaza. No las desalojaron, pero como la policía no quería que estuvieran sentadas; las obligaron a caminar para marcharse, aunque empezaron a marchar por la Plaza sin irse. Así surge la *ronda* de la Plaza de Mayo que hasta el día de hoy se hace cada jueves a las 15:30 horas. En cada ronda se congregaban más familiares -madres y padres, principalmente- pero quienes salían al frente eran las madres porque asumieron que a ellas -personas mayores y mujeres- no les harían daño o no se atreverían a desaparecerlas; los familiares varones eran, en realidad, protegidos para que no corrieran con la misma suerte que sus hijos.

Así como crecieron en cuanto a número, también tuvieron que evolucionar sus actos, pues tenían que ser escuchadas. En la Plaza hubo actos de desobediencia civil, como cuando pedían el documento de identidad de una y todas lo aventaban en un mismo montón, dejando a los policías sin saber qué hacer. También hubo arrestos y todas se hacían arrestar para que como un solo grupo fueran detenidas y no hubiera agresiones mayores. Cuando había visitas oficiales de extranjeros buscaban la forma de acaparar la atención de los propios personajes y también de los medios de comunicación. Aunque parecían ser acciones “sencillas”, la realidad es que empezó a causar molestia en el gobierno. Mientras que las primeras reuniones los jueves en la Plaza de Mayo no pasaban de algunas decenas, pasados menos de seis meses, ya sumaban al menos un par de cientos en cada reunión. La violencia empezó a subir de tono también en contra de las madres de los desaparecidos.

“...el 8 de diciembre del año '77, pasó algo tremendo. Uno de los marinos se hizo pasar por familiar de desaparecido –por un hermano de desaparecido- y estuvo yendo por tres o cuatro meses a la Plaza de Mayo, los jueves. Las Madres lo tomaban del brazo y le decían “no vengas

Gustavo” creían que se llamaba Gustavo Niño –se llamaba Alfredo Astíz –ese era su nombre, miserable genocida y torturador-. Él venía acompañado por una muchacha que estaba detenida-desaparecida; la obligaban a ir y que no dijera nada, ella calladita*estamos buscando a nuestro hermanito, a nuestro hermano*”¹¹⁷.

De ahí se derivó un operativo de la Marina en donde hicieron un secuestro masivo de madres y gente que las apoyaba como algunas monjas y otros familiares de desaparecidos. La organización estaba haciendo una colecta de dinero para sacar un anuncio pagado en el periódico (solicitada) y cuando estaban reunidos en la Iglesia Santa Cruz, hicieron el secuestro de familiares, monjas y dos de las madres señaladas por Astíz en ese momento. Fue un golpe duro para la organización, que no había sufrido desapariciones entre sus miembros; este hecho hizo que se dudara en continuar o no con el anuncio en el diario, pero al final se publicó. “Y salió la *solicitada* en La Nación. En ese día secuestraron a otra de las monjas. Y al otro día, el 10 de diciembre, en la mañana, cuando Azucena va a comprar el diario de esa *solicitada* que ella había gestado y que había sido tan firme para decir ...*no, hay que seguir haciéndola*, cuando va a buscar ese diario la secuestran en la esquina de su casa” (Vázquez, 2010: 21). Las Madres corrieron toda clase de peligros... “Incluso tenemos tres Madres desaparecidas y asesinadas –Azucena Villaflor, De Vicenti e Icariaga- son tres Madres que eran las tres Madres más politizadas, las que sabían más, entonces las desaparecieron y hace cosa de 10 años o menos -8 años quizá- aparecieron los cadáveres, las mataron y las tiraron al río”¹¹⁸.

Cuando llega el mundial en 1978, las Madres buscaban llamar la atención de los medios de comunicación. Fue imposible llegar a los medios nacionales pues toda la información era acaparada por el fútbol, como se esperaba. Sin embargo, al ser un evento internacional, forzosamente hubo prensa de todo el mundo; una gran vitrina para las Madres. Hacían largas filas para lograr entrevistarse con reporteros, llevaban cartas a hoteles con relatos sobre lo que pasaba en el país; y la prensa internacional empezó a prestar atención. Después del mundial, una pequeña comitiva

¹¹⁷ Cf. Apéndice #7 (Pp. 332). Entrevista con Adela Antokoletz miembro de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora y hermana de un desaparecido.

¹¹⁸ Cf. Apéndice #9 (Pp. 339). Entrevista con Evel Petrini de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo.

de madres salió del país y hace una gira por Estados Unidos y Europa para dar a conocer lo que pasaba en la Argentina bajo el régimen dictatorial. El mundo escuchó y hubo gente que empezó a apoyar desde el extranjero "...Las Madres como grupo lograron escalar en un departamento que les regalaron. ¿Quién se los regaló? Muchas mujeres que juntaron dinero en Holanda –mujeres de Primeros Ministros, mujeres artistas...- juntaron en el año '78 y les regalaron un departamento chiquito de dos ambientes o tres, en la calle Uruguay"¹¹⁹.

La vitrina internacional y un trabajo más metódico desembocó en una represión cada vez más severa en contra de las Madres en 1979. "...la represión fue brutal, no podíamos ir los jueves a la Plaza porque ya era demasiada la represión; hacíamos apariciones esporádicas para no perder la Plaza, un jueves a la mañana o un viernes por la tarde, y decidimos ir todos los jueves a las iglesias, a distintas iglesias" (Vázquez, 2010: 25). La represión ponía en peligro los logros que había tenido la agrupación; por lo tanto, decidieron, -ante un notario- crear la Asociación Madres de la Plaza de Mayo. Cuando llegó la Organización de Estados Americanos (OEA) a la Argentina para hacer un reporte de las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en el país, la recién creada Asociación -pero ya con un prestigio a nivel internacional- fue la única que logró tener varias entrevistas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentar cientos de denuncias que se tenían, así como la información que las propias madres habían ido descifrando. "...creíamos que iba a ser importante. Pero no pasó absolutamente nada" (Vázquez, 2010: 26). Marchas, rondas, publicaciones continuaron durante los últimos años de la dictadura, a pesar de la represión.

Para cuando la dictadura se venía abajo, después de la Guerra de Las Malvinas, las Madres habían realizado ya un gran trabajo. Para ese momento, muchas personas buscando a sus desaparecidos habían acudido con las Madres a hacer una denuncia para que se investigara qué había pasado con quienes les habían sido arrebatados. Cada vez había más parientes que se relacionaban con ellas; cada vez había más denuncias que les llegaban y trataban de hacer investigaciones para saber qué era lo que había pasado con sus hijos. El trabajo fue tal, que, para

¹¹⁹ Cf. Apéndice #7 (Pp. 332). Entrevista con Adela Antokoletz miembro de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora y hermana de un desaparecido.

cuando empezó a discutirse la posibilidad de nuevas elecciones se plantaron en el comité de los radicales para exigir justicia por los 30.000 desaparecidos por la dictadura. Ningún político quería escuchar, tal vez porque -en el fondo- todos los políticos tenían algo de culpa ya sea por participación o por omisión.

Una de las promesas de campaña de Alfonsín fue la justicia para todos los desaparecidos. Durante la candidatura él tuvo un primer encuentro con las Madres. Una vez que ganó la elección las recibió de nuevo, “cuando asume como presidente nos vuelve a recibir, y nos dice que él creía que había desaparecidos con vida, que qué pensábamos nosotras. Nosotras le dijimos que también creíamos que había desaparecidos con vida. Y él, que los iba a buscar. ¿Y saben qué hizo para buscarlos? Le mandó un radiograma a cada uno en el Ejército para preguntarles si sabían algo de los desaparecidos. Y ellos le dijeron que no, con el descaro que los caracteriza. Ésa es la manera en que los buscó” (Vázquez, 2010: 29). La relación que hubo entre las Madres y el presidente Alfonsín después de ese incidente, no fue la mejor, aunado después a la postura de esta organización en contra de las Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP).

También en campaña, estipuló que debían distinguirse tres categorías para poder juzgar las violaciones a los derechos humanos: quienes planearon la represión y dieron las órdenes, quienes cumplieron las órdenes, y quienes actuaron más allá del mandato. Esta perspectiva encuadraba la violencia sistemática en contra de los *subversivos*, como un mero acto burocrático. Es decir, la tortura quedaba legitimada dentro de la propia estructura castrense; no era evidente la ilegalidad con la que habían actuado las Fuerzas Armadas. Por otro lado, “...Alfonsín nada dijo sobre quién y cómo investigaría lo ocurrido, excepto que no se actuaría *como si nada hubiese sucedido* y, a la vez, sin ánimo de venganza” (Crenzel, 2008: 57). Sin duda, uno de los elementos de la campaña electoral que llevaría a Alfonsín a la presidencia, era este propósito de *no dar la vuelta a la página*; sin embargo, no era muy claro, ni cuáles serían las acciones a tomar para hacer justicia y los organismos de derechos humanos presionaban por acciones inmediatas.

Tras asumir la presidencia el 10 de diciembre de 1983, la cuestión social en relación con la justicia se convirtió en una prioridad para el gobierno. Casi de inmediato, en el mismo mes de diciembre, el nuevo gobierno envió al Congreso un conjunto de leyes para la protección de los derechos humanos. Se propuso la derogación de la autoamnistía que se había impuesto la propia dictadura y firmó dos decretos. El decreto 157 proponía investigar la violencia acaecida en el periodo de 1973 a 1983. El segundo decreto, el 158, proponía enjuiciar a siete jefes de la guerrilla y a las tres primeras Juntas Militares acusando a las últimas de llevar a cabo una lucha fuera de la legalidad -incluso de los ámbitos legales para una guerra-. “Así, los decretos proponían una lectura política del pasado reciente y la condena de la violencia desde una perspectiva que diferenciaba la legalidad y la legitimidad de sus portadores” (Crenzel, 2008: 58). Alfonsín también propuso una reforma al Código de Justicia Militar. Primeramente, los miembros de las fuerzas castrenses serían juzgados por el Consejo Militar Supremo de las Fuerzas Armadas, con la posibilidad de que la Cámara Federal apelara las sentencias; pero siempre estaría como base el hecho de que los actos fueron cometidos dentro del marco de una guerra y bajo la responsabilidad de acatar órdenes.

Por un lado, se planteaba que la lucha contra la subversión era necesaria y por tanto legítima; y, por otro, que había habido excesos por parte de las fuerzas castrenses quienes serían juzgados por ellos mismos legitimando las aberraciones cometidas en la propia estructura militar, que no permite la desobediencia. Aparece entonces la teoría de los *Dos Demonios* en donde se plantea que solamente las Fuerzas Armadas actuaron a modo de defensa en contra de la subversión y, por lo tanto, muchas actividades pueden ser consideradas como necesarias y quienes fueran a juicio serían juzgados por pares, mientras que los líderes guerrilleros serían enjuiciados por el fuero común. La sociedad civil, no estuvo conforme con la Teoría de los *Dos Demonios*, pues no consideraban que hubiera habido una guerra como tal menos cuando muchos de los desaparecidos no tenían relación con la guerrilla simplemente considerados *subversivos*.

La mayoría de las organizaciones de derechos humanos -como las Madres de la Plaza de Mayo- insistían en una comisión bicameral para juzgar las violaciones graves a los derechos humanos. Lo que se buscaba era que los miembros de las fuerzas armadas fueran juzgados por

dicha comisión, para que las sentencias fueran justas. El Presidente rechazó la comisión bicameral porque “una comisión del Congreso embarcaría a los legisladores en una competencia por la autoría de la sanción más dura contra las Fuerzas Armadas, y daría así origen a una situación de extrema tensión” (Crenzel, 2008: 59). Algunos más, como Adela Antokoletz¹²⁰, comentó: “Alfonsín no impulsó que se formara una comisión bicameral –algunos de nosotros decimos “menos mal”- porque a lo mejor hubieran sido tan malos los diputados y senadores de la comisión bicameral que no hubieran avanzado tanto como avanzó la comisión de personalidades que nombró...”. El gobierno en transición tenía mucha presión, tanto por la sociedad civil con su exigencia de justicia -quienes en parte marcaron la pauta del accionar-, como de una fuerza castrense que se empezaba a ver acorralada, pero que a la vez no había sido separada por completo de puestos de poder, lo que provocaba incertidumbre al gobierno en términos de otro golpe de estado.

La comisión bicameral nunca procedió. En cambio, propuso una comisión de “personalidades” para que investigaran la violencia del pasado reciente. El 15 de diciembre de 1983, el Presidente Alfonsín instaló la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP); en un inicio, para corroborar o descartar la posibilidad de que hubiera desaparecidos aún con vida, pues algunos miembros de la Marina habían corrido el rumor de que algunos secuestrados habían sido asesinados, pero había algunos con vida en centros clandestinos, todavía. La CONADEP, inicialmente, trataría de descubrir si es que había sobrevivientes en alguna instalación clandestina usada por las Fuerzas Armadas. Aunado a esto, se haría una investigación de la violencia y la suerte que habrían corrido sus víctimas. La CONADEP se convertiría, entonces, en una especie de intermediario, donde personalidades de la sociedad civil harían una investigación para conocer la verdad. Quienes fueran miembros de la CONADEP no podrían ser ni miembros de alguna organización civil, ni afectados directos por la violencia, ni haber tenido algún cargo público durante la dictadura. Podrían ser nacionales o extranjeros, pero claros al defender los derechos humanos.

¹²⁰ Cf. Apéndice #7 (Pp. 332). Entrevista con Adela Antokoletz miembro de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora y hermana de un desaparecido.

La organización de las Abuelas de la Plaza de Mayo, quienes, a diferencia de las madres, buscaban a los nietos a quienes -en muchos casos- ni siquiera conocieron pues fueron hurtados por la dictadura y regalados o vendidos a otras familias; también querían una bicameral. Rosa de Roisinblit, vicepresidente de este organismo, explicó “Nosotras no queríamos a la CONADEP porque no queríamos que gente importante que ni siquiera nos había ayudado –pero por ser una persona importante- integrara una CONADEP queríamos una bicameral. Pero el Presidente fue electo, ganó las elecciones y había que obedecer lo que él decía y se hizo”¹²¹. Lo que las Abuelas pensaban se hizo un hecho, ya que la mayoría de las personas que estuvieron involucradas en la comisión no habían tenido participación en sus investigaciones; sin embargo, se alegó que era parte de la neutralidad necesaria entre los miembros de la comisión.

En un inicio, Alfonsín le pidió a Adolfo Pérez Esquivel -quien había ganado el Premio Nobel de la Paz-, ser el líder de la comisión. Esto no se logró, ya que Pérez Esquivel, quien políticamente era muy activo y cercano a los organismos de derechos humanos, condicionó su participación a que la Justicia Federal fuera la única instancia que tratara las causas relacionadas a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Implicaba que los militares también fueran juzgados por instancias civiles y no acorde a la Justicia Militar. Como la estructura que ya se había planteado no era negociable, Alfonsín tuvo que hacer el ofrecimiento a Ernesto Sábató.

La comisión fue integrada por un número importante de personas dedicadas a una variedad de actividades. Al final, la CONADEP estuvo conformada por personas que habían sido propuestas tanto por el propio Alfonsín como por miembros cercanos de su gabinete. La propuesta de conformación de la Comisión contempló a las siguientes personalidades:

Ernesto Sábató	Escritor y físico
Eduardo Rabossi	Filósofo y militante en favor de los derechos humanos
Gregorio Klimovsky	Matemático y filósofo
Hilario Fernández Long	Docente e ingeniero
Marshall Theodore Meyer	Rabino estadounidense pero ciudadano argentino, activo en el ámbito de los derechos humanos
Ricardo Colombres	Abogado también relacionado con la actividad académica

¹²¹ Cf. Apéndice #10 (Pp. 344). Entrevista con Rosa Tarlovsky de Roisinblit vicepresidenta de la organización Abuelas de la Plaza de Mayo.

Jaime de Nevares	Monseñor y activista en favor de los derechos humanos
Magdalena Ruiz Guiñazú	Periodista de radio
Carlos Tomás Gattinoni	Pastor evangélico involucrado en el movimiento de los derechos humanos
René Favaloro	Médico

Fuente: Adaptación propia de Crenzel, 2008: 60

Antes de hacer el listado oficial, se consideró la opinión de los organismos de derechos humanos, pues hubo casos como el no comulgar con alguno de los miembros, como sucedió con la organización de las Abuelas, “Había una persona que se tuvo que retirar porque a nosotras no nos gustaba –ese es el peso que nosotras siempre hemos tenido-. Dijimos “fulano no, no lo queremos”. No lo quisimos porque él formaba parte de un grupo que estaba haciendo los exámenes de sangre en contra de nosotras por eso no lo quisimos; porque trabajaba en el Hospital Militar Central, nosotras no confiábamos en él. Era un gran médico, pero al trabajar en el Hospital Militar Central... no queríamos a nadie de ahí y se tuvo que ir. Lo cambiaron por otra persona”¹²². El médico René Favaloro no participó en la Comisión, pues “renunció a la CONADEP después de proponer la inclusión de dos médicos, ligados a la represión” (Kirschbaum, 2014). Si bien era un médico considerado una eminencia, el señalamiento de los organismos de derechos humanos en su contra por haber apoyado al régimen, y condicionar su estancia a la participación de médicos directamente involucrados por la dictadura, hizo imposible que participara. Él alegó una renuncia, y las Abuelas su destitución; pero no tuvo participación. El decreto consideraba también la invitación a ambas Cámaras del Congreso para tener tres representantes en la CONADEP. La única respuesta fue por parte de la Cámara de Diputados, quienes eligieron a los representantes a los que tenían derecho: Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte; todos ellos de la Unión Cívica Radical, completando la Comisión.

El 29 de diciembre de 1983, por unanimidad, se eligió a Ernesto Sábató como Presidente de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas. La primera labor entonces, antes de iniciar los trabajos, fue la creación de Secretarías para que se pudieran atender las situaciones a las que

¹²² Cf. Apéndice #10 (Pp. 344). Entrevista con Rosa Tarlovsky de Roisinblit vicepresidenta de la organización Abuelas de la Plaza de Mayo.

se enfrentara el organismo de manera más efectiva. No se encontró información sobre cuál fue el proceso para elegir a las personas que estuvieron a cargo de las Secretarías; además de que los ya participantes extendieron la invitación. Sin embargo, parece curioso que las personas que fueron elegidas para formar parte de la Comisión y que contaban con las características que se buscaba para ello, no tomaran la responsabilidad de los puestos clave del proyecto. La organización interna de la CONADEP, se dividió en cinco:

Nombre de la Secretaría	Personalidad a Cargo
Secretaría de Recepción de Denuncias	Sra. Graciela Fernández Mejide
Secretaría de Documentación y Procesamiento de Datos	Dr. Daniel Salvador
Secretaría de Procedimientos	Dr. Raúl Aragón
Secretaría de Asuntos Legales	Dr. Alberto Mansur
Secretaría Administrativa	Dr. Leopoldo Silgueira

Fuente: CONADEP, 2006:448.

Una vez creadas las Secretarías, se iniciarían los trabajos; aunque esto generara incertidumbre hacia dentro y fuera de la Comisión. LA CONADEP, según el decreto presidencial, solamente se limitaría al tema de los desaparecidos y tendría un plazo máximo de seis meses para poder encontrar la verdad. No había claridad en cuanto al periodo en que se investigarían las desapariciones, pues las violaciones a los derechos humanos no iniciaron con la última dictadura militar sino desde el último periodo del peronismo; aunque sólo se contempló la última dictadura. En un plazo de seis meses la CONADEP tendría que "...recibir las denuncias y pruebas y remitirlas inmediatamente a la Justicia, averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas y de toda otra circunstancia relacionada con su localización; ubicar a los niños sustraídos a la tutela de sus padres; denunciar a la Justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de pruebas relacionadas con esos hechos y emitir un informe final..." (Crenzel, 2008: 61). Había organismos de derechos humanos que llevaban años tratando de reconstruir la historia de alguna persona. Las Abuelas han tardado décadas en encontrar a niños sustraídos durante la dictadura... ¿cómo se pensaba lograr esto en 180 días? Se dijo que el plazo fue tan breve porque el gobierno no podía permitir que el recuerdo del pasado pusiera en juego la nueva democracia. Otros pensaban que era para no afectar a posibles perpetradores, al no tener tiempo para una investigación a fondo.

El trabajo de este tipo de organismos no es sencillo. Además de ser una labor titánica por el número de denuncias que se presentan, siempre hay muchas demandas por satisfacer, logrando opiniones a favor y en contra. Desde su creación, se habían tenido voces en contra, ya que los organismos de derechos humanos exigían una comisión bicameral. Uno de los cuestionamientos para la CONADEP era las limitaciones que tendría por esclarecer solamente la verdad sobre las desapariciones. En una reunión extraordinaria, la Secretaria de Recepción de Denuncias, Graciela Fernández Mejide, expresó su preocupación por diversos motivos: "...la limitación que suponía la propia sigla CONADEP, que limitaba la investigación a los desaparecidos, e impedía un juicio político a los responsables del terrorismo de estado; también manifestó sus dudas respecto de que los miembros de la Comisión pudieran siquiera reunirse y que su informe final fuese eficaz..." (Crenzel, 2008: 61-62). Y aunado a las problemáticas internas, y al desacuerdo de algunos organismos de derechos humanos, se ponían al descubierto violaciones a los derechos humanos perpetrados por una dictadura recién retirada, pero que conservaba gente en el poder.

Debido al tiempo tan limitado, la CONADEP solicitó la participación de diferentes organismos para poder reunir la información con mayor celeridad. Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales; Abuelas de la Plaza de Mayo; la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) o Familiares de Detenidos y Desparecidos por Razones Políticas, entregaron sus archivos con denuncias, o bien, la información de investigaciones avanzadas. Las Madres de Plaza de Mayo, decidieron por consenso no acudir: "Nosotras nunca estuvimos con la CONADEP, porque nosotras pedimos una bicameral con poderes para investigar. La CONADEP tenía que pedir permiso... no sirve"¹²³. Aunque hubo algunas Madres, quienes sí estuvieron de acuerdo, y se las ingeniaron para hacer su denuncia ante la Comisión, "Una comisión de once Madres decidieron que no iban a ir a la CONADEP –quienes estaban a favor de ir a la CONADEP era mi madre y algunas otras, pero eran minoría, todo se resolvía por consenso o por voto- votaron, la mayoría dijo que no; así que no.

¹²³ Cf. Apéndice #9 (Pp. 339). Entrevista con Evel Petrini de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo.

Entonces mi madre -que no podía presentarse ante la CONADEP- le pidió a mi cuñada que había estado detenida-desaparecida con Daniel, que fuera y se presentara. Mi cuñada, por suerte, fue y se presentó; es uno de los testimonios que hay en el libro *Nunca Más*¹²⁴. Las Madres no entregaron ni los avances en investigaciones, ni las denuncias recopiladas.

El General Jorge Arguindegui, jefe del Estado Mayor del Ejército, señaló que “la investigación sobre los desaparecidos no conmoverá a la institución” y que “en todo caso podría molestar a los directamente implicados en forma personal en los supuestos ilícitos”. Conforme pasaron los días, las versiones iban cambiando hasta que personajes como el Jefe del II Cuerpo del Ejército, Ríos Ereñú, declarara que “todo el Ejército participó en la lucha antsubversiva para defender los valores patrios y tradicionales” (Declaraciones en Crenzel, 2008: 65). Resultaba complicado poder hacer una investigación a fondo o pedir la colaboración de las fuerzas castrenses para poder conocer los hechos del pasado a cabalidad, cuando, los victimarios estaban presentes; algunos en servicio activo. Tal vez ese haya sido uno de los motivos que orilló a que, pese a que la CONADEP pidiera su colaboración, ésta fuera limitada.

“The investigation of the CONADEP truth commission was severely hindered by the lack of cooperation from the armed forces” (Robben, 2007: 319)¹²⁵. Si bien las Fuerzas Armadas no negaban de manera tajante la existencia de una violencia excesiva, dejaban en claro que se trataba de una medida necesaria para combatir la subversión que había tornado el conflicto en una guerra no convencional, para la que nadie estaba preparado. Se limitaron a negar, no la existencia de las desapariciones forzadas, pero sí que se tratara de una práctica sistemática. Además, de declarar a la CONADEP que no había desaparecidos con vida y que los altos mandos habían ordenado la quema de documentos inculpativos; por lo tanto, no había versiones oficiales -salvo por algunos testimonios- de la violencia ejercida. Sin información oficial por parte de la dictadura, la Comisión limitaba su investigación a lo que ya se sabía gracias a las pesquisas de los organismos de derechos

¹²⁴ Cf. Apéndice #7 (Pp. 332). Entrevista con Adela Antokoletz miembro de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora y hermana de un desaparecido.

¹²⁵ La investigación de la comisión de la verdad, CONADEP, se vio severamente entorpecida por la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas. [Traducción de la autora] (Robben, 2007: 319).

humanos, y a testimonios -muchos de los cuales conformaban las denuncias que también ya eran conocidas-.

“No obstante, es necesario decir que nuestra labor se vio dificultada por la destrucción y/o remoción de la profusa documentación que registró minuciosamente la situación de las personas desaparecidas, por lo que debió apelarse a informes de algunos institutos y organismos militares y de seguridad acerca de directivas, organigramas, órdenes y nombre de miembros de esas fuerzas de seguridad que por su rol protagónico en las actividades represivas podrían haber aportado elementos de insustituible valor probatorio” (CONADEP, 2006: 456).

Es difícil saber con certeza si las fuerzas castrenses realmente quemaron la información - como se decía- o qué pasó con ella; se sabe que se tenían libros completos con nombres de desaparecidos, se sabe que incluso se hacían inventarios de lo que robaban de las casas de los abducidos, pero sin documentos probatorios, sólo se puede recaer en los testimonios de quienes quieran cooperar. Según datos del mismo informe de la CONADEP (2006) se extendieron aproximadamente 1.300 oficios solicitando información desde el Ministerio de Defensa, pasando por el Ministerio del Interior, Servicio Penitenciario Federal, Policías Federales y Provinciales incluso Juzgados. A pesar de que para algunos casos se recurrió al Presidente para que obligara a que los organismos dieran respuesta, la participación de los mismos alegando trámites burocráticos, falta de información o secreto militar, fue escasa.

Lejos de ayudar a la investigación, sin ser plenamente comprobado, los miembros de la CONADEP se dieron cuenta de que -aparentemente- algunos miembros de servicios de inteligencia hacían denuncias anónimas con datos comprobables, en cuanto a historia de la persona buscada, edad, lugar de desaparición indicando dónde podían ubicar al desaparecido. Comitivas de la CONADEP fueron, incluso, a Uruguay, siguiendo este tipo de denuncias, sin encontrar a nadie con vida. Se asume que las propias fuerzas castrenses levantaban estos rumores con el fin de quitar tiempo y recursos a la Comisión y abusando de la creencia de que se podrían encontrar personas desaparecidas con vida. Tenían que ser militares porque, ¿quién más podría tener tanta información tan certera? Algunas personas mencionaban que “estas iniciativas mostraban que la CONADEP

actuaba espasmódicamente a partir de requerimientos, a veces anónimos, y que carecía de una estrategia de investigación” (Crenzel, 2008: 67).

Se llegó a la determinación de que la Comisión no podía buscar a cada desaparecido de manera individualizada, por lo tanto, tenían que iniciar el trabajo formal a la brevedad. El inicio de los trabajos implicó la recepción de testimonios o denuncias. “Largas, fatigosas, tremendas denuncias en las que un padre, una madre, una esposa, narraba su peregrinaje por Tribunales, Ministerios, comisarías o cuarteles buscando en vano un dato sobre la suerte de sus seres queridos o -peor aún- describiendo entre sollozos la forma como habían torturado a sus hijos en su presencia” (CONADEP, 2006: 449). No había equipo que fuera suficiente para soportar a tantas personas denunciando, pues, por cuestiones de tiempo, no habían tenido una capacitación adecuada; pero, sobre todo, no había personas que no fueran afectadas psicológica y emocionalmente por las atrocidades que estaban escuchando. Esto implicó que hubiera gran rotación en los equipos de trabajo; además de incorporar a nuevas personas para poder recibir la gran cantidad de información que la gente brindaba; 8 horas continuas de lunes a viernes parecían insuficientes.

“In absence of much material evidence, the inquiry became above all a narrative reconstruction. The depositions were of great importance because they turned personal experience into public testimony” (Robben, 2007: 321)¹²⁶. Si el material primordial de la investigación serían las denuncias de los afectados, entonces era importante cubrir todos los frentes. Casi todas las denuncias que las organizaciones de derechos humanos compartieron con la CONADEP, eran de personas de la capital y otras grandes ciudades; sin embargo, no habían sido los únicos afectados. Por ello, se determinó que no sólo se tomarían testimonios en la capital y los alrededores, sino en cada una de las provincias; e, incluso, se instalarían oficinas en el extranjero, pues muchos argentinos habían sido obligados a huir del país debido a la violencia del Estado.

¹²⁶ Ante la ausencia de evidencia físicas, la investigación se convirtió en una reconstrucción narrativa. Las declaraciones fueron de suma importancia porque convirtieron la experiencia personal en un testimonio público. [Traducción de la autora] (Robben, 2007: 321).

Fuera del país, se instalaron oficinas de la CONADEP, sobre todo en países como España en donde se sabía que un buen número de argentinos se habían exiliado por la violencia estatal. En un primer momento, se abrieron las Embajadas para que las personas asistieran a registrar su denuncia. Sin embargo, no hubo convocatoria, debido a que algunos perpetradores estaban trabajando en las Embajadas, y eso se sabía. Por esto, la Comisión hizo viajes para recibir las denuncias, sin que dicha información pasara por la Embajada. Pero, la verdadera labor se hizo dentro del país, aunque fuera de las grandes urbes. Las grandes ciudades argentinas habían acaparado las denuncias; sin embargo, se identificó que fuera de ellas había un gran nicho de denunciantes a los que no se les estaba prestando atención. Por ejemplo, “en la ciudad de Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy, donde se pudo comprobar el secuestro masivo de 200 personas en una sola noche, de las cuales más de 60 continúan en la condición de desaparecidas” (CONADEP, 2006: 451).

En las ciudades se había tenido mayor posibilidad de interponer alguna demanda en alguna instancia policial o de derechos humanos; casi de manera inmediata al secuestro. Sin embargo, en las zonas rurales -por ignorancia o porque no había ni siquiera a quien acudir- casi ningún afectado había demandado. En algunas poblaciones muy aisladas pensaron que la CONADEP venía a devolverles a sus hijos; ignoraban por completo las atrocidades que se habían vivido; quedando en completa indefensión. “De las nuevas denuncias recibidas por la CONADEP, el 64% provino de los habitantes de estas localidades, mientras en las grandes ciudades en un 85% de los casos las habían presentado tras el secuestro. (Crenzel, 2008: 70). Incluso las Madres de la Plaza de Mayo, con sede en la provincia de Jujuy, estuvieron colaborando en la toma de testimonios, pese a al rechazo de la Comisión, pero este organismo no se daba abasto.

La Comisión tuvo también otra iniciativa, llamada “equipos de calle”; y es que había otro sector que no había sido considerado. Había personas que habían salido de sus lugares de origen y que no tenían familiares en el lugar de la abducción. Los familiares de estas personas solamente sabían que su pariente ya no había vuelto; no había forma de contactarlo, además de que desconocían cómo, cuándo, dónde habían sido secuestrados. Se quedaban sin posibilidad de

entablar alguna denuncia porque estaban en completo desconocimiento. Los equipos de calle se dedicaron a recorrer las zonas aledañas a las residencias de las personas para indagar, a través de vecinos, compañeros de trabajo o estudios, qué había pasado.

A diferencia de los organismos de derechos humanos, la CONADEP logró obtener cerca de 1.200 testimonios de personas que habían sobrevivido a los centros de detención. No se sabe, a ciencia cierta, cuántos sobrevivientes hay, pero la realidad es que al menos esas mil doscientas víctimas sintieron la responsabilidad de testificar. “Todos eran su propia voz, pero también eran quienes podían rescatar a otros de la muerte anónima” (Crenzel, 2008: 71). Y es que estos testimonios fueron construyendo una especie de línea del tiempo que ayudó a ubicar a personas, ya que fueron capaces de dar algunos nombres de quienes estuvieron en cautiverio al mismo tiempo que ellos, así como nombres o sobrenombres de algunos perpetradores.

Pocos fueron los casos, pero los hubo, de perpetradores que decidieron dar su testimonio. A través de estas narrativas, se pudieron corroborar las prácticas denunciadas por las víctimas; también se comprobó la existencia de los Centros Clandestinos de Detención. Algunos declararon en el país y otros más en el extranjero. Si bien, eran miembros de las fuerzas castrenses de bajos mandos, la información compartida fue de gran utilidad. Algunos mandos policiales encarcelados que estaban resentidos con las Fuerzas Armadas testificaron también; y hubo quienes, a los pocos días de haber dado su testimonio, trataron de cambiarlo, -casualmente- tras la visita de la inteligencia militar a la cárcel.

Como parte de los testimonios, también, hubo un grupo especial de personas que se denominaron los “testigos involuntarios”. “Vecinos que vieron los secuestros, moradores de zonas próximas a los centros clandestinos que confirmaron la presencia militar o policial en ellos, médicos y enfermeras que asistieron a desaparecidas embarazadas o empleados de cementerio” (Crenzel, 2008: 73). Hubo el caso de unos trabajadores de la morgue de Córdoba que entregaron a la Comisión una carta en donde le pedían al General Videla un mejor sueldo, debido a las exhaustivas horas de trabajo que tenían que desempeñar; además de áreas como el entierro clandestino de decenas de cadáveres. Este ejemplo proporcionó información en relación a que -efectivamente-

había tumbas donde decenas de cuerpos solamente eran “identificados” como NN; y que, - seguramente-, el General Videla estaba al tanto de los cientos de entierros y violaciones a los derechos humanos que decía desconocer.

A partir de los testimonios, y sobre todo de que cientos de personas aseguraban la existencia de los Centros Clandestinos de Detención, la Comisión decidió que iría a inspeccionar dichas locaciones. Evidente era que no iba a haber rastros de las aberraciones, pero sí fueron reconstruidos a través de los relatos de los sobrevivientes, quienes fueron animados e invitados a acompañar a la comisión. Gracias al apoyo de personas que estuvieron cautivas, se lograron diseñar planos de dichos lugares (incluidos en el informe final) y tener listados tanto de los cautivos como de los perpetradores. Como era de esperarse, las visitas no fueron bien recibidas por las Fuerzas Armadas. En ocasiones se trató de impedir el ingreso; hubo amenazas de manera presencial, negar todos los hechos y presentar información hecha a modo sobre las actividades que ahí se habían llevado a cabo. “Para la mirada castrense, las inspecciones avanzaban sobre el territorio último de su dominio, donde se amparaban del repudio social que recorría la sociedad, traducido en la dificultad misma para sus oficiales de vestir su uniforme en público” (Crenzel, 2008: 76).

Las visitas a los centros de detención marcaron otra pauta, en términos de las críticas que recibía la CONADEP. En un inicio, la crítica se relacionaba más con el origen y con la posibilidad de investigación, o incluso de acción del organismo. Pero una vez que se realizaron las visitas, la crítica se fue relacionando más con la subversión. El discurso de que quien estaba en contra la dictadura debía ser subversivo, parecía no envejecer; y, una vez más, las Fuerzas Armadas lo estaban usando: “El más violento de estos ataques lo formuló el almirante Mayorga, defensor de Chamorro, ex director de la ESMA, quien calificó a sus integrantes de *izquierdizantes* y *antimilitaristas* y de parcialidad *por haber sufrido en ellos o en sus parientes los avatares de la guerra*, postuló que la CONADEP *pedía de rodillas testimonios contra los militares*, que su informe iba a ser un gran fracaso, y abogó por el olvido y la amnistía” (Crenzel, 2008: 79). Los ataques por subversión no fueron exitosos; por el contrario, logró que algunos detractores de la Comisión optaran por su defensa, pues si bien podían no estar de acuerdo en todo, conocer la verdad era una prioridad.

Los testimonios y las visitas serían los que escribieran la historia oficial. Las campañas en radio y televisión para colaborar rindieron frutos. Se descubrió que no sólo la gente de las ciudades pedía justicia sino el país entero. Los testimonios fueron depurados para que se repitieran. A cada testimonio se le asignó un número y se le sumaron otros testimonios que pudieran complementar el original; todos ellos se fueron concentrando para formar carpetas o legajos con la mayor cantidad de pruebas posibles. Al final, se conformaron 7.380 legajos que se tradujeron en denuncias soportadas por más de 1.086 carpetas que lograron acreditar la existencia de los centros de detención, y las prácticas que ahí dentro imperaban (CONADEP, 2006: 481).

Como fuentes de información adicionales, se tuvieron testimonios de personas fuera del país. Miembros de la CONADEP viajaron a países como Estados Unidos -visitando Los Ángeles, Nueva York y Washington-; París; Ginebra; España -Barcelona y Madrid-, así como México y Venezuela. En estos casos, se trataron de denunciantes de desaparecidos en Argentina, cuyas familias se exiliaron. También, se hicieron negociaciones con organizaciones como la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos (FEDEFAN) que tenía casos de desapariciones argentinas no registradas en la Comisión; otras veces se facilitaron listados de personas de otras nacionalidades -uruguayos, peruanos, paraguayos, bolivianos y chilenos- quienes hasta el último contacto vivían en la Argentina, y se presume fueron abducidos en este país.

Debido a la complejidad de los testimonios -sobre todo de los sobrevivientes- y para comprender una realidad que parece inverosímil, la CONADEP determinó que era necesario hacer procedimientos complementarios. Estos procedimientos fueron los siguientes:

1. Reconocimiento <i>in situ</i> de centros clandestinos de detención, con la concurrencia de liberados de dichos campos.
2. Visita a las morgues para recabar información sobre ingresos irregulares.
3. Diligencias en vecindarios y en lugares de trabajo, enderezadas a determinar la ubicación de centros clandestinos de detención o sobre las modalidades y formas en que se procedió a secuestrar a personas que figuran como desaparecidas.
4. Recepción de declaraciones testimoniales de personal en actividad o en retiro de las fuerzas armadas y de seguridad, fuera del ámbito físico de la Comisión.
5. Revisión de registros carcelarios.
6. Revisión de registros policiales.
7. Investigación de delitos cometidos en bienes de desaparecidos.

Fuente: CONADEP, 2006:453.

Adicionalmente, se asistió a diferentes hospitales y centros psiquiátricos para indagar sobre posibles ingresos o personas que hubieran estado de paso; incluso, en ocasiones, para ver si había alguna persona desaparecida con vida pues personas habían recibido llamadas anónimas con este tipo de información. “Todas las visitas a este tipo de establecimientos dieron resultado negativo en cuanto a la búsqueda de personas, pero quizá muy positivo en el sentido de poner fin a situaciones de atroz angustia y de falsa expectativa en gente ya casi sin fuerzas para soportarlas” (CONADEP, 2006: 454). Valía más la pena salir de cualquier duda y además de completar lo más posible la información de cada legajo.

La Secretaría de Asuntos Legales realizó una importante tarea en cuanto al ordenamiento de la información. Cada legajo o denuncia se agrupó de acuerdo con el último Centro Clandestino de Detención en que el desaparecido había sido visto con vida. Para cada persona desaparecida se hizo una especie de sumario. Se partió desde el momento del secuestro, y se hacía una especie de línea del tiempo para poder determinar el destino y el paradero de la persona desaparecida.

“La supresión de rastros y documentos, la falsa identidad de los autores enmascarados detrás de nombres supuestos o apodos con credenciales apócrifas, la alteración de los edificios que sirvieron de base operativa, la remoción de terrenos utilizados para inhumaciones clandestinas, en muchos casos la imposibilidad de los secuestrados de reconocer a sus captores cegados como estaban por vendas y capuchas desde el inicio de su detención fueron algunos de los graves inconvenientes con que tropezó la labor” (CONADEP, 2006: 455).

Formar los legajos en formas de líneas del tiempo fue una labor titánica; sin embargo, a través de los procesos complementarios y de cruzar información, se lograron relatos sólidos no sólo para dar respuestas a los familiares de los desaparecidos, sino también para poder conformar denuncias adecuadas para exigir justicia.

El funcionamiento sobre las denuncias, en cuanto a los Centros Clandestinos de Detención, tuvo variantes. Para cada Centro se hizo un “paquete” de información basada tanto en testimonios de familiares, de sobrevivientes, así como de otros testigos e información recabada como archivos, los *habeas corpus* presentados o las respuestas oficiales a dichas peticiones. El objetivo final era

hacer una carpeta lo más completa posible para que fuera llevada ante la justicia. Por lo tanto, gracias a la información, para cada caso se incluyeron listados de personas desaparecidas en ese sitio, al igual que un listado de personal que estuvo involucrado en los delitos cometidos que estaban descritos y enumerados a detalle en otro documento. La lista de posibles perpetradores era riesgosa, por lo tanto, solamente se incluían las personas que hubieran coincidido en al menos tres testimonios o fuentes de información diferentes; quienes coincidieron, fueron nombrados.

Para la CONADEP había mucha presión por conocer la información que se estaba recopilando desde todos los frentes; la gente quería saber cuál era el paradero de sus desaparecidos, pero también quiénes eran los responsables y qué haría el nuevo gobierno al respecto. Se emitían comunicados o se hacían conferencias de prensa cada semana para poder brindar algo de información que se hubiera recolectado, también se proporcionaba el estatus del avance en los trabajos o algunos giros que había tomado la investigación como la decisión de hacer las visitas a los Centros de Detención. Una vez que la investigación estaba prácticamente concluida, pero sin tener el informe final escrito, se decidió que se podrían adelantar algunas conclusiones preliminares a través de un programa de televisión. Se hizo la grabación del programa que saldría al aire en julio de 1984.

“El 4 de julio por la mañana, Alfonsín discutió con sus colaboradores si emitirlo con el costo de irritar a los militares o prohibirlo, pese a que ya estaba anunciado, y enfrentar el escándalo público” (Crenzel, 2008: 81). Sábato, presidente de la CONADEP, amenazó con separarse del cargo si la emisión era cancelada; sin embargo, se llegó a un punto intermedio. El programa saldría al aire la noche del 4 de julio, pero con una introducción en donde se evitaba condenar al terrorismo de estado, planteando la irrupción de ideas subversivas que a algunos les parecieron atractivas causando inestabilidad en el país. Los militares, por su parte, no estaban preocupados porque se les legitimara o no en la historia del país, sino que tenían miedo a que se dieran a conocer de manera pública listados de perpetradores; se conocía que se habían hecho listados con base en testimonios, entonces querían evitar a toda costa que éstas fueran del dominio público. “Al comenzar -la transmisión en el Canal 13- estalló una bomba de estruendo en el canal, y vecinos de la zona norte

del Gran Buenos Aires avistaron columnas de tanques sobre la ruta Panamericana que, antes de ingresar a la Capital, retornaron a la guarnición de Campo de Mayo” (Crenzel, 2008: 81-82). Aparentemente, las fuerzas armadas querían dejar en claro, lo que podían hacer en el país de nuevo, al sentirse agredidos y aludidos con la verdad; aunque las listas no se hicieron públicas en la emisión.

Pese a la “demostración de fuerza” castrense, el programa continuó y presentó información acompañada de algunos testimonios que se dieron en vivo. Además de que preguntas como *¿Dónde están los campos de concentración de los que habla la prensa extranjera?*; fueron acompañadas por imágenes de los acontecimientos de los años en que la dictadura estuvo en el poder, así como de testimonios y conclusiones con datos duros que daban respuesta al cuestionamiento. Una audiencia masiva de 1.640.000 personas vio el programa; los crímenes atroces del pasado habían sido, al fin, revelados por parte del Estado a través de la CONADEP. La emisión tuvo un impacto importante pues algunos miembros de las fuerzas armadas fueron removidos de sus puestos. Las amenazas en contra de los integrantes de la CONADEP se intensificaron. Asimismo, los aliados de los militares y los propios mandos, exigieron al Estado un programa de televisión similar, que plasmara la versión de las Fuerzas Armadas en su lucha en contra de la subversión, y que se mostrara la violencia ejercida a través de actos terroristas y secuestros; esta versión nunca se hizo.

“Como expresó Sábato, el informe serviría de recordatorio a las generaciones venideras de la gran tragedia vivida en la Argentina, sería un *monumento simbólico, pequeño, porque no tiene que ser grandioso, a la barbarie y a la represión desatada para que nunca más vuelva a suceder*” (Sábato en Crenzel, 2008: 92). El escribir el informe era un reto, pues el público a quien iría dirigido sería toda la sociedad argentina, y esto representaba muchos matices, porque, aunque el programa televisivo le había abierto el panorama a gran parte de la sociedad; el texto tendría que ser lo más detallado posible para que realmente presentara la verdad, pese a su severidad. Es por ello que se decidió que el texto fuera acompañado de planos de los Centros de Detención, así como

fotografías¹²⁷. También que se incluyeran testimonios que relevaran la verdad; pero con límites en el relato dejando a un lado aquellos testimonios demasiado crueles para no poner en duda la credibilidad del texto, y para no herir demás a la sociedad.

La redacción se dividió en las Secretarías. No todos los integrantes podrían escribir sobre cualquier tema, sino que era importante que cada sección redactara la información que había procesado y encontrado. Al final, Ernesto Sábato se encargó de darle homogeneidad a la redacción, así como sería el encargado del prólogo. Aunado a esto, el texto contendría recomendaciones con el fin de evitar que estos hechos puedan repetirse algún día. Con el afán de tener recomendaciones incluyentes, la CONADEP decidió invitar a diferentes organismos de derechos humanos para que cooperaran con sus propias ideas y perspectivas para que las recomendaciones fueran enriquecidas con ellas. “La participación de los organismos se reforzó, semanas después, al proponerles la CONADEP revisar la versión final del informe” (Crenzel, 2008: 95).

El informe de la CONADEP estaba casi listo, hasta que se topó con una encrucijada: poner o no las listas de perpetradores, además de los denunciantes. No era posible publicar listas de denunciantes porque podrían convertirse en blancos de violencia; sobre todo porque el rumor de que pudieran publicarse listados de perpetradores en un texto que tendría difusión a nivel nacional, ya estaba dando como resultado diversidad de amenazas en contra de los integrantes de la Comisión. Por esto, se decidió que tampoco podrían publicarse listados de perpetradores. Las listas existían, y serían entregadas al presidente para que dispusiera de ellas; un ejemplo, ya se había dado en el momento en que miembros del Congreso habían solicitado a la CONADEP los antecedentes de algunos militares que estaban en posibilidad de ser promovidos. Finalmente fue un acuerdo se había tomado desde la creación de la Comisión, que se buscaría evitar nuevos brotes de violencia, o de hacer justicia por mano propia y al dar a conocer listas de denunciantes y denunciados, podrían dar lugar a esto.

¹²⁷ Cf. Anexo 15 (Pp. 317). Ejemplo de los planos contenidas en el informe de la CONADEP.

Dos meses y medio después de que el Informe Preliminar se transmitiera por televisión, el resultado final fue un texto de casi 500 páginas (sin contar los anexos) denominado *Nunca Más*. El texto tiene una estructura general que incluye testimonios, descripciones de los centros clandestinos de detención, conclusiones sobre los testimonios, como quiénes fueron las víctimas más comunes, cuál era el proceso de abducción, qué pasaba dentro de los Centros. Seis capítulos, además de uno dedicado a las conclusiones hacen que el texto denuncie la verdad de los hechos y que, al ser legitimado por el gobierno, se convierta en la verdad oficial, en donde el Estado asume su responsabilidad ante la violencia. Además, el texto contiene anexos que se transformaron en un libro adicional que contiene los listados de las víctimas de cada Centro de Detención Clandestino. Hasta el día de hoy, ambos textos pueden conseguirse en librerías por un precio accesible.

Especial interés tiene el capítulo sexto del documento *Nunca Más* (1984), presentado por la CONADEP, que trata sobre las recomendaciones que la propia Comisión, con apoyo de otros organismos de derechos humanos, hacen al gobierno federal para evitar que el grado de violencia vivido pueda volver a alcanzarse. Este apartado del documento presenta cuatro recomendaciones precisas al gobierno que versan desde la justicia penal hasta la justicia restaurativa y la educación de las futuras generaciones, así como la necesidad de una investigación judicial de los hechos denunciados ante la Comisión. “Los hechos, por demás elocuentes, que han sido denunciados o testimoniados ante esta Comisión, nos llevan a recomendar algunas iniciativas ante los distintos poderes del Estado Nacional, con la finalidad de prevenir, reparar y finalmente evitar la repetición de conculcaciones a los derechos humanos en nuestro país” (CONADEP, 2006: 477).

Las recomendaciones fueron:

a)	Que el organismo que sustituya a esta Comisión acelere los trámites tendientes a remitir a la justicia la documentación recogida durante la investigación encomendada por el Poder Ejecutivo.
b)	Que el Poder Judicial se aboque adecuadamente a la agilización de los trámites investigativos y de comprobación de las denuncias recibidas por esta Comisión.
c)	Que se dicten las normas necesarias para que los hijos y/o familiares de personas desaparecidas durante la represión reciban asistencia económica; becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo. Asimismo, que se sancionen las medidas que se estimen convenientes y que concurren a paliar los diversos problemas familiares y sociales emergentes de la desaparición forzada de personas.

- d) Sancionar normas que tiendan a:
 - a. Declarar crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas.
 - b. Apoyar el reconocimiento y la adhesión a las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
 - c. Establecer la enseñanza obligatoria de la defensa y difusión de los Derechos Humanos en los organismos docentes del Estado, sean ellos civiles, militares o de seguridad.
 - d. Fortalecimiento y adecuación plena de los medios con que deberá contar la Justicia Civil para la investigación de oficio en relación a la violación de Derechos Humanos.
 - e. Derogar toda la legislación represiva que se encuentre vigente.

Fuente: CONADEP, 2006: 477-478.

“An estimated seventy thousand personas accompanied the commissions members on the evening of September 20th, 1984 to the Casa Rosada under the motto “punishment for the guilty” (Robben, 2007: 322)¹²⁸. La entrega del informe por parte de la CONADEP al gobierno de Alfonsín se vio por televisión, además de miles de personas fuera de la casa de gobierno. Después de que Sábato entregara el texto *Nunca Más* al presidente, las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, la gente salió a las calles a manifestarse bajo el lema “después de la verdad, ahora la justicia”. A su vez, volvió la demanda por una Comisión Bicameral al considerar que sería la única manera de hacer justicia. Para algunos miembros del gobierno, el informe fue útil para atender las necesidades de las víctimas y para calmar a los organismos de derechos humanos. “Para algunos observadores, en cambio, el resumen del informe entregado a la prensa caracterizaba las desapariciones como crímenes de lesa humanidad, desestimaba la teoría de los excesos y contradecía el objetivo oficial de inculpar sólo a las cúpulas militares” (Crenzel 2008: 99).

Como respuesta, las Fuerzas Armadas celebraron aniversarios de ataques guerrilleros a unidades militares con el afán de reiterar el hecho de que se trató de una guerra que -de acuerdo con sus propias declaraciones- pretendían defender la democracia. Y, como ya lo habían hecho anteriormente, calificaron de subversivos a los miembros de la CONADEP. Interesante fue el hecho de que “sus aliados católicos hicieron de los púlpitos tribunas de agitación política, criticaron ferozmente al gobierno y nos amenazaron con un nuevo golpe de Estado” (Crenzel, 2008: 99). También fueron robados documentos de oficinas relacionadas con la Comisión. Además de un

¹²⁸ Un estimado de setenta mil personas acompañaron a los miembros de la Comisión la tarde del 20 de septiembre de 1984 a la Casa Rosada bajo el lema “Castigo para los culpables”. [Traducción de la autora] (Robben, 2007: 322).

notable aumento en intimidaciones en contra de los exintegrantes de la CONADEP -pues una vez entregado el informe, la Comisión se disolvió- y también contra organismos de derechos humanos.

La mayoría de los organismos de derechos humanos, le daban valor al Informe como un conjunto de documentos que servirían para poder llevar ante la justicia casos bien fundamentados. Organismos más críticos, como las Madres no consideraban la misma relevancia para el texto "...cuando se entregaron los documentos que se le entregaron a Alfonsín —que fueron como cuatro o cinco changos- con denuncias que ya teníamos todos los organismos, porque son las mismas denuncias que ya teníamos; entonces se la entregan a Alfonsín, ¿qué hace Alfonsín?... se da vuelta... vaya... no sirve el poder para nada"¹²⁹. Organismos de derechos humanos como las Madres consideraban de poco interés el documento, porque incluía las investigaciones que ya estaban hechas; se había escrito en el libro, lo que ellas ya habían dado a conocer. Sin embargo, ahora había una nueva historia por escribirse, en donde ahora que ya se sabía la verdad, correspondía hacer justicia.

Cuando la CONADEP entregó el documento a Alfonsín, de acuerdo con su mandato, la Comisión debía disolverse. Parte de la incitativa fue que una vez que no estuviera este organismo, habría otro en su lugar: la Subsecretaría de Derechos Humanos. La Comisión, al estar disuelta, ya no tenía control sobre la publicación del texto. Si bien, cuando el informe fue recibido, el presidente dio a conocer que se publicaría para que llegara a cada rincón del país, no se especificó cuándo, y no parecía haber quien ejerciera presión para ello. La nueva Subsecretaría de Derechos Humanos trataría de cumplir esa labor, aunque la verdadera presión surgió de la publicación en un semanario de una supuesta lista sacada de la CONADEP con nombres de perpetradores. A falta de la información oficial, se estaban publicando especulaciones que más valía acallar.

De esta forma, se publicó a través de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, en noviembre de 1984, un resumen del informe para que fuera una manera más ligera de que la verdad alcanzara cada rincón del país. La publicación de este resumen alcanzó ventas por 300.000 ejemplares; lo

¹²⁹ Cf. Apéndice #9 (Pp. 339). Entrevista con Evel Petriní de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo.

que evidencia la necesidad de la gente por conocer qué había pasado. “...el Dr. Alfonsín hizo lo que pudo... este país seguía atemorizado y seguía bajo el dominio que impedía que se transformara por ejemplo la policía que es igual ahora que antes, quiero decir, que no fue transformada, no fue castigada por la dictadura y las demás fuerzas sí”¹³⁰. “Acotada a su mandato la CONADEP logró escribir historia, aunque acotada solamente a los desaparecidos”.¹³¹

“Obviamente si lo miramos en este momento, se pueden hacer varias críticas; pero en su momento fue un hito muy importante para divulgar qué fue lo que ocurrió durante la dictadura. Una de las principales críticas es que se enfocó solamente en el tema de las desapariciones forzadas y no dio cuenta de otra serie de delitos que hubo... Entonces, como primer intento de dar cuenta de lo que sucedió en Argentina es muy valioso. Y, muchos de esos testimonios –si no es que todos- forman parte de los juicios que se están llevando a cabo en el país”¹³².

Para bien o para mal, con críticas positivas y negativas; la verdad oficial estaba en un texto al que cualquiera podría tener acceso. Ahora faltaba cumplir las recomendaciones contenidas en el mismo para lograr que las autoridades permitieran que la justicia se abriera camino. No importaba el número de testimonios o de páginas escritas reflejando el dolor y la crueldad de una “guerra” con miras a exterminio, si los responsables estaban libres viviendo sus vidas a costa del sufrimiento de otros. La verdad es importante, pero, ¿era válida la verdad sin justicia?

¹³⁰ Cf. Apéndice #7 (Pp. 332). Entrevista con Adela Antokoletz miembro de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora y hermana de un desaparecido.

¹³¹ Cf. Apéndice #8 (Pp. 336). Entrevista con Andrea Rocha miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

¹³² Cf. Apéndice #8 (Pp. 336). Entrevista con Andrea Rocha miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Argentina Justicia contra el Olvido

A pesar de la evidencia de que es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen, es tan reiterada y universal su práctica que parece estar en el orden natural de las cosas. Hasta quienes la establecen parecen no tener conciencia de que están delinquiendo
(Slepoy, Carlos en Andreozzi, 2011: 107)

“El informe *Nunca Más* inauguró una nueva lectura de las desapariciones, propuso un relato integrado sobre sus fases públicas y clandestinas, instituyó un conocimiento novedoso sobre su magnitud y estableció oficialmente la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en su ejercicio” (Crenzel, 2008: 105). El informe hizo que se tuviera una verdad oficial y además accesible, al estar al alcance de cualquier persona incluso en los kioscos donde se vendían diarios. Diferentes editoriales nacionales y extranjeras, así como la versión en Braille permitieron que la verdad fuera divulgada de manera masiva. Las reacciones ante una verdad que se conocía “a voces” fueron diversas; estuvo quien se sintió alarmado y hasta incrédulo, y quienes se volcaron hacia una exigencia de justicia pues crímenes de esa naturaleza no podían quedar impunes.

El informe planteaba una solución para evitar que estos hechos se repitiesen en la democracia. Sin embargo, una democracia con impunidad no era lo que para 1985 esperaban los -aproximadamente- 190.000 lectores del informe¹³³. Lo que sí podía hacer el presidente Alfonsín, era llevar a juicio a los culpables. El *Nunca Más* estableció como responsable de la violencia a las Fuerzas Armadas como consecuencia de las acciones de la guerrilla. Los civiles -dueños de empresas principalmente y miembros de la oligarquía argentina-, miembros del poder judicial o miembros de la iglesia no se consideraron como parte de los victimarios, aunque también lo hayan sido. El conflicto se redujo a dos actores.

Uno de los actores a los que se hace referencia es a la guerrilla. Hay voces como la de Emilio Cárdenas ex representante argentino en las Naciones Unidas quien al Diario *La Nación* (19 de

¹³³ “En su primera edición, en noviembre de 1984, de 40.000 ejemplares, se agotó en dos días. Entre esa fecha y marzo de 1985, además de editarse en idioma Braille, se vendieron 190.000 ejemplares del informe, incluyendo la edición publicada por el Círculo de Lectores y la primera editada en el exterior conjuntamente por EUDEBA y la española Seix Barral. Esta cifra representa el 38% de los 503.830 ejemplares del *Nunca Más* que, como se dijo, se publicaron hasta noviembre de 2007, incluidas sus traducciones (Crenzel, 2008: 131).

septiembre de 2012) hace un llamado a juzgar a miembros de la guerrilla por también haber perpetrado crímenes contra la humanidad. Sin embargo, al no haber realmente una guerra, y sí abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas quienes masificaron la violencia, la población argentina exigía un castigo para los castrenses y no en la misma medida en contra de la guerrilla. Alfonsín, desde su campaña, había prometido justicia en contra de quienes habían violado derechos humanos elementales; pero no contempló realmente ni la complejidad de aplicar la justicia en las fuerzas castrenses ni las implicaciones que esto podría tener en su propio gobierno.

Que Alfonsín prometiera en su campaña que no habría impunidad era un elemento de primera necesidad; mismo que lo llevó a la presidencia. Bajo este esquema en favor de la justicia, a unos cuantos días de iniciado el gobierno, se creó la CONADEP. El relato se fue haciendo cada vez más extenso y detallado, al mostrar las atrocidades perpetradas por las fuerzas castrenses y, aunque se hace referencia a que hubo un conflicto armado, el texto no deja en claro el rol que jugó la guerrilla en términos de violencia. "...Nada salió como imaginaba. La CONADEP, en cuya secretaría trabajaron los organismos de derechos humanos que habían documentado el accionar criminal de la dictadura mientras ocurría, no sólo identificó a los desaparecidos, sino también a los desaparecedores, lo cual fastidió a Alfonsín" (Verbitsky, Horacio, en Andreozzi, 2011: 35).

El propio Alfonsín desarrolló una lógica que definió la necesidad de juzgar a unos pocos altos mandos, pero exculpar a quienes siguieran órdenes, con excepción de quienes fueran acusados de manera directa por haber cometido algún exceso. Por un lado, la nueva democracia buscaba hacer justicia, pero, por otro, no quería tener mayores problemas con las Fuerzas Armadas previniendo un nuevo golpe militar. Los juicios pondrían a la defensiva a las líneas castrenses, por el temor de ser juzgados, pero la lógica iba en relación a que, si se juzgaba a los altos mandos y se dejaba sin castigo al resto, sería menos probable que se organizaran acciones en contra de su gobierno. "El juicio a las Juntas supuso una decisión excepcional en la historia del tratamiento de la violencia de estado en el continente y, por lo tanto, se constituyó en un hito político y simbólico para quienes participaban de las luchas democráticas contra las dictaduras de la región" (Crenzel, 2008: 137).

La propuesta original de justicia planteaba que las propias Fuerzas Armadas se “autodepuraran” al llevar ante tribunales militares a los acusados de violaciones graves a los derechos humanos. Como era de esperarse, la corte militar rehusó abrir un juicio en contra de los mandos castrenses responsables de tomar las decisiones, por lo que los casos fueron tomados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. La Corte seleccionó 670 casos registrados por la CONADEP que comprobaban que al menos nueve miembros de las Juntas Militares que estuvieron en el poder del país desde 1976 a 1983, eran culpables de múltiples violaciones a las garantías individuales. Los casos daban cuenta de que si bien, había un conflicto armado, los militares pretendían aniquilar a la guerrilla con base en métodos ilegales. La Corte acusó a los altos mandos de las Juntas Militares por 709 cargos incluyendo desaparición forzada, tortura, violación, robo y homicidio (Robben, 2007: 324).

El juicio a las Juntas -conocido también como *Causa 13*- comenzó el 22 de abril de 1985. “Juicio y castigo a todos los culpables del terrorismo de Estado” fue la consigna que llevaba una importante movilización hacia los tribunales que concentraba a diferentes organizaciones de derechos humanos. “Otra bandera reclamaba por los treinta mil desaparecidos y nueve mil pancartas exhibían sus nombres, edades y profesiones...” (Crenzel, 2008: 138). La sociedad civil estaba entusiasmada porque al fin se haría justicia y los culpables del terror y de arrebatar integrantes a miles de familias, pagarían por sus crímenes. Aunque en el fondo se sabía que las cúpulas de la dictadura habrían dado las órdenes de desaparecer, torturar o matar; pero también quienes las habían ejecutado y ellos no recibirían castigo.

Era imposible que la sociedad civil estuviera presente en todas las audiencias, pero la gente quería estarlo. Apenas unas 200 personas entraban a cada audiencia por lo que fueron televisadas, pero sin sonido -por disposición judicial-. Esta extraña característica se debió a que los jueces no querían que los ánimos de la sociedad civil se exacerbaran demás al escuchar de viva voz lo que habían hecho los perpetradores. La Fiscalía, a través de los casos seleccionados, buscaba comprobar la existencia de la aplicación de violencia de manera sistémica con el fin de aniquilar a la *subversión*. De esta manera, se lograría hacer responsables a los altos mandos militares por la

violencia ejercida en todas las jerarquías militares, como parte de un plan bien estructurado. “La visión de la Fiscalía entendía a los acusados como co-responsables de los delitos cometidos por sus pares” (Organización Memoria Abierta, 2017).

“Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 tuvieron lugar las audiencias orales del Juicio a las Juntas Militares [“Causa invocada en virtud del decreto N° 158/83 - N° 13/84” (Argentina, 1985)] en las que prestaron declaración testimonial acusados y testigos, citados por las defensas y por el Ministerio Público. Se dio lectura a la acusación preparada por la Fiscalía en agosto y septiembre y en los meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo las audiencias en las que las defensas de los ex comandantes presentaron sus alegatos” (Organización Memoria Abierta, 2017). La gente estaba al pendiente de lo que pasaba, era un evento inusitado el enjuiciar a un militar en un Tribunal Civil y había quienes pensaban que la justicia sería insuficiente para castigar lo que habían hecho. La vicepresidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Rosa de Roisinblit¹³⁴ declaró: “Esa gente que en este momento son juzgadas dentro de la capital federal y en las más importantes ciudades del país –porque en todas hay juicios contra esos asesinos- ellos tienen derecho a defenderse; tienen derecho a tener un abogado defensor. Ellos son indagados, juzgados y condenados –incluso con un abogado defensor- esto es un privilegio que ellos, no le dieron a nuestros hijos porque nuestros hijos fueron secuestrados y hechos desaparecer sin ningún trámite y no sabemos dónde están”.

Muchos de los testimonios vertidos en el texto de la CONADEP fueron utilizados dentro de los juicios, y algunas personas volvieron a exponer lo que les había sucedido a manos de la dictadura. “...fueron incluidos menos del 8% de los casos de desaparición registrados por la CONADEP” (Crenzel, 2008: 138). Alrededor de 833 testigos -en su mayoría familiares de desaparecidos- fueron llamados para testificar en los juicios. Adicionalmente se incluyeron como parte de los testigos a tres expresidentes (Ítalo Luder, Alejandro Agustín Lanusse y Arturo Frondizi), así como a líderes de la Central Obrera. Mientras que los familiares de desaparecidos y sobrevivientes podían comprobar las atrocidades cometidas o las desapariciones, los expresidentes

¹³⁴ Cf. Apéndice 10 (Pp. 343). Entrevista con Rosa de Roisinblit de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo.

eran capaces de determinar cómo es que se necesitaba de órdenes de las cúpulas para que tales acontecimientos se pudieran haber ejecutado y los líderes sindicales podrían dar fe de la persecución y conflictos de intereses que había entre los gobiernos y los representantes de los trabajadores argentinos.

Al final, los anteriores testigos fueron clave por la manera en que los miembros de las Juntas fueron juzgados. Era imposible relacionar a los acusados con crímenes de lesa humanidad o genocidio, a pesar de que los actos cometidos bien podrían ser considerados como tales. El *Estatuto de Roma* de la Corte Penal Internacional aún no se planteaba en los organismos internacionales y sería ratificado por Argentina casi desde su aparición (1998). De esta manera, para que las sentencias fueran realmente significativas, los militares tendrían que ser acusados de varios cargos. “Los delitos que los llevaron al banquillo y las sentencias fueron homicidio agravado por alevosía, privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas y violencias, tormentos seguidos de muerte y robo” (Fuego Simondet, 2016).

El 9 de diciembre de 1985 salió la sentencia. Incluso, cuando la defensa de los militares se centró en asegurar que se vivía un entorno de guerra, en desacreditar los testimonios de la CONADEP y en precisar que existía una campaña para manchar su reputación; se determinó que, aunque ese hubiese sido el caso, las acciones ordenadas por ellos seguirían siendo ilegales, pues violan los códigos de guerra que se permiten en el derecho internacional. Por esto, los comandantes fueron sentenciados: Videla y Massera a cadena perpetua; Agosti, Lambruschini y Viola sentenciados a cuatro años y medio, ocho años y diecisiete años en prisión respectivamente; mientras que Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos. (Robben, 2007: 325).

Gil Lavedra, quien fue uno de los jueces del icónico juicio a las Juntas Militares, declaró: "Por un lado, constituye la piedra angular de la transición democrática argentina, pues permitió que ésta se edificara sobre las reglas del Estado de Derecho, a través de un proceso en el que se aplicó la ley a los más poderosos por la comisión de crímenes atroces, que usualmente quedaban en la impunidad. Por el otro, es un símbolo de la inacabada lucha por los derechos humanos, que hoy se traducen en el derecho a una vida digna" (Fuego Simondet, 2016). Y es que las sentencias a los

comandantes de las Juntas Militares fueron un gran logro, pues de no haber sido por el trabajo de la CONADEP y la presión de la sociedad civil, es probable que esto nunca hubiera sucedido.

Sin embargo, la exigencia continuaba en torno a castigar a otros perpetradores. Una vez más, las demandas de la sociedad civil rebasaban lo que el presidente Alfonsín buscaba hacer en su mandato, hubo que poner un freno. “Cuando los jueces avanzaron más allá de lo que el gobierno había diagramado y dispusieron procesar también a los jefes de Cuerpo de Ejército y de áreas de represión, Alfonsín intentó frenarlos...” (Verbitsky, Horacio, en Andreozzi, 2011: 36). Sin embargo, hay que aclarar que esto mismo era lo que el propio presidente había promovido, pues en campaña prometía justicia, pero una vez en el poder determinó sobre quiénes recaería el peso de la ley de acuerdo con su nivel de responsabilidad: los que dieron las órdenes, los que cumplieron las órdenes y los que se excedieron (Rovenski, 2016).

“La estrategia de verdad y responsabilidad penal limitada de Alfonsín, también fracasó porque el movimiento de derechos humanos lejos estaba de conformarse con el sólo juzgamiento de las Juntas y avanzó con la promoción de juicios a los cuadros medios y ejecutores directos de los crímenes. Luego de la sentencia de la Causa 13, el siguiente paso era avanzar sobre esas responsabilidades. Con ese objetivo, comenzaron a abrirse procesos penales en todo el país, que involucraban a cientos de imputados y a miles de víctimas. Si bien esos juicios tuvieron diferentes avances, dependiendo en buena parte de la connivencia o no de los jueces que los llevaban adelante con los dictadores, hubo unos 2.000 procesos en los cuales se produjo un gran cúmulo de pruebas” (Oberlín, Ana, en Andreozzi, 2011: 200).

Las Fuerzas Armadas respondieron en un primer momento con base en tres vertientes (Robben, 2007: 325): enfatizando que el país había estado inmerso en una guerra revolucionaria, desacreditando la evidencia sobre las desapariciones y promoviendo la imagen de mártires a los Generales que habían sido sentenciados. Los militares empezaron a presionar fuertemente al gobierno democrático de Alfonsín al punto en que el presidente decidió intervenir personalmente para que el Congreso detuviera los juicios. La primera intervención que hizo el presidente fue la propuesta de la Ley de Punto Final que fue aprobada por el Congreso el 23 de diciembre de 1986 y promulgada al día siguiente. “Varios miembros de la Cámara Federal renunciaron a sus cargos y Sabato, de Nevares, Ruis Guiñazú, Klimovsky, Gattinoni y Colombes, en una solicitada pública,

manifestaron que el *Punto Final* establecía la desigualdad ante la ley, suspendía la justicia y proponía la impunidad de crímenes de lesa humanidad” (Crenzel, 2008: 148).

La Ley de Punto Final establecía: “Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado... que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley” (Rovenski, 2016). De una manera muy simplista, esta explicación implicaría que los jueces no tuvieran tiempo para llamar a declarar a los presuntos culpables de delitos atroces y que entonces no hubiera manera de hacer justicia. Por lo tanto, de una manera igualmente sencilla, la Ley de Punto Final quiere decir que:

“...de acuerdo con este ordenamiento legal, quedarán extinguidas a partir del 22 de febrero de 1987 las acciones penales contra el personal de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, que hubiera cometido delitos durante la denominada lucha antisubversiva (1976-1983) ... Puede afirmarse entonces que el gobierno nacional ha otorgado a los militares y agentes que los secundaron una amnistía, es decir el perdón por sus delitos. Se trata de una amnistía encubierta por cuanto ha sido presentada tratándose de ocultar sus verdaderos fines. Nada la diferencia de la amnistía que las fuerzas armadas se concedieron a sí mismas, cuando estaban en el poder y que fue anulada por el Congreso...” (Abuelas de Plaza de Mayo, 1987:1).

Diversas organizaciones de derechos humanos en Argentina como Abuelas de la Plaza de Mayo, Madres de la Plaza de Mayo -Línea Fundadora-, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otras, se dieron a la tarea de elaborar de manera muy clara un panfleto que, a menos de un mes después de promulgada la ley, se empezaría a distribuir para que la gente supiera de qué trataba la ley, la entendiera y pudiera reflexionar sobre las implicaciones que tendría sobre la justicia que la nueva democracia había prometido, pero que había cumplido a medias. Además de una completa explicación, también se incluyó un listado con los nombres de todos los legisladores que habían votado a favor de esta ley.

La Ley de Punto Final establecía dos preceptos que determinaron su naturaleza:

Artículo 1°	Se extingue la acción penal por los crímenes cometidos por los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, alegando la represión del terrorismo de estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 26 de septiembre de 1986.
-------------	--

Artículo 3°	Se establece que los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias a quienes corresponda prisión preventiva por encontrarse procesados por causa de los mismos delitos, sólo permanecerán arrestados en los cuarteles o establecimientos donde presten servicios, cumpliendo las tareas que determinen sus jefes.
-------------	---

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo, 1987: 2.

La Ley de Punto Final se convertía, pues, en un instrumento para divulgar la impunidad ante la propagada y aclamada justicia. De poco servía que el documento estableciera que había excepciones en su aplicación como: quienes estuvieran prófugos, declarados en rebeldía, los condenados por el Poder Judicial, los procesados o quienes hubieran sido citados a rendir una declaración antes de los 60 días siguientes a la promulgación de la ley. “La extinción de la acción penal significa que a partir del 22 de febrero de 1987 los autores de esos delitos no podrán jamás ser juzgados ni condenados, por terribles que hayan sido los crímenes que cometieron” (Abuelas de Plaza de Mayo, 1987: 2). El presidente Alfonsín, después de sus promesas y algunas acciones que trajeron entusiasmo a la sociedad argentina, terminó teniendo como bandera y como uno de sus más importantes legados una amnistía encubierta de ley, otorgando el perdón y dejando a un lado la justicia para miles de víctimas.

Los militares no se conformaron con esta nueva forma de impunidad. En la Semana Santa de 1987 un sector del Ejército intentó sublevarse para dar un nuevo golpe de Estado. El 16 de abril de 1987 un grupo de militares conocidos como *Carapintadas* liderados por el Teniente Coronel Aldo Rico se amotinaron en Campo de Mayo para resistir la citación ante las autoridades del Mayor Barreiro. Si bien la Ley de Punto Final implicaba que no habría más juicios y se exoneraban los crímenes de las Fuerzas Armadas, también es cierto que en los días anteriores a que entrara en vigor esta ley se hicieron una gran cantidad de citaciones a comparecer ante la justicia y se inició el procesamiento de alrededor de unos 500 militares sobre todo a mandos medios que habían sido acusados por los líderes de las Juntas Militares en el histórico juicio de 1985. Las demandas de esta nueva *emboscada* militar eran al menos tres fundamentales: que se detuvieran las citaciones ante la justicia y los posibles juicios -sobre todo a mandos medios e inferiores-, que se terminara la

campaña en contra de las Fuerzas Armadas por parte de los medios de comunicación y que se cambiara al Jefe del Estado Mayor del Ejército.

“Como respuesta, en todo el país el pueblo salió a las calles y a las plazas para expresar su apoyo al gobierno constitucional y su repudio a la actitud de los militares. Luego de varios intentos para solucionar la crisis fue el mismo Alfonsín quien tuvo que hacerse presente en Campo de Mayo para lograr que Aldo Rico depusiera su actitud” (Televisión Pública Argentina, 2014). Ante una Plaza de Mayo llena de gente, el mismo Alfonsín salió al balcón de la Casa Rosada para pedir calma a la gente: “Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos dar todos gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a la Plaza de Mayo que vuelva a sus casas a besar a sus hijos y a celebrar las Pascuas en paz en la Argentina” (Granovsky, 2012).

La negociación entre el gobierno y los *Carapintadas* salió a la luz apenas días después de que se hiciera el anuncio de *Felices Pascuas* -como se le manejó tiempo después, aunque en realidad era una petición a que la gente que repudiaba otro potencial golpe castrense se retirara de la Plaza. En primera instancia, el mismo día del anuncio, se hizo el cambio del Jefe del Estado Mayor, el General José Dante Caridi sustituiría al General Héctor Ríos Ereñú. La nueva democracia tenía en Ríos Ereñú a un represor, quien en diciembre del 2013 sería sentenciado por privación ilegal de la libertad y homicidio de al menos 32 personas en la provincia de Salta, al mando de las Fuerzas Armadas (Kirschbaum, 2017). El entonces presidente Alfonsín entendió que tal vez las cabezas castrenses que habían quedado impunes serían quienes estarían organizando esas revueltas en su contra; por eso cedió ante la solicitud de los *Carapintadas* quienes entendían que Ríos Ereñú estaba dispuesto a salvarse a sí mismo de las acusaciones y a sus allegados de su mismo rango, pero no necesariamente al resto. El sustituto José Dante Caridi se dedicó a cumplir con las peticiones de los amotinados, se aseguró de deshacerse de las antiguas cabezas militares y empezó a apoyar a los militares de rangos medios y bajos para que también fueran beneficiarios de las amnistías, alegando que la guerra en contra de la subversión había sido necesaria.

Como parte de las demandas concedidas a los militares amotinados, también se pasó una nueva ley. “Tras estos hechos, el gobierno envió un nuevo proyecto de Ley de Obediencia Debida que consideraba todo acto, excepto la sustitución del estado civil, la sustracción de menores y la violación y usurpación de propiedad, como ejecutado bajo estado de coerción y subordinación a las órdenes de la autoridad superior” (Crenzel, 2008: 148). “La Ley de Obediencia Debida fue promulgada el 4 de junio de 1987. El presidente de la nación Raúl Alfonsín dispone la extinción de acciones penales a los militares que “cumpliendo órdenes” cometieron crímenes bajo el gobierno de facto autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en Argentina (1976-1983)” (D’Alesio, 2017). La Obediencia Debida terminaba expandiendo más la impunidad, pues los oficiales de mandos medios y bajos quedarían exculpados de cualquier crimen, justificando las atrocidades bajo la obediencia de órdenes a sus superiores.

La Ley de Obediencia Debida tiene como mandato fundamental en su artículo primero que oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa tanto de las Fuerzas Armadas como fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias no debían ser punibles por violaciones graves a los derechos humanos. Se añadía: “En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad” (Granovsky, 2012). El artículo segundo, por su parte, marca ciertos delitos que podrían funcionar como excepción -violaciones, sustracción y ocultación de menores o apropiación extensiva de inmuebles-; pero es difícil poder ubicar a una persona solamente como responsable de estos hechos empezando porque las víctimas no podían ver a los victimarios y no actuaban en solitario.

Alfonsín había preferido pactar la impunidad, a poner en riesgo su gobierno; aunque en entrevista el mismo líder *Carapintada* aceptó que su amotinamiento no tenía un tinte golpista, solamente querían terminar con los juicios. “El propósito de Alfonsín, desde que asumió, fue recomponer a las Fuerzas Armadas como institución garante del orden burgués. Para esto tenía que encontrar un equilibrio entre el pacto de impunidad que permitiera esta recomposición y otorgar

una respuesta (limitada) a la movilización popular que exigía el juicio y castigo a los criminales genocidas y sus cómplices” (D’Alesio, 2017). El gobierno entero se inclinó hacia la *Obediencia Debida*, parecía que la nueva democracia se había conformado con que la justicia solamente alcanzara a algunos -y pensó que sería igual con la sociedad-.

Las reacciones no se hicieron esperar, organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) siguieron acciones puntuales, como hacer una comparación entre los datos ofrecidos por el texto *Nunca Más* y la información proporcionada por las cabezas de la dictadura sobre la violencia guerrillera, con el único fin de determinar cómo los excesos que habían hecho las Fuerzas Armadas no tenían punto de comparación, como para que los actos criminales se quedaran impunes. Incluso hubo miembros del Ejército -parte del Centro de Militares- por la Democracia quienes hicieron pública información en relación a las cadenas de mando para determinar que no habían sido hechos aislados o excesos, sino que había órdenes estrictas de aniquilar a la subversión lo que es un crimen de lesa humanidad. La Sra. Rosa de Roisinblit, vicepresidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo indicó en entrevista “Nosotros tuvimos durante muchos años dos leyes –Punto Final y Obediencia Debida- que nos trababa todo lo que queríamos iniciar, porque cada acusado alegaba “haber seguido órdenes”¹³⁵. Y en verdad, el periodo de impunidad fue evidente pues no había imputado que no terminara amparándose en las leyes establecidas por Alfonsín.

A pesar de que hay quienes tratan de ver lo positivo en el periodo de gobierno de Alfonsín como Adela Antokoletz de la organización Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien resalta el valor que ha tenido la creación de la CONADEP en la historia del país¹³⁶. La realidad es que la simpatía que pudo haber tenido el presidente que reinauguró la democracia en Argentina, fue enterrada con las leyes de impunidad. Evel Petrini de la organización Madres de la Plaza de Mayo expresa al responder la pregunta si consideraba que Alfonsín pudo haber hecho más...

¹³⁵ Cf. Apéndice 10 (Pp. 343). Entrevista con Rosa de Roisinblit de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo.

¹³⁶ Cf. Apéndice 7 (Pp. 331). Entrevista con Adela Antokoletz de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

“Para nosotros Alfonsín es causal de muchas de las cosas que pasaron después. Una, no tuvo el coraje de hacer lo que hizo Néstor Kirchner, anular a todas las cabezas; por el contrario, negoció. La famosa “la casa está en orden”, fue a negociar con los milicos y tenía todo el pueblo a favor, esperando. Admitir la deuda externa tomada por la dictadura –que era un gobierno de facto- y ponérselo al país y al aceptarlo con un gobierno legal, nos dejó con un encaje de deuda que nos dejó por mucho tiempo mal. Y poner encima leyes de perdón para anular esos pequeños juicios que dijo que hizo, que no sirvieron más que para dar como estandarte que fueron juzgados los milicos; pero después tenían casas especiales, iban a la casa y toda la historieta, ¿entonces dónde está? Según dicen... no pudo porque podían haber venido otra vez los militares. Pero los militares no iban a venir otra vez, estaban completamente de capa caída, ya el pueblo había reaccionado y en último de los casos “viejo, enfréntalo”. Después de Malvinas quedaron totalmente desmantelados, entonces qué miedo tuvo Alfonsín; cuál es el justificativo para darle las leyes de perdón a los milicos... negoció con ellos”¹³⁷.

Además, aunque pudo haberse tratado de una coincidencia o motivos económicos y no políticos como las autoridades de la editorial EUDEBA alegaron; junto con la sanción de la ley de Obediencia Debida dejó de editarse el texto *Nunca Más*. “Para el Estado el *Nunca Más* ya no se asociaba al tratamiento punitivo del pasado y la memoria ahora amenazaba la paz política” (Crenzel, 2008: 150). El texto, ahora más que en cualquier otro momento, se había convertido en uno que dejaba en claro la injusticia de dejar sin castigo a personas que se habían encargado de violentar la sociedad argentina a tales grados. Si bien el texto podría plantear la teoría de los dos demonios y hablar de los actos militares como una respuesta a la violencia de la guerrilla, también dejaba en claro que no había comparación en los actos de cada uno de los bandos.

En 1987, los tres poderes del Estado sintonizaron a favor del principio de Obediencia Debida para cortar la continuidad de la mayoría de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Alfonsín diría años después que con su iniciativa estaba convencido de que dotaría a una democracia fresca de la estabilidad que necesitaba. Sus críticos en los organismos de derechos humanos sostuvieron en 1987 que la Ley de Obediencia Debida no sólo era injusta e inconstitucional, sino también innecesaria e inconveniente para la propia estabilidad democrática (Granovsky, 2012). Las justificaciones que pudiera haber dado el mandatario fueron innecesarias al ver los resultados en las urnas durante la siguiente elección. Las leyes de impunidad, aunado con una insostenible

¹³⁷ Cf. Apéndice 9 (Pp. 338). Entrevista con Evel Petriní de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo.

situación económica obligó a entregar la presidencia cinco meses antes de lo estipulado a Carlos Saúl Menem.

Cerca del 50% de votantes optó por un cambio en el gobierno; el nuevo presidente Menem tomó posesión del gobierno argentino en julio de 1989. La parte fundamental de este gobierno fue la manera en que se pretendía lidiar con los crímenes del pasado. En cuanto el presidente Menem llegó al poder se tuvo una idea clara de cómo habrían de continuar las cuestiones de justicia sobre los crímenes de la dictadura. El presidente se unió a la petición de *Reconciliación Nacional* que hacían los militares; cuestión que lejos de una reconciliación se relacionaba más con el olvido y la impunidad. Menem no pretendía continuar con las iniciativas iniciales de justicia, sino que la estrategia a seguir era otorgar un perdón a las Fuerzas Armadas; un derecho del presidente, inconcebible para la población civil pero congruente con la presidencia que deseaba evitar algún levantamiento armado como el que experimentara Alfonsín. El presidente Menem alegaba que él mismo había sufrido las atrocidades de la dictadura, pero para alcanzar la reconciliación y la paz, la única opción era otorgar el perdón para que el país pudiera ver hacia adelante.

La procuración de la justicia no encajaba en el plan: “Menem concibió una estrategia de pacificación que supuso cerrar definitivamente la revisión del pasado y los juicios, como paso para asegurarse una obediencia firme de los uniformados en vista a los objetivos que realmente importaban: la integración al mundo unipolar que resultara de la caída del Muro de Berlín y el desmembramiento del bloque soviético, y la adecuación del aparato estatal a una nueva etapa de expansión capitalista” (Novaro, Marcos, en Andreozzi, 2011: 62). La estrategia era incluir a las Fuerzas Armadas en el nuevo orden sin importar sus acciones pasadas, justificando que las atrocidades cometidas por el Estado no deslegitimaban a las Fuerzas Armadas ni serían un aliciente para aislarlas de las reformas, pues sólo habían tomado las acciones necesarias para reprimir guerrilleros. Menem siempre estuvo convencido de que la paz llegaría a Argentina en el momento en que la gente olvidara lo que pasó y perdonara.

Carlos Saúl Menem no llevaría ni tres meses en el poder cuando desde la provincia de Rioja anunció la firma de los primeros decretos de indulto, aunque el listado de indultos fue aumentando

conforme pasaron los meses para cubrir a casi cada posible persona que podría haber recibido castigo por diversos crímenes (D'alessio, Rosa, 2015):

- Responsables del golpe militar: No importaba la magnitud del crimen, -robar, matar, torturar, apropiación de niños-.
- Jefes militares procesados: Tanto las leyes de Punto Final como de Obediencia Debida habían beneficiado a cientos de perpetradores, pero algunos que habían logrado ser procesados y que estaban encarcelados.
- Miembros de la Junta Militar o de las Fuerzas Armadas con responsabilidad militar o política por el caso de las Islas Malvinas.
- Líderes de organizaciones armadas.
- Ex miembros de las Juntas de Comandantes quienes habían sentenciado durante los *Juicios a las Juntas* en 1985; Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini.

El presidente Menem establecía que, tanto las guerrillas como la milicia, habían tenido una responsabilidad idéntica sobre la violencia ejercida desde los años setentas y hasta la vuelta a la democracia. Entonces, el presidente "...la cuestión militar la resolvió de un tajo, con los indultos de 1989 a quienes estaban bajo proceso y 1990, a los ya condenados" (Verbitsky, Horacio, en Andreozzi, 2011: 37). Esto provocó un gran alboroto en la sociedad, sin embargo, esto se fue limitando pues el gobierno tuvo aciertos en el orden económico aunado al repliegue de las Fuerzas Armadas lograron que efectivamente, la memoria, el pasado, el *Nunca Más* y los indultos pasaran a un segundo plano; excepto para los organismos de derechos humanos y los familiares de quienes no habían regresado a casa después de la dictadura.

Ante la nueva situación, que ahora habría permitido que muchos victimarios estuvieran de nuevo libres en las calles, las organizaciones de derechos humanos fueron las encargadas de continuar con un camino de lucha por la memoria y por la justicia que parecía cerrada nuevamente. La realidad es que el clamor de justicia -como hasta ahora- se convierte en un factor que tiene "altas

y bajas” en términos de apoyo social. Ya sea por desilusión, o por continuar con la vida cotidiana, aunado con la impunidad que el gobierno de Menem había impuesto, el olvido empezaba a asomarse. Sin embargo, la memoria se ha mantenido gracias a las diferentes asociaciones que buscan desaparecidos o acompañan de diferentes formas a sus familiares; esto permite que cuando hay nuevas noticias o hallazgos se propaguen en diferentes medios y entonces el clamor vuelva. Incluso así, “cada vez que fue consultada [la sociedad] con sondeos de sociología política, un porcentaje que nunca bajó del 60% y que varias veces superó el 80%, se pronunció en contra de la impunidad y a favor de la justicia” (Verbitsky, Horacio, en Andreozzi, 2011: 37). Momentos clave como cuando el capitán Adolfo Scilingo, confesó haber participado en los *vuelos de la muerte* a través del libro *El Vuelo* de Horacio Verbitsky publicado en 1995 (comentado ya en este texto), hicieron que la justicia fuera exigida de nuevo incluso a través de marchas multitudinarias.

Los organismos de derechos humanos se dieron cuenta de que solamente a través de actos significativos y públicos se podría evitar el olvido. Por ello, en 1991, y gracias a un esfuerzo conjunto de estas organizaciones, se logró la publicación de 4.000 ejemplares del *Nunca Más* con el propósito de que volviera a las librerías, pero, sobre todo, para presentarlo en un acto público al que sólo algunos actores políticos fueron invitados en el mismo sitio -el Centro Cultural General San Martín-, donde el texto había sido recibido por el presidente Alfonsín años atrás. La relectura de algunos de los testimonios, la presencia de familiares de víctimas, la presentación de algunos nietos ya recuperados por parte de las Abuelas de la Plaza de Mayo, lograron el cometido. Este hecho incluso tuvo impacto en algunas votaciones por parte de diputados de diversos partidos. Aunque los organismos consiguieron fondos para hacer una publicación de 7.000 ejemplares más del *Nunca Más*, no tendría el mismo impacto. “Pese a estas intenciones, tras el indulto, la presencia de este pasado en la escena pública disminuyó en intensidad” (Crenzel, 2008: 152).

Los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos continuaron. Tanto las Madres como las Abuelas de la Plaza de Mayo continuaron con la búsqueda de hijos, nietos, hermanos; una tarea de búsqueda de la verdad además de asesoría legal y psicológica a las víctimas y sus familiares. Esto no eximía que participaran todas las organizaciones como movimiento de derechos

humanos en actividades propuestas por otros organismos; como el caso de dos de ellos con acciones particulares. La organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) creó una nueva forma de protesta: los *escraches*. “Los *escraches* consistían en un proceso que partía de identificar los lugares donde vivían quienes se habían desempeñado como represores, para luego difundir en la zona quiénes eran, y qué delitos había cometido y, finalmente, señalar sus casas en un acto público” (Oberlin, Ana en Andreozzi, 2011: 203).

Este acto se volvió simbólico y participaron no sólo H.I.J.O.S. sino también las Madres de la Plaza de Mayo. El trabajo que implicaba este hecho era prolongado pues la mayoría de los represores utilizaban pseudónimos y se tenía que hacer una investigación importante previa para no acusar a una persona inocente. En el acto frente a la casa, se realizaba la pinta, pero también daban los nombres de las víctimas de la persona que ahí habitaba y se iba casa por casa del vecindario brindando esta información. Particularmente después de los indultos, muchos perpetradores llevaban vidas “normales” camuflados en vecindarios y con historias de vida ajenas o inventadas como bandera. “Íbamos a las casas de los que sabíamos que habían estado haciendo eso y las marcábamos y le decíamos a la gente “este torturó, este violó, este se llevó a los chicos” en la puerta de la calle condenábamos”¹³⁸. Si no iba a haber justicia entonces al menos tendría que haber una condena social.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fueron pioneros en una medida denominada Juicios por la Verdad. “Los Juicios por la Verdad, fueron una forma *sui generis* de procesos penales que tenían como objetivo averiguar lo ocurrido con las personas desaparecidas o asesinadas durante la dictadura militar, pero no la sanción penal de los responsables” (Oberlin, Ana en Andreozzi, 2011: 203). Las leyes de impunidad no permitían que hubiera juicios que resultaran en penas judiciales, pero no era contra la ley obtener información; si no se podía obtener justicia, sí era reparador -en términos sociales- conocer la verdad sobre las víctimas. “Se pensó en que, si no se podía llegar a la condena penal de los perpetradores, al menos deberíamos saber qué

¹³⁸ Cf. Apéndice 9 (Pp. 338). Entrevista con Evel Petrini de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo.

ocurrió; por lo que se iniciaron a hacer esos juicios en donde los militares iban a declarar, así como las víctimas y se dieron una cantidad de testimonios valiosos”¹³⁹.

El procedimiento de acción era más o menos como se manifiesta a continuación: “Se abría un caso específico –como el de Alejandra Lapacó- una víctima de desaparición. La mamá de Alejandra Lapacó –Carmen- es fundadora del CELS, ambas estuvieron secuestradas y Alejandra desapareció, aunque Carmen fue liberada. Este caso se llevó a juicio de la verdad, donde se dieron testimonios militares y civiles -solicitados o no por el juez- pero, ningún testimonio tendría consecuencia penal; era información que se estaba recabando”¹⁴⁰. En realidad, no había manera de obligar ni a civiles ni a militares a que dieran su testimonio, pero algunos participaron de manera voluntaria e incluso algunos familiares de victimarios con el único fin de proporcionar información, pero también de “quitarse” la culpa ya que muchos como el capitán Scilingo ya habían hablado y sentían culpa por sus actos.

Los juicios por la verdad levantaron polémica porque, por un lado, mantenían viva la memoria al hacer pública información que podría no haberse conocido y mantener este tema en la agenda pública. Por otro lado, estaba quienes cuestionaban la validez de estos juicios al no tener ningún valor jurídico como las Abuelas de la Plaza de Mayo. Pero, había personas como Evel Petrini de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, más férreas en cuanto a su rechazo como lo indicó en entrevista:

“estaban los famosos juicios de la verdad que llamaban a los tipos decían que “sí, que habían hecho estas cosas” pero como tenían la impunidad en las leyes de perdón, se iban a la casa. Entonces qué clase de juicio es ese. La verdad la tenemos todos, sabemos lo que nos pasó. Nosotras nunca participamos, pusimos a los abogados para que estuvieran presentes, pero habiendo leyes de perdón como habían hecho en la época de Alfonsín y después el indulto de Menem... para qué quieres que te venga un tipo a decirte “si mira yo a tu hijo lo maté, lo torturé, lo violé, está allá y está allá” y me voy a casa... es para reventarlo... para qué quieres esos juicios...”¹⁴¹.

Tal vez en ese momento, y ante las leyes de impunidad que habían sido establecidas por Alfonsín y Menem o el hecho de haber detenido juicios o liberado personas sentenciadas por estos

¹³⁹ Cf. Apéndice 8 (Pp. 335). Entrevista con Andrea Rocha del Centro de Estudios Legales y Sociales.

¹⁴⁰ Cf. Apéndice 8 (Pp. 335). Entrevista con Andrea Rocha del Centro de Estudios Legales y Sociales.

¹⁴¹ Cf. Apéndice 9 (Pp. 338). Entrevista con Evel Petrini de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo.

crímenes; pudo haber contribuido al cuestionamiento de este mecanismo. Sin embargo, hubo personas como Adela Antokoletz de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que tuvieron otra perspectiva:

“empezaron los juicios por la verdad; entonces hubo un montón de compañeros que atacaban los juicios por la verdad porque decían “no sirve para nada” y otros que decíamos “sí sirven”. Tal cual como decíamos nosotros se cumplió, yo lo decía por sentido común, no tengo mucho conocimiento político; pero el sentido común me decía que, cambiadas las circunstancias del país, ese material iba a servir. Tal cual... hoy los fiscales toman el material de todo lo que se habló en los juicios por la verdad –y mucho más material- y llevan adelante los juicios con consecuencias penales –a diferencia de esos juicios por la verdad- que toda la verdad se decía y después cada uno se iba muy tranquilo a su casa; pero ya era algo... ya salía en el diario que fulanito que vivía en tal lugar y había matado a 300 personas...”¹⁴².

Los juicios por la verdad, no tuvieron un efecto legal en el momento, pero sí posteriormente. En ese momento, contribuyeron también a que, si no iba a haber una condena judicial por los crímenes, sí podría haber una condena social. Pasarían todavía algunos años para que los testimonios fueran efectivos, pero también es cierto que éstos hicieron más sencillo el trabajo de los *escrachers*. “La existencia de estos procesos permitió la recolección de gran cantidad de pruebas que se transformaron en sustento de los juicios actuales y que permitieron conocer las identidades de muchísimas de las víctimas y de varios victimarios” (Oberlin, Ana en Andreozzi, 2011: 205).

Una de las acciones que ya habían emprendido algunos familiares de desaparecidos antes de las leyes de impunidad fue buscar la colaboración de organizaciones de derechos humanos de otros países y buscar acciones penales en otros países. En un inicio se hizo apelando a la doble nacionalidad de algunas víctimas. Ante la suspensión de los juicios y la salida de la cárcel de victimarios muchas personas voltearon hacia la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, las denuncias que se realizaron en muchos países fueron clave. “...se desarrollaron juicios en otros países que sentaron valiosos precedentes e impactaron sobre el proceso que se estaba desarrollando en nuestro país. Todo ello tuvo como consecuencia la llegada de pedidos de extradición de represores, lo que generó cierta presión a nivel local, ya que había que

¹⁴² Cf. Apéndice 7 (Pp. 331). Entrevista con Adela Antokoletz de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

dar respuestas a estos pedidos, y profundizó el descontento social con la ausencia de enjuiciamiento de estos criminales” (Oberlin, Ana en Andreozzi, 2011: 205).

Algunos de los países en donde se dieron juicios o abrieron casos para su seguimiento fueron (Yanzon, Rodolfo en Andreozzi, 2011: 141-142):

País	Casos
España	<ul style="list-style-type: none"> • En 1996 se presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional de Madrid en donde algunos sobrevivientes y familiares dieron su testimonio sensibilizando a la comunidad española, pero sobre todo dando relevancia al alegato de la jurisdicción universal en virtud de los crímenes. • Fue juzgado Antonio Scilingo, de la Armada Argentina, quien confesó haber participado en los “vuelos de la muerte” y cumple su condena en este país.
Francia	<ul style="list-style-type: none"> • Se condenó en ausencia a Alfredo Astiz tras haber sido rechazada su extradición en 2009 por estar siendo juzgado en la Argentina. Se le acusó en Francia por haberse hecho pasar por hermano de un desaparecido para después colaborar con la desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.
Alemania	<ul style="list-style-type: none"> • En ese país se hicieron denuncias de familiares usando también el principio de nacionalidad de la víctima particularmente de dos víctimas que fueron detenidas, torturadas y desaparecidas en el Centro de Detención el Vesubio. Las pruebas movieron el caso al Tribunal de Núremberg por lo que se pidió la extradición de Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. La extradición fue negada pero la Embajada alemana contribuyó con la recepción de testimonios.
Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Se recibieron numerosos testimonios por el principio de nacionalidad pasiva. Se llevó a cabo una investigación por más de 10 años por crímenes cometidos en contra de italianos en la denominada “Operación Cóndor” que era un acuerdo entre las dictaduras sudamericanas que trataba de terminar con la subversión en la zona. La Fiscalía tiene listados de implicados que podrían ser acusados y sentenciados formalmente.

Como se mencionó, ante el descontento provocado por los indultos, víctimas directas e indirectas de la violencia acudieron a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas instancias, “...declararon las leyes de impunidad y los indultos contrarios al derecho americano y universal, y recomendaron reparar a las víctimas” (Crenzel, 2008: 150). Ya en diciembre de 1983 se había firmado un decreto en donde se establecía que el Código Civil obligaba a reparar económicamente a las víctimas de la dictadura; con la acotación de que se estaba midiendo “en dinero” no la vida o la libertad, sino la magnitud de las consecuencias hacia las víctimas o sus familiares, pero también haciendo énfasis de que si no hubiese dicha reparación el país podría hacerse acreedor a sanciones internacionales. Sin embargo, no fue sino hasta 1991 que Menem estaba en el poder, que se determinó que las reparaciones tendrían que ser otorgadas a

sobrevivientes de la dictadura. Para 1994, el espectro de las reparaciones pudo abrirse para alcanzar también a los familiares de víctimas de desaparición forzada. “Tanto para el caso de personas desaparecidas, como asesinadas, se otorgó un beneficio equivalente a una remuneración mensual de un empleado público nivel A...” (Panero, 2017).

De acuerdo con Andrea Rocha, del CELS, se crearon mecanismos para realmente considerar qué persona era merecedora de una reparación económica. Hay mucho material que se ha ido recabando perteneciente a los militares sobre las personas que tuvieron en cautiverio; muchas de ellas estuvieron en manos del Poder Ejecutivo Nacional quien les dictaba sentencia y se quedaba el registro de ello. Si bien no se puede obligar a los militares a compartir la información, se ha ido encontrando a pesar de que se ha difundido que los registros fueron quemados o desaparecidos. En 2013 “...se encontraron todas las actas de la Junta Militar, en el sótano de un edificio de militares; así que se siguen encontrando cosas. Por ejemplo, en la ESMA hubo entre 3.000 y 7.000 personas detenidas ahí, existe la hipótesis de que se microfilmaba a cada persona que entraba, se tomaban fotografías y se hacía una ficha y todo esto está microfilmado. Hay testimonios que hablan de listas, de fotografías a todo el que entraba; entonces se sigue buscando ese material documental”¹⁴³.

Las reparaciones han creado polémica pues, aunque se ha tratado de hacer hincapié en que no se pone precio a la vida de una persona, al final, se trata de una reparación económica. “...salió una reparación económica y muchas madres cobraron; y a nosotras nos pareció espantoso que paguen por la vida, y menos por la vida de los hijos, cualquier precio... no tiene precio... la vida no tiene precio... la vida vale vida... y más la vida de un hijo, y más de un revolucionario... así que jamás vamos a aceptar que te paguen por la vida”¹⁴⁴. Este es el testimonio de Evel Petrini declarando que precisamente las reparaciones y la discordia entre que si es un pago por la vida de un ser amado o no provocó que las Madres de la Plaza de Mayo se dividieran en dos asociaciones diferentes.

¹⁴³ Cf. Apéndice 8 (Pp. 335). Entrevista con Andrea Rocha del Centro de Estudios Legales y Sociales.

¹⁴⁴ Cf. Apéndice 9 (Pp. 338). Entrevista con Evel Petrini de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo.

El gobierno de Saúl Menem hizo un cambio constitucional en 1994 que le permitió reelegirse. Tras ganar las nuevas elecciones, el presidente se quedaría en el mandato por otro periodo (1995-1999). A diferencia del primer periodo, donde las mejoras en la economía pudieron haber contribuido a que la memoria no fuera una prioridad; en esta ocasión, el nuevo periodo estaría más relacionado con una nueva crisis económica, altas tasas de desocupación y casos de corrupción. De esta manera, la estrategia de gobierno de Menem se relajó en términos de memoria, tal vez, utilizando un poco el tema a su favor; sobre todo después de la declaración del capitán Scilingo sobre los *vuelos de la muerte*. En relación al texto *Nunca Más*, "...atrajo nuevamente el interés público, proveniente, en su mayoría, de lectores jóvenes deseosos de conocer un pasado ignorado. EUDEBA [la editorial] lo reimprimió en marzo, mayo y agosto de 1995 con una tirada total de 16.000 ejemplares y superó así, en sólo cinco meses, los 11.000 que había publicado entre 1991 y 1994 [gracias a los organismos de derechos humanos]" (Crenzel, 2008: 154).

Asimismo, el gobierno menemista presentó en la Casa Rosada la reimpresión del *Nunca Más*. Aunado a la presentación del texto, adicionalmente, se hizo pública una lista de 545 desaparecidos, supuestamente, resultado de nuevas denuncias. Sin embargo, se pudo comprobar más tarde, que algunos de los presentados en la lista como desaparecidos no eran denuncias nuevas, pero, además, que la lista incluía a personas que estaban vivas. Estas imprecisiones motivaron acciones concretas, como que el diario *Página 12* ofreció el texto a sus lectores a través de 30 fascículos.

Además, en el mismo año de 1995 se ordenó que el texto fuera parte del currículo de la Escuela Media de la ciudad de Buenos Aires. Esto se transformó en un gran logro, pero lo fue aún más cuando el Consejo Federal de Cultura y Educación estableció -en el mismo año- como obligatoria la enseñanza de derechos humanos en el currículo de la educación básica del país. Y, para 1997 los derechos humanos serían parte de todos los niveles educativos, así como de la formación de los docentes y otros miembros de los sistemas educativos argentinos. Dentro de estos mismos logros, se incorporó el texto *Nunca Más*, como parte de los textos de consulta y de referencia para las escuelas de todos los niveles. "Así, se convirtió en el primer texto que, de manera integral

y oficial, fue promovido para transmitir estos temas en las aulas” (Crenzel, 2008: 166). Si bien imperaba la impunidad, tanto la sociedad civil, que había presionado de diversas formas, como el contexto, obligaron al menemismo a ceder.

El presidente Menem, a pesar de la relativa apertura que tuvo en su segundo periodo en términos de memoria, acabó con el modelo del Partido Justicialista. Por ello, en las elecciones de 1999, su partido descendería hasta la tercera posición en aceptación, otorgando el poder a Fernando de la Rúa, del Partido Unión Cívica Radical -partido de centro- izquierda-. Dentro del gabinete de De la Rúa estaba Domingo Cavallo, quien estaba dentro del Ministerio de Economía y Producción y a partir de marzo de 2001 juez federal; fue uno de los principales impulsores para terminar con las leyes de nulidad e impunidad. Cavallo declaraba “esas graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser amnistiadas ni su persecución pena cesada por el mero paso del tiempo” (Verbitsky, Horacio en Andreozzi, 40). Sin embargo, el presidente no tenía la misma idea y trató de obstaculizar esta iniciativa al tratar de involucrar a las Fuerzas Armadas en la vida diaria del país a través de actividades de seguridad nacional, aunque esto estuviera prohibido legalmente

El 25 de mayo de 2003 tomó la presidencia Néstor Carlos Kirchner, del Partido Justicialista, habiendo obtenido sólo el 22 % de los votos reflejo de que la nueva democracia empezaba a desgastarse. Sin embargo, mantuvo a Duhalde dentro del Ministerio de Economía, pues el país iba progresando y así fue como la balanza empezó a inclinarse hacia Kirchner. Sin embargo, la clave para el gobierno kirchnerista fueron sus políticas en torno a los derechos humanos. “Kirchner llegó en el 2003 con toda la fuerza y supo ver que es un pueblo que –mal que bien, con muchísimos defectos- se interesa por los derechos humanos. Él fundó su prestigio por el apoyo a los derechos humanos”¹⁴⁵. “... el surgimiento del Gobierno de Néstor Kirchner, tuvo la visión de encarar como propio un viejo anhelo de justicia: el de los familiares y de los organismos de derechos humanos, acompañados por importantes sectores de la vida política argentina en la lucha contra de la impunidad” (Yanzon, Rodolfo en Andreozzi, 2011: 145-146).

¹⁴⁵ Cf. Apéndice 7 (Pp. 331). Entrevista con Adela Antokoletz de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

Desde su llegada al poder se tomaron decisiones simbólicas (Verbitsky, Horacio en Andreozzi, 41):

Desmantelar la cúpula del renacido Partido Militar.
Ratificar la convención internacional para determinar la imprescriptibilidad de la desaparición forzada de personas.
En marzo de 2004 -a menos de un año de estar en el poder- Kirchner adoptó dos decisiones clave: el desalojo de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) que había funcionado como Centro Clandestino de Detención y en ese mismo lugar se instalaría un Museo de la Memoria. Y, el retiro de los cuadros de los exdictadores Videla y Bignone de los muros del Colegio Militar.
En mayo de 2005, se confirmó el fallo del antiguo juez federal Domingo Cavallo donde las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no podían interponerse al enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad. Algunos meses más adelante la nulidad de las leyes de impunidad también se extendió a los indultos de Menem.

“El nuevo aniversario del golpe militar (marzo 24 de 2004) lo encuentra [al presidente Kirchner] dando un discurso en la ESMA y transformando el lugar en Museo de la Memoria, mientras retira los cuadros de los generales de la dictadura. En diciembre de 2007 se produce la primera sentencia desde la reapertura de los juicios; en 2008 el país suscribe el convenio sobre desaparición forzada de personas y en solo tres años, son casi doscientas las condenas” (Napoli, Bruno en Andreozzi, 73). Kirchner se distinguió por haber “devuelto” la justicia para las víctimas de la dictadura. Y aunque hay quienes reconocen estos actos con sigilo como Adela Antokoletz quien mencionó en entrevista “Él pescó cuál era el eje importante para seguir, y lo siguió a muerte. Valoramos eso... todo se hace con cálculo en un gobierno, no lo niego... todo se hace con cálculo, la menor medida se hace con cálculo; como es lógico, pero valoro ese cálculo en todo caso. El darse cuenta de que tenía que volver a fundar el valor de la política –que estaba decadente desde el gobierno de Menem- lo fundó sobre el discurso y la práctica de los derechos humanos”¹⁴⁶. También hay quienes lo muestran como la persona que logró el cambio que los organismos de derechos humanos buscaban “...hasta que vino Néstor Kirchner y lo primero que hizo fue desbaratar las cabezas de los milicos que tuvieron en la dictadura y anular las leyes del perdón...”¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Cf. Apéndice 7 (Pp. 331). Entrevista con Adela Antokoletz de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

¹⁴⁷ Cf. Apéndice 9 (Pp. 338). Entrevista con Evel Petrini de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo.

Los procesos legales encontraron un camino, que, a pesar de nuevas elecciones, no sufrieron cambios, pues si bien el presidente Kirchner no buscó una reelección, dejó el camino establecido para que lo sucediera en el poder su esposa Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner, quien estaría al frente del país por dos periodos (2007-2015). Las políticas de la memoria fueron apoyadas, incluso hubo una nueva partida presupuestaria para reparaciones, pues en 2014 se determinó que también debían ser indemnizados quienes hubieran estado en cárceles durante la dictadura sin necesidad de haber sido desaparecidos.

El Partido Propuesta Republicana fue electo para la presidencia del país en 2015 y la apertura hacia las víctimas y el escuchar a las organizaciones civiles ha ido cambiando. Como lo manifestó Andrea Rocha del CELS "...y después –con el kirchnerismo- hubo la voluntad política de impulsar el tema de los juicios. Obviamente la voluntad política es muy importante y también la participación de la sociedad civil"¹⁴⁸. El presidente en turno, Mauricio Macri, no ha mostrado la voluntad política para continuar con las políticas en favor de la memoria; de hecho, hasta podría considerarse como que ha habido un retroceso en este campo.

Desde la entrada de Macri al gobierno ha habido constantes campañas de desprestigio en contra de organismos de derechos humanos como cuando el gobierno trató de enjuiciar a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo -Eve de Bonafini- en 2017. O, desacreditar a la CONADEP cuando el presidente determina que la cifra de desaparecidos por la dictadura fue de 6.348 personas y no alrededor de 30.000 como se ha denunciado no sólo en Argentina sino en el extranjero gracias a investigaciones serias. O bien, tratar de convertir en un feriado movable el Día de la Memoria por el que tanto se luchó como símbolo del reconocimiento de la violencia por parte del Estado.

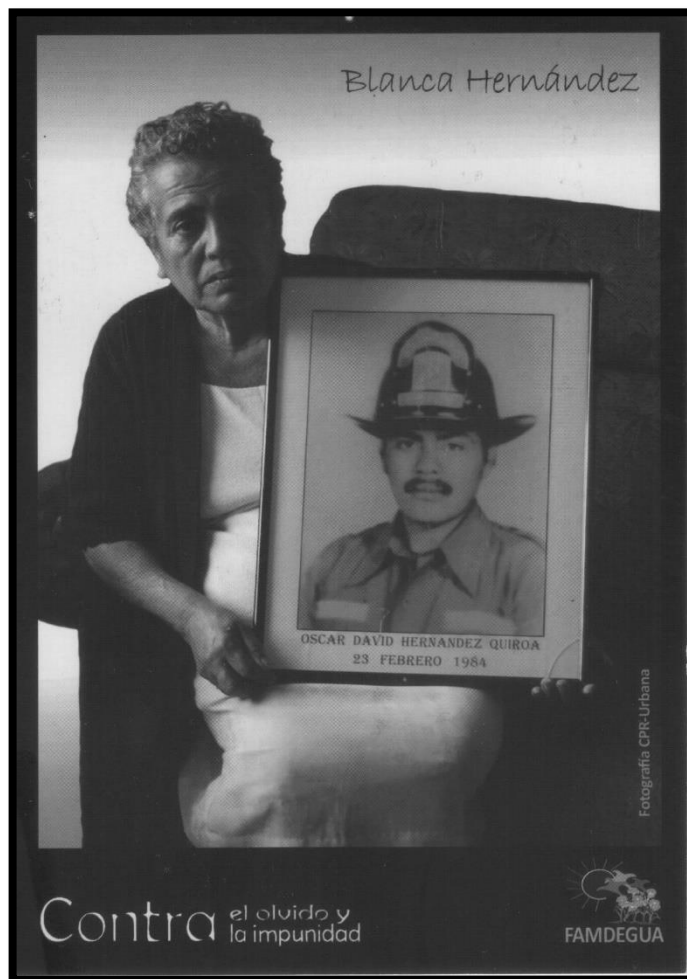
Lamentable son los intentos de liberar a represores ya sentenciados como la propuesta 2x1, "La Corte Suprema de Argentina decidió el martes, en un fallo dividido, que los militares condenados por delitos de lesa humanidad pueden computar como dobles los días que han pasado en prisión antes de su condena definitiva" (Rivas Molina, 2017). La propuesta fue rechazada por el Congreso

¹⁴⁸ Cf. Apéndice 8 (Pp. 335). Entrevista con Andrea Rocha del Centro de Estudios Legales y Sociales.

y Macri se desmarcó de la iniciativa, pero nadie le creyó; sobre todo, cuando a mediados de 2016 otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a 50 perpetradores de la dictadura, algunos del rango de Eduarda Cabanillas -condenado a cadena perpetua- quien dirigía el Centro de Detención *Automotores Orletti* y que dirigió el *Plan Cóndor*.

A pesar de que muchos juicios se han llevado de manera mucho más lenta. También hay que resaltar que hay grandes logros como la *mega causa* de la ESMA en donde aglutinando 789 casos se dio sentencia a 54 militares que operaban ese Centro de Detención donde desaparecieron alrededor de 5.000 personas. Si bien el juicio inició en 2013, las sentencias se hicieron públicas en noviembre de 2017. Este es solamente un ejemplo de los logros que ha tenido la sociedad civil argentina, donde sin importar la voluntad política de quien esté al frente del poder, sus acciones saben esperar y saben que siempre vendrá el tiempo en donde el cauce de la memoria se retome, pues las acciones contra el olvido no saben callar. Esto es lo menos que puede esperarse por los desaparecidos y por quienes han dado su vida para hacerles justicia.

BALANCE



Postal de una de las fundadoras de la fundación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) quien sostiene el cuadro de su hijo desaparecido. La postal fue entregada a la autora durante su entrevista con la Sra. Blanca Hernández retratada en la postal.

COMISIONES DE LA VERDAD: HERRAMIENTAS NECESARIAS AUNQUE INCOMPLETAS PARA
ALCANZAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
CASOS LATINOAMERICANOS DE GUATEMALA Y ARGENTINA

Balance

“...Estamos celebrando la memoria viva de todas las mujeres y hombres generosos que en este país enviaron su fuego hasta el final; ellas y ellos que nos siguen ayudando a no perder el rumbo, a no aceptar lo inaceptable, a no resignarnos nunca, y a nunca bajarnos del caballito lindo de la dignidad.”

(Galeano, Eduardo en Pérez-Sales y Navarro, 2007: 17)

El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 se interpretó como la amenaza comunista para América. Si bien el enemigo de la Guerra Fría era el comunismo representado por la Unión Soviética, Cuba se convirtió en el referente del enemigo para América Latina. El país norteamericano se aferró en evitar que ideales con tintes comunistas estuvieran en el continente. La idea de lucha en contra del comunismo y del enemigo interno, permeó de los Estados Unidos hacia casi todos los países latinoamericanos a través de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta doctrina mantiene la idea de “que a partir de la seguridad del Estado se garantiza la de la sociedad. Pero una de sus principales innovaciones fue considerar que para lograr este objetivo era menester del control militar del Estado” (Leal, 2003: 75).

Parte de esta Doctrina de Seguridad Nacional fue el Plan Cóndor que se encargaría de la lucha contra la subversión de todo el cono sur cuyo cuartel precisamente estuvo en la capital argentina. Armamento, adiestramiento militar, inyección de capital, promesas de poder son solamente algunos de los elementos que Estados Unidos otorgó a Latinoamérica. Esto quiere decir que el hecho de que América Latina haya tenido gobiernos militares durante la década de los setentas y ochentas no fue una casualidad sino más bien una consecuencia de la influencia ejercida por los Estados Unidos. Lo que tal vez ni siquiera el país norteamericano se imaginó fue el nivel de violencia que se alcanzaría; que esta figura subversiva, más imaginaria que real, cobraría la vida de miles de personas que ni siquiera entendían cómo es que ellos mismos podrían ser enemigos internos y debían ser combatidos.

Es cierto que hubo movimientos de izquierda que se radicalizaron; tal vez influenciados por la moda de la época pues para ese momento se pensaba que para poder hacer cambios radicales

se tenía que tomar el poder a cualquier costo; aunque fuera a través de la lucha armada. Movimientos sociales de casi cada país latinoamericano se radicalizaron convirtiéndose en focos guerrilleros que también ejercieron violencia; aunque no de manera sistemática y generalizada en contra de la población, sin cerrar los ojos a que también generaron víctimas civiles.

Los grupos guerrilleros en ambos casos de estudio tenían un objetivo: mejorar las condiciones de vida de las clases menos privilegiadas, aunque con sus importantes diferencias. Mientras que los grupos guatemaltecos buscaban tener lo suficiente para al menos cubrir sus necesidades básicas -que no lo estaban cubiertas para la mayoría del país- los grupos argentinos querían mejorar su calidad de vida, pero a través de prestaciones laborales, justicia e igualdad. En Guatemala se luchaba por no morir de hambre y en Argentina por una sociedad más igualitaria. Esto no significa que haya una lucha más legítima que la otra, pero sí refleja una diferencia importante en las condiciones sociales de ambos países. En cualquiera de los casos, “los Estados latinoamericanos debían enfrentar al enemigo interno, materializado en supuestos agentes locales del comunismo. Además de las guerrillas, el enemigo interno podía ser cualquier persona, grupo o institución nacional que tuviera ideas opuestas a las de los gobiernos militares” (Leal, 2003: 75).

Tanto para Guatemala como para Argentina los gobiernos militares no les eran ajenos. La lucha de poder se trasladaba a los cuarteles militares gracias al apoyo de los Estados Unidos -cuando se pretendía tener un gobierno demasiado liberal- y las más altas esferas sociales -cuando se trataba de cambios que pudieran afectar a intereses políticos y económicos propios. Los cuarteles estaban entonces a favor de la oligarquía y gobiernos extranjeros que apoyaran el *status quo*. Es por esto que las dictaduras militares no fueron ajenas a esta parte del hemisferio; los grupos guerrilleros tenían como adherentes a gente de izquierda buscando una sociedad más justa mientras que las clases altas buscaban que la sociedad permaneciera igual beneficiando sus propios intereses. Los ricos y poderosos terminaron apoyando a los gobiernos militares quienes, teniendo la bandera de salvar al país del enemigo interno, del *subversivo*, encontraron la excusa perfecta para legitimar limpiezas étnicas y políticas que muy lejos estaban del beneficio del país.

Este personaje de la *subversión* marcó la pauta para que esos mismos gobiernos militares cobijados por altas cúpulas crearan toda una historia de guerra sobre lo que realmente estaba pasando. Es cierto que hubo grupos guerrilleros como los guatemaltecos que crecieron de manera importante o como los argentinos que presionaban mucho a los gobiernos, pero en ningún caso tenían la capacidad militar para encasillarse en una verdadera guerra cara a cara con fuerzas armadas. Sin embargo, las Juntas Militares fueron vivaces para utilizar hechos violentos concretos como bombas o secuestros para avivar esta creencia y justificar sus acciones. Una vez que se desplegaron planes militares en contra de los grupos guerrilleros, en ambos casos, no se puede hablar de más de un año en que los *subversivos* habían perdido toda posibilidad de ganar el conflicto. Entonces, ¿cómo justificar los miles de víctimas? O ¿es que había más o menos un cuarto de millón en Guatemala y 30.000 en Argentina de guerrilleros?

Tanto Guatemala como Argentina sufrieron niveles de violencia casi inexplicables para el ser humano. Ambos casos pueden considerarse como un genocidio no sólo por el número de víctimas sino por lo sistemático de la violencia. En ambos casos hay quienes siguen pensando que se hizo lo necesario para detener un conflicto armado, y hay quienes tratan de desmentir, incluso con cálculos irracionales el número de víctimas, las verdades que ya se han hecho oficiales. Para ambos casos, las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares actuaron para aniquilar al *subversivo*; y este tipo de combate paramilitar en contra de grupos guerrilleros lo implantó Estados Unidos a través del adiestramiento proporcionado en la Escuela de Panamá.

Por un lado, en el caso de Guatemala, la *subversión* se tradujo en miles de víctimas indígenas mayas en su mayoría. La estrategia de *tierra arrasada* permitió que las masacres se concentraran más en las provincias donde se escondían los guerrilleros de acuerdo con el *foquismo* que era su modo de operar. Este podría considerarse un pretexto también para una limpieza étnica porque no hay manera de justificar 200.000 víctimas en su mayoría indígenas. Personas que padecieron los más terribles horrores y que perdieron todo sin siquiera poder entender el contexto o por qué tenían que huir, por qué se les perseguía. Algunas personas en las ciudades, tal vez más

politizada y con mejores niveles educativos y económicos, lograron exiliarse o a sus familias; aunque, otros más, también fueron víctimas de desaparición forzada.

El genocidio argentino no se reflejó tanto en grupos originarios sino más bien en las ciudades. La subversión se relacionó con estar en contra del gobierno y tener ideas consideradas de izquierda representado en docentes, estudiantes, intelectuales, personas del ámbito cultural y político. Pero también en líderes sindicales y trabajadores sindicalizados con poder de convocatoria y activos políticamente. La violencia en Argentina se relacionó directamente con ideales políticos. ¿Todas las víctimas eran activas políticamente hablando? La realidad es que no, pero la idea de subversión se ligó hasta con las amistades de aquellos que ya eran en parte de las listas negras que -casualmente- no estaban encabezadas por los grupos guerrilleros; sino por personas con ideales distintos al gobierno militar.

Al final de cuentas, ambos regímenes cruentos terminaron erosionando el discurso de la guerra, además de que la sociedad civil empezó a reaccionar a pesar del miedo, al ser tantos los afectados. Los conflictos armados eran ya -prácticamente- inexistentes. Las dictaduras se desgastaron y para ambos casos continuar con gobiernos militares -presionados internacionalmente gracias a un discurso cada vez más pujante sobre derechos humanos- era insostenible. Las transiciones fueron inevitables.

Las transiciones de dictaduras militares a democracias son complejas, sobre todo, como en el caso de Guatemala y Argentina, donde los gobiernos castrenses han sido comunes a lo largo de la historia. Resulta aún más complicado hablar de democracia cuando las instituciones se han encargado de violentar la vida de los ciudadanos, y el nuevo gobierno pide confianza para poder mejorar la situación del país. Las Juntas Militares entregan el poder a los ciudadanos nuevamente, pero, no dejan su futuro en manos de los ciudadanos. Entonces para sociedades violentadas, pensar en un nuevo gobierno y confiar; cuando los perpetradores siguen en la vida política del país, hace que permanezca un clima de tensión, miedo, desconfianza; pero, sobre todo, la exigencia de conocer la verdad y que se haga justicia.

Es muy común que los gobiernos de transición enarboleden la bandera de los derechos humanos y la misma exigencia de justicia de los ciudadanos; pero una vez en el poder, la situación suele ser diferente. En este aspecto, para Guatemala, tal vez la situación fue menos compleja porque Los Acuerdos de Paz firmados por ambas partes del conflicto ante instancias internacionales obligaron a que aspectos como investigar la verdad de los hechos se tuvieran que cumplir; pese a que no hubiera una depuración completa de las Fuerzas Armadas o del gobierno. Pero, el caso de Argentina, en donde hubo elecciones, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la exigencia de justicia quedó enteramente bajo la discreción del nuevo presidente y su voluntad política.

Hablar de gobiernos de transición, suele reducirse a considerar un cambio en la forma de gobierno, de un poder totalitario a uno democrático -por ejemplo-. Se pueden presentar -o no- mejoras en los representantes del país, se pueden tener iniciativas; pero mientras una sociedad que ha sufrido una violencia sistematizada no encuentre justicia, puede cuestionarse el hecho de que la transición de un país se haya completado. Sociedades profundamente violentadas como la guatemalteca o la argentina que no enfrentan, a través de la justicia, los hechos del pasado no solamente quedan divididas sino propensas a que esa violencia pueda emerger en cualquier momento. Sobre todo, cuando las víctimas conocen a los perpetradores e incluso conviven en espacios comunes como en las comunidades mayas de Guatemala.

Si de acuerdo con el Centro Internacional de Justicia Transicional (2014), “la justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos”. El paso a la democracia de una dictadura puede considerarse el cambio político. Pero, cuando los mismos perpetradores han dejado las leyes a modo para que no puedan ser juzgados por sus actos y los nuevos gobiernos los siguen viendo como amenazas -pues siguen teniendo puestos de poder-; entonces, la justicia transicional queda incompleta y las violaciones masivas a los derechos humanos impunes.

En ambos casos, las policías no fueron depuradas y entonces perpetradores siguieron en la escena política del país. El caso más claro es el de Guatemala donde el exdictador Efraín Ríos

Montt se quedó con un partido político en donde está inmiscuida toda su familia y ya en el periodo democrático ostentó cargos como el de senador. O, que el representante de las Fuerzas Armadas en las firmas de los Acuerdos de Paz haya llegado a ser presidente pese a los documentos comprobando su participación como perpetrador. En el caso de Argentina, la Junta Militar dejó documentos que prácticamente eran amnistías antes de organizar las elecciones, pero las verdaderas amnistías fueron aprobadas años más tarde por presidentes elegidos democráticamente y supuestamente con ánimos de hacer justicia como los casos de Alfonsín o Carlos Menem.

En el momento en que la justicia transicional se queda trunca y ante los ofrecimientos de los nuevos presidentes; la sociedad empieza a moverse. Y, en este ámbito los países estudiados tienen diferencias. La capacidad de organización que tuvo la sociedad argentina en cuanto a la creación de sus propios organismos para la investigación de la verdad y la búsqueda de sus seres queridos, a pesar del miedo, es digno de reconocerse. Esto no quiere decir que en Guatemala no hayan surgido organizaciones de la sociedad civil en relación a los derechos humanos, pero sí que el proceso fue más lento y esto puede ser en gran medida debido al tipo de víctimas ya que en el caso del país centroamericano después de haberse firmado los Acuerdos de Paz, había comunidades alejadas que ni siquiera sabían que la guerra ya había terminado. La presión por parte de la sociedad civil argentina fue mucho mayor -en un primer momento- obligando a una mayor actuación por parte del gobierno. Si se exige al nuevo gobierno justicia para los desaparecidos, es importante conocer los hechos de manera oficial; primero la verdad, para poder hacer justicia.

Las comisiones de la verdad se convierten en esa herramienta que pretende dar a conocer los hechos del pasado y que puede ayudar a promover la lucha contra el olvido, pero que no funciona como un organismo sustitutivo de las leyes. Si bien las comisiones no pueden hacer justicia por sí mismas, se ha comprobado que son capaces de brindar el soporte suficiente a juicios contra perpetradores. Las comisiones cumplen una función relevante para una sociedad en busca de paz y reconstruir el tejido social pues da soporte a la justicia transicional, para trascender hasta una justicia restaurativa.

En la parte de la transición puede convertirse en un aporte en los juicios y una herramienta para que las organizaciones civiles puedan apoyarse y construir casos sólidos en contra de perpetradores; también pueden describir la realidad del conflicto para que los hechos puedan categorizarse dentro de la macrovictimización sistemática y entonces pueda adjudicarse la imprescriptibilidad de los agravios -por ejemplo-. Pero, sobre todo, puede ayudar a los familiares de la víctimas a conocer la verdad sobre su pariente y entonces sí poder cerrar el ciclo del duelo que ha quedado pendiente. Aunados estos tres elementos podrían dar lugar a una verdadera justicia transicional y caminar hacia la reconciliación nacional.

Describir las comisiones de la verdad resulta complejo ya que cada una logra tener especificidades que las hace únicas. Sin embargo, se pueden considerar los elementos más generales como que su creación puede ser determinada por Acuerdos de Paz firmados después de un conflicto como el caso de la comisión oficial de Guatemala; puede ser creada por gobiernos en transición o los mandatos posteriores como el caso argentino; e incluso hay comisiones que son creadas por instancias civiles como el caso de la comisión no oficial de Guatemala creada por un organismo religioso. Independientemente de la instancia que la genere, una vez creada se desarrollará un mandato que implica el qué se va a investigar, cómo se hará, de cuánto tiempo se dispondrá para el trabajo, cómo se hará el trabajo o bajo qué lineamientos y finalmente se establecerán recomendaciones que -en el mejor de los casos- tendrán un impacto en la sociedad.

El proceso de trabajo para comisiones tanto oficiales como no oficiales es muy similar. Se busca tener un grupo de personas representantes y que sean *la cara* de la comisión; aquellas no oficiales tienen procesos de selección menos complicados pues las comisiones oficiales tienen que ser cuidadosas de que los miembros de la comisión y quienes tendrán intervenciones con la ciudadanía sean personas que puedan garantizar respeto, seguridad, que inspiren confianza y que no hayan tenido ninguna participación en el conflicto. Para las comisiones no oficiales esto resulta más sencillo, pues, aunque hay personas que ocuparán puestos clave, la *cara* de la comisión y el prestigio que tendrá estará determinada más por la organización como tal que por sus miembros. Ya que el objetivo primordial de las comisiones es la búsqueda de la verdad, se realiza una labor

titánica para poder obtener testimonios de primera mano de víctimas sobrevivientes, parientes, incluso perpetradores que estén dispuestos a dar su versión. El objetivo primordial de cualquier comisión es construir la verdad histórica que se verá como la verdad oficial.

La manera en que las tres comisiones -las dos de Guatemala y la de Argentina- funcionaron fue muy similar. Sin embargo, desde el mandato, las comisiones oficiales tenían una limitación muy importante: el tiempo. A pesar de que hubo prórrogas, tener 6 meses o un año para recorrer un país y poder establecer la verdad es algo poco realista. Es por ello que la Comisión amparada por la Arquidiócesis de Guatemala fue un insumo de información vital para el reporte final como lo fueron los organismos de derechos humanos de la sociedad civil para la Comisión de Argentina. Pero, la reacción de la sociedad ante esta colaboración fue distinta pues mientras que en Guatemala se consideró como un favor muy importante que le costó la vida a Monseñor Gerardi Conedera; en Argentina hubo voces como las de las Madres de Plaza de Mayo que criticaron el hecho de que el informe estuviera formado por el trabajo que ya se había realizado.

Es importante mencionar que, en ambos países, hubo escasa participación por parte de las Fuerzas Armadas. La milicia guatemalteca alegó que no habría documentos oficiales, mientras que en Argentina se dijo que la documentación se había quemado. Las dictaduras se encargaron de dejar los menos rastros físicos posibles. Pero, en el país del cono sur, “extraviados” en bodegas - por ejemplo- han encontrado información relacionada con las desapariciones, listas negras y se espera se puedan encontrar más documentos que puedan ser de utilidad en los juicios. Guatemala no ha tenido tanta suerte, y pocos miembros de las fuerzas castrenses han declarado sobre los hechos que ellos mismos hayan visto o realizado. En Argentina, se ha tenido un poco de mayor apertura como el caso del texto de *El Vuelo* de Adolfo Scilingo que fue clave para comprobar, de una fuente directa, la ocurrencia de los *vuelos de la muerte*.

Una vez que la verdad ha salido a la luz gracias a los testimonios, se procede a la redacción del texto. Los reportes son entregados al gobierno en turno o a la sociedad civil en general, dependiendo de la instancia que lo haya solicitado, y contienen los testimonios recopilados -tantos como se hayan podido recuperar-, conclusiones en términos de datos generales de la violencia y se

construyen recomendaciones para los gobiernos en turno. El objetivo de los reportes es presentar una verdad que se conocía a medias, o que era negada. Sin embargo, parece ser que este es el momento clave cuando la voluntad política del mandatorio del país entra en juego. Y es que los Acuerdos de Paz de Guatemala obligaron a la creación de una Comisión de la Verdad, pero el día de la entrega del informe el presidente no se presentó. Pero, tampoco sirve de mucho que el documento se reciba en ceremonias rimbombantes si no se toma el siguiente paso que es juzgar a los responsables por esa verdad que ha dejado tanto dolor en una sociedad como en Argentina.

En el mejor de los casos, la verdad será conocida por la población en general gracias a la difusión del texto -como el caso argentino que el reporte se convirtió en *best seller*-, es utilizado como fuente de información o como testimonios dentro de juicios por lo que puede ayudar a promover la justicia. Para el caso guatemalteco, el texto de la comisión oficial ni siquiera se puede conseguir fácilmente. Tal vez la iniciativa más certera fue la presentación del texto producido para la Comisión de la Verdad no oficial de Guatemala por Monseñor Gerardi en la catedral de la capital del país, hecho que le costaría la vida días después. Para Argentina el texto ha sido integrado como parte del currículo oficial de estudios, así como materias sobre derechos humanos mientras que en Guatemala, hay gente que desconoce el texto y no se ha logrado que siquiera esta parte de la historia del país se enseñe en las escuelas, mucho menos se ha logrado que se estudien los textos sobre la verdad de la violencia impartida por la dictadura.

Ambas comisiones oficiales tuvieron a bien invitar a la población para colaborar con sus ideas y así generar las recomendaciones de la comisión. Los dos países tuvieron una respuesta inesperada por participar, la sociedad civil quería formar parte de lo que podría cambiar el país para que estos hechos nunca se repitan. Los tres organismos de la verdad dieron a conocer recomendaciones para ser implementadas por los gobiernos. Ninguna de las recomendaciones planteadas sale del alcance de cualquier gobierno; pero poquísimas han sido puestas en práctica.

Esto quiero decir que el gran reto que han tenido las comisiones es que las recomendaciones que se encuentran al final del texto sean consideradas por parte de los gobiernos en turno. Una comisión no oficial tiene pocas -sino es que nulas posibilidades- de ver sus recomendaciones

aplicadas, pero el problema es que lo mismo sucede con las comisiones oficiales que a pesar de haber sido creadas por los mismos gobiernos, las recomendaciones son -igualmente- ignoradas. Si es que los reportes son utilizados en juicios, no es un golpe tan fuerte para la sociedad civil; pero si esto no fuese así y los gobiernos no atienden a las recomendaciones entonces se puede empezar a cuestionar la funcionalidad de las comisiones. Si bien las comisiones de la verdad son mecanismos necesarios en sociedades que han padecido macrovictimizaciones, el hecho de que su trabajo pueda ser relegado de acuerdo con los intereses del gobierno en turno, puede resultar decepcionante para la sociedad. Al final, la relevancia que puede tener una comisión de la verdad queda -en gran medida- sujeta a factores externos como la voluntad del gobierno en turno.

Afortunadamente, la sociedad civil a través de diferentes organismos de derechos humanos ha seguido en pie de lucha para alcanzar la justicia. Y, si los gobiernos no tienen la voluntad política para poner en marcha las recomendaciones, la sociedad civil sí la tiene para exigir justicia utilizando esa verdad oficial como pruebas en los diferentes juicios que han tenido lugar. Argentina se ha destacado por haber sido el primer país latinoamericano en enjuiciar a militares en Tribunales del Fuero Común por genocidio o al menos por crímenes como tortura, homicidios y desaparición forzada. Se convirtió en uno de los pocos países a nivel mundial en haber sentenciado a miembros de Juntas Militares por crímenes atroces. En el caso de Guatemala sí ha habido juicios, aunque algunos icónicos como el de Efraín Ríos Montt rompieron con la esperanza de justicia al revocar una sentencia por genocidio y permitiendo que al final uno de los más terribles personajes de la política guatemalteca muriera impune.

El ideal de la justicia transicional es que pueda haber justicia, pero también hay otros elementos que suelen ser -incluso- parte de las recomendaciones de los textos de las comisiones que son las reparaciones como una manera de compensar los agravios hechos por el gobierno. En este punto es importante hacer hincapié en el elemento de la memoria y es que cuando se habla de resarcimiento, se relaciona más con la parte moral que con lo económico. Hay reparaciones de muchos tipos, pero las más significativas -en la mayoría de las ocasiones- se trata de lo que no tiene nada que ver con dinero. Días feriados, monumentos o reconocimientos de culpa por parte de los

jefes de Estado suelen ser más valiosos que el otorgamiento de dinero que además se presta para discusiones en torno a cuánto vale la vida de un desaparecido.

A pesar de las limitaciones, las Comisiones de la Verdad son herramientas valiosas porque cumplen con una función de reconciliación en donde la gente puede conocer la verdad de los hechos. Pero también de manera indirecta cumplen con aspectos relacionados a la justicia pues tanto en Guatemala como en Argentina, los textos en donde están plasmados los testimonios de miles de víctimas se han utilizado como pruebas para los juicios. Incluso se ha hecho eco en muchos países de estos materiales, ha habido traducciones, pero sobre todo cumplen con la función de dar a conocer la verdad lo que ha permitido que haya demandas en instancias internacionales o incluso juicios con sentencias a perpetradores en el extranjero.

Un hecho es que las Comisiones de la Verdad ven su trabajo complementado por la sociedad civil que es quien verdaderamente les da un uso a los reportes generados y hacen que la comisión haya valido la pena pues ésta se disuelve una vez entregado el informe. En realidad, se convierte en un compromiso de los organismos de derechos humanos el ayudar a la gente y los testimonios han apoyado a construir casos sólidos que han dado lugar a sentencias importantes. El problema es que son eventos vivos que siguen dando resultados incluso décadas después de la creación de los textos. Evaluar a las comisiones resulta complicado porque mientras haya alguien leyendo el texto, testimonios usados en juicios... entonces, se está cumpliendo con el objetivo original de la justicia transicional.

Todo esto no quiere decir que las Comisiones de la Verdad sean la panacea, pero sí que pueden ser herramientas que ayuden a reconstruir el tejido social. Que una persona se haya atrevido a dar su testimonio, que la gente se haya dado cuenta que no era la única víctima, que encuentren compañeros de lucha, con casos similares; pero sobre todo que las nuevas generaciones sepan lo que la sociedad ha vivido y sean receptivos del dolor que esto ha causado tal vez no solamente sea capaz de evitar el olvido, sino de que la exigencia de justicia persista, aunque las generaciones afectadas vayan partiendo. Si es que las madres no podrán seguir buscando a sus hijos, que se sepa que hay una persona con nombre y apellido que fue desaparecida por defender ideales que

no iban con las esferas de poder de la época; pero sobre todo que aprendan, que la sociedad civil es quien ha sido capaz de transformar esta historia de dolor a través de pasos firmes hacia la dignidad y la dignificación de las víctimas -en su momento- señaladas.

CONCLUSIONES



Poster tomado de internet, en favor de las Madres de Plaza de Mayo que representa el ya tradicional pañuelo blanco que se ha convertido en símbolo de lucha a lo largo de todo el país e incluso internacionalmente.

COMISIONES DE LA VERDAD: HERRAMIENTAS NECESARIAS AUNQUE INCOMPLETAS PARA
ALCANZAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
CASOS LATINOAMERICANOS DE GUATEMALA Y ARGENTINA

Conclusiones

*“Actualmente, en las agrupaciones es notorio el desgaste causado por el paso de los años, el dolor y las reiteradas frustraciones. Desde los inicios, la mayoría de los integrantes han sido mujeres, muchas de las cuales hoy ya son de avanzada edad, han visto fallecer a numerosas compañeras, sienten que su propio fin está cerca y les angustia no haber podido encontrar y dar sepultura a sus seres queridos. Al mismo tiempo perciben que los únicos poseedores de la verdad, los militares y policías que ordenaron o perpetraron los hechos, también se están muriendo, sin haber entregado ninguna información.
(Baeza, Victoria en Pérez-Sales y Navarro, 2007: 131)*

Cuando se es sensible ante la violencia descrita a través de textos y testimonios es imposible mirar hacia otro lado. Resulta indignante saber que el ser humano sea capaz de actuar de formas tan viles en contra de otras personas; pero resulta todavía más frustrante ver que un ser humano pueda hacer oídos sordos ante opciones que hay para mitigar el dolor que la violencia ha infringido en la sociedad. Puede ser que sea parte de la condición humana etiquetar o establecer diferencias, “el bueno” o “el malo”, “el de derecha” o “el de izquierda”. Pero bajo ninguna circunstancia este tipo de atrocidades puede legitimarse.

A lo largo de la historia, se han dado hechos violentos en magnitudes atroces. Es por ello, que se han creado mecanismos que puedan ayudar a la sociedad para su resarcimiento, para alcanzar que el tejido social se restablezca, que las divisiones empiecen a suavizarse para asegurar que hechos tan terribles como la violencia ejercida por el Estado en las dictaduras de Guatemala y Argentina no vuelvan a repetirse. Este tipo de mecanismos como las Comisiones de la Verdad son uno de esas herramientas que, surgen a finales del siglo XX para tratar de proponer algún tipo de respuesta más humana ante hechos tan sensibles como un genocidio.

Hacer un repaso histórico de los casos de estudio era relevante para entender que la violencia no se dio de la noche a la mañana. La violencia tiende a ser un ciclo que no se detiene por sí mismo; por el contrario, solamente aumenta en su nivel y en el modo en que va involucrando cada vez a más personas que suelen ni siquiera estar relacionadas con el conflicto inicial, si es que lo hubo por principio de cuentas. La violencia tiene la capacidad de alcanzar límites inimaginables en

donde el miedo puede hacer que la gente legitime ciertos actos, en donde el pánico puede hacer que la sociedad calle y mire para otro lado; pero también es capaz de convencer a otros para convertirse en perpetradores de hechos terribles perdiendo todo sentido de humanidad.

Si bien puede ser que la funcionalidad de las Comisiones de la Verdad pueda cuestionarse; como autora de este texto cuestionaría aún más el no utilizar estas herramientas que aportan una voz, un nombre, una cara a las víctimas; humanizan las cifras, sensibilizan a la sociedad con el ferviente deseo de que no se repitan las matanzas, las torturas, el dolor y el pesar de las familias que han sido separadas y que en su mayoría buscan a quienes les fueron arrebatados. Estos organismos le ofrecen a la sociedad un derecho básico: la verdad.

La pregunta de investigación *¿Cómo la propia naturaleza de las Comisiones de la Verdad puede mermar su capacidad de acción para alcanzar la justicia transicional?* Se responde al alcanzar el objetivo principal de la investigación a través del análisis de la experiencia guatemalteca y argentina en términos de condiciones de la verdad se han logrado identificar los obstáculos a los que organismos de esta naturaleza se tienen que enfrentar. A través del texto se puede configurar una realidad en donde las comisiones de la verdad cumplen de manera cabal con el objetivo que es plantear la verdad de hechos violentos -macrovictimizaciones- perpetradas por gobiernos dictatoriales en América Latina.

Lamentable es que estos organismos no tengan un rango de acción más amplio porque el funcionamiento de estas herramientas se cuestiona por las limitaciones a las que están sujetas desde su creación. Es por eso que la hipótesis de este texto: *Las Comisiones de la Verdad son condicionadas por su propia naturaleza en detrimento de los alcances que podrían tener, dejándolas como herramientas necesarias para la verdad, pero incompletas para alcanzar la justicia transicional*; se comprueba. Cualquier crítica que se le puede hacer a estas herramientas debe de girar en torno a cuál es el contexto en que fue creada y qué limitaciones le fueron impuestas. Por otro lado, también establecer que todas las Comisiones de la Verdad cumplen su función que es desarrollar con base en testimonios e investigación la verdad de los hechos y hacerlo de conocimiento público.

El verdadero problema es que una vez entregados los informes, no pueda haber un seguimiento y entonces todos los recursos invertidos y todo el trabajo realizado queda sujeto a la voluntad del gobierno en turno. La verdad se empieza a utilizar según la conveniencia de las altas esferas de poder; la justicia, las acciones en favor de la reconciliación y el resarcimiento se quedarán congeladas si a las personas en el poder no les conviene que siga; y se pueden enarbolar estas causas con fines políticos. Y es aquí donde pareciera que el ser humano no fuera un ser de razón como se afirma pues en ambos casos, se trata de lucrar con el dolor ajeno.

La verdad es un derecho humano que no debe ser negado ante ninguna circunstancia; las comisiones de la verdad abren esta posibilidad. Sin embargo, cuando se habla en términos de justicia transicional, la verdad es tan solo una parte de ella. Se trata también de mejoras institucionales, de hacer justicia, de procurar que los hechos de violencia no se repitan. Y, si miramos a las comisiones de la verdad, podrían cumplir con todo esto ya que no sólo plantean la verdad, sino que con base en consensos y la investigación en sí misma plantean recomendaciones para mejorar las instituciones y para asegurar que la violencia no vuelva; incluso se pueden utilizar como pruebas en juicios en contra de perpetradores. Pero, todo esto queda sujeto a factores ajenos a estos organismos, el trabajo está hecho, pero no hay manera de asegurar que se alcance; por ello, su propia naturaleza limita los potenciales alcances. Las comisiones de la verdad podrían llevar por sí mismas a que la justicia transicional se alcanzara; si los organismos pudieran ser vinculantes.

A pesar de lo complejo que es cuando una Comisión de la Verdad se convierte en un halo de esperanza para la sociedad que poco a poco se va desvaneciendo; pareciera que pasan la estafeta a la sociedad civil. Se puede estar o no de acuerdo con los informes, se puede criticar el modo en que trabajaron, el tiempo que tardaron en hacer el reporte; pero la información contenida se convierte en un arma en favor de la memoria y de la justicia. La sociedad civil presiona para que haya juicios, para que las víctimas sean recordadas, para que los victimarios no queden impunes; las brechas se van abriendo gracias al trabajo constante de un puñado de organizaciones que mayoritariamente han aparecido por estar emparentados con víctimas. Aunque los casos tratados en este texto son muy diferentes entre sí, todas las personas entrevistadas aceptaron que los

informes de las Comisiones tuvieron algún logro; desde animar a la gente a contar su verdad, hasta usar el texto como parte de las pruebas en los juicios, hasta lograr que algunas escuelas o que todo el sistema educativo utilice esa información para que la gente no olvide y las nuevas generaciones no permitan que se cometan las mismas acciones.

Es por ello que el texto debe cerrar con una propuesta que gira en torno a dos vertientes. La primera sería dotar de alguna facultad legal a las Comisiones de la Verdad; no para que cambien las leyes de un país ni mucho menos sino para obligar a los gobiernos -sin importar el color- a acatar las recomendaciones. A lo largo del texto se ha revisado que de acuerdo con la voluntad política del gobierno en turno serán los alcances que puedan lograrse; esto es un acto en contra de las víctimas en sí mismo. Las recomendaciones no se hacen a la ligera son el resultado de una revisión de contextos, de hechos, de consultas que dan lugar a medidas que pueden ayudar a la sociedad a sanar. El cumplimiento de las recomendaciones no debería de depender de quien esté al frente del país, porque esto no determina el sentir de la gente.

Técnicamente las recomendaciones derivadas de las comisiones deberían de ser cumplidas por los gobiernos de manera obligada. La realidad es muy diferente y por ello que dentro de la propuesta deberían de incluirse a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos o en mismo Centro de Justicia Transicional para que tuvieran la capacidad de a través de acuerdos obligar a los gobiernos a cumplir con su parte.

Tal vez lo que no se ha logrado entender es el grado de responsabilidad que tienen las autoridades sin considerar si es o no un gobierno en transición. Un gobierno representa a la sociedad y tiene responsabilidades hacia ella, una es su procuración no su aniquilación. No importa cuántos gobiernos pasen, ¿Cómo volver a confiar cuando un día los derechos de las personas son importantes y al siguiente día ya no lo son? No se trata de transgredir las Constituciones de los países con las recomendaciones ni que organismos internacionales traten de intervenir políticamente en la sociedad afectada; pero sí de firmar acuerdos para que los gobiernos tengan un

compromiso real, pues parece que no tienen palabra de honor. Estableciendo así, nuevamente, que las Comisiones de la Verdad deben de ser organismos vinculantes.

La otra vertiente de la propuesta se relaciona con el surgimiento de las Comisiones. Es decir, la mayoría de las Comisiones de la Verdad surgen a partir de gobiernos dictatoriales o conflictos sociales que llegan a casos de macrovictimización. Una vez que estos hechos suceden entonces ya sea a través de Acuerdos de Paz o de gobiernos en transición surgen estos organismos para conocer la verdad de los hechos del pasado. Sin embargo, puede ser que existan países que oficialmente no están viviendo ningún conflicto social, o bien, gobiernos democráticos profundamente represores. ¿Cuántas víctimas son suficientes para que sea necesario el uso de una de estas herramientas? Estos organismos reivindican a las víctimas que son borradas de tajo, es por ello, que instancias internacionales deberían de tener la capacidad de promover este tipo de recursos al recibir demandas de grupos sociales. No se trata de hacer Comisiones de la Verdad ante un asalto, pero sí ante olas de feminicidios, matanzas, desapariciones forzadas que también pueden ser perpetradas por gobiernos democráticos; o que éstos se convierten en cómplices al no hacer justicia y mirar para otro lado.

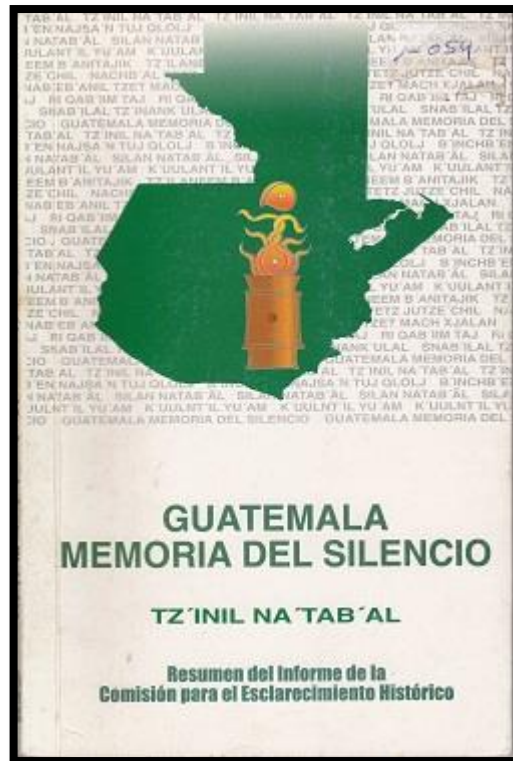
Conocer la verdad sin alcanzar la justicia hace que la ecuación quede incompleta; la impunidad se puede convertir en el peor fantasma. Si las Comisiones de la Verdad fueran organismos vinculantes, no se dependería de la voluntad política para poder tener logros; que se les pone esta etiqueta por todos los obstáculos que tienen que librarse para alcanzarlos pero que no deberían serlo pues una sentencia a un genocida no debería ser considerada como un logro sino una responsabilidad del Estado al hacer justicia en beneficio de la sociedad que representa.

La justicia transicional es un proceso que no se logra de la noche a la mañana. Y, precisamente, por esto las comisiones de la verdad deben ser organismos que tengan una capacidad de acción mayor, en un largo plazo, que puedan brindar a la población las herramientas necesarias en términos de ayuda humanitaria y/o psicológica que pueda asegurar mejores condiciones sociales. Las comisiones de la verdad ya se encargan de reproducir la verdad, pero necesitan trabajar a la par de la sociedad civil para poder asegurar una reconciliación basada en la

verdad y la justicia. Las comisiones son una herramienta necesaria, pero se queda en ese primer paso; faltan los demás... Y, en este momento, se puede decir, que los demás pasos los toma la sociedad civil y no las autoridades para quienes la justicia transicional -independientemente de quien esté al frente- debería ser parte de su trabajo diario. La sociedad civil, a través de sus propias organizaciones de derechos humanos, se están encargando de hacer el trabajo en favor de la gente, que podría ser competencia de las comisiones de la verdad, como órganos que obliguen a que se cumpla, lo que ellas mismas han establecido como necesidades para mejorar las condiciones de vida en una sociedad violentada por gobiernos dictatoriales.

Hasta el día de hoy, los logros en favor de la verdad, de la justicia y la reconciliación de la sociedad rara vez se le puede atribuir a las instancias que deberían de llevarlo a cabo. El verdadero logro es que la sociedad civil, con sus propios recursos y limitaciones salgan a las calles con sus pañuelos blancos, marchen las madres y los padres, los hermanos y las hermanas con las fotografías de aquellos que les fueron arrebatados. Se trata de luchas personales por saber qué pasó con los suyos que ha creado lazos de fraternidad y solidaridad en las sociedades. Abuelas que buscan a nietos que nunca conocieron, madres que recuerdan a cada momento cómo les arrancaron a sus hijos de los brazos, voces que cuentan sus historias con indignación y rabia ante la indiferencia y la sinrazón de los perpetradores. Todos ellos, ejemplos para algunas generaciones que sin haber vivido las atrocidades no pueden ser indiferentes. Por fortuna, mientras la sociedad civil no ceda, a pesar de todas las adversidades y la falta de voluntad política de quien sea, que no tenga capacidad de tener un poco de humanidad antes de los intereses propios, el olvido no imperará. Porque si algo debe llevarse cualquier persona que lea este texto es que, si bien el ser humano puede ser capaz de hacer las cosas más atroces, también es capaz de unirse y realizar lo impensable por amor y dignidad; por humanidad.

FUENTES



Portada del reporte de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) Guatemala.

COMISIONES DE LA VERDAD: HERRAMIENTAS NECESARIAS AUNQUE INCOMPLETAS
PARA ALCANZAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
CASOS LATINOAMERICANOS DE GUATEMALA Y ARGENTINA

Fuentes

- Abuelas de Plaza de Mayo. (enero de 1987). Panfleto sobre la Ley de Punto Final. Argentina.
- AFP y DPA. (25 de enero de 2017). Denuncias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo “nueva provocación” de Macri en *La Jornada*. México. Pp. 38. Recuperado de: <http://www.jornada.com.mx/2017/01/25/mundo/028n2mun>
- Agencia EFE. (24 de febrero de 2016). Víctimas del Conflicto Armado critican manejo del actual PNR en *Prensa Libre*. Guatemala.
- Aguirre, Facundo. (22 de agosto de 2017). Le masacre de Trelew en *La Izquierda Diario*. Argentina. Recuperado de: <http://www.laizquierdadiario.com/La-masacre-de-Trelew-22574>
- Aliaga, Jorge. (2006). La noche de los bastones largos en *Educ.ar*. Argentina. Recuperado de: <https://www.educ.ar/recursos/109254/la-noche-de-los-bastones-largos>
- Andreozzi, Gabriele [coordinador]. (2011). *Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad en Argentina*. Argentina. Cara o Ceca
- Archivo Histórica RTA. (29 de junio de 1966) [Audio]. *Estatuto de la Revolución*. Consultado el 6 de octubre de 2016. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=tO6HY7H8570>
- Arriola, Juan Federico. (2008). *Teoría General de la Dictadura. Reflexiones sobre el Ejercicio del Poder y las Libertades Políticas*. México: Trillas
- Associated Press. (1 de abril de 2018). Muere ex dictador de Guatemala Efraín Ríos Montt en *La Jornada*. México.
- Babbie, Earl. (2000). *Fundamentos de la Investigación Social*. México: International Thomson Editores. Pp. 257-309
- Balsells, Tojo, Edgar Alfredo. (2009). *Olvido o Memoria. El dilema de la sociedad guatemalteca*. Guatemala: FLACSO
- BBC Mundo. (27 de mayo de 2016). 4 Claves para entender el Plan Cóndor, la empresa de la muerte creada por regímenes militares de Sudamérica en *BBC*. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/05/160524_america_latina_plan_operacion_condor_argentina_uruguay_bolivia_brasil_paraguay_jcps
- Bellinghausen, Hermann. (2008). *Acteal. Crimen de Estado*. México: La Jornada Ediciones.
- Beristain, Carlos Martín. (2007). *Las Comisiones de Verdad en América Latina. Una Valoración de su Impacto*. Centro Internacional para la Justicia Transicional.
- Braslavsky, Guido. (2 de abril de 2003). El Otro 2 de abril: la Batalla en el Ejército entre Azules y Colorados en *El Clarín*. Argentina.
- Brett, Roddy. (2007). *Una Guerra sin Batallas: Del Odio, la Violencia y el Miedo en el Ixcán y el Ixil, 1972-1983*. Guatemala: F&G Editores.
- Calloni, Stella. (1 de agosto de 2016). Reciben el beneficio de prisión domiciliaria 50 ex represores condenados en Argentina en *La Jornada*. México. Pp. 27. Recuperado de: <http://www.jornada.com.mx/2016/08/01/mundo/027n1mun>

- Calloni, Stella. (9 de noviembre de 2016). Macri ubica en 6 mil 348 la cifra de desaparecidos en la dictadura en *La Jornada*. México. Pp. 32. Recuperado de: <http://www.jornada.com.mx/2016/11/09/mundo/030n1mun>
- Calloni, Stella. (30 de noviembre de 2017). Euforia en Argentina; dan cadena perpetua a genocidas de la ESMA en *La Jornada*. México. Pp. 28. Recuperado de: <http://www.jornada.com.mx/2017/11/30/mundo/028n1mun>
- Calveiro, Pilar. (2001). *Poder y Desaparición Los campos de concentración en Argentina*. Argentina: COLIHUE.
- Cardozo, Ivonne. (2 de agosto de 2011). Guatemala –Condena de 6.060 años a militares responsables de masacre. *Periódico El Turbión*, Guatemala.
- Casaús Arzú, Marta Elena, 2011, *Genocidio: ¿La máxima expresión del racismo en Guatemala?* Guatemala: F&G Editores.
- Castillo, Juan Manuel. (14 de abril de 2013). Juan José Gerardo, 15 años después de su asesinato. *Prensa Libre*. Pp.2.
- Ceballos Medina, Marcela. (2009) *Comisiones de la Verdad. Guatemala, El Salvador, Sudáfrica. Perspectivas para Colombia*. Colombia: La Carreta Editores
- Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. (consultado en 2013). Argentina: WordPress. Recuperado de: <https://celtyv.org/>
- Centro Internacional para Justicia Transicional (consultado en 2014). Recuperado de <https://www.ictj.org>
- Cerruti, Leónidas. (25 de septiembre de 2014). El Segundo Rosariazo, el hecho maldito de la historia rosarina en *Enredando, Comunicación Popular*. Argentina. Recuperado de: <https://www.enredando.org.ar/2014/09/25/el-segundo-rosariazo-el-hecho-maldito-de-la-historia-rosarina/>
- Comas, José. (11 de junio de 1989). Muere el Ministro Peronista López Rega, creador de la ultraderechista Triple A en *El País*. Argentina. Recuperado de: https://elpais.com/diario/1989/06/11/internacional/613519219_850215.html
- Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos. (4 de junio de 2012). *GHRC Denuncia la Clausura de la Dirección de los Archivos de la Paz*. Washington. (Consultado febrero 18, 2013). Recuperado de: <http://ghrcusa.wordpress.com/tag/sepaz/>
- Comisión Internacional para la Impunidad en Guatemala, (2014), Guatemala: CICIG. Consultado en noviembre 2013 en www.cicig.org
- Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). (2006) *Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP: Nunca Más*. Argentina: Eudeba
- Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (1999) *Guatemala Memoria del Silencio*. Guatemala: Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas.
- Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (2004). *Guatemala Memoria del Silencio. Conclusiones y Recomendaciones*, F&G Editores, Guatemala.
- Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (2009). *Conflicto Armado Interno y Denegación de Justicia*, F&G Editores, Guatemala.

- Corte Penal Internacional. (Consultada en mayo 2014). Recuperado de: www.fidh.org
- Crenzel Emilio. (2008). *La Historia Política del Nunca Más. La Memoria de las Desapariciones en Argentina*. Argentina: Siglo XXI.
- Cuya, Esteban. (2001). *El Impacto de las Comisiones de la Verdad en América Latina*. Alemania.
- Cuya, Esteban. (1996). "Las Comisiones de la Verdad en América Latina", en: *Revista Memoria*. Alemania.
- D'Alesio, Rosa. (30 de diciembre de 2015). Los Indultos que decretó Menem en *La Izquierda Diario*. Argentina. Recuperado de: <http://www.laizquierdadiario.com/Los-indultos-que-decreto-Menem>
- D'Alesio, Rosa. (4 de junio de 2017). Obediencia Debida: A 30 años de la ley que dejaba impune a los genocidas en *La Izquierda Diario*. Argentina. Recuperado de: <https://www.laizquierdadiario.com/Obediencia-Debida-a-30-anos-de-la-ley-que-dejaba-impune-a-los-genocidas>
- D'Antonio, Débora. (2016). Los Consejos de Guerra durante la última Dictadura Militar Argentina (1976-1983) en *Iberoamericana -Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*. Suecia. Recuperado de: <http://www.iberoamericana.se/articles/10.16993/iberoamericana.3/>
- Dolgopól, Diego Gabriel. (15 de julio de 2012). La Década Infame en la Argentina 1930- 1943 en *Revista de Claseshistoria*. Recuperado de <http://www.claseshistoria.com/revista/2012/articulos/dolgopol-decada-argentina.html>
- El Cronista. (13 de mayo de 2016). El Rodrigazo, el ajuste que dejó una huella en los argentinos en *El Cronista*. Argentina. Recuperado de: <https://www.cronista.com/3dias/El-Rodrigazo-el-ajuste-que-dejo-una-huella-en-los-argentinos-20160513-0017.html>
- Elster, Jon. (2006). *Rendición de Cuentas. La Justicia Transicional en Perspectiva Histórica*. Argentina: Katz
- Fucík, Santiago. (24 de marzo de 2017). El Proceso de Reorganización Nacional y su repercusión hoy en *La Izquierda Diario*. Argentina. Recuperado de: <http://www.laizquierdadiario.com/El-Proceso-de-Reorganizacion-Nacional-y-su-repercusion-hoy-70248>
- Fuego Simondet, Javier. (22 de marzo de 2016). El Juicio de las Juntas: un hito que el paso del tiempo revaloriza en *La Nación*. Argentina. Recuperado de: <https://www.lanacion.com.ar/1882032-el-juicio-a-las-juntas-un-hito-que-el-paso-del-tiempo-revaloriza>
- Fundación de Antropología Forense de Guatemala, (2013), Guatemala: FAFG. Consultado en 2013 en www.fafg.org
- Gallardo, Helio. (2007). *Democratización y Democracia en América Latina*. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí
- García, Adela. (14 de marzo de 2015). A 55 años de sus Aplicaciones en el País, El Plan Conintes y la Guerra de Frondizi contra la Rebeldía Obrera en *La Izquierda Diario*. Argentina.
- Gatti, Lidia. (2010). *La Corte Penal Internacional como Instrumento de Protección de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario*. Argentina.
- Gallardo, Helio. (2007). *Democratización y Democracia en América Latina*. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

- Giordano, Juan Carlos. (23 de septiembre de 1973). La Fórmula Perón-Perón ganó las elecciones presidenciales en *El Socialista*. Argentina. Recuperado de: http://www.izquierdasocialista.org.ar/viejos_es/cgi-bin/elsocialista.cgi.php?es=010¬a=30
- Gobierno de Guatemala, Unión Revolucionario Nacional Guatemalteca y Organización de las Naciones Unidas. (1996). *Acuerdo de Paz Firme y Duradera*. Guatemala. Recuperado de: <http://www.sepaz.gob.gt/Accessoalainformacion/index.php/79-acuerdos-de-paz/97-acuerdo-sobre-el-definitivo-cese-al-fuego>.
- Gobierno de Guatemala, Unión Revolucionario Nacional Guatemalteca y Organización de las Naciones Unidas. (1994). *Acuerdo Global sobre Derechos Humanos*. Guatemala.
- Goikoelea, Xabier. (2006). *Xamán Genocidio, impunidad y experiencias comparadas: Guatemala, Argentina*. España: Gakoa Liburuak.
- Goldhagen, Daniel Jonah. (2011). *Peor que la Guerra. Genocidio, Eliminacionismo y la Continua Agresión contra la Humanidad*. México: Taurus.
- Gómez, Rocío. (23 de septiembre de 2010). Todo comenzó con la confesión en *Desocultar/ Periodismo de Investigación*. Argentina: WordPress. Recuperado de: <https://desocultar.wordpress.com/2010/09/23/todo-comenzo-con-la-confesion/>
- Gómez Robledo, Alonso. (septiembre- diciembre de 2002). *El Crimen de Genocidio en Derecho Internacional*, en: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, México. No. 105.
- González, Jesús. (1998). *Teoría de los Derechos Humanos*. México.
- Granovsky, Martín. (8 de abril de 2012). La Semana Santa de 1987 obra maestra de la inteligencia militar en *Página 12*. Argentina. Recuperado de: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-191369-2012-04-08.html>
- Guerra de Villalaz, Aura. (s/d). *“La Delincuencia que se Genera en el Abuso del Poder: Una Constante en América Latina”*, en: publicación de la Universidad de Panamá. Panamá. Pp. 76-78
- Hamber, Brandon. (2003). “Healing”, en: *Reconciliation after Violent Conflict*. Reino Unido. Pp. 77- 87.
- Hayner, Priscilla. (1994). “Fifteen Truth Commissions -1974 to 1994: A Comprative Study”, en: *Human Rights Quarterly*. Estados Unidos: Pp. 205-226
- Hayner, Priscilla. (2008) *Verdades Innombrables*, Ed. FCE, México.
- Hernández, Manuel. (2 de abril de 2016). Gobierno no aclara cierre de oficinas del PNR en *Prensa Libre*. Guatemala.
- Huyse, Luc. (2003). “Justice”, en: *Reconciliation after Violent Conflict*. Reino Unido. Pp. 97- 114.
- Huyse, Luc. (2003). “The process of reconciliation”, en: *Reconciliation after Violent Conflict*. Reino Unido. Pp. 19- 39.
- Ki-Moon, Ban. (2007). *“Nunca Más”: Prevenir el Genocidio y Castigar a los Culpables*. Discurso con ocasión del décimo tercer aniversario del genocidio de Rwanda.
- Kirschbaum, Ricardo [editor]. (24 de marzo de 2004). LA ESMA, un emblema del terror de la dictadura en *El Clarín*. Argentina. Recuperado de: https://www.clarin.com/ultimo-momento/esma-emblema-terror-dictadura_0_H1aQ4q6JAtx.html

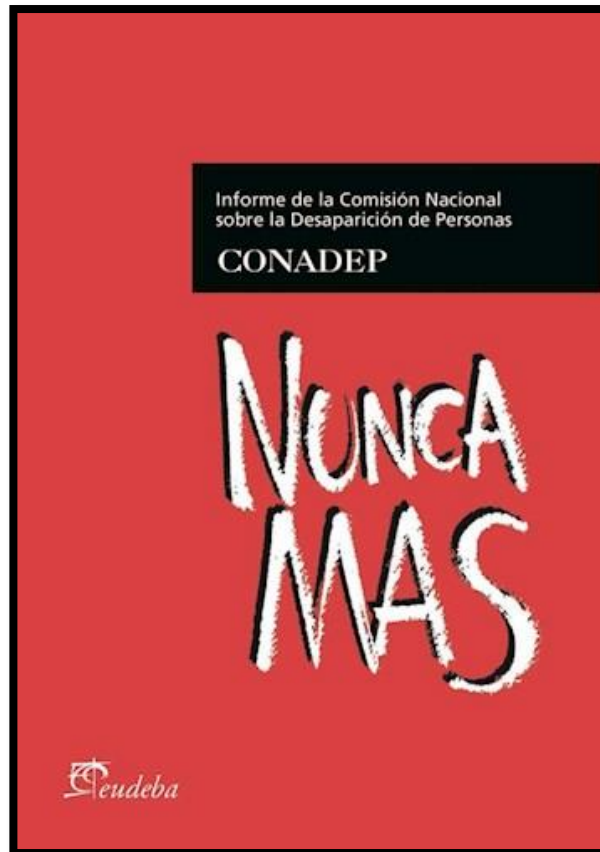
- Kirschbaum, Ricardo [editor]. (17 de mayo de 2013). El mundial 78: cuando la dictadura puso al fútbol al servicio del terror en *El Clarín*. Argentina. Recuperado de: https://www.clarin.com/deportes/mundial_0_BkkZb7_jw7l.html
- Kirschbaum, Ricardo [editor]. (29 de septiembre de 2014). Se cumplen 30 años Recuerdos y Criticas en el aniversario de la CONADEP en *El Clarín*. Argentina. Recuperado de: https://www.clarin.com/politica/Recuerdos-criticas-aniversario-Conadep_0_r1oLsOYqw7e.html
- Kirschbaum, Ricardo [editor]. (21 de junio de 2017). Prisión perpetua Murió Héctor Ríos Ereñu, ex jefe del Ejército condenado a crímenes de lesa humanidad en *El Clarín*. Argentina. Recuperado de: https://www.clarin.com/politica/murio-hector-rios-erenu-ex-jefe-ejercito-condenado-delitos-lesa-humanidad_0_SyzHY9D7b.html
- Kosovski, Ester. (s/d). “*Abuso de Poder: Nuevas Medidas contra la Prepotencia*”. Brasil: ILANUD. Pp. 61-74.
- Kruijtit, Dirk. (2009). *Guerrilla: Guerra y Paz en Centroamérica*. Guatemala: F&G.
- Laban, Alexander, (editor). (2011). *Transitional Justice*. Estados Unidos: Rutgers State University
- Lafuente, Carmen y Marín Ainhoa. (2008). “Metodologías de la investigación en las ciencias sociales: Fases, fuentes y selección de técnicas”, en *Revista-Escuela de Administración de Negocios*. Colombia. Pp. 5-18.
- La Jornada. (27 de enero de 2013). Comparece el ex dictador Ríos Montt ante la justicia acusado de genocidio en *La Jornada*. Pp. 25.
- La Jornada. (20 de marzo de 2013). Comienza en Guatemala Juicio contra Ríos Montt por Genocidio en *La Jornada*. Pp. 32.
- La Jornada. (22 de mayo de 2013). Divide a Guatemaltecos Fallo que Anula Sentencia a Ríos Montt en *La Jornada*. Pp. 24.
- La Jornada. (23 de mayo de 2013). Repudio a Fallo de la Justicia Guatemalteca en *La Jornada*. Pp. 24.
- La Jornada. (28 de mayo de 2013). Tribunal se aparta del proceso de Ríos Montt en *La Jornada*. Pp. 18.
- La Jornada. (24 de octubre de 2013). Justicia Guatemalteca Abre la Vía para Conceder la Amnistía a Ríos Montt en *La Jornada*. Pp. 33
- La Nación [editorial]. (31 de octubre de 2012). El Operativo Independencia en *La Nación*. Argentina. Recuperado de: <https://www.lanacion.com.ar/1522150-el-operativo-independencia>
- La Nación. (19 de septiembre de 2012). Exigen un castigo a los delitos de la guerrilla en *La Nación*. Argentina. Recuperado de: <https://www.lanacion.com.ar/1509757-exigen-un-castigo-a-los-delitos-de-la-guerrilla>
- Leal, Francisco. (15 de junio de 2003). La doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur en *Revista de Estudios Sociales*. Colombia. Universidad de los Andes. Núm. 15. Pp. 74- 87.
- Logan, Sam. (2005). “Truth Comissions in Latin America: An Analysis of Truth Comissions in Argentina, Brazil and Chile”, en: *Norms and Justice in Contemporary History*. Estados Unidos.
- López Martínez, Mario, (dir). (2004). *Enciclopedia de Paz y Conflictos*. España: Eirene.

- Lorenzetti, Ricardo y Alfredo Kraut. (2011). *Derechos Humanos: Justicia y Reparación. La experiencia de los juicios en la Argentina. Crímenes de lesa humanidad*. Argentina: Sudamericana.
- Manfroni, Carlos y Victoria Villaruel. (2014). *Los Otros Muertos*. Argentina: Sudamericana.
- Márquez, Álvaro. (2007). "La Justicia Restaurativa versus la Justicia Retributiva en el Contexto del Sistema Procesal de Sentencia Acusatoria", en: *Prolegómenos: Derechos y Valores*. Colombia.
- Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala. (noviembre, 2004). *MINUGUA Informe Final. Asesoría en Derechos Humanos*. Guatemala.
- Morales Sammy y Jimmy Morales (Directores). (2010). *Gerardi* [película]. Guatemala: ODHAG
- Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA). (junio 2016). CREOMPAZ, El caso de desaparición forzada más grande en América Latina. Guatemala, Recuperado de: <https://nisgua.org/portfolio-items/creompaz-informe/>
- Noragueda, César. (17 de septiembre de 2016). 40 años de la Noche de los Lápices: cuando el horror sacudió a Argentina en *Hipertextual*. Recuperado de: <https://hipertextual.com/2016/09/la-noche-los-lapices>
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH]. (2005). *Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer Recursos y obtener Reparaciones*. Nueva York y Ginebra: Organización de las Naciones Unidas.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH]. (2006). *Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han salido de un Conflicto*. Nueva York y Ginebra: Organización de las Naciones Unidas.
- Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala [ODHAG]. (1998). *Guatemala: Nunca Más*. Guatemala. ODHAG. Tomos I a IV.
- Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala [ODHAG]. (2013). Guatemala. Recuperado de: <http://www.odhag.org.gt/>
- Orduña, Eva Leticia. (2008). *Verdad y Justicia ante Hechos del Pasado: ¿Amenaza o Cimiento de las Democracias Latinoamericanas?* México: Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma de México
- Organización de las Naciones Unidas. *Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*. 1998.
- Organización de las Naciones Unidas. *Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad* 1970.
- Organización Memoria Abierta, (2018). Argentina. Consultado en 2017. Recuperado de: <http://memoriaabierta.org.ar/wp/>
- Panero, Alicia. (14 de marzo de 2017). Terrorismo de Estado: La reparación, en números en *Adelanto 24*. Argentina. Recuperado de: <http://adelanto24.com/2017/03/14/terrorismo-de-estado-la-reparacion-en-numeros/>
- Paredes, Luisa. (8 de mayo de 2018). Programa Nacional de Resarcimiento con pocos avances a 15 años de su creación, en: *El Periódico*. Guatemala.

- Patiño, Daniel Mauricio. *La Justicia Restaurativa y su Diferencia con la Justicia Transicional*. Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana.
- Peace Brigades International. (24 de diciembre de 1997). Acción Urgente de Paz en: La Jornada. México.
- Pérez de Nucci, Armando. (19 de noviembre de 2014). Otro de los Grandes Mitos Argentinos en *Aclaraciones de la Historia*. Argentina: WordPress Recuperado de: <https://manueldelmonte.wordpress.com/2014/11/19/otro-de-los-grandes-mitos-argentinos/>
- Pérez- Sales, Pau y Susana Navarro García. (2007). *Resistencias contra el olvido*. España: Gedisa.
- Perón, Juan Domingo. (12 de junio de 1974). Último discurso de Perón desde el balcón de la Casa Rosada [video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=OMD1YAfTiaw>
- Petrich, Blanche. (11 de mayo de 2013). Ríos Montt, Culpable de Genocidio y Delitos de lesa Humanidad. *La Jornada*. P. 20
- Petrich, Blanche. (31 de julio de 2013). Juzgar a Ríos Montt Avance pese a Todo. *La Jornada*. P. 44
- Pigna, Felipe. (s/d). El asesinato de Vandor en *El Historiador*. Argentina. Recuperado de: <https://www.elhistoriador.com.ar/el-asesinato-de-vandor/>
- Poder Legislativo República Argentina (1973) Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional en *Ruinas Digitales*. Argentina: WordPress. Recuperado de: <http://www.ruinasdigitales.com/blog/plan-trienal-para-la-reconstruccion-y-la-liberacion-nacional/>
- Portilla Benavides, Ana Cristina. (2003). *Comisiones de la Verdad en América Latina. Un instrumento necesario pero no suficiente*. Colombia: Universidad Externado de Colombia [Tesis de grado].
- Reuters. (9 de septiembre de 2015). Dictan Prisión Preventiva a Otto Pérez en Guatemala. *La Jornada*. México: Pp. 23
- Riquelme, Horacio (Editor). (1990). *Era de Nieblas. Derechos humanos, terrorismo de Estado y Salud Psicosocial en América Latina*. Venezuela: Nueva Sociedad.
- Rivas Molina, Federico. (5 de mayo de 2017). Inquietud en Argentina por un fallo del Supremo que puede acortar las cadenas de represores en *El País*. Argentina. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2017/05/04/argentina/1493920949_493398.html
- Robben, Antonius. (2007). *Political Violence and Trauma in Argentina*. Estados Unidos de América: University of Pennsylvania Press.
- Roitman, Marcos. (2013). *Historia de los Golpes de Estado en América Latina*. España: Akal.
- Romero, Luis Alberto. (2001). *Breve Historia Contemporánea de la Argentina*. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Romero, Luis Alberto. (consultado en 2016) *Historia de la Argentina* recuperado de: <https://www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/historia>
- Rovensk, Federico. (23 de diciembre de 2016). Ley del Punto Final: un puente hacia la impunidad en *La Izquierda Diario*. Argentina. Recuperado de: <https://www.laizquierdadiario.com/Ley-del-Punto-Final-un-puente-hacia-la-impunidad>

- Ruiz, Iván. (15 de junio de 2010). El austral, la moneda que se contaba en cientos de miles en *La Nación*. Argentina. Recuperado de: <https://www.lanacion.com.ar/1275264-el-austral-la-moneda-que-se-contaba-en-cientos-de-miles>
- Sabino, Carlos. (2008). *Guatemala, la Historia Silenciada (1944-1989)*. Tomo II. Guatemala: Fondo de Cultura Económica de Guatemala.
- Salazar Flores, Luis Enrique. (2000). *Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho*. El Salvador: FESPAD
- Sanford, Victoria. (2010). *La Masacre de Panzós: Etnicidad, tierra y violencia en Guatemala*. Guatemala: F&G Editores.
- Sanford, Victoria. (2012). *Violencia y Genocidio en Guatemala*. Guatemala: F&G Editores.
- Solomón, José. (17 de enero de 1997). Derecho Internacional y Derechos Humanos en *La Jornada*. México.
- Televisión Pública Argentina. (23 de mayo de 2014). Alzamiento Carapintada en Semana Santa (1987) en Televisión Pública Española. Recuperado de: <http://www.tvpublica.com.ar/articulo/alzamiento-carapintada-en-semana-santa-1987/>
- Tonon, Graciela. (27 de mayo de 2011). La Utilización del Método Comparativo en Estudios Cualitativos en Ciencia Política y Ciencias Sociales: Diseño y Desarrollo de una Tesis Doctoral en *Kairos*. *Revista de Temas Sociales*. México (Universidad Nacional de San Luis).
- Tecla, Alfredo y Alberto Garza. (1978). *Teoría, Métodos y Técnicas de la Investigación Social*. México: Ediciones de Cultura Popular.
- United States Institute for Peace. (consultado en 2016). Recuperado de: <https://www.usip.org>
- Uprimny, Rodrigo y María Paula Saffon. (2006). *Justicia transicional y Justicia Restaurativa: Tensiones y complementariedades*, en: Revista Futuros. México y Canadá. No. 15.
- Valencia Villa, Hernando. (septiembre de 2000). *El Genocidio y los Crímenes de Lesa Humanidad ante la Nueva Corte*, en: Revista de Estudios Sociales. Universidad de Colombia, Colombia. No. 7.
- Vázquez, Inéz [editora]. (2010). *Historia de las Madres de Plaza de Mayo*. Argentina: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.
- Verbitsky, Horacio. (1995). *El Vuelo*. Argentina: Planeta.
- Walsh, Rodolfo. (24 de marzo de 1977). *Carta Abierta de un Editor a la Junta Militar*. Argentina
- Yankelevich, Pablo (Coordinador). (2014). *Historia Mínima de Argentina*. México: Colegio de México.
- Zunilda, Trinidad. (2016) *Enciclopedia Virtual sobre la Argentina*. Argentina. Recuperado de: <http://www.todo-argentina.net/>

ANEXOS



Portada del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) Argentina.

COMISIONES DE LA VERDAD: HERRAMIENTAS NECESARIAS, AUNQUE INCOMPLETAS PARA
ALCANZAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
CASOS LATINOAMERICANOS DE GUATEMALA Y ARGENTINA

ANEXO -1-

Cronología Golpes de Estado en Casos de Estudio

Guatemala

- 1920- Levantamiento popular, el Congreso declara “insano” y destituye a Manuel Estrada Cabrera.
- 1930- Una sublevación militar depone y asesina al Presidente Baudilio Palma. El General Manuel Orellana Contreras se autoproclama Presidente.
- 1931- El Presidente Jorge Ubico Castañeda asume poderes dictatoriales. Se mantiene en el poder hasta 1944.
- 1944- El General Federico Ponce Vaides sustituye a Ubico.
- 1954- El Coronel Carlos Castillo Armas —establecido en Honduras— derroca al Presidente Jacobo Arbenz, apoyado por Estados Unidos.
- 1963- El general José Manuel Ydigoras es derrocado mediante un levantamiento militar dirigido por el General Enrique Peralta, que asume la presidencia.
- 1963-1986- Período de dictaduras militares consecutivamente sustituidas.
- 1993- El Presidente José Serranos Elías disuelve el Congreso.

Argentina

- 1930- El General José Félix Uriburu derroca al Presidente Hipólito Yrigoyen. Se inicia la década infame, caracterizada por el fraude electoral y la represión política.
- 1943- Los Generales Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell derrocan al Presidente Ramón Castillo.
- 1955- Los Generales Eduardo Lonardi y Pedro Aramburu y el Almirante Isaac Rojas derrocan al Presidente Juan Domingo Perón, que se exilia en Paraguay. Comienza la persecución contra el Peronismo, con fusilamientos, torturas, y represión política unidos.
- 1966- El General Juan Carlos Onganía derroca al Presidente Arturo Illia quien es expulsado de la Casa de Gobierno mediante el uso de policías antidisturbios.
- 1976- El Teniente General Jorge Videla, el Almirante Emilio Massera y el Brigadier General Orlando Agosti derrocan a la Presidente María Estela Martínez de Perón.

Fuente: Roitman, Rosenmann, Marcos. (2013). *Tiempos de Oscuridad. Historia de los Golpes de Estado en América Latina. Argentina: Akal.*

ANEXO -2-

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio

Las Partes Contratantes, considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su Resolución 96 (I) del 11 de diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena;

Reconociendo que en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas para la humanidad;

Convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la cooperación internacional;

Convienen en lo siguiente:

ARTÍCULO I. Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.

ARTÍCULO II. En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, o religioso, como tal:

- a) Matanza de miembros del grupo;
- b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
- c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
- d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
- e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

ARTÍCULO III. Serán castigados los actos siguientes:

- a) El genocidio;
- b) La asociación para cometer genocidio;
- c) La instigación directa o pública a cometer genocidio;
- d) La tentativa del genocidio;
- e) La complicidad en el genocidio.

ARTÍCULO IV. Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya se trata de gobernantes, funcionarios o particulares.

ARTÍCULO V. Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo III.

ARTÍCULO VI. Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o

ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contrastantes que hayan reconocido su jurisdicción.

ARTÍCULO VII. A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el artículo III no serán considerados como delitos políticos. Las Partes contrastantes se comprometen, en tal caso, a conceder la extradición conforme a su legislación y a los tratados vigentes.

ARTÍCULO VIII. Toda Parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas a fin de que éstos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas para la prevención y la represión de actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III.

ARTÍCULO IX. Las controversias entre las Partes contrastantes, relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente Convención, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las Partes en la controversia.

ARTÍCULO X. La presente Convención, cuyos textos en inglés, chino, español, francés y ruso serán igualmente auténticos, llevará la fecha de 9 de diciembre de 1948.

ARTÍCULO XI. La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1949 a la firma de todos los Miembros de las Naciones Unidas y de todos los Estado no miembros a quienes la Asamblea General haya dirigido una invitación a este efecto. La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

A partir del 1 de enero de 1950, será posible adherir a la presente Convención en nombre de todo Miembro de las Naciones Unidas y de todo Estado no miembro que haya recibido la invitación arriba mencionada. Los instrumentos de adhesión serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO XII. Toda Parte contratante podrá, en todo momento, por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, entender la aplicación de la presente Convención a todos los territorios o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones exteriores sea responsable.

ARTÍCULO XIII. En la fecha en que hayan sido depositados los veinte primeros instrumentos de ratificación o de adhesión, el Secretario General levantará un acta y transmitirá copia de dicha acta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI.

La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haga el depósito del vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.

Toda ratificación o adhesión efectuada posteriormente a la última fecha tendrá efecto el nonagésimo día después de la fecha en que se haga el depósito del instrumento de ratificación o de adhesión.

ARTÍCULO XIV. La presente Convención tendrá una duración de diez años a partir de su entrada en vigor. Permanecerá después en vigor por un período de cinco años; y así sucesivamente, respecto de las Partes contratantes que no la hayan denunciado por lo menos seis meses antes de la expiración del plazo. La denuncia se hará la notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO XV. Si, como resultado de denuncias, el número de las Partes en la Presente Convención se reduce a menos de dieciséis, la Convención cesará de estar en vigor a partir de la fecha en que la última de esas denuncias tenga efecto.

ARTÍCULO XVI. Una demanda de revisión de la presente Convención podrá ser formulada en cualquier tiempo por cualquiera de las Partes contratantes, por medio de notificación escrita dirigida al Secretario General. La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que deban tomarse, si hubiera lugar, respecto a tal demanda.

ARTÍCULO XVII. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI:

- a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas en aplicación del artículo XI;
- b) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XII;
- c) La fecha en que la presente Convención entrará en vigor en aplicación del artículo XIII;
- d) Las denuncias recibidas en aplicación del artículo XIV;
- e) La abrogación de la Convención, en aplicación del artículo XV;
- f) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XVI;

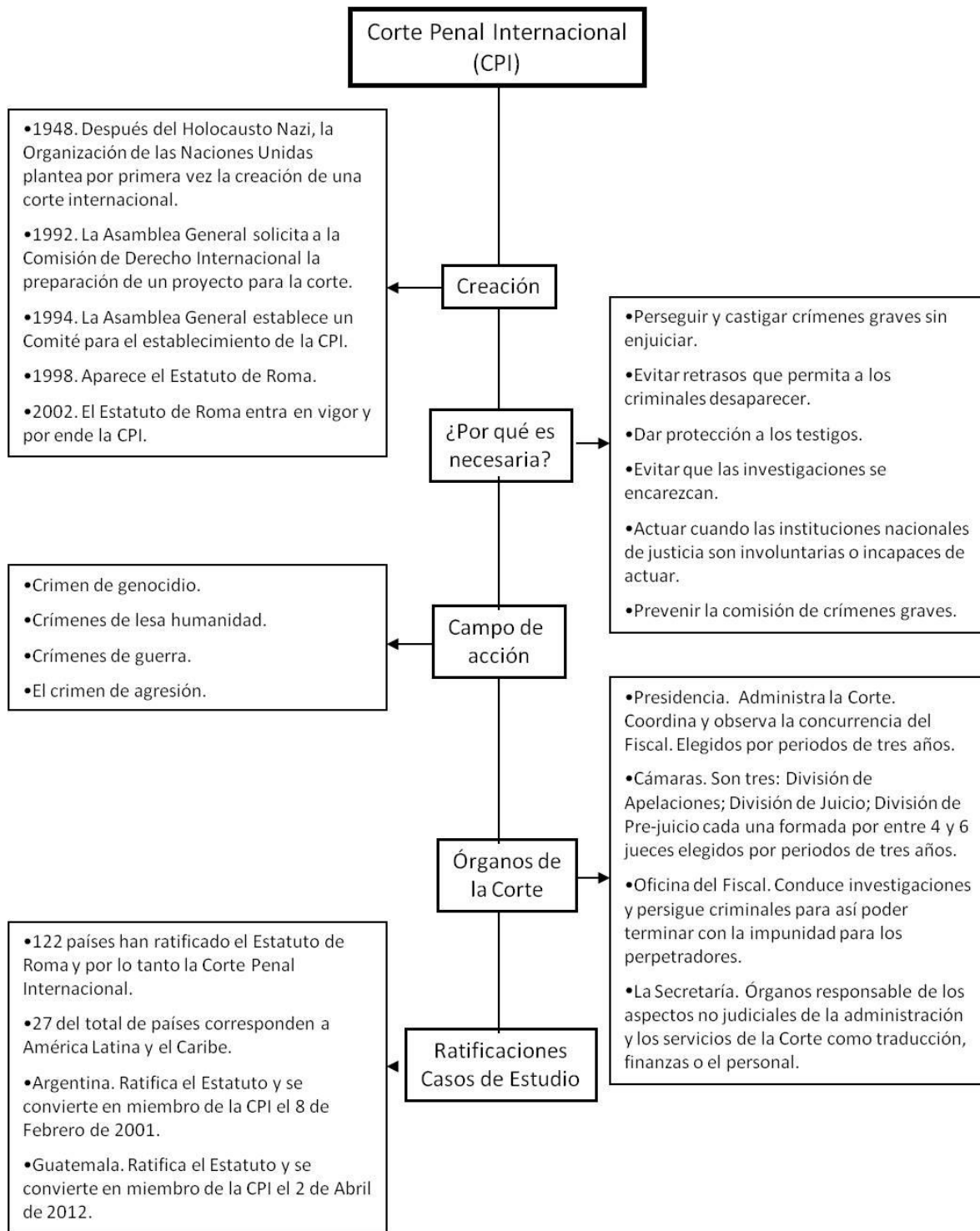
ARTÍCULO XVIII. El original de la presente Convención será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. Una copia certificada será dirigida a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI.

ARTÍCULO XIX. La presente será registrada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la fecha de su entrada en vigor.

Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1948.

ANEXO -3-

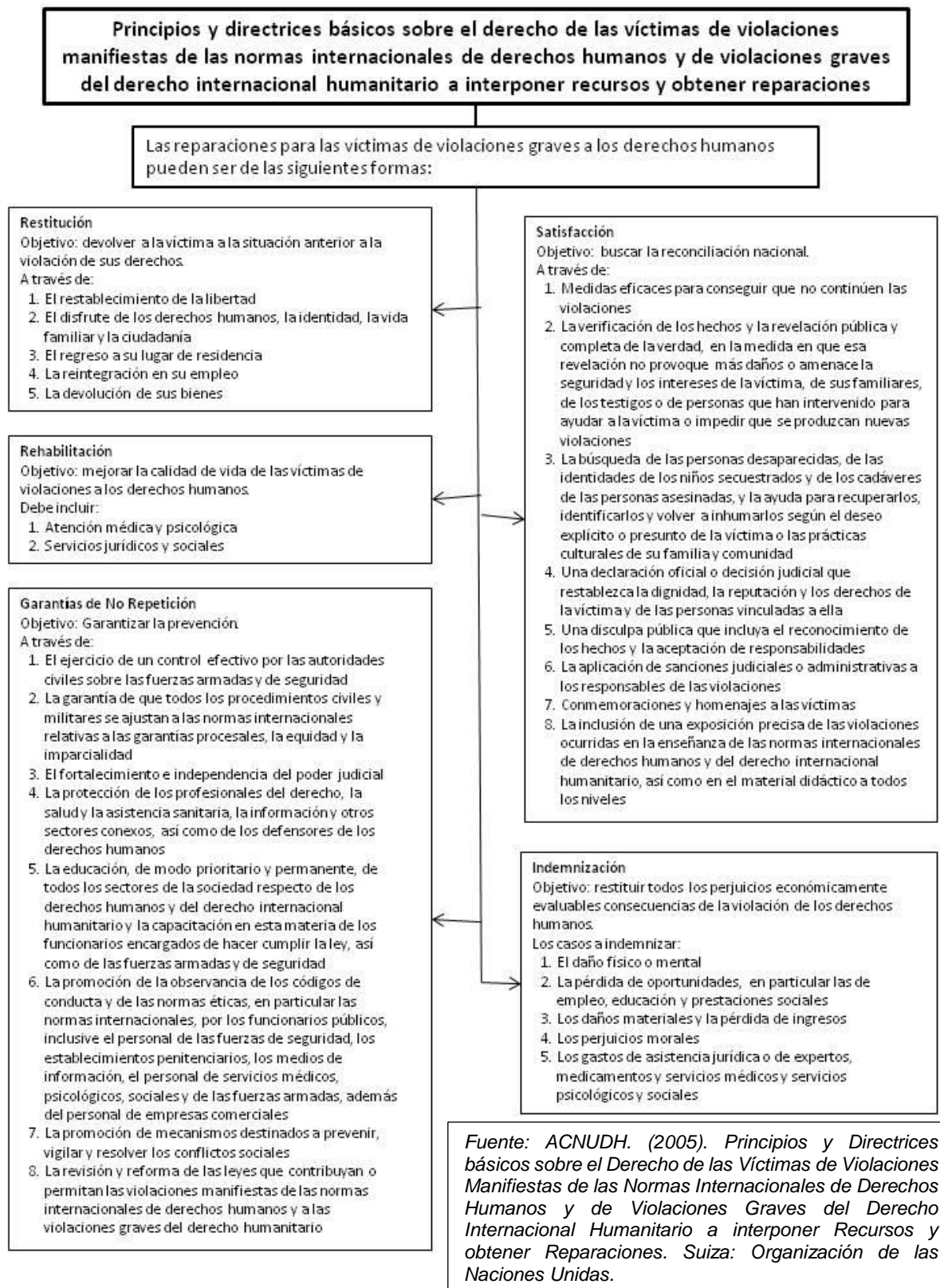
Información sobre la Corte Penal Internacional



Fuente: CCI, 2014 consultado Mayo 2014 en <http://www.icc-cpi.int>

ANEXO -4-

Información sobre los derechos de las víctimas a la obtención de reparaciones



ANEXO -5-

Información sobre los presidentes en Guatemala 1920 – 2017

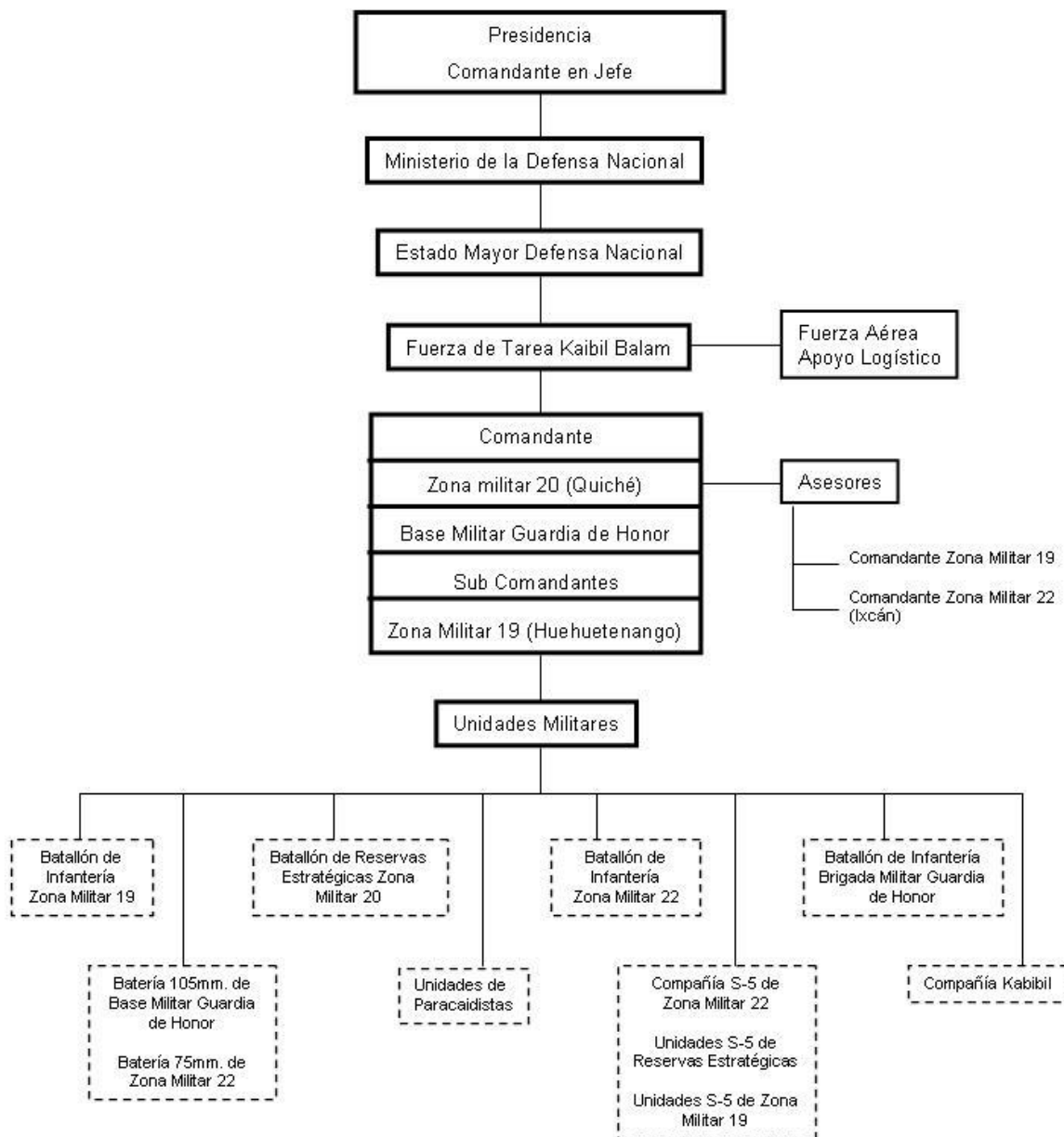
Fecha	Presidente	Cómo llega a la presidencia
1920-1921	Ciudadano Carlos Herrera y Luna	Presidente interino nombrado por la Asamblea Nacional Legislativa
1921-1926	General José María Orellana	Electo
1926-1930	General Lázaro Chacón	Designio tras muerte del General José María Orellana. Confirmado por elecciones
1930-1931	General Manuel María Orellana Contreras	Designado por el Consejo de Ministros
1931-1944	General de División Jorge Ubico Castañeda	Electo
1944	Junta militar: General Eduardo Villagrán, General Federico Ponce y General Buenaventura Pineda	Designio Legislativo ante la renuncia del General Ubico
1944	General Federico Ponce Viades	Golpe de Estado
1944-1945	Junta militar: Capitán Jacobo Arbenz, Ciudadano Jorge Toriello y Mayor Francisco Javier Arana.	Designado tras la Revolución de 1944
1945-1951	Profesor Juan José Arévalo Bermejo	Electo
1951-1954	Coronel Jacobo Arbenz Guzmán	Electo
1954	Militar Carlos Enrique Díaz de León	Presidente interino ante Golpe de Estado
1954	Juntas Militares	Consecuencia del Golpe de Estado que derrocara al Coronel Arbenz
1954-1957	Coronel Carlos Castillo Armas	Electo mediante Plebiscito
1957	Licenciado Luis Arturo González López	Presidente interino tras asesinato del Coronel Castillo Armas
1957	Junta Militar	Consecuencia del asesinato del Coronel Castillo Armas
1957-1958	Coronel Guillermo Flores Avendaño	Designio de la Junta Militar
1958-1963	General Miguel Ydígoras Fuentes	Electo
1963-1966	Coronel Enrique Peralta Azurdia	Golpe de Estado
1966-1970	Licenciado Julio César Méndez Montenegro	Electo
1970-1974	General Carlos Manuel Arana Osorio	Electo
1974-1978	General Kjell Eugenio Laugerud García	Electo
1978-1982	General Fernando Romeo Lucas García	Electo
1982-1983	General Efraín Ríos Montt	Golpe de Estado
1983-1986	General Óscar Humberto Mejía Víctores	Golpe de Estado
1986-1991	Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo	Electo
1991-1993	Ingeniero Jorge Serrano Elías	Electo

Fecha	Presidente	Cómo llega a la presidencia
1993	Ciudadano Gustavo Adolfo Espina Salguero	Presidente Interino tras la remoción por el Congreso de la República de Jorge Serrano Elías
1993-1996	Licenciado Ramiro de León Carpio	Designio por el Congreso de la República
1996-2000	Ciudadano Álvaro Arzú Irigoyen	Electo
2000-2004	Licenciado Alfonso Antonio Portillo Cabrera	Electo
2004-2008	Ciudadano Óscar Berger Perdomo	Electo
2008- 2012	Ingeniero Álvaro Colom Caballeros	Electo
2012- 2016	Oficial Otto Pérez Molina	Electo
2016- ...	Doctor Jimmy Morales Cabrera	Electo

Fuentes: Sabino, Carlos. (2008). *Guatemala, la historia silenciada (1944-1989)*. Tomo II. Guatemala: FCE DeGuate.com. (s/d). *Presidentes de Guatemala*. Consultado Mayo 10 2014, en www.deguate.com/infocentros/personajes/presidentes

ANEXO -6-

Estructura de la cadena de mando para la Fuerza de Tarea Kaibil Balam¹⁴⁹

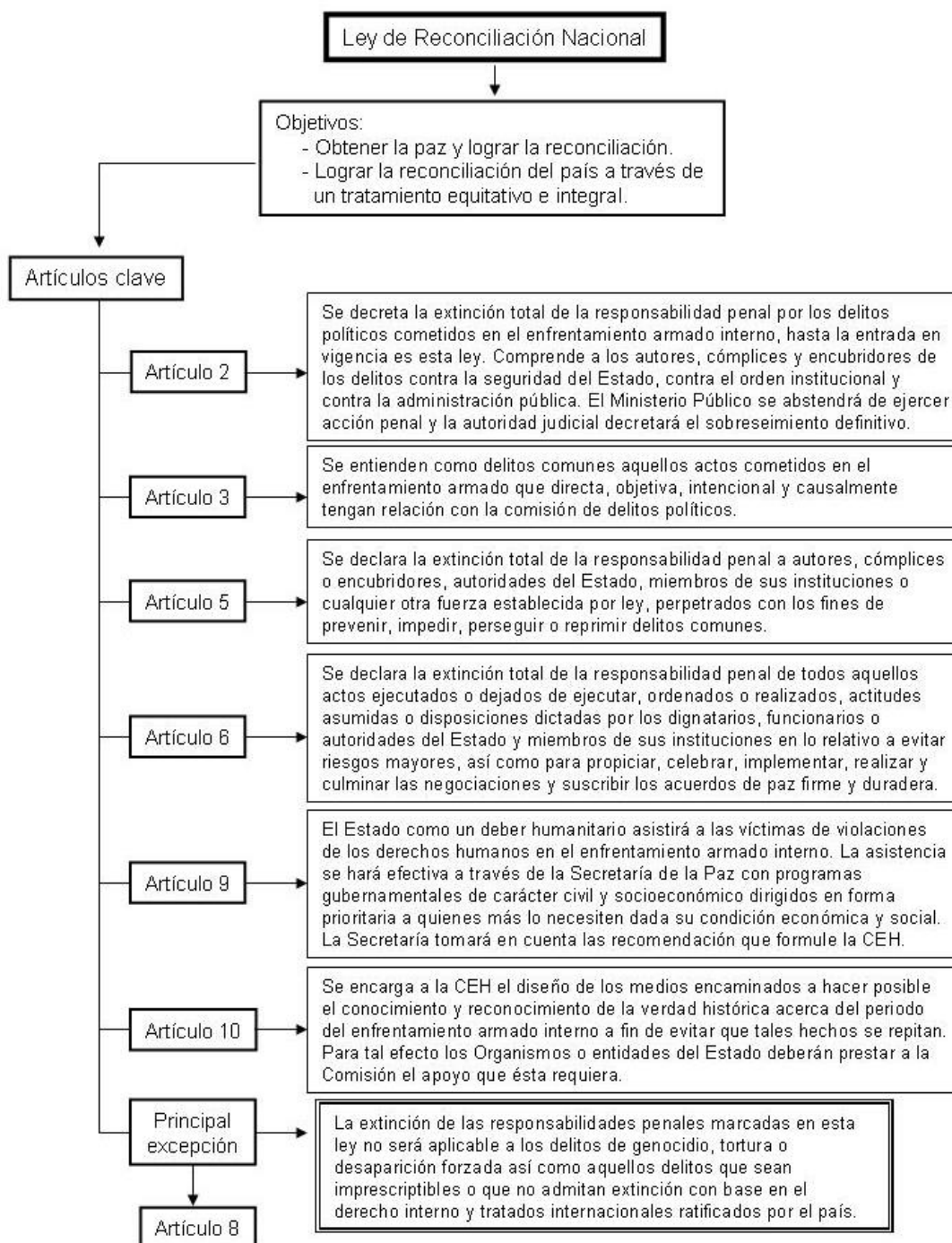


Fuente: ODHAG, 1998: 87,104. Tomo 2.

¹⁴⁹ Es de suma importancia conocer la cadena de mando directamente relacionada con la fuerza kaibil, debido a la capacidad de acción que tenían dentro de la mayor parte del territorio guatemalteco. A su vez, entendiendo esta estructura se puede tener una mejor visión de lo poco factible que resultan los argumentos de algunos altos mandos gubernamentales -algunos que ya han sido enjuiciados- sobre el desconocimiento de las acciones de estas fuerzas militares.

ANEXO -7-

Artículos relevantes de la Ley de Reconciliación Nacional¹⁵⁰



Fuente: Ley de Reconciliación Nacional; Decreto número 145-1996; 1996.

¹⁵⁰ La información contenida en la tabla muestra los artículos que se consideran más importantes para este trabajo de investigación. El contenido completo de esta ley puede encontrarse de manera electrónica.

ANEXO -8-

Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca¹⁵¹

Considerando que la historia contemporánea de nuestra patria registra graves hechos de violencia, de irrespeto de los derechos fundamentales de la persona y sufrimientos de la población vinculados con el enfrentamiento armado;

Considerando el derecho del pueblo de Guatemala a conocer plenamente la verdad sobre estos acontecimientos cuyo esclarecimiento contribuirá a que no sea repitan estas páginas tristes y dolorosas y que se fortalezca el proceso de democratización en el país;

Reiterando su voluntad de cumplir cabalmente con el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos el 29 de marzo de 1994;

Retirando su voluntad de iniciar a la brevedad un nuevo capítulo en la historia nacional que como culminación de un amplio proceso de negociación ponga fin al enfrentamiento armado, contribuyendo a sentar las bases para una convivencia pacífica y respetuosa de los derechos humanos entre los guatemaltecos;

Considerando, en este contexto, la necesidad de promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, una condición indispensable para una paz firme y duradera;

El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (en adelante “Las Partes”) acuerdan lo siguiente:

El establecimiento de una Comisión con las siguientes características:

Finalidades:

- I. Esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado.
- II. Elaborar un informe que contenga los resultados de las investigaciones realizadas y ofrezca elementos objetivos de juicio sobre lo acontecido durante este período abarcando a todos los factores, internos y externos.
- III. Formular recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y la concordia nacional en Guatemala. La Comisión recomendará, en particular, medidas para preservar la memoria de las víctimas, para fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos y para fortalecer el proceso democrático.

Período:

El periodo que investigará la Comisión será a partir del inicio del enfrentamiento armado hasta que se suscriba el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

Funcionamiento:

- I. La Comisión recibirá antecedentes e información que proporcionen las personas o instituciones que se consideren afectadas, así como las Partes.
- II. Corresponde a la Comisión aclarar plenamente y en detalle estas situaciones. En particular, analizará con toda imparcialidad los factores y circunstancias que incidieron en dichos casos. La Comisión invitará a todos los que puedan estar en posesión de información pertinente a que presenten su versión de los hechos. La no comparecencia de los interesados no impedirá que la Comisión se pronuncie sobre los casos.
- III. Los trabajos, recomendaciones e informe de la Comisión no individualizarán responsabilidades, ni tendrán propósitos o efectos judiciales.
- IV. Las actuaciones de la Comisión serán reservadas para garantizar la secretividad de las fuentes, así como la seguridad de los testigos e informantes.
- V. Al estar constituida, la Comisión hará pública su constitución y sede, por todos los medios posibles, e invitará a los interesados a que depositen su información y testimonios.

Integración:

La Comisión contará con tres miembros, éstos serán:

¹⁵¹ Este Acuerdo puede ser consultado en Internet. También está contenido en el primer capítulo del Informe *Guatemala, Memoria del Silencio* de la propia CEH.

- I. El actual moderador de las negociaciones de paz, cuya designación se solicitará al Secretario General de las Naciones Unidas;
- II. Un miembro, ciudadano de conducta irreproachable, designado por el moderador, de común acuerdo con las Partes;
- III. Un académico elegido por el moderador, de común acuerdo con las Partes, de un tema propuesto por los rectores universitarios.

La Comisión contará con el personal de apoyo que considere necesario, con las cualidades requeridas para el cumplimiento de sus funciones.

Instalación y duración:

La Comisión se integrará, instalará y empezará a funcionar a partir del día de la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera. Los trabajos de la Comisión durarán un período de seis meses contados a partir de su instalación, prorrogables por seis meses más, si así lo decide la Comisión.

Informe:

La Comisión redactará un informe que será entregado a las Partes y al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo hará público. El hecho que no se haya podido investigar todos los casos o situaciones presentados a la Comisión no restará validez al informe.

Compromiso de las Partes:

Las Partes se comprometen a colaborar con la Comisión en todo lo que fuera necesario para el cumplimiento de su mandato. Se comprometen, en particular, a crear previa la integración de la Comisión y durante su funcionamiento las condiciones indispensables para que la misma pueda llenar las características establecidas en el presente Acuerdo.

Verificación internacional:

De conformidad con el Acuerdo Marco del 10 de enero de 1994, el cumplimiento del presente Acuerdo está sujeto a verificación internacional por las Naciones Unidas.

Medidas de ejecución inmediata después de la firma del presente acuerdo:

Las Partes acuerdan solicitar al Secretario General el nombramiento a la brevedad del moderador de las negociaciones para ser miembro de la Comisión. Después de su nombramiento, este último será facultado para hacer desde ya todas las gestiones necesarias para preparar el buen funcionamiento de la Comisión una vez integrada e instalada de conformidad con las disposiciones de este Acuerdo.

Oslo, 23 de junio de 1994.

Por el Gobierno de la República de Guatemala

Héctor Rosada Granados / Antonio Arenales Forno / Mario Permuth / Amílcar Burgos Solís / General Carlos Enrique Pineda Carranza / General Julio Arnoldo Balconi Turcios / General José Horacio Soto Salán

Por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

Comandancia General

Carlos González / Comandante Rolando Morán / Comandante Gaspar Ilom / Comandante Pablo Monsanto

Comisión Político-Diplomática

Luis Felipe Becker Guzmán / Francisco Villagrán Muñoz / Miguel Ángel Sandoval /
Luz Méndez Gutiérrez

Asesores

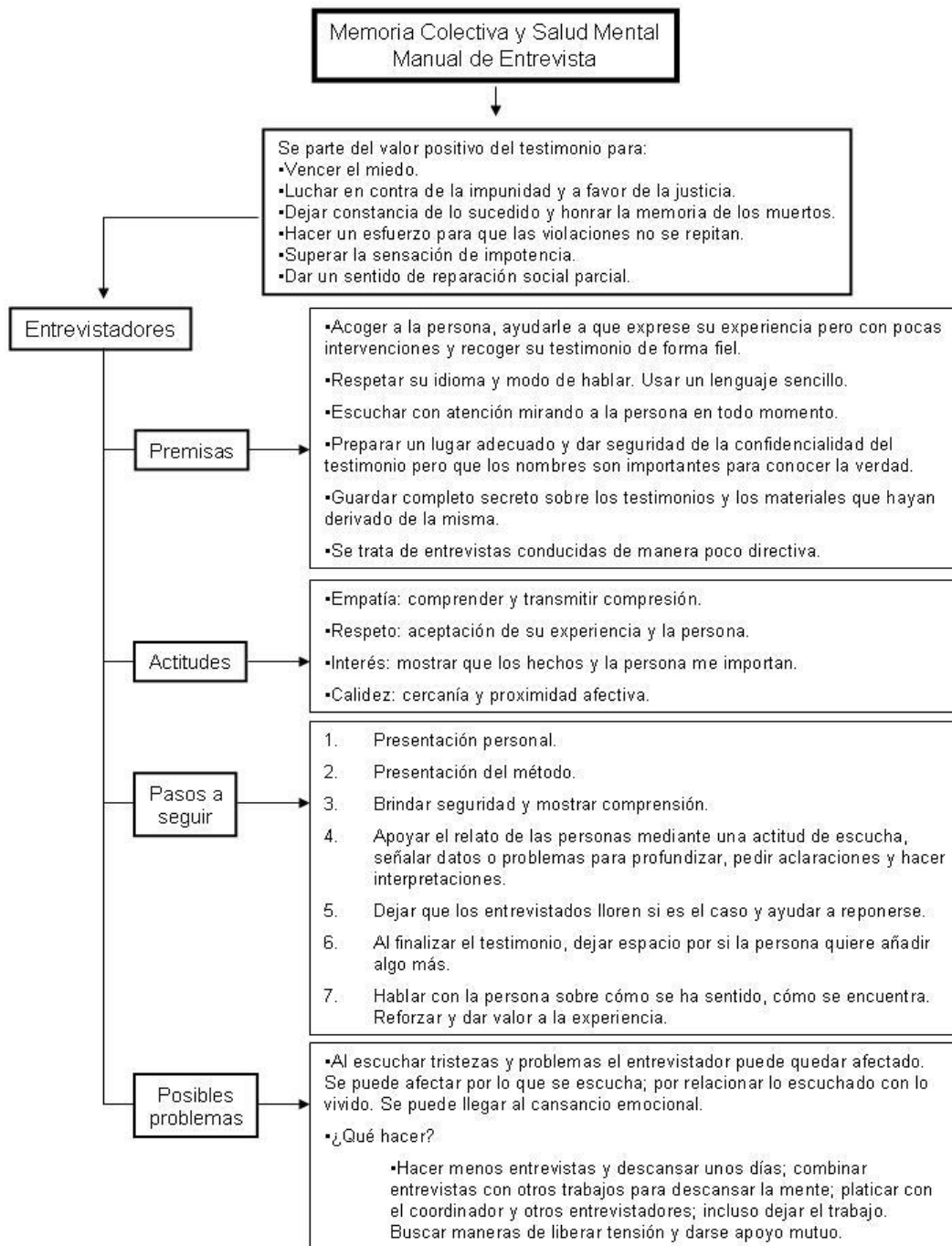
Mario Vinicio Castañeda / Miguel Ángel Reyes / Jorge Rosal

Por las Naciones Unidas

Jean Arnault / Moderador

ANEXO -9-

Manual de Entrevista¹⁵²

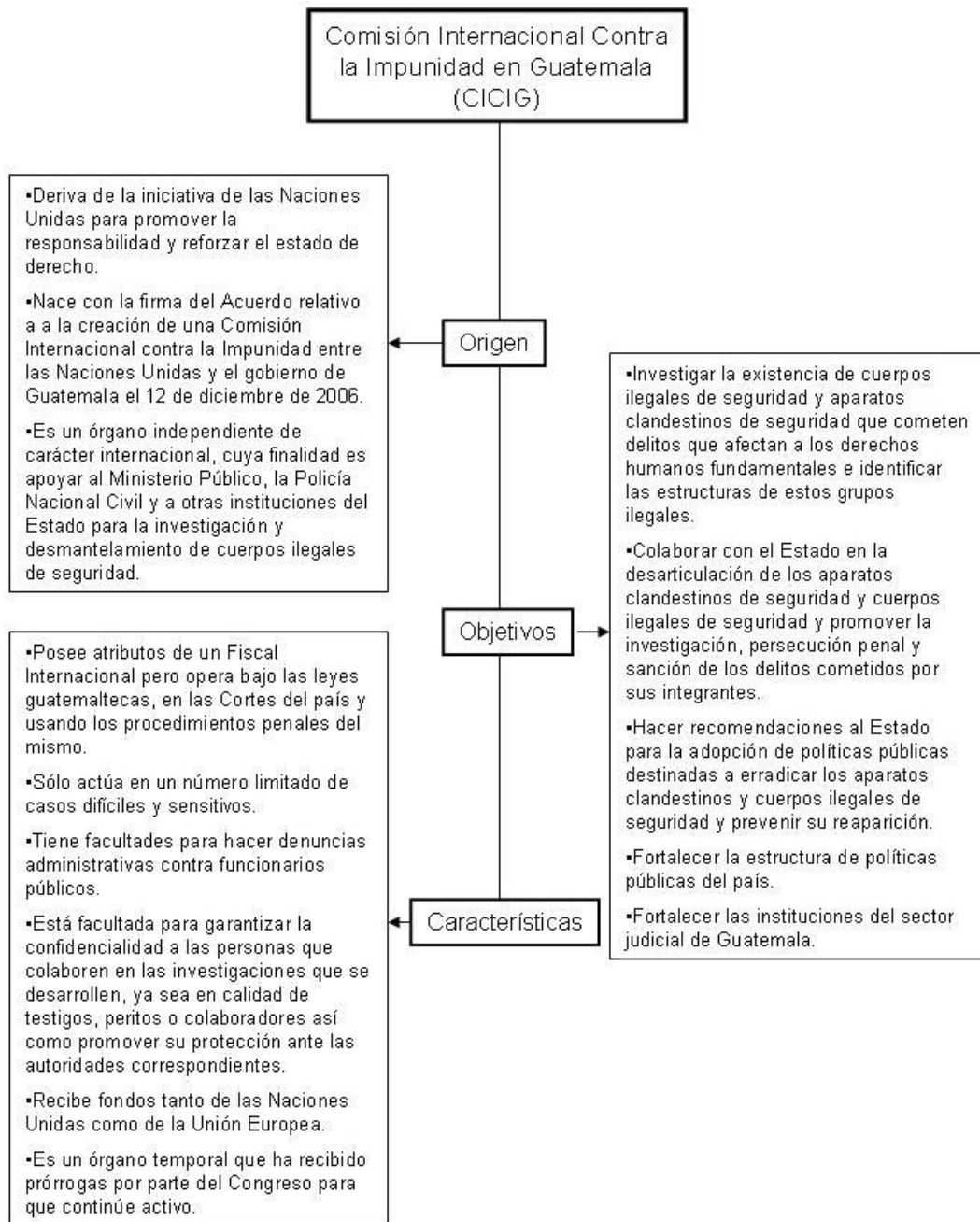


Fuente: Proyecto REMHI, 1996: Manual de Entrevista.

¹⁵² La información mencionada en el cuadro indica los aspectos relacionados con los entrevistadores. Sin embargo, el *Manual de Entrevista* realizado como parte del Proyecto REMHI por sus miembros, incluye aspectos relacionados con los entrevistados y el modo en que los entrevistadores pueden colaborar de maneras más directos con ellos.

ANEXO -10-

Información sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala¹⁵³



Fuente: CICIG, 2013 consultado noviembre 2013 en <http://www.cicig.org/>

¹⁵³ La mayor parte de los tribunales que han juzgado y sentenciado a algunos militares relacionados con el conflicto armado de Guatemala, denominados Tribunales de Alto Riesgo, dependen de este organismo que es un órgano temporal y que recibe financiamiento del extranjero.

ANEXO -11-

Presidentes de Argentina 1910 – 2017

Fecha	Presidente	Cómo llega a la presidencia
1910 - 1914	Abogado Roque Sáenz Peña	Electo
1914 – 1916	Abogado y militar Victorino de la Plaza	Asume por muerte del Presidente Peña
1916 – 1922	Ciudadano Hipólito Yrigoyen	Electo
1922 – 1928	Abogado Máximo Marcelo Torcuato de Alvear	Electo
1928 – 1930	Ciudadano Hipólito Yrigoyen	Electo
1930 – 1932	Militar José Félix Uriburu	Golpe de Estado
1932 - 1938	Ingeniero y militar Agustín Pedro Justo	Electo
1938 – 1942	Ciudadano Jaime Gerardo Roberto Marcelino María Ortiz	Electo
1942 – 1943	Abogado Ramón Castillo	Presidencia interina
1943	Militar Arturo Rawson	Golpe de Estado
1943 – 1944	Militar Pedro Pablo Ramírez	Tras deposición
1944 – 1946	Militar Edelmiro Julián Farrell	Tras renuncia
1946 – 1955	Militar Juan Domingo Perón	Electo
1955	Militar Eduardo Leonardi	Tras renuncia
1955 – 1958	Militar Pedro Eugenio Aramburu	Golpe interno de Estado
1958 – 1962	Abogado Arturo Frondizi	Electo
1962 – 1963	Abogado José María Guido	Tras deposición
1963 – 1966	Médico Arturo Umberto Illia	Electo
1966 – 1970	Militar Juan Carlo Onganía	Golpe de Estado
1970 – 1971	Militar Roberto Marcelo Levingston	Tras deposición
1971 – 1973	Militar Alejandro Agustín Lanusse	Tras destitución
1973	Odontólogo Héctor José Cámpora	Electo
1973	Político Raúl Alberto Lastiri	Presidencia interina
1973 – 1974	Militar Juan Domingo Perón	Electo
1974 – 1976	Política María Estela Martínez de Perón	Tras fallecimiento
1976 – 1981	Militar Jorge Rafael Videla	Golpe de Estado
1981	Militar Roberto Eduardo Viola	Sucesión de Junta Militar
1981 – 1982	Militar Leopoldo Fortunato Galtieri	Sucesión de Junta Militar
1982 – 1983	Militar Reynaldo Benito Antonio Bignone	Tras formación de nuevo Junta Militar
1983 – 1989	Abogado Raúl Ricardo Alfonsín	Electo
1989 – 1999	Abogado Carlos Saúl Menem	Electo
1999 – 2001	Abogado Fernando de la Rúa	Electo
2001	Abogado Adolfo Rodríguez Saá	Presidencia Interina
2002 – 2003	Abogado Eduardo Alberto Duhalde	Electo
2003 – 2007	Abogado Néstor Carlos Kirchner	Electo
2007 – 2015	Abogada Cristina Elisabet Fernández de Kirchner	Electa
2015 – 2019	Ingeniero Mauricio Macri	Electo

Fuente: Adaptación propia de Trinidad, Zunilda, 2016

ANEXO -12-

Centros Clandestinos de Detención (CCD) más reconocidos a lo largo del país¹⁵⁴

Ubicación	Nombre del CCD
Capital Federal	Olimpo Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) Club Atlético Casa del Cilindro Automotores Orletti Superintendencia de Seguridad Federal Hospital Militar de Campo de Mayo
Provincia de Buenos Aires	El Banco Logístico 10 Pozo de Banfield Brigada de San Nicolás Pozo de Quilmes o Chupadero de las Malvinas La Cacha La Casona Centro de Operaciones Tácticas Martínez Escuelita Planta Transmisora Los Plátanos Sheraton Vesubio
Córdoba	La Perla o Universidad El Embudo La Ribera Dique San Roque
Chaco	Brigada de Investigaciones de Resistencia
Tucumán	El Reformatorio El Motel Escuelita de Famaillà Ex Ingenio Lules Jefatura Central de Policía Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga Escuela de Educación Física de la Universidad
Santa Fe	Fábrica de Armas de Rosario Batallón 121
Mendoza	Compañía de Comunicación de Montaña Departamento 2 de Inteligencia El Refugio El Chalecito
Rosario	Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu"
Formosa	Regimiento N° 29 de Infantería de Monte Destacamento policial de la Capilla de San Antonio
Jujuy	Guerrero
Corrientes	Hípico

Fuente: Adaptación propia de CONADEP, 2006

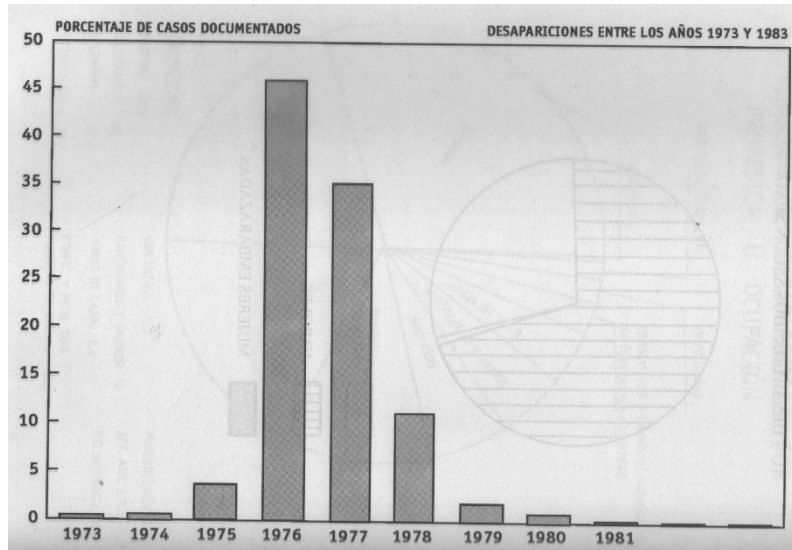
¹⁵⁴ El territorio argentino se divide en 23 provincias, cada una con su capital y la tabla contiene los principales CCD aunque no correspondan a todas las provincias, o bien, las provincias están agrupadas como las de la zona conurbada a Buenos Aires.

ANEXO -13-

Gráficas de referencia sobre Desaparecidos

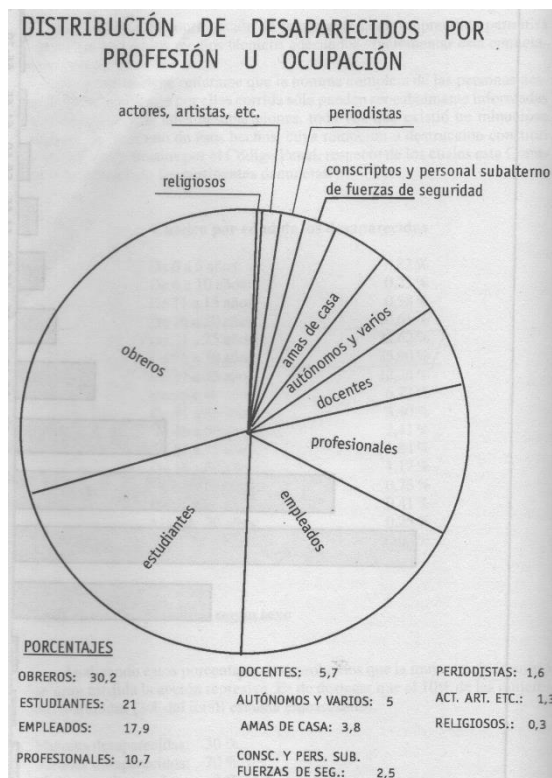
Desapariciones entre los Años 1973 y 1983

Fuente: CONADEP, 2006: 302



Desapariciones por Profesión u Ocupación

Fuente: CONADEP, 2006:300



Anexo -14-

Aspectos clave dentro de la *Carta Abierta de un Editor a la Junta Militar*

La Carta contiene seis puntos. Los últimos dos tratan elementos de índole económico; sin embargo, los primeros cuatro hablan de cuestiones sociales. La relevancia de la carta se da por el momento y el tono en que el editor Rodolfo Walsh envía un mensaje a la Junta Militar. Los contenidos generales de los cuatro primeros puntos se presentan a continuación:

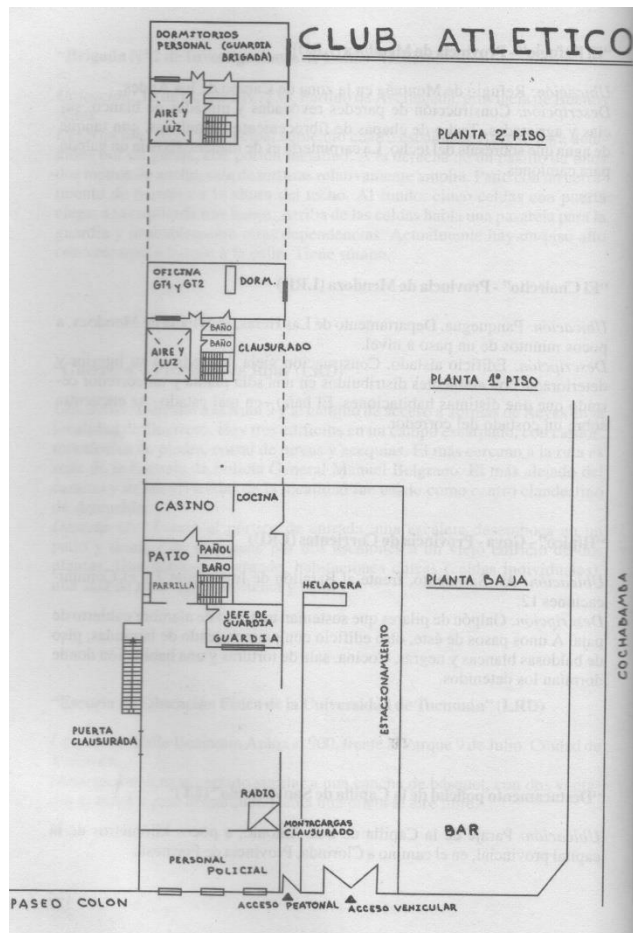
PUNTO 1.	Refiere a la manera en que debe de expresarse -de manera clandestina- debido a la censura de prensa, persecución a intelectuales, asesinato de sus amigos, allanamiento de su casa y la pérdida de su hija. Termina con un cuestionamiento sobre la legitimidad del régimen.
PUNTO 2.	Acusa a la Junta Militar de la violencia que impera el país. Establece cifras como “quince mil desaparecidos, diez mil presos, 4 mil muertos y decenas de miles de desterrados. Especificando que el gobierno no ha dado respuesta a alrededor de 7 mil <i>habeas corpus</i> (Sin embargo, no hay ninguna fuente que determine el origen de esas cifras).
PUNTO 3.	Cuestiona a la Junta Militar por ocultar los nombres de las personas apresadas, que más que presos han sido secuestrados por el modo en que ha sucedido. Aunque, a su vez, acusa al gobierno por fusilamientos.
PUNTO 4.	Responsabiliza a la Junta Militar por las entre mil quinientas y 3 mil quinientas personas han sido masacradas. Además de la prohibición para que estas noticias lleguen a la gente, pero los cuerpos hallados delatan sus acciones.

Fuente: Adaptación de la autora de Walsh, 1977.

Anexo -15-

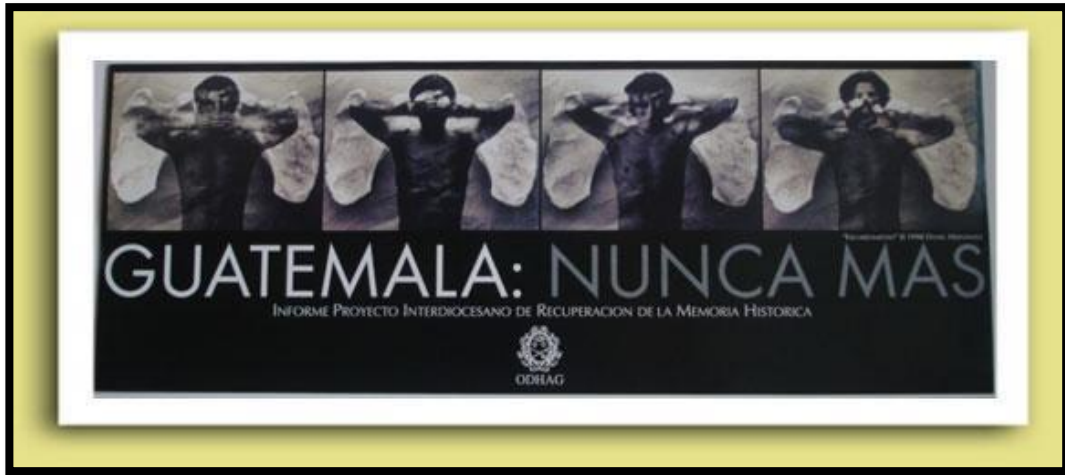
Ejemplo de planos contenidos en el informe Nunca Más

Los siguientes planos muestran cómo era el Centro de Detención Clandestino del Club Atlético, ubicado en Buenos Aires, con base en los testimonios de quienes estuvieron presos ahí o participaron como perpetradores.



Fuente: CONADEP, 2006: 128

APÉNDICES



Portada del informe *Guatemala: Nunca Más* – Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica derivado del trabajo de la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala. Guatemala.

COMISIONES DE LA VERDAD: HERRAMIENTAS NECESARIAS AUNQUE INCOMPLETAS PARA
ALCANZAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
CASOS LATINOAMERICANOS DE GUATEMALA Y ARGENTINA

APÉNDICE #1

ENTREVISTA

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE GUATEMALA
(FAMDEGUA)
BLANCA HERNÁNDEZ¹⁵⁵
ENERO 25, 2013.

¿Cómo es que de ser ama de casa te conviertes en activista?

Oscar David Hernández Quiroa es el nombre de mi hijo, desaparecido el 23 de Febrero de 1984; se lo llevaron cuando iba hacia su trabajo, era bombero. Supimos cuando salió de casa pero ya nunca llegó a trabajar. Yo le llevaba algo para cenar todos los días junto con su esposa, cuando dijeron que no llegó ese mismo día lo fui a buscar a la policía. Dijeron que no estaba, tomaron los datos, fui a hospitales, morgues... Lo más triste y frustrante es que sí sabían quién era, un militar dijo después de un par de días "Ah! El bomberito, ¿no?" Todos los días lo fuimos a buscar, dejó a su esposa y a mi nieto que tenía 1 o 2 años. Buscamos diario en hospitales, morgues, destacamentos militares, con la policía y así fue como nos empezamos a conocer. Muchos padres nos encontrábamos de manera recurrente, nos pasábamos información y así empezamos a hablar entre nosotros y a conocer nuestras historias. Yo he aprendido gracias a mi hijo, he tenido dos infartos pero no me voy a morir hasta encontrar a mi hijo.

¿Los padres que se encontraron formaron FAMDEGUA?

No, tiempo después de que nos fuimos encontrando y conociendo formamos un grupo llamado Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y, así, más padres nos contactaron. Entonces pasábamos la información y nos asesorábamos para poder denunciar las desapariciones. Pero un día, a finales de los 80's, el gobierno empezó a contactar a miembros para que formaran un partido político. Un buen día, el líder del grupo dijo que debíamos estar cerca del gobierno y entonces el objetivo se había perdido. Algunos se quedaron y otros nos fuimos. En 1992, los que nos fuimos del GAM nos organizamos y formamos esta organización. El objetivo es (hasta la fecha) exigir justicia al Estado y que haga una investigación sobre los más de 40,000 secuestros y desapariciones forzadas.

¿Cómo es FAMDEGUA hoy?

Hemos crecido, pero empezamos solamente 5 personas. Sólo un papá el resto mamás de desaparecidos. El grupo se ha mantenido pequeño, pero ahora trabajamos en conjunto con otras organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, pero sobre todo con la Asociación Forense de Guatemala. Trabajamos para cumplir con 5 objetivos: hacer denuncias sobre violaciones a derechos humanos; buscar personas desaparecidas; hacer exhumaciones; socializar las experiencias y presionar para que las demandas de justicia sean atendidas. Nuestro trabajo, ahora, radica más en buscar a personas que han venido a reportar como desaparecidas en las exhumaciones y colaboramos para entregar los restos a los parientes.

¿Cuál es el proceso para que ustedes puedan ayudar a una persona? ¿Hay campañas?

La gente nos conoce, ha oído hablar de nosotros y entonces se acercan a nuestra oficina. Tenemos ahora formatos en donde la gente nos indica, a través de un dibujo, particularidades de sus parientes y así es más fácil de localizar. Hacemos una entrevista minuciosa y pedimos que nos traigan fotos. Hemos quienes nos acordamos, incluso de cómo iban vestidos nuestros hijos, y esto también lo facilita. Hemos encontrado en

¹⁵⁵ Blanca Hernández es una de las fundadoras de la Asociación, así como familiar de un desaparecido -su hijo- a quien busca desde 1984 a la fecha.

las fosas gente vestida y se ha conservado la ropa, joyería, documentos de identidad enmicados, dientes de oro, etc.; esto es de gran utilidad y hemos entregado muchos restos a sus familiares. Yo sigo buscando a mi hijo.

¿La cantidad de denuncias ha disminuido con el paso de los años? ¿La gente se da por vencida?

Las denuncias varían. Por ejemplo, hace un año que se encontró la fosa de Cobán y, entonces, cuando hacen esos hallazgos la gente que de repente se olvida, le revive la esperanza y entonces vienen a hacer su reporte y podemos buscar. En Cobán dijeron que había 40 cuerpos y llevamos exhumados más de 500; hay posibilidades de encontrar a los nuestros. En mi caso, encontramos a un muchacho que habían desaparecido el mismo día que mi hijo, pero a mi hijo se lo llevaron por la tarde y al él se lo habían llevado por la mañana. La gente ha vuelto a acercarse a la organización buscando ayuda a raíz de este caso; entonces creo que esto quiere decir que, aunque la gente aparente tener memoria corta, el dolor permanece. Si en realidad le hubieran dado vuelta a la página no considerarían la opción de encontrar a sus parientes.

Los reportes Guatemala Nunca Más y Guatemala Memoria del Silencio, ¿qué opinión tienes de ellos?

Todos los documentos que se han publicado como resultado de las investigaciones han sido muy importantes para la sociedad guatemalteca. El reporte del REMHI ha sido muy útil porque de hecho ahora lo están utilizando para los juicios. No se puede utilizar como prueba en sí, pero se puede utilizar como prueba siempre y cuando la persona que dio testimonio esté ahí físicamente. Entonces se le considera como que corrobora su testimonio. El reporte *Guatemala, Memoria del Silencio* de la CEH ha sido útil, pero no ha sido tan aprovechado.

Creo que hizo falta divulgar la información obtenida entre las comunidades de los departamentos más alejados, pues hay gente que no denuncia porque no sabe que hay más víctimas y que puede obtener ayuda. También faltó trabajo con el Ministerio de Educación para que la información y este pedazo de la historia -que no es la mejor- pero que es parte del país, se difunda como parte de la educación escolar asegurando que no se olvide, que se mantenga en la memoria y también que la gente esté consciente de lo que pasó, para que no se repita. No hubo un seguimiento adecuado.

¿Crees que el programa de resarcimiento ha funcionado?

El programa de resarcimiento, que fue uno de los que más sonaron, no funcionó porque agarraron el dinero para un programa denominado Bolsa Solidaria, que es la entrega de despensas a cambio de empadronarse en el partido político que entregaba las despensas. De hecho, este programa lo ejecutó el presidente Álvaro Colom que buscaba reelegirse a través de su esposa.

¿La sociedad de Guatemala ha sanado?

Yo creo que eso ya no se puede. La desaparición forzada es el peor crimen. Si se asesina se puede hacer un funeral para la víctima y se le da una sepultura digna. Pero con un desaparecido el duelo no termina hasta que se encuentra, pero, ¿por dónde empezar a buscar? El tejido social se rompe por completo con las desapariciones forzadas porque el gobierno hacía creer que la gente secuestrada era porque estaba metida en algo malo, entonces la misma familia y los amigos empezaban a desconfiar de los afectados y dejaban de relacionarse porque temían que los relacionaran entre sí y que algo les fuera a pasar también. Incluso se acusaban entre familiares. Hasta hoy, hay familias que no han vuelto a reunirse. Encontrar a los suyos, pero, sobre todo, que haya justicia, tal vez ayude.

APÉNDICE #2

ENTREVISTA – TESTIMONIO DE VIDA-

PUEBLA, MÉXICO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

CARLOS FIGUEROA IBARRA¹⁵⁶

MARZO 21, 2013.

Tu caso es significativo porque además de estudioso del tema, eres víctima de la violencia. Tengo que hacer la pregunta retórica de ¿en qué estabas metido?

Es una pregunta interesante porque en efecto buena parte de la represión pudo haber sido hecha contra gente que no estaba involucrada; que estaba en el lugar y momento equivocado sobre todo en las cuestiones de terror masivo. Mucha gente fue muerta simplemente porque vivía en una comunidad indígena y era sospechosa de que apoyaba a la guerrilla. Pero el terror selectivo estaba dirigido a militantes del movimiento revolucionario o a personas que se tenían elementos plausibles de que estaba relacionados.

Pero por ejemplo la Universidad de San Carlos sufrió embates terribles de la represión, y no porque se tomara una clase de marxismo te hacía revolucionario, ¿qué pasó entonces?

Sí hubo terror masivo; por ejemplo, cuando la guerrilla mató a un jefe policiaco de apellido Natarén; inmediatamente fueron a matar a estudiantes que estaban esperando el autobús a las afueras de ciudad universitaria. Pero la universidad se consideraba un activo de la insurgencia porque fuerzas progresistas habían llegado a la rectoría de la universidad; porque en las facultades había gente del movimiento revolucionario; porque había programas de estudio críticos como marxismo y se consideraba como una labor de adoctrinamiento que formaba parte de las actividades subversivas. El problema es que la acción contra la universidad era hecha desde el punto de vista militar contra población que no tenía armas en la mano.

¿En realidad tenían elementos plausibles o era de “oídas”?

No digo que siempre los hayan tenido, pero al menos los asesinados que conocí todos tenían alguna vinculación con el movimiento revolucionario o con un sindicato o sociedad estudiantil en donde hubiera presencia de este movimiento.

En mi caso, te digo que desde los 21 años fui militante del Partido Guatemalteco del Trabajo que es el Partido Comunista de Guatemala y mi padre fue militante desde 1951 hasta su muerte. Mi madre no era pero la mataron por estar junto a él. En el momento en que empecé a ser perseguido era porque ya había escrito libros y ya era de alguna manera conocido por mis escritos, por mis conferencias, por mi docencia a pesar de que sólo tenía 28 años; además de militante del partido. Me hacía un objetivo visible. En febrero de 1979 tuve un primer indicio de que habría alguna acción represiva contra mí. Me salvé de esa oportunidad porque no llegué.

¿Cuál fue el indicio de que era inminente tu persecución?

En la casa donde yo dormía se postraron en las cuatro esquinas hombres con bolsitas de papel en donde traían armas. Me estaban esperando. Por fortuna yo esa noche no llegué porque fue la noche en que mataron a un compañero de partido, Manuel Andrade Roca. No llegué por eso, pero también porque después de ese asesinato (una noche antes), vi que la represión era muy grande. Aun así logré sobrevivir pero con una vida muy inestable. Hasta Octubre de ese año cuando el Ejército Secreto Anticomunista me amenazó de muerte junto con otras 7 personas.

¹⁵⁶ Carlos Figueroa Ibarra es profesor investigador del Posgrado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además de Doctor en Sociología y exiliado guatemalteco en México.

¿La amenaza fue directa?

Llegaron a la Escuela de Ciencias Políticas, que era donde daba clases, en el escritorio de un académico le fueron a dejar ocho cartas individualizadas, una dirigida a él en donde le daban 24 horas para repartir las cartas a los amenazados o lo matarían. Fuimos amenazados 7 personas, de ellas lograron matar a 3: a Julio Alfonso Figueroa (director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales donde yo trabajaba), Ricardo Juárez (maestro de la Escuela de Ciencia Política) y después apareció el cadáver a Jorge Romero Nery (Director de la Escuela de Ciencias Políticas) quien había sido reportado como desaparecido. Los cuatro que nos salvamos fueron porque cambiamos nuestra vida totalmente y luego salimos al exilio. Yo salí al exilio el 20 de abril de 1980. Yo me despedí de mis padres en el aeropuerto, mi padre insistió mucho en que yo debía irme y tres semanas después el esposo de mi hermana que estaba en situación de peligro también se tuvo que ir.

¿Tu hermana también se quedó?

No, mi hermana se quedó junto con mi primera esposa y mi hijo. Yo salí el 20 de abril, el viernes 6 de junio de 1980 a las 10am de ese año, mis padres salieron de su casa y pocas cuadras después de la casa los interceptó un comando con varios autos, incluso se habla de un helicóptero que siguió la escena y fueron barridos con fuego de metralla. Dicen que mi padre se dio cuenta de que alguien lo estaba vigilando y trató de estacionar el carro y meterse a la casa de alguien que conocía pero no le dio tiempo, fue una cacería. Yo no pude ir al entierro, porque era sentido común que me iban a estar esperando, como efectivamente sucedió. Mi hermana me contó que al velorio llegó gente que dijo ser agentes del seguro buscándome, mentiras, estaban viendo si yo había llegado para matarme ahí mismo. La prueba de eso fue que dos días después mataron a un abogado que no tenía nada que ver con el movimiento revolucionario pero tuvo el infortunio de llamarse Carlos Humberto Figueroa; yo me llamo Carlos Alberto Figueroa y era tanta la masacre y la muerte de gente que yo creo que hasta tenían equivocaciones, detectaron una persona con el mismo nombre y la mataron. Incluso la muerte de mis padres tuvo un antecedente una semana antes, porque mataron a un matrimonio de psicólogos que vivían en la misma colonia y tenían un auto parecido. Por cierto, he tenido oportunidad de conocer a una de las hijas de ese matrimonio recientemente, les cambiaron la vida sin motivo, algo verdaderamente dramático.

¿Cómo cambió el entorno familiar con la muerte de tus padres?

El entorno quedó destruido totalmente, yo estaba en el exilio, mi cuñado también, mis padres muertos, mis hermanos tuvieron que refugiarse una semana después porque el hostigamiento de la policía judicial era insostenible y temían por su vida. Estuvieron asilados en la embajada de Bélgica, dejando bienes, dejando todo para proteger su vida. Estuvieron un tiempo ahí hasta que a través de una negociación diplomática salieron del país pero no se fueron a Bélgica sino a México.

¿Ya ningún miembro de la familia vive en Guatemala?

No, la familia nuclear nos fuimos dejando todo. Yo pasé doce años sin poder regresar a mi país, exiliado. Regresé hasta 1992 cuando se presentó un libro y que cuando me fueron a dejar al hotel me estaban esperando en un auto, se bajaron a mi llegada, pensé que me iban a matar pero sólo era amedrentarme. Esta fue la última vez que yo tuve alguna amenaza directa. Ya había recibido una amenaza de muerte en el exilio. A partir del '92 ya puedo ir y venir a Guatemala, considero que en ese año mi exilio terminó.

¿Cuál es tu sentir como familiar de asesinados políticos?

Hay varios sentidos. En primer lugar, yo no tengo odio porque tengo una explicación racional para lo que pasó: el terrorismo de Estado arrebató miles de vidas de personas, entiendo que como mi padre me lo enseñó el enemigo en estas luchas no es personal sino social, quien mató a mis padres no lo hizo por otra cosa que no fuera una cuestión política, por una necesidad perversa. Lo que sí me genera molestia –te lo voy a decir francamente- la injusticia que existe en mi país de origen y en mi patria de adopción. Aunque no tengo

un odio, no significa que no piense que es necesario el castigo de los genocidas pero no por la muerte específicamente de mis padres.

A mí me costó muchos años procesar todo este asunto, tuve aletargado todo esto muchos años. Tuve una primera depresión cuando cumplí 40 años, después estuve dos años en psicoanálisis para procesar lo sucedido. Creo que esto me sirvió pero también creo que esto no se termina de resolver nunca. Cuando cumplí 53, que era la edad que tenía mi padre cuando lo mataron, ese día que cumplía años amanecí con una depresión terrible; era una sensación terrible. En octubre de 2011 cuando se hizo el homenaje a mis padres tuve otro conato de depresión e inmediatamente fui al médico para prevenir algo más grave y que me medicaran.

¿Has buscado justicia para tus padres?

La familia no ha buscado el castigo de los culpables específicos porque no tenemos datos específicos. Alguna vez alguien me escribió que el hechor material era un policía que le decían “el gato ruyero” que también lo mataron porque los que mataban eran material desechable. Muy probablemente el autor intelectual de la muerte de mis padres podría haber sido el General David Cansinos que era el Jefe del Estado Mayor Presidencial y que dirigía acciones represivas en la ciudad o bien el Ministro de Gobernación Donald Álvarez que también tenía a su cargo este tipo de cosas. No tengo claro esto, pero fue durante el mandato de Lucas García.

¿Cómo tomaron este evento de que el gobierno pidiera perdón? ¿Para qué el perdón del Estado?

Nosotros aceptamos el homenaje y solicitud de perdón por parte del Estado. Yo creo que el aspecto positivo es que el Estado asume una conducta criminal y asume que aquellos que asesinó, no merecían morir. Entonces, eso desde el punto de vista del resarcimiento moral es muy importante. La familia aceptó este planteamiento porque el gobierno de Álvaro Colom, no tenía nada que ver con los hechos; en realidad, su familia también padeció represión, por eso aceptamos esto. Lo que nunca hubiéramos aceptado el perdón con un personaje como el presidente actual.

¿Cuál es tu perspectiva hoy, como sobreviviente y víctima?

Mi conclusión desde el punto de vista personal es que uno no puede quedar igual después de una experiencia como ésta. El ser sobreviviente implica muchas cosas, entre ellas lidiar con la culpa de estar vivo. A pesar de eso, yo tengo la firme convicción de que uno puede volver a ser feliz, y poder contarte mi experiencia es un privilegio porque buena parte de la gente de mi generación no llegó ni a los 30. Yo nunca fui guerrillero, pero en Guatemala no hacía falta ser guerrillero para estar en peligro constante, entonces es una fortuna poder seguir haciendo cosas, escribir libros, y participar en actividades que colaboran con la memoria. Es una fortuna, porque hay sobrevivientes que quedaron muy dañados, viviendo angustiados todo el tiempo. Es comprensible el drama humano, pero estar vivo es una oportunidad que la fortuna me dio para procesar todo esto, vivir con ello y ser feliz.

APÉNDICE #3

ENTREVISTA

PUEBLA, MÉXICO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

CARLOS FIGUEROA IBARRA¹⁵⁷

MARZO 21, 2013.

¿Si se puede hablar de genocidio? ¿Qué base tiene el gobierno para decir que no sucedió?

Sí se puede hablar de genocidio. El gobierno tiene una base sustentada en cuestiones legales porque la convención de las Naciones Unidas sobre genocidio que se emitió en 1948 habla de que puede haber genocidio cuando hay una matanza de un grupo nacional, racial, étnico o religioso. La convención no habla de grupos políticos, esto porque hubo gobiernos como el de la Unión Soviética que se opusieron a esto. Entonces, el planteamiento de genocidio está limitado. La negación del genocidio se basa entonces en que efectivamente hubo excesos de ambas partes pero en ninguno de los casos se trató de acabar con ningún grupo nacional, racial, étnico o religioso porque incluso dentro de las fuerzas armadas había indígenas. El genocidio en Guatemala no tuvo un efecto de etnocidio, no fue una limpieza étnica, fue una lucha metida en el anticomunismo. En Guatemala se puede hablar de politicidio. Hubo genocidio en Guatemala porque hubo matanzas a gran escala.

¿El resultado del juicio en contra de Ríos Montt será lo más importante o la mera posibilidad de que se haya llevado a juicio a un personaje de esta envergadura?

Yo pienso que es un hito histórico el que se haya aceptado judicialmente el delito de genocidio como un delito que hay que probar; simbólicamente es muy importante porque es un mensaje que se le manda a los genocidas del pasado, presente y del futuro. Pero creo que sería un aspecto muy negativo que Ríos Montt librara esta situación porque desmoralizaría mucho y debilitaría el elemento de genocidio como una causa judicial. Por ejemplo, si la resolución fuera que no es culpable por el delito de genocidio porque no existió el genocidio en Guatemala sería demoledor para las causas judiciales porque se sienta un precedente jurídico. Si existió el genocidio pero no se puede probar que Ríos Montt participó sería muy duro porque confirmaría la impunidad pero no quedaría desvirtuada la posibilidad de continuar con otros casos y relacionar a alguien más con el genocidio.

En el momento del conflicto, ¿cuál era el sentir de la sociedad ladina sobre las masacres que se cometieron? ¿Estaban conscientes de lo que estaba pasando?

Yo pienso que no tenían conocimiento pleno porque las masacres se hicieron siempre en lugares rurales alejados de carreteras o aunque no estuvieran lejos de las carreteras, en un país que estaba controlado férreamente por el ejército y que el flujo de información no existía. Las noticias que se supieron de las masacres fueron noticias que llegaron -por ejemplo a México o a otros países- por medio de los canales que tenía la insurgencia. La insurgencia tenía contacto con distintos grupos guerrilleros y mandaban información de lo que estaba sucediendo. Se mandaba información a organizaciones afines de España, México y otros países. En el momento del conflicto, se sabía más en el exterior sobre lo que estaba sucediendo en Guatemala que en el mismo país. En Guatemala la imagen que se tenía era que Ríos Montt había llegado para cambiar las cosas y no ser tan represivo porque Ríos Montt decía que no habría desaparecidos que todo se regiría a través de la ley por eso estableció Tribunales de Fuero Especial.

Tuve la oportunidad de entrevistar de manera muy casual a una fuente que expresaba lo injusto que era llevar a juicio a Ríos Montt, porque él les decía que sólo se mataba a los guerrilleros nunca a civiles, ¿qué opinas?

¹⁵⁷ Carlos Figueroa Ibarra es profesor investigador del Posgrado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además de Doctor en Sociología y exiliado guatemalteco en México.

Yo no sé de dónde esta fuente saca esto. No era el objetivo de Ríos Montt nada más, pero el objetivo del gobierno, el Estado y el alto mando del ejército era matar civiles para “quitarle el agua al pez”; es decir, poder romper con todas las bases de apoyo civiles que tenía la insurgencia, fuentes de reclutamiento y abastecimiento. Era lógico que tenían que atacar a la población civil para poder extinguir a la guerrilla y además para poder implantar el terror. Finalmente, se trata de un principio militar de Terrorismo de Estado, se trata de infundir miedo a través de la violencia sin hacer distinción de efectivos militares y población civil. Se trata de una estrategia estructural contrainsurgente.

Durante la época de Ríos Montt, se incrementó de manera muy importante el número de efectivos en el ejército, ¿se obligaba a la gente a involucrarse en el ejército?

Había gente que la “mandaron” para estar en esa guerra, pero también había gente entusiasta de la represión y es imposible saber en qué caso estaba cada persona porque cada quien da su versión a modo para evadir su responsabilidad. Lo que sí es cierto, es que en el ejército había un adoctrinamiento muy fuerte de los soldados en donde la idea era infundirles todo el temor y el odio anticomunista para que pudieran cumplir con sus tareas. Es básico que tenían que ganar mentes y corazones para que la moral de combate y represiva fuera eficaz. Además, también en el periodo de Ríos Montt, llegaron a su punto más alto la participación de las PAC que era población civil de los lugares que muchos estaban a la fuerza y otros eran entusiastas y otros hicieron uso de las PAC para hacer justicia por mano propia o quedarse con tierras. Hubo muchos conflictos locales dirimidos por esas masacres.

En términos de justicia, ¿hacer juicios, encarcelar a los soldados de bajos mandos es lo adecuado?

Se ha encarcelado a soldados de bajos mandos o más bien a los ejecutores de la violencia. Por ejemplo en el caso del Monseñor Gerardi se encarceló a los actores pero no a la gente del Estado Mayor Presidencial; se llega a ciertos niveles de responsabilidad pero ya no sigue a los más elevados. Por eso es tan paradigmático el juicio de Ríos Montt por ejemplo, porque no sólo es un alto mando sino fue jefe de Estado.

En términos de juicios, ¿ha habido juicios a líderes guerrilleros? Entiendo que las mayores violaciones fueron por parte del Estado, pero ¿qué ha pasado con la guerrilla?

En este momento no todavía, pero sí hay demandas ya. Hay una demanda en contra de quien resulte responsable de la Masacre de El Aguacate una masacre que hizo la Organización del Pueblo en Armas (según se sabe) en Chimaltenango. Hay organizaciones que están viendo si se puede llegar a enjuiciar a gente de la guerrilla.

Ha pasado tanto tiempo para hacer justicia, ¿crees que el tejido social ha llegado a reconstruirse?

Yo creo que después de 30 años o menos -porque la represión continuó- las secuelas de la represión existen; el miedo perdura y la gente, sobre todo la gente vinculada y sobreviviente o la que tuvo conocimiento de actos represivos sigue teniendo miedo. Hay nuevas generaciones, incluso en el campo, que han ido perdiendo el miedo, por ejemplo las poblaciones que ahora pelean en contra de los megaproyectos. Es un fenómeno ambivalente el sector que tiene recuerdos de la represión que sigue atemorizado y las nuevas generaciones.

¿Qué crees que se necesita para que el tejido social se reconstruya?

Yo creo que son tres cosas. En primer lugar la memoria, que el olvido no impere. En segundo lugar la verdad, que se diga y se divulgue ampliamente la verdad de lo que sucedió. Y como último la justicia porque es el elemento que puede generar una confianza en la sociedad civil para generar una conciencia en contra de la impunidad. Y este último elemento cada vez se hace más complicado porque los involucrados cada vez están más viejos y se han ido muriendo.

¿Crees que en la necesidad de memoria, verdad y justicia tanto, el proyecto REMHI como la CEH pueda colaborar con estos factores?

Por supuesto. Ambos documentos preservan la memoria, son instrumentos que pueden servir para la justicia porque en los juicios que ha habido se citan partes de la CEH porque es la verdad “oficial” porque emana de los acuerdos de paz y el REMHI está más relacionado con la preservación de la memoria, capta hechos que no van a quedar en el olvido. Sirven para la verdad.

¿Percibes que la CEH consiguió los objetivos que se perseguían?

Creo que se cumplieron los objetivos planteados. Estuvo integrada por gente honorable, gente incluso que venía del movimiento revolucionario. Yo creo que captó y coleccionó testimonios y hechos que son muy meritorios. Creo que ambos documentos, el CEH y el REMHI, son los documentos más sistemáticos con respecto a la crónica de la represión de muchos años de Guatemala y por eso creo que son instrumentos útiles. Ahora, que ninguno de los documentos haya servido para el enjuiciamiento no tiene que ver con la Comisión sino que tiene que ver con la naturaleza de los Acuerdos de Paz pues si en ellos está el planteamiento de que la verdad histórica no va a tener un efecto vinculante y no mencionar nombres; esto va más allá de la voluntad de quienes trabajaron en la comisión.

En términos de Acuerdos de Paz si pocas veces alcanzan a cumplirse ¿por qué no cumplir las recomendaciones de la CEH si ambas partes crearon los términos en que se iba a trabajar?

En el caso de Guatemala, no es que la CEH no haya funcionado, los objetivos se cumplieron dentro de los parámetros bajo los cuales existió. Tengo la impresión que también hubo acuerdos implícitos entre la guerrilla y el Estado. Creo que los resultados han sido mejores de los que yo esperaba.

¿Crees que la gente se desanime en la exigencia de justicia ante la impunidad?

Me parece que en este momento en Guatemala, en lo que han caído es en un apetito de mano dura que me parece la explicación de porqué Pérez Molina está de presidente. La ventaja en Guatemala es que los gobiernos se desgastan muy rápidamente producto de la inestabilidad. Yo auguro que la “mano dura” se va a ir sin pena ni gloria. El problema que yo veo en Guatemala es que tenemos todos los males del neoliberalismo y no hay ningún movimiento social con un peso importante que ponga equilibrio en la balanza.

APÉNDICE #4

ENTREVISTA

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
DR. NEPTALÍ MONTERROSO SALVATIERRA¹⁵⁸
MARZO 7, 2013.

¿Cuál crees que es la principal diferencia entre la violencia en la ciudad y en el campo?

El proceso de lucha armada en general tuvo dos etapas la primera en la capital y la segunda en las zonas rurales. Como la última fue en las zonas rurales hubo situaciones muy fuertes y la cúpula gobernante ejerció presión en las épocas más difíciles. Todos los refugiados que caminaron para irse a México eran del campo y fue un refugio porque de lo contrario acababan con sus vidas o eran obligados a trabajar para el ejército. Fue más dura la violencia en el campo. La violencia en la ciudad no fue a la población en general sino con los políticos. Las acciones políticas se hacían desde la universidad porque se daban clases de marxismo, en el sindicato se dirigía un paro y se era político. Todo el que se movilizaba era político. Atacaron profesores, sindicalistas, obreros, estudiantes y políticos. En el campo fue quitar base de apoyo atacando cuestiones económicas y de vida. La violencia se concentró más en los líderes políticos en las ciudades y se generalizó en el campo. En el campo fue quitarle el agua al pez, el pez es la guerrilla y el agua las poblaciones que apoyaban o callaban su presencia; en la ciudad era atacar al pez.

¿La guerrilla realmente podía considerarse como un peligro para el gobierno o un pretexto?

Hay que separar entre la oligarquía y el gobierno junto con el ejército. Para los oligarcas la guerrilla siempre fue un peligro; el que sea que plantee algo sobre cambio de tenencia en la tierra en Guatemala es peligroso hasta la fecha. El ejército y el gobierno no la consideraron como peligro hasta que tuvo posibilidades de triunfar. La guerrilla en el año 1981 se consideró un peligro y por lo tanto Ríos Montt da golpe de estado porque no se podía ya contener la guerrilla. Sobre todo el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) a fines del gobierno de Lucas García tuvo mucha oportunidad de ganar. Había un Padre llamado Luis Eduardo Pellecer Faena que estaba metido en el EGP, lo agarraron y le sacaron información y empiezan a agarrar a todos; entonces se logra mermar y cambia la historia. Se considera que el sometimiento de este padre que era un guerrillero hace que las posibilidades de ganar la guerra desaparezcan por completo.

¿Este debilitamiento de la guerrilla hizo inevitable la firma de los Acuerdos de Paz?

No directamente. La negociación de la paz se da –pienso- porque ya nadie pensaba que podía ganar. Las guerrillas buscan hacerse fuertes uniéndose en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y se mantienen pero llega la necesidad en el sistema político de darle cabida al neoliberalismo. La presión internacional -por no decir que sólo gringa- demanda que Guatemala se democratice por intereses propios. Estados Unidos siempre jugó un papel fundamental desde 1954 la presión estadounidense bota al gobierno establecido democráticamente y a partir de ahí salvo el gobierno de Julio César Méndez Montenegro (abogado al servicio del ejército); el resto hasta el 1986 fueron gobiernos militares.

¿La gente en la ciudad estaba enterada de lo que pasaba en el campo? En ocasiones me sorprende que ante todas las masacres no hubiera habido más presión social para que no sucedieran.

Las masacres no pasaron desapercibidas por la gente de la ciudad pero la gente es apática y no se interesa. La gente sabía que estaban sucediendo esas masacres pero decir algo era arriesgarse. La Universidad de San Carlos -sobre todo- participaba de una u otra manera. De ahí agarraron a 27 líderes sindicales y los echaron al mar. A nivel de las ciudades la violencia fue más selectiva. La Asociación de Estudiantes Universitarios ya tenía un discurso revolucionario.

¹⁵⁸ El Dr. Neptalí Monterroso es guatemalteco, llegado a México como parte de la migración originada por el conflicto. Actualmente, es docente- investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México.

El reporte Guatemala Nunca Más lo genera la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. ¿Desde cuándo la iglesia toma un rol activo en el conflicto?

La iglesia no comienza a participar con el REMHI sino antes, pero no todos de manera uniforme. El arzobispo que inicia todo y que era -si no revolucionario- de pensamiento democrático es Quesada Toruño. De hecho, creo que el proyecto lo inicia la iglesia gracias a este arzobispo y Monseñor Gerardi se agrega; ambos vinculados con los movimientos de pensamiento democrático. Desde los 70's el movimiento de la teología de la liberación es asumido por muchos religiosos de Guatemala. Algunos teólogos de la liberación se hicieron revolucionarios. La iglesia no como institución sino por sus miembros participó de manera activa. No hicieron el REMHI buscando algo sino su pensamiento democrático los llevó a tener una responsabilidad social.

¿Cuál crees que fue el rol que tuvo la Comisión de Esclarecimiento Histórico?

La CEH por lo menos ayudó a aclarar la historia. No son organismos deliberativos ni ejecutivos sino de investigación y de generar conciencia. Los afectados vieron como una tabla de sanación para que algo pudiera lograrse. Cuando has perdido seres queridos sólo se puede buscar justicia. Muchos pensaron que la CEH podía ser un elemento para alcanzarla, que no se haya usado por la justicia guatemalteca es otra cosa. La CEH no iba a hacer justicia pero se caminaba hacia ella.

¿La exigencia de justicia sigue igual o la gente se ha ido desanimando?

En Guatemala tal vez por los años de lucha, creo que es una cosa como de ciclos. Hay momentos en que las organizaciones se sienten tan solas que parece que van a "tirar la toalla", de repente pasa algo y prende la mecha y otra vez. Por ejemplo, en Guatemala se habla mucho de que la lucha es coyuntural porque se tienen que aprovechar las oportunidades que se dan o se generan. Cuando hay una denuncia y se vislumbra una posibilidad se suman otros. Hay momentos en donde parece que se va a lograr bastante y hay momentos en los que parece que nadie habla de eso.

¿La justicia la deben de exigir solamente las víctimas o familiares de ellas?

La justicia no se debe de ver en términos de que alguien que haya algún desaparecido o que haya sufrido físicamente el embate del sistema. Debe de verse en términos de mejores condiciones de vida, oportunidades y eso lo pide la sociedad completa. Yo creo que se sufre hoy de todas maneras, porque ya no hay lucha armada y las condiciones son peores. La población actual está sufriendo mucho o incluso más que cuando se levantaron en armas. El descontento por la situación que se vive está creciendo. Pero eso permite que se tenga la esperanza de que haya cambios. Yo pienso que los que van a pedir justicia por motivos del conflicto van a ser cada vez menos pero de que se vaya a olvidar, no se va a olvidar. En Guatemala, Álvaro Colom es el único presidente que ha pedido perdón públicamente pero no por todo, solamente en algunos casos como el de Carlos Figueroa. En cierta medida es una dosis de justicia. Conforme se van muriendo los culpables cada vez se espera menos, pero aunque te toque algo de ese menos, está bien y mueve al resto de la sociedad. Eso es una buena señal. Buscamos caminar hacia una sociedad justa que no nos va a llegar de la noche a la mañana, y no nos va a llegar si no peleamos por ella. Entonces es un proceso lento pero que no debemos dejarlo.

APÉNDICE #5

ENTREVISTA

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA
OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DEL ARZOBISPADO DE GUATEMALA (ODHAG)
NERY RODENAS¹⁵⁹
ENERO 25, 2013.

¿Cómo surge el proyecto de memoria histórica del Arzobispado?

En 1994 como Oficina de Derechos Humanos de Guatemala ODHAG se estuvo cerca de los Acuerdos de Paz. Dentro de estos Acuerdos se determina la necesidad de una Comisión de la Verdad pero su naturaleza surge con muchas limitaciones en cuanto al tiempo para poder hacer el trabajo (2 años) y también en lo relacionado al no individualizar responsabilidades. Se hace un análisis en la Oficina para apoyar el esfuerzo de la CEH y aprovechando la presencia de la iglesia católica en todo el país se presenta este proyecto (REMHI) a la Conferencia Episcopal de Guatemala y se dio el espacio para buscar la justicia y la verdad para poder lograr la reconciliación y el perdón necesario en el país. Uno de los objetivos primordiales, entonces, del REMHI fue generar insumos para la CEH para tratar de minimizar las limitaciones de la misma. Además de la participación de la iglesia católica en el perdón y la reconciliación.

¿Cuál crees que pueden ser los logros más importantes de este proyecto?

El proyecto REMHI no terminaba con la entrega de un informe a diferencia de la CEH. Los procesos de reconstrucción vinieron después. Se trabajó en proyectos como reparación de las víctimas, acompañamiento psicosocial, exhumaciones, proceso de dignificación de la memoria de las víctimas, búsqueda de niñez desaparecida, etc. El REMHI fue un diagnóstico de las secuelas que había dejado la guerra en el país. A través de las entrevistas se dieron cuenta que la gente tenía procesos de duelo alterados, gente que tenía pesadillas o un llanto incontrolable, la necesidad de exhumaciones, etc. La iglesia inició estos proyectos de reconciliación involucrando las 7 diócesis del país. Se crearon comisiones para encontrar niños, se hicieron reencuentros, exhumaciones (en 150 sitios en donde se llevaron a cabo exhumaciones, la ODHAG participó). Se trataba de un proceso integral de trabajo psicosocial desde hacer la exhumación, ayuda psicológica y después colaborar en posibles demandas y juicios.

¿Hay alguna ventaja importante entre ambos trabajos de esclarecimiento de la verdad?

Una limitante más de la CEH es que sólo iba a narrar los hechos; no hay nombres por lo que no se puede utilizar en juicios. El REMHI no tiene ninguna limitante porque aquí se mencionan nombres por lo tanto se ha utilizado en varios procesos judiciales. No hay ninguna restricción legal para que el REMHI no pueda utilizarse. Se ha presentado por lo parte acusadora y los jueces deciden considerarlo o no.

¿Qué opinión tiene esta Oficina de Derechos Humanos de que su reporte “Guatemala Memoria del Silencio” esté incluido casi en su totalidad dentro del reporte de la CEH?

Satisfacción es el sentimiento de que la CEH haya incluido casi en su totalidad el informe REMHI en el suyo.

¿Crees que el reporte de la CEH ha sido exitoso, se cumplió con los objetivos?

Que el presidente Álvaro Arzú no haya recibido el informe fue un gesto importante. Posiblemente haya recibido mucha presión porque al recibir el informe se asumía responsabilidad. Hubo pocas recomendaciones que se cumplieron. Las recomendaciones que se lograron cumplir fueron gracias al impulso y presión de la sociedad civil, por ejemplo, el Programa Nacional de Resarcimiento y el Programa de Búsqueda de Niñez Desaparecida. La depuración de las Fuerzas de Seguridad no se dio, la

¹⁵⁹ Nery Rodenas se desempeña como Director Ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

dignificación de la memoria de las víctimas no se ha logrado como se esperaba. Ni siquiera los Acuerdos de Paz se cumplieron en su totalidad. No hubo una voluntad de asumir todo. Se puso fin a la guerra pero los problemas que dejaron siguen vigentes. Entonces, la CEH cumplió con su trabajo, pero no hubo seguimiento. La CEH funcionó. Su trabajo fue muy importante para el país, cumplió con las expectativas. Fue un proceso que permitió a Guatemala escribir su propia historia, que cada quien pudiera llegar a contar su historia, que la gente se desahogara y creó la oportunidad para otros espacios.

¿Qué hizo falta para que los alcances de la CEH fueran mayores?

En los Acuerdos de Paz no se previó el hecho de que hubiera un seguimiento. Sólo se pensó que el Estado debió haber asumido esas responsabilidades. Se necesitaría una verificación internacional para que el gobierno hubiera tenido algún tipo de presión y no depender de la voluntad de los miembros del Estado. Los efectos de los informes y de los esfuerzos no han sido suficientes y eso se puede ver reflejado en la situación actual del país. No hay memoria histórica en el pueblo, por lo tanto se tiene a este presidente (Otto Pérez Molina era el presidente en el momento de la entrevista).

Tal vez la memoria histórica esté relacionada con la educación, ¿se han hecho propuestas a este respecto?

Se ha hecho una propuesta pedagógica al Estado, a varios gobiernos, llamada Educarse para el Nunca Más que trata de integrar la historia de Guatemala reciente para que desde cuarto de primaria y hasta la secundaria se incorpore lo sucedido para divulgar la memoria histórica. Se ha dado capacitación a algunos docentes e incluso a algunas escuelas completas, pero la propuesta no se ha adoptado. Hay pocas escuelas que siquiera tratan el tema, la historia contemporánea de Guatemala no se estudia en las escuelas, gente joven no está bien enterada o siquiera enterada de lo sucedido.

¿En la actualidad la oficina de la ODHAG sigue trabajando?

La ODHAG colabora con la sociedad civil haciendo investigaciones para que la verdad se conozca a través de publicaciones de las experiencias de vida de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. Las publicaciones se publican al menos una vez al año en conmemoración al aniversario del asesinato de Monseñor Gerardi. Es que la justicia es difícil. Los casos que vemos hoy llevan décadas han pasado incluso 10 años o más. La voluntad no es parte del nuevo gobierno, el presidente Otto Pérez Molina indica que no hubo genocidio; pero hay oposición y asumen los riesgos que hasta hoy se viven.

¿Memoria u olvido?

Muchas organizaciones de víctimas se han organizado para buscar justicia. Buena parte de las víctimas siguen teniendo esperanza en encontrar a sus desaparecidos y se busca hacer trabajo para que la historia no se olvide. Hay quien dice que el olvido es lo mejor pero se trata de gente que estuvo involucrada o bien gente muy conservadora que sigue negando lo que Guatemala ha vivido.

APÉNDICE #6

ENTREVISTA

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

ANDRÉS¹⁶⁰

ENERO 26, 2013.

¿Por qué optar por entrar al Ejército considerando que ya había un conflicto interno?

Había mucha pobreza y mucha hambre; las familias no podían dar a los hijos educación y había que buscar trabajo. En los 70's el servicio militar era obligatorio pero si no querías entrar al Ejército a servir en el conflicto se podía estudiar. El Ejército ofrecía carreras técnicas con duración de dos años que se tomaba a cuenta del servicio militar. Por eso yo soy contador.

¿Por qué crees que justo en los años en que estudiaste y serviste en el Ejército se incrementó tanto el número de soldados?

Creo que esto pudo ser a que al entrar a estudiar al Ejército se firmaba una carta. Cuando se terminaban los estudios y los —en ese momento- estudiantes graduados queríamos volver a casa se nos pedía un pago a cambio de los estudios. De dónde íbamos a sacar el dinero. Si no podías pagar -que fuimos la mayoría- te decían que te tenías que quedar 5 años más en servicio militar activo. Uno no tenía opción, porque te decían que si no te iban a llevar preso. Te daban unos días para visitar a la familia y avisarles pero si no regresabas te irían a buscar para meterte preso. El Ejército empezaba a pagarnos por lo que hacíamos. Una vez que se estaba como militar en activo, el Ejército se convertía en una forma de vida porque empezaba pagando 20 Quetzales pero el sueldo incrementaba mientras se subía de rango. Yo ya sabía que me iba a ir mejor de militar que buscando trabajo como contador porque las empresas casi no contrataban.

¿Cuál era la experiencia de los soldados en el campo? ¿Te mandaron al campo?

A mí me mandaron al campo cuando estaba el General Ríos Montt. Pero cuando nos mandaban al campo era muy difícil porque vivíamos en malas condiciones, a veces decíamos “cómo pelear contra la guerrilla si no hemos comido en días”. Nos daban comida como cada quince días, pero era muy poco como dos latas pequeñas de frijol y dos tamales enlatados para comer en dos semanas. Los soldados teníamos que mendigar comida en las comunidades, a veces le decíamos a la gente que les comprábamos comida pero poca gente nos quería ayudar. Lo único que siempre nos daban mucho eran cigarros, no comíamos pero todos fumábamos.

Sin detalles de tus acciones, ¿los soldados atacaban a cualquier persona?

En el campo estaba muy difícil porque la guerrilla estaba muy bien armada. “Maté gente que me atacaba” y por eso tengo la cicatriz de un balazo en el cuello, de milagro me salvaron. Yo no creo que se atacaba a gente inocente, porque de hecho, cuando alguien del batallón quería matar a alguien que no nos había disparado llegamos a amenazarlo entre nosotros mismos que lo íbamos a matar; al fin quién iba a saber que lo habíamos hecho nosotros. Seguramente, sí hubo algunos que mataron gente inocente, de repente no se sabía, hasta niños podían atacarte. El mismo General Efraín Ríos Montt hablando directamente con las tropas insistió en no agredir a gente inocente. Por eso creo que eso de que lo van a enjuiciar es una injusticia. La gente no sabe lo que pasamos los soldados, la guerrilla nos iba a matar. Tal vez sí hubo gente que mató a inocentes pero el General siempre dijo que apoyáramos a los civiles. Aunque hubo un momento en que preferíairme preso porque me querían mandar al área de donde yo vengo, ahí sí les dije a los mayores que preferíairme preso antes de ir a esos lugares porque la gente podría reconocirme.

¹⁶⁰ El nombre presentado es un pseudónimo pues se da en el marco de una charla. El entrevistado, quien trabaja como taxista, perteneció a las fuerzas armadas durante 7 años abarcando los años más cruentos del conflicto (el último año del General Lucas García, el periodo del General Ríos Montt y la entrada del General Humberto Mejía Víctores).

APÉNDICE #7

ENTREVISTA

BUENOS AIRES, ARGENTINA

MADRES DE LA PLAZA DE MAYO, LÍNEA FUNDADORA¹⁶¹

MARÍA ADELA ANTOKOLETZ¹⁶²

JUNIO 9, 2014.

¿Cómo es que tu mamá inició trabajando con las Madres?

Mi madre era una persona que trabajaba en Tribunales en la ciudad más al norte de la Provincia de Buenos Aires: San Nicolás de los Arroyos. Ella trabajaba en el archivo de Tribunales y se destacaba mucho porque tenía mucha memoria, mucho orden y una simpatía personal grande. Entonces empezó a trabajar también para una institución de menores y una institución de viejitas –de señoras mayores- hasta que se vino a Buenos Aires porque trataba de venir a donde estábamos nosotros –sus dos hijos- los que entonces éramos sus dos hijos estudiando. Mi hermano está desaparecido, lo secuestró la dictadura también en noviembre del '76; antes de que ella se jubilara en Tribunales de la zona norte del conurbado de San Isidro. Cuando desapareció Daniel, lo primero que hizo mi madre, que hicimos fue –yo al lado todo el tiempo- esperar en casa un día. Al segundo día ya salimos y fuimos preguntando en hospitales, en cuarteles, en iglesias; y nos íbamos encontrando con otra gente. Entonces en el momento en que una señora dijo “por qué no nos reunimos en la Plaza de Mayo”; mi madre fue y la secundó. Esa señora era la fundadora –Azucena Villaflor- una señora también ama de casa, pero que estaba buscando a su hijo Néstor. Las Madres se reunían desde antes del 30 de abril del '77. Yo compartía todo eso –sin haber ido ese día- yo no fui a la Plaza de Mayo ese día porque estaba trabajando; pero las acompañaba lo más que podía. Ese día fue histórico porque algo empezó en la conciencia de ellas a decir “somos varias, somos muchas; estamos acá, trabajemos juntas”.

¿Pudieron localizar a tu hermano?

No. A mi hermano... sabemos varias cosas de él pero nunca hemos podido recuperar sus restos. A diferencia de algunas madres que ya han recuperado a sus desaparecidos.

En este momento, la entrevistada se levanta de la mesa en donde se lleva a cabo la entrevista para mostrarme las fotos de algunos hijos que han sido recuperados pues una de las paredes del cuarto en donde se lleva a cabo la entrevista está cubierta con fotos de desaparecidos. En ese momento me señala la foto de una muchacha de nombre Susana y me dice... “la madre del marido entraba a la casa en el momento en que los estaban secuestrando –secuestrada para siempre también- una señora que no tenía nada, nada que ver ahí.

Pero estas madres siguen viniendo porque –hace mucho- han comprendido que no son sólo sus hijos los que había que buscar. Siguen viniendo como siempre aunque ya hayan recuperado a los suyos.

¿No había peligros al iniciar las reuniones?

Era muy peligroso. Mi madre recibió muchas amenazas. Otras madres también recibieron amenazas tremendas; pero siguieron. De hecho, el 8 de diciembre del año '77, pasó algo tremendo. Uno de los marinos se hizo pasar por familiar de desaparecido –por un hermano de desaparecido- y estuvo yendo por tres o cuatro meses a la Plaza de Mayo los jueves. Las Madres lo tomaban del brazo y le decían “no vengas Gustavo” creían que se llamaba Gustavo Niño –se llamaba Alfredo Astíz –ese era su nombre, miserable

¹⁶¹ Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora es una organización de derechos humanos que surge en 1986 después de separarse de la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo. El trabajo fundamental del grupo es la búsqueda de hijos desaparecidos.

¹⁶² María Adela Antokoletz es hija de una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo –antes de que se convirtieran en dos organismos-. Hermana de un desaparecido quien sigue el trabajo de su madre como colaboradora de la organización.

genocida y torturador-. Él venía acompañado por una muchacha que estaba detenida- desaparecida; la obligaban a ir y que no dijera nada, ella calladita "...estamos buscando a nuestro hermanito, a nuestro hermano". Prepararon los de la marina un secuestro masivo porque sabían que se estaban reuniendo muchas madres y padres –sobre todo madres porque las madres cuidaban a los padres-. Esa es la experiencia que yo tengo, que no era un movimiento feminista sino que decían "a nosotras nadie nos va a secuestrar, a ustedes sí". Error, error... han secuestrado a personas de 79 años, han secuestrado a todo tipo de personas lo mismo que en México o en Colombia. Yo conocí a una señora de una aldea que se fue a un rancho un poco más alejado, cuando volvió ya no vivía nadie de su familia. Ella vivía porque se había ido con la vecina... bueno... esto es así.

¿Cómo es o ha sido su accionar con la gente que llega con ustedes?

Las Madres como grupo lograron escalar en un departamento que les regalaron. ¿Quién se los regaló? Muchas mujeres que juntaron dinero en Holanda –mujeres de Primeros Ministros, mujeres artistas...- juntaron en el año '78 y les regalaron un departamento chiquito de dos ambientes o tres en la calle Uruguay. En ese departamento se juntaban todos los días, armaron comisiones y hacían lo que podían –iban a pedir a algún diario, iban a hablar con una autoridad, se plantaban horas y horas en alguna casa-. Los plantones... lo mismo que han hecho las madres mexicanas, las madres uruguayas, las madres de Colombia... madres y padres sólo que acá eran sólo madres. Los hombres apuntalaban en todo, pero no iban a dar la vuelta a la Plaza, estaban alrededor mirando, angustiados, haciendo tareas, juntando dinero, haciendo todo lo que podían buscando a sus hijos. Algunos no iban porque se enojaban con las madres – con las esposas- y hubo muchas separaciones por temor, por los demás hijos incluso. Entonces hacían denuncias, acudían al paso del Papa si el Papa venía, o al paso de quien fuera le tiraban cartas dentro del auto, trataban de llevar cartas al hotel si eran autoridades extranjeras. Una vez fue el Secretario de Estado Norteamericano y hubo un acto de poner un ramo de flores al pie del monumento de nuestro héroe máximo –el General San Martín-. Mi tía fue a la plaza un día antes y dijo "este lugar es bueno, este es mejor..." porque era la estrategia –por momentos- del grupo. Entonces fueron todas a ponerse ahí como público y en el momento en que el señor agarró el ramo de flores, todas se pusieron el pañuelo –que ya lo estaban usando- y empezaron a gritar. Y, todos los periodistas extranjeros corrieron hacia ellas, incluso a una periodista norteamericana le tiraban de la cámara; y todas las madres agarraron al policía que tiraba de la cámara, que le quería quitar la cámara, se le colgaron, lo abrazaron... "que me dé su documento la señorita" y la chica saca el pasaporte y en el suelo había una pila de documentos que ellas le tiraban... estos espontáneos que siempre ha habido, son excelentes porque el hombre no se pudo llevar el documento de la chica...

¿Cuál es tu opinión sobre la CONADEP?

Sobre la CONADEP mi opinión no es igual que la opinión de las Madres porque en el momento en que asumió el Dr. Alfonsín y en vez de nombrar lo que pedían las Madres, las Abuelas, el CELCS.... Alfonsín no impulsó que se formara una comisión bicameral –algunos de nosotros decimos "menos mal"- porque a lo mejor hubieran sido tan malos los diputados y senadores de la comisión bicameral que no hubieran avanzado tanto como avanzó la comisión de personalidades que nombró el Dr. Alfonsín. Alfonsín hizo lo que pudo... este país seguía atemorizado y seguía bajo el dominio que impedía que se transformara por ejemplo la policía que es igual ahora que antes, quiero decir, que no fue transformada, no fue castigada por la dictadura y las demás fuerzas sí. La policía no pudo ser transformada y sospecho que es por designio de la administración norteamericana; formar las policías de los países latinoamericanos para que asuman tareas propias de la defensa de las armas por ejemplo el espionaje que la policía no tiene por qué hacer; mandan material de espionaje y otro material para formación de la policía, eso lo sabemos. Hay un designio para la policía, fue el menos transformado en general de las fuerzas –ya sea las tres fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad- el menos transformado después de cada dictadura...en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina....

Alfonsín formó la CONADEP con varias personalidades; algunos de los miembros de los organismos de derechos humanos formaron parte de la CONADEP. Era muy desordenada, pero hizo un trabajo excelente; hizo un trabajo que resultó excelente, fundamental para ir instalando verdad en este país. Pero las Madres decidieron no acudir a la CONADEP (no había dos líneas aún). Una comisión de once Madres decidieron que no iban a ir a la CONADEP –quienes estaban a favor de ir a la CONADEP era mi madre y algunas otras, pero eran minoría, todo se resolvía por consenso o por voto- votaron, la mayoría dijo que no así que no. Entonces mi madre -que no podía presentarse ante la CONADEP- le pidió a mi cuñada que había estado detenida-desaparecida con Daniel que fuera y se presentara. Mi cuñada, por suerte, fue y se presentó; es uno de los testimonios que hay en el libro Nunca Más. La CONADEP hizo una gran tarea, y hay que valorar esa tarea; así como hay que valorar el histórico juicio que –en las condiciones en que se podía- llevó adelante el Dr. Alfonsín entre amenazas y bombas. El juicio que él llevó adelante en el año en que el poder judicial se animó a llevar adelante para juzgar a los jefes de las Juntas Militares –había habido cuatro Juntas Militares, pero fueron los jefes de las tres primeras- casi todo el mundo fue condenado pero no todos a perpetua tampoco. Pero fue fundante ese juicio; fue fundante en el mundo en realidad. Y, del juicio cuya filmación estaba prohibido difundir por la televisión cuando todos pedían que fuera por la televisión –yo no lo pedía, porque yo vivía en España, yo me había exiliado a España junto con mi cuñada porque sentimos que había peligro para mi cuñada, y por tanto para mí y para mi familia; nos fuimos en el '77; en realidad decidimos irnos en el momento de conocer que había sido secuestrado el abogado socio de mi hermano – un viejo profesional cuyo habeas corpus leímos y dijimos “no... hay que irnos, ahora sí” no queríamos irnos porque estábamos con las Madres; las dos familias nos decían “váyanse, váyanse”, pero en el momento en que secuestraron a Enrique Broker dijimos “vámonos” porque mi cuñada sintió que era un círculo que cada vez estaba más cerca de nuevo. A ella le habían dicho “no te metas con los montoneros, no te metas con los subversivos, ándate del país” y se fue, nos fuimos. Entonces, yo no estaba en toda esta pelea, pero la seguía muy de cerca y desde allá formábamos grupos que colaboraban. Se apoyó mucho la tarea de la CONADEP, se trató de que la tarea de la CONADEP se extendiera a todo el país; se recibieron decenas y decenas de testimonios.

Los gobiernos en transición suelen carecer de fortaleza para impulsar ciertas leyes, sobre todo las relacionadas con enjuiciar a los antecesores...

No tuvieron la suerte de Kirchner... Kirchner llegó en el 2003 con toda la fuerza y supo ver que es un pueblo que –mal que bien, con muchísimos defectos- se interesa por los derechos humanos. Él fundó su prestigio por el apoyo a los derechos humanos. Los ataques contra los Kirchner –en general- son ataques contra esa política de los derechos humanos.

Él pescó cuál era el eje importante para seguir, y lo siguió a muerte. Valoramos eso... todo se hace con cálculo en un gobierno, no lo niego... todo se hace con cálculo, la menor medida se hace con cálculo; como es lógico, pero valoro ese cálculo en todo caso. El darse cuenta de que tenía que volver a fundar el valor de la política –que estaba decadente desde el gobierno de Menem- lo fundó sobre el discurso y la práctica de los derechos humanos. Imposible en la época de Alfonsín; Alfonsín hubiera querido hacer eso, pero imposible...

¿Crees que el trabajo de CONADEP es suficiente?

No, no fue suficiente. Sobre todo porque después quedó anulado por la impunidad. Pasó algo notable en este país... por acción de un periodista –muy audaz- que es Horacio Verduzky, el actual Presidente del CELS; consiguió –no sé cómo- hablar con un represor que presuntamente estaba arrepentido. No era el primero, ha habido varios represores que han querido hablar; y hasta yo en otro organismo donde trabajé un tiempo –Familiares- encontré un recorte del año '80 en donde un policía contaba cosas tremendas desde Bolivia; un argentino que estaba en Bolivia. Era para aprovecharlo, pero eran imposibles los juicios por las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final –fueron como 15 años, desde el '87 hasta el 2003-. Un Marino es convencido –ignoro cómo e ignoraré toda mi vida cómo- es convencido por Verduzky de decir sus verdades en la televisión. Marzo del año '95, en marzo de 1995 la historia de este país se dividió en dos.

Al mismo lugar a donde yo iba a comprar carpetitas... el dueño me decía "las abuelas, qué buena gente, las abuelas" yo no podía contestarle nada... Registraba lo que estaba pasando, cuando el represor dijo "sí, yo he tirado dos veces... he ido en los vuelos, esos vuelos a donde los subversivos los arrojábamos al río o a veces al mar... y una vez en la portezuela del avión casi resbalé" –no sé si será cierto- "pero yo obedecía órdenes, yo no quería ir ahí, pero yo tenía que obedecer porque era un marino; me lo mandaban mis superiores". En realidad él estaba enojado con sus superiores por un asunto del que lo acusaban a él; no importa el motivo, su palabra vino a confirmar lo que veníamos diciendo por aquí y por allá. Fue un cambio rotundo –como pasa todo en este país- se va preparando pero los cambios son de golpe; o por una manifestación de dos millones de personas o por cosas así... son así, siempre me sorprende de lo que es la Argentina porque no conozco la historia de otro país en que los cambios sean tan rotundos, tan de golpe pase algo que te diga "esto es una especie de gesta, esto es una especie de fenómeno nuevo". Entonces ahí ya las Madres empezaron a estar más solicitadas, más llamadas; todavía vale la pena ir a los actos donde hay una Madre, la gente se pone de pie y grita "¡La Plaza es de las Madres y no de los Cobardes!" o sino "¡Madre de la Plaza, el pueblo las abraza!" Cuando la sociedad canta eso, eso habla bien de esa sociedad para mí –que yo canto con ellos aunque Madre no soy- aunque ellas me toman medio como Madre, pero Madre no soy.

La CONADEP no bastó, pero era imposible hacer más. Volvieron con eso y empezaron los juicios por la verdad; entonces hubo un montón de compañeros que atacaban los juicios por la verdad porque decían "no sirve para nada" y otros que decíamos "sí sirven". Tal cual como decíamos nosotros se cumplió, yo lo decía por sentido común, no tengo mucho conocimiento político; pero el sentido común me decía que cambiadas las circunstancias del país, ese material iba a servir. Tal cual... hoy los fiscales toman el material de todo lo que se habló en los juicios por la verdad –y mucho más material- y llevan adelante los juicios con consecuencias penales –a diferencia de esos juicios por la verdad- que toda la verdad se decía y después cada uno se iba muy tranquilo a su casa; pero ya era algo... ya salía en el diario que fulanito que vivía en tal lugar y había matado a 300 personas...

APÉNDICE #8

ENTREVISTA

BUENOS AIRES, ARGENTINA

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS)¹⁶³

ANDREA ROCHA GRANADOS¹⁶⁴

JUNIO 3, 2014.

¿En qué se basa el trabajo del CELS?

Esta organización nació en 1979, es decir, antes de que apareciera la CONADEP. Fue formada por padres de víctimas de desaparición forzada y algo que tuvo claro el fundador –Emilio Mignone– fue que las denuncias tenían que partir de una información clara y sistematizada; no bastaba con decir hay desapariciones o hay secuestros, se tenía que tener un fundamento fuerte de las denuncias presentadas. Esta organización se dedicó, desde el principio, a sistematizar información sobre víctimas; a establecer claramente cuál había sido el procedimiento clandestino de represión; esto se hizo durante la dictadura.

¿Cuál es tu opinión sobre el trabajo de la CONADEP?

Obviamente si lo miramos en este momento, se pueden hacer varias críticas; pero en su momento fue un hito muy importante para divulgar qué fue lo que ocurrió durante la dictadura. Una de las principales críticas es que se enfocó solamente en el tema de las desapariciones forzadas y no dio cuenta de otra serie de delitos que hubo. Pero –por ejemplo– ahora estamos trabajando el tema de complicidad de empresas y civiles con la dictadura y eso no se encuentra en CONADEP diferenciado; pero sí se encuentran pistas como el tema de jueces y la iglesia cómplices con la dictadura. Entonces, como primer intento de dar cuenta de lo que sucedió en Argentina es muy valioso. Y, muchos de esos testimonios –sino es que todos– forman parte de los juicios que se están llevando a cabo en el país.

¿El texto de CONADEP sí se puede utilizar como una prueba en los juicios?

Se pueden utilizar como prueba documental porque hay testimonios de personas que ya fallecieron y no por eso se va a dejar de escuchar algo que se dijo.

Entonces, ¿no es necesario que la persona vuelva a dar el testimonio en los tribunales?

Lo ideal es que la persona pueda asistir a un juicio oral; pero cuando no es posible –por edad o porque no quieren hacerlo– se puede aportar el testimonio de CONADEP o el testimonio dado en el juicio a las Juntas o los testimonios que se dieron en los Juicios por la Verdad.

¿Qué son los Juicios por la Verdad?

En Argentina hubo una etapa de juzgamiento –una vez caída la dictadura– en que se enjuiciaron a las Juntas Militares. Ahí se recogieron una cantidad de testimonios valiosos y se condenó a Videla, Arguindegui y a otros integrantes de las Juntas Militares. Y lo que se escuchó en ese juicio fue algo tan impactante, que era imposible que eso no empezara a caer sobre instancias inferiores. Entonces empezó a exigirse el procesamiento y condena de mandos medios y empezó una gran demanda de justicia. Ya se había conquistado la democracia, pero era una época complicada en donde los militares todavía tenían el poder de desestabilizar el país. Fue cuando Alfonsín sacó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que frenaron el procesamiento penal de militares. Se inicia entonces una etapa de impunidad que se reforzó durante el Menemismo con los decretos de indulto a los que ya habían sido condenados en los años 80's. Ese periodo de impunidad duró hasta el 2001; con la reapertura de los juicios. Durante ese periodo de impunidad, los

¹⁶³ El Centro de Estudios Legales y Sociales es una organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina.

¹⁶⁴ Andrea Rocha es miembro del equipo *Memoria, Verdad y Justicia* que forma parte del CELS.

organismos de derechos humanos seguían exigiendo que hubiera justicia, y una de las formas que se encontró fue a través del derecho a la verdad. Se pensó en que si no se podía llegar a la condena penal de los perpetradores, al menos deberíamos saber qué ocurrió; por lo que se iniciaron a hacer esos juicios en donde los militares iban a declarar así como las víctimas y se dieron una cantidad de testimonios valiosos.

¿Estos juicios eran como un procedimiento alternativo de justicia?

Se abría un caso específico –como el de Alejandra Lapacó- una víctima de desaparición. La mamá de Alejandra Lapacó –Carmen- es fundadora del CELS, ambas estuvieron secuestradas y Alejandra desapareció aunque Carmen fue liberada. Este caso se llevó a juicio de la verdad, donde se dieron testimonios militares y civiles -solicitados o no por el juez- pero, ningún testimonio tendría consecuencia penal; pero era información que se estaba recabando.

En cuanto a las comisiones de la verdad ¿Qué crees que le faltó a la CONADEP?

Yo creo que hay cosas positivas y negativas. Haberse enfocado en las desapariciones fue muy importante porque es el delito que más conmovió a la sociedad argentina y además era algo inédito en el país. Para mí, es una ventaja que haya un mandato corto (de 9 meses) porque exige a quienes participan en la comisión que saquen un producto en un tiempo determinado. Obviamente, no se podía haber agotado ahí el trabajo. Si nos hubiéramos quedado sólo con la CONADEP y no hubiéramos hecho un juicio a las Juntas, y los organismos de derechos humanos no se hubieran enfocado en sus temas –como Abuelas en la búsqueda de los nietos, Madres en la búsqueda de sus hijos- si nos hubiéramos quedado con la idea de que la comisión de la verdad iba a resolver todo y sacara toda la verdad; no habría sido un trabajo completo. Se trata de trabajos distintos pero que contribuyen a un mismo fin que es el de la memoria y la justicia. CONADEP es un esfuerzo admirable y rescatable que tiene aportes al día de hoy. Algo criticable es la mirada que tenía sobre el conflicto; el informe *Nunca Más* tiene la impronta de la *teoría de los dos demonios* que es algo que se ha concluido que para cuando inició el enemigo o grupo armado subversivo –fuera Montoneros, ERP o cualquier otro- estaba prácticamente desmantelado. La dictadura tuvo otro objetivo que fue disciplinar a la sociedad e implantar un modelo económico que exigía el desmantelamiento de los sindicatos y los gremios, el debilitamiento de los líderes sociales; y eso no lo toma CONADEP. Incluso, hoy en día, se puede decir que ni siquiera fueron los militares quienes idearon todo lo sucedido sino fueron grupos empresariales y de poder civiles que utilizaron a los militares como la mano sucia para hacer el trabajo. CONADEP no da cuenta de esto pero sí los centros de detención clandestinos habían en el país; se han descubierto muchos más, pero marca los más importantes. Establece cómo era el sistema de inteligencia, secuestro, detención ilegal y desaparición forzada; el circuito represivo. Marca una cifra –que ellos quizá no pudieron analizar bien- pero indica qué porcentaje de desaparecidos eran obreros, mujeres, estudiantes, religiosos; muestra un universo de víctimas que ahora sirve como base.

¿Crees que el informe Nunca Más producido por la CONADEP cumplió el objetivo de dar a conocer la verdad?

En Argentina se trata de un informe que sigue vivo y circulando. Los testimonios de la CONADEP se utilizan en los juicios; eso no es un dato menor. El informe *Nunca Más* fue el libro más vendido cuando salió, montones de copias vendidas, reeditado hace un par de años, está en ferias del libro, cualquier librería lo tiene. Quizás podría revitalizarse aún más, podría ser leído en escuelas y universidades –que se hace en algunos lugares pero no es política de Estado-.

¿Los gobiernos de izquierda –como el de los Kirchner- han sido beneficioso para estos procesos?

Sí y no. La reapertura de los juicios se logró antes de que el kirchnerismo llegara al poder; por la presión de los organismos de derechos humanos y por un sistema internacional –el Interamericano de Derechos Humanos- que avalaba la exigencia del fin de la impunidad. Hubo una confluencia de varios factores: algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenían que tener un impacto sobre las estrategias de los organismos de derechos humanos; hubo algunas decisiones dentro de Argentina para

el fin de la impunidad; y después –con el kirchnerismo- hubo la voluntad política de impulsar el tema de los juicios. Obviamente la voluntad política es muy importante y también la participación de la sociedad civil.

¿Cómo se comprueba que mereces la reparación?

Hay mucho material para hacerlo. Por ejemplo, las personas que estuvieron en las cárceles –por lo general estuvieron a disposición del poder ejecutivo nacional- entonces hay un decreto del poder ejecutivo en donde se establecía la condena. Es sencillo comprobar porque hay que considerar que los militares son muy organizados y dejan registro de todo. Están las reparaciones económicas, pero las víctimas o familiares cuando declaran que para ellos la posibilidad de hablar ante los jueces y ser escuchados es reparador; es doloroso, difícil, implica revivir los peores momentos de su vida pero cuando terminan –la mayoría- agradece la oportunidad y sienten que algo se ha reparado. Se exige justicia y que se condene al responsable pero –de algún modo- el juicio en sí mismo es un espacio que brinda alivio y tranquilidad. Poder testimoniar sobre compañeros que vieron en Centro Clandestinos de Detención que ya no están, poder hablar por los que ya no están y por ellos mismos. Al principio –cuando fue el juicio a las Juntas- las víctimas solamente podían hablar de lo que le pasó a otros; dieron testimonio por quienes no podrían hacerlo. En esta nueva etapa de juzgamiento ya no; ellos pueden dar testimonio por lo que les pasó a ellos, por lo que ellos tuvieron que vivir, por su experiencia, por lo cambios que tuvieron que padecer por el impacto en las familias de su situación. El brindar los testimonios se convierte en un espacio en donde se tiene que tener cuidado al tomar la declaración de una víctima, hay cuestiones que los jueces no saben manejar cuando se declaran temas como la violencia sexual; hay cosas por mejorar. Se trata de la reivindicación de la historia de cada víctima y familiar.

¿Se les obliga a los militares a dar esta información o ellos tienen la voluntad de compartirla?

No, pero hay información que sí está disponible y que se ha encontrado. Se intuye que hay más material porque últimamente ha salido cierta información. Hay otra teoría en que una parte de quemó o se desapareció porque debería de haber un registro de todas las personas que desaparecieron. Por ejemplo en la ESMA hubo entre 3.000 y 7.000 personas detenidas ahí, existe la hipótesis de que se microfilmaba a cada persona que entraba, se tomaban fotografías y se hacía una ficha y todo esto está microfilmado. Hay testimonios que hablan de listas, de fotografías a todo el que entraba; entonces se sigue buscando ese material documental. El año pasado (2013) se encontraron todas las actas de la junta militar, en el sótano de un edificio de militares; así que se siguen encontrando cosas. Hay instituciones como la iglesia católica que tiene un archivo sobre dictadura pero no divulga información porque la iglesia en Argentina fue muy cómplice y protectora de la dictadura; y han sido firmes en no proporcionar información. El caso de la iglesia católica en Argentina es muy complicado; mientras que en Chile estaba la Vicaría de la Solidaridad que defendía presos políticos, en Argentina daban consuelo a los militares que sentían culpa por desaparecer personas. Hay fotografías del jerarca de la iglesia dándole la ostia a Videla; hubo complicidad de amparo espiritual. Hubo una corriente de la teología de la liberación muy incipiente; y quienes la siguieron fueron asesinados.

APÉNDICE #9

ENTREVISTA

BUENOS AIRES, ARGENTINA

ASOCIACIÓN MADRES DE LA PLAZA DE MAYO¹⁶⁵

EVEL PETRINI¹⁶⁶

JUNIO 11, 2014.

¿Cuál es el panorama de la exigencia de justicia en Argentina en relación a los crímenes de la dictadura?

Por empezar, el tiempo que transcurre después del hecho influye para la no; porque el que se engancha ahora no tiene ni las pruebas, ni el furor de la gente del momento. Entonces es una cosa mucho más difícil de armar; es más ficticio digamos... entonces está como para ver qué se puede lograr. El momento es cuando pasa la cosa, pero es el momento más álgido, más duro, más difícil y el de mayor miedo. Por ejemplo, nosotras persistimos... son 37 años que estamos peleando; salimos en plena dictadura, nos pegaron palos, nos mataron gente, nos prendieron fuego en las casas, nos insultaron, nos metieron presas... de todo. Pero, era una cosa, que lo que nosotros estábamos exigiendo era más fuerte que cualquier cosa; cuando voz pedís por un hijo, entonces no hay nada superior a un hijo. No podías tener miedo de lo que te pasaba a voz, sino sabías lo que le había pasado al tuyo. La pelea era muy fuerte y no pensábamos en más nada; pero tampoco fuimos todas, así que ahí mismo también actuó el miedo o la incompreensión –porque muchas madres o familias tampoco estuvieron de acuerdo con la lucha de los hijos- y que por eso nosotras socializamos la maternidad, y nos hicimos madres de todos porque si no salías a buscar solamente a los que las madres salíamos a pelear y era lo más injusto porque todos los chicos tenían el mismo propósito.

¿Hubo casos en que la mamá no estaba de acuerdo en lo que hacía el hijo, simplemente lo dio por perdido?

No creo que lo haya dado por perdido, porque el hijo te tira, pero no salió a reivindicar al hijo. Para nosotras primero la lucha fue buscarlos, pero después reivindicarlos; demostrarle al mundo que no eran lo que ellos decían –que no eran terroristas, que no eran mete bombas- que eran revolucionarios que querían un cambio y un mundo diferente. Entonces reivindicar a los hijos bajo ese valor es muy diferente a buscarlos porque te los llevaron. Por eso hubo muchas diferencias de los organismos, de las otras Madres que hubo una apertura, una diferenciación entre las Madres, porque salió una reparación económica y muchas madres cobraron; y a nosotras nos pareció espantoso que paguen por la vida, y menos por la vida de los hijos, cualquier precio... no tiene precio... la vida no tiene precio... la vida vale vida... y más la vida de un hijo, y más de un revolucionario... así que jamás vamos a aceptar que te paguen por la vida.

Son diferencias garrafales, entonces como estamos en un mundo donde todos tenemos cabezas diferentes y queremos la libertad de pensamiento que es muy difícil que se pueda armar por imposición; con esta cosa se nace, lo tienes que sentir y es muy posible que eso se sienta en el momento, después de pasados ciertos años es más difícil.

En este momento, después de 35 años de dictadura ¿la exigencia de justicia ha empezado a disminuir?

No, al contrario. Ha empezado a acrecentarse dentro de los gobiernos que están aceptando las cosas porque nosotras durante los periodos anteriores al kirchnerismo tuvimos gobiernos constitucionales –no democráticos- que empezaron a tirar facetas para que esto se tranquilice. Primero fue el decir que después de pasado seis años o siete años el desaparecido estaba muerto; como eso no prendió después sacaron que

¹⁶⁵ La Asociación Madres de la Plaza de Mayo es un organismo que se desprende de la fractura entre el grupo de las Madres de la Plaza de Mayo. Se conforma de madres en búsqueda de sus hijos desaparecidos por la dictadura. Es una de las asociaciones que ha promovido los enjuiciamientos a perpetradores y que han llevado su causa a los jóvenes a través de la apertura de su propia universidad: Universidad Popular Madres de la Plaza de Mayo. El organismo está presidido por Hebe de Bonafini.

¹⁶⁶ Evel Petrini es una de las primeras madres en plantarse en la Plaza de Mayo exigiendo que le devolvieran a su hijo desaparecido. Hoy coopera como Secretaria de la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo.

había que dar retribución económica, como eso tampoco prendió en todas entonces se hicieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, es decir, primero criticar y sacar unas pseudo- condenas para los más de arriba y no condenar ni a la mitad y darles una impunidad. Todo eso pasó en gobiernos democráticos entre comillas, hasta que vino Néstor Kirchner y lo primero que hizo fue desbaratar las cabezas de los milicos que tuvieron en la dictadura y anular las leyes del perdón; ahí empiezan a haber juicios con condena porque antes estaban los famosos juicios de la verdad que llamaban a los tipos decían que “sí, que habían hecho estas cosas” pero como tenían la impunidad en las leyes de perdón, se iban a la casa. Entonces qué clase de juicio es ese. La verdad la tenemos todos, sabemos lo que nos pasó. Nosotras nunca participamos, pusimos a los abogados para que estuvieran presentes, pero habiendo leyes de perdón como habían hecho en la época de Alfonsín y después el indulto de Menem... para qué quieres que te venga un tipo a decirte “si mira yo a tu hijo lo maté, lo torturé, lo violé, está allá y está allá” y me voy a casa... es para reventarlo... para qué quieres esos juicios...

¿Hubo condena social?

La condena social sí. Por eso nosotras siempre peleamos, por eso siempre decimos que los pueblos en la calle es donde deben de estar. Lo que señalamos nosotras, íbamos a las casas de los que sabíamos que habían estado haciendo eso y las marcábamos y le decíamos a la gente “este torturó, este violó, este se llevó a los chicos” en la puerta de la calle condenábamos –los famosos escrachers- pero eso teníamos que hacerlo nosotras, correr los riesgos.

¿Qué tantos peligros corrieron?

Todos los habidos por haber. Incluso tenemos tres Madres desaparecidas y asesinadas –Azucena Villaflor, De Vicenti e Icariaga- son tres Madres que eran las tres Madres más politizadas, las que sabían más, entonces las desaparecieron y hace cosa de 10 años o menos -8 años quizá- aparecieron los cadáveres, las mataron y las tiraron al río. No es que teníamos libre acceso, para nada, pero voz tienes que tener en carne lo que peleas, estar consciente de lo que quieres y poner todo en la parrilla. No hay ningún misterio, pero no hay fórmulas.

¿Por qué empezaste en esto?

Porque me llevaron el hijo... entraron 10 matones armados hasta los dientes y mi hijo -tenía 21 años-, estaba por ir a dormir y lo llevaron a la rastra, le pegaron, nos encerraron y se lo llevaron. ¿Qué me van a venir a contar? ¿Que eso fue guerra?... por favor... a partir de ahí, yo estoy para mi hijo hasta que me muera.

¿Tienes otros hijos?

Tengo otros hijos, pero con ellos no pasó nada porque el que militaba era mi hijo. No eran bobos, eran chicos que estaban militando, luchando por un ideal; y ellos vinieron a buscar al que sabían que militaba no al otro. El otro era más chico, tenía 15 años y era un estudiante que no participaba.

Era muy jovencito...

Muchos chicos jóvenes participaban, lo que pasa es que no era militante. Ellos sabían a quiénes iban a buscar.

¿Chicos tan jóvenes de 15 años que ya militaban?

Si... de 15 y 16. Los famosos Chicos de la Noche, los Lápicos eran pibes que decían que eran por el boleto estudiantil; pero eran chicos que militaban, que creían en una ideología. Y eso es lo que hace falta, chicos que participen en política. ¿Hoy por qué hay tanto problema con la economía? Porque los pibes no participan porque no les dejan participar políticamente; donde hay pibes que practican política, que quieren un cambio... para el poder económico mayor es peligroso, entonces los anulan cuando empiezan a crecer. Bendito sea Dios si empiezan a crecer juventudes con pensamientos políticos positivos y que participen y discutan y quieran y tengan proyecto de país.

¿Cómo ves el trabajo de la CONADEP?

Nosotras nunca estuvimos con la CONADEP, porque nosotras pedimos una bicameral con poderes para investigar. La CONADEP tenía que pedir permiso... no sirve.

Y depende de la voluntad de que le dieran la información...

O te dan cualquier información. No sirve. Es lo mismo que cuando vas a una cárcel y sabes que están mal; y avisas que va la inspección... entonces se limpia todo, todos son buenos, todo está divino para presentar. Eso fue la CONADEP... y la prueba está que cuando se entregaron los documentos que se le entregaron a Alfonsín –que fueron como cuatro o cinco changos- con denuncias que ya teníamos todos los organismos, porque son las mismas denuncias que ya teníamos; entonces se la entregan a Alfonsín, ¿qué hace Alfonsín?... se da vuelta... vaya... no sirve el poder para nada.

Siempre rechazamos, aparte porque tenía también la teoría de los dos demonios. Como sacó el libro Nunca Más, la teoría de los dos demonios era para ellos que decía que había una guerra y que era un enfrentamiento con los guerrilleros, que ellos ni siquiera les decían guerrilleros les decían terroristas. Otra cosa que hubo que cambiar de léxico, aprender que no eran terroristas sino que eran verdaderamente guerrilleros revolucionarios que querían un cambio.

¿Crees entonces que la CONADEP tuvo más limitaciones que logros?

En nuestro concepto logros no tuvo ninguno. Aparte lo que se hizo con la CONADEP es decir lo que ya todo el mundo sabía. Entre comillas ponerlo como que estaba autorizado por el gobierno...

Además usaron mucha información de ustedes, ¿cierto?

Todo, todas las denuncias que muchos habían puesto. Ninguno pusimos las denuncias nuestras porque no fuimos a la CONADEP pero en el libro hay denuncias de nuestros hijos.

¿Entonces solamente tomaron los archivos?

Claro, hablan de los distintos organismos que habíamos ido a dar denuncias y sacaron de la Asamblea en ese momento, de la Liga y lo pusieron ahí. La Asociación Madres ni dio información ni participó en la CONADEP.

¿Crees que el texto –el menos- El Nunca Más tuvo algo bueno?

Es que eso lo tuvieron que arreglar, tuvieron que sacar la parte de la entrada donde aceptaban como teoría de los dos demonios que era una introducción que había puesto el Ministro... -no me acuerdo-. Eso nosotras la rechazamos totalmente porque no es verdad. No fue una teoría de los dos demonios.

¿En las nuevas ediciones ya no está esa parte?

Creo que no... la verdad no te lo puedo asegurar porque no lo he leído; pero creo que ya lo sacaron porque era mentira. Por ejemplo, el caso personal... entran a tu casa 10 tipos armados hasta los dientes, se llevan a un chico de 21 años desarmado de adentro de tu casa que está comiendo... ¿eso es guerra? ¿Eso es enfrentamiento? ¿Entonces qué están diciendo? ¿Dónde está la verdad?

El hecho de que se haya vendido hasta en los kioskos... ¿no sirvió para que la gente ajena o lo negaba se diera cuenta de lo que había pasado?

El que era ajeno, no se interesó por leerlo. El que tuvo miedo lo quiere tapar. Así que yo creo que los que sí se van a enterando son los jóvenes que tienen inquietud por saber, que son los que quieren la verdad, que son los que investigan; por eso la juventud es tan perseguida, por eso nosotras defendemos tanto a los jóvenes porque los jóvenes son –sin ninguna duda- la fuerza de todo el pueblo y la educación a esos jóvenes es lo más importante.

¿Crees que ha habido avances con los juicios?

Algunos sí. Algunos sí, lo que pasa es que los que han nacido ahora después que hay condena sí señor. Si bien muchos se han muerto o duraron poco porque ya pasaron muchos años, lo que sirve sí es para que –ahí sí- el mundo sepa la verdad. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? ¿Dónde están? ¿Por qué?

Debido a la verticalidad de las órdenes que hay en el ejército, ¿crees que se tenga que enjuiciar a todo aquel que cometió algún delito aunque haya sido por –que ha habido casos como en Guatemala- que al dar su testimonio indican que eran ellos y sus familias o los “enemigos”?

La conciencia de cada uno... no sé si llevarlos a juicio, pero al menos saber la verdad de lo que hicieron. Cada uno tiene que arrastrar con lo que hace. Ahora, condenar por –verdaderamente- hacer el horror son lo que lo hicieron de arriba y de abajo... el que puso la picana, el que torturó, el que violó, el que mató, el que asesinó... ese es responsable de lo que hace, más allá que tenga que “te mando aquel o te mando el otro”. Te pueden matar y bueno... yo antes de matar o torturar... que me maten. Eso depende de la capacidad del ser humano.

Los juicios después de 37 años, hay Madres que ya no están, parientes que se alejaron... ustedes se han “adueñado” de muchos hijos...

Sí... hay una explicación para eso y es que nosotras –por ejemplo- lo que estamos haciendo en nuestro propósito siempre fue poder hacer algo de lo que no les permitieron a ellos porque adoramos a esos hijos, porque los reivindicamos como los más glorioso que puede haber como personas porque son chicos que dieron todo por el otro; y eso es lo que nosotras queremos dejar claro. Como nunca hubo 30.000 Madres de Plaza de Mayo, nos parece muy injusto que solamente se salga a reclamar a los que las Madres salimos a pelear y los que las madres no salieron, esos no se reclaman y eran todos iguales; militasen donde militasen cada uno, el proyecto era el mismo: un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo menos pobre y menos poderosos los ricos, eso era lo que querían todos y por eso hay que reivindicar a todos, buscar a todos y para eso nos hicimos madres de todos, nos sacamos la foto del hijo, nos sacamos el nombre del pañuelo y ya buscamos a todos, con la consigna “aparición con vida de los detenidos desaparecidos” que aparición con vida es una consigna totalmente política porque quiere decir que si no te lo dan con vida te tienen decir y hacerse responsables... ¿quién lo mató? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde?

Y eso no te lo va a decir porque ya sabemos que muchos no están, entonces como nadie se ha hecho cargo para nosotras nuestros hijos están vivos y van a estar vivos siempre judicialmente. En la parte humana están vivos porque están acá con nosotros y porque cada joven que quiere lo mismo que ellos querían son nuestros nuevos hijos y esos están vivos.

¿Crees que Alfonsín pudo haber hecho más?

Para nosotros Alfonsín es causal de muchas de las cosas que pasaron después. Una, no tuvo el coraje de hacer lo que hizo Néstor Kirchner, anular a todas las cabezas; por el contrario, negoció. La famosa “la casa está en orden”, fue a negociar con los milicos y tenía todo el pueblo a favor, esperando. Admitir la deuda externa tomada por la dictadura –que era un gobierno de facto- y ponérselo al país y al aceptarlo con un gobierno legal, nos dejó con un encaje de deuda que nos dejó por mucho tiempo mal. Y poner encima leyes de perdón para anular esos pequeños juicios que dijo que hizo, que no sirvieron más que para dar como estandarte que fueron juzgados los milicos; pero después tenían casas especiales, iban a la casa y toda la historieta, ¿entonces dónde está?

Según dicen para –nosotras fuimos muchas veces a hablar con él, incluso una vez ni nos recibió- el que está cerca de él dice que no pudo porque podía haber venido otra vez los militares. Pero los militares no iban a venir otra vez, estaban completamente de capa caída, ya el pueblo había reaccionado y en último de los casos “viejo, enfréntalo”. Después de Malvinas quedaron totalmente desmantelados, entonces qué miedo tuvo Alfonsín; cuál es el justificativo para darle las leyes de perdón a los milicos... negoció con ellos.

¿Por qué atribuyes el éxito del caso de Argentina?

La verdad que hemos logrado, lo que no se ha logrado en tantos lados que hay tantas injusticias. Yo creo le echo mucha culpa a los partidos políticos. Cuando salieron las madres de Uruguay y de Brasil, se las absorbieron los partidos políticos; con nosotras no pudieron porque nosotras no íbamos a hacer un partido político, íbamos a pedir por nuestros hijos. Cuando empezaron las madres y después empezaron a meterse los partidos, las fueron anulando. Un partido político no iba a pelear por lo que querían, tenían que ser ellas.

¿Pudo ser la capacidad de la sociedad civil?

No. La sociedad civil se portó muy mal con nosotras; había un grupo que sí porque eran lo que nos acompañaba. Pero el cuerpo lo pusimos nosotras, totalmente nosotras. Por ejemplo, cuando recién salimos las Madres, éramos 20 o 25 madres. A medida de que nos fueron desapareciendo los hijos, nos fuimos formando, después nos formamos en comisión y nos formamos en un grupo. Que nosotras decíamos “no somos una organización de derechos humanos” porque los derechos humanos están muy bastardeados, los usan mucho. Las Madres somos un grupo de personas que hacemos política sin partido. Esa fue la significación cuando ya pasó un tiempito y nos dimos cuenta, porque cuando salimos, salimos al agua, a buscar a los hijos y punto; y no sabíamos nada de nada, muchas salíamos de la cocina. ¿Qué teníamos que buscar? Los hijos, nada más. ¿Qué queríamos saber? Dónde estaban. La sociedad después de muchos años empezaron a acercarse, pero al comienzo... palos, perros y milicos.

Yo creo que un factor fundamental de esto fue la gente que salimos a la calle –sin ninguna duda-. No sólo las Madres, sino que después los que se fueron acercando que fueron los otros organismos, después los chicos que empezaron a hacer política de los partidos que venían en ese tiempo estaba por ejemplo el PI y el MAS, grandes pibes, todos chicos jóvenes que nos venían a acompañarnos a las marchas y a las movilizaciones. Nosotras estamos convencidas que las luchas de los pueblos se hacen en la calle, aquel que desde una oficina o desde una reunión en un café dice que va a solucionar las cosas... yo no creo... hay que poner el cuerpo y correr los riesgos.

APÉNDICE #10

ENTREVISTA

BUENOS AIRES, ARGENTINA

ABUELAS DE LA PLAZA DE MAYO¹⁶⁷

ROSA TARLOVSKY DE ROISINBLIT¹⁶⁸

JUNIO 4, 2014.

¿Se ha alcanzado hacer justicia en Argentina?

En Argentina, hace varios años, se están llevando a cabo juicios de la verdad pero eso no tiene ningún valor jurídico frente a la justicia; lo que sí, es que éstos acopian datos que se pueden presentar en los juicios abiertos y públicos que se están realizando y que sí tienen valor jurídico porque cada una de las personas perjudicadas puede presentarse y dar su testimonio.

Nosotros tuvimos durante muchos años dos leyes –Punto Final y Obediencia Debida- que nos trababa todo lo que queríamos iniciar porque cada acusado alegaba “haber seguido órdenes”. Llegó un momento –hace dos años más o menos- la Corte Suprema de Justicia dictaminó que ambas leyes son inconstitucionales. A partir de ahí las Abuelas empezamos a presentar nuestras querellas que tienen buena acogida; nos presentamos, dimos testimonios que son tomados en cuenta y así llegamos a un... -no voy a decir final feliz, porque nunca vamos tener un final feliz- pero sí a una satisfacción; la satisfacción de que esa gente, cada una de esas personas que se amparaba en la Obediencia Debida ya no puede ampararse más en eso. Entonces aquel que robó, aquel que violó, aquel que torturó o aquel que asesinó tiene que pagar por sus delitos directamente ante la justicia y no con los juicios por la verdad. Yo sé que hay mucha gente en otros países que están haciendo este tipo de juicios; acá no tiene valor jurídico.

Hay que aclarar bien cómo es la cosa. Esa gente que en este momento son juzgadas dentro de la capital federal y en las más importantes ciudades del país –porque en todas hay juicios contra esos asesinos- ellos tiene derecho a defenderse; tienen derecho a tener un abogado defensor. Ellos son indagados, juzgados y condenados –incluso con un abogado defensor- esto es un privilegio que ellos no le dieron a nuestros hijos porque nuestros hijos fueron secuestrados y hechos desaparecer sin ningún trámite y no sabemos dónde están.

Esa es la diferencia entre ellos y nosotras. Los organismos de derechos humanos –no sólo las Abuelas- tenemos la facilidad de denunciarlos, que sean juzgados y que vayan a las cárceles comunes como cualquier otro delincuente.

Para las Abuelas, ¿el hecho de que los perpetradores vayan a la cárcel se convierte en un tipo de resarcimiento o de reparación?

Es una satisfacción, no te lo voy a negar. Nosotras no tenemos espíritu de venganza o de revanchismo ni nada de eso; eso no. Queremos justicia, queremos verdad y queremos memoria; porque un pueblo que pierde su memoria es un pueblo que corre el riesgo de que las cosas se repitan. Verdad, justicia y memoria son los tres pilares de nuestra lucha, de nuestra exigencia en la actualidad porque ahora no solamente

¹⁶⁷ Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental creada en 1977 cuyo objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos por la última dictadura argentina. Las Abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos -que, como sus padres, ven violado su derecho a la identidad-, y con esta finalidad trabajan los equipos técnicos de la institución, además de crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños y exigir castigo a todos los responsables de estos gravísimos delitos (Abuelas de la Plaza de Mayo, consultado marzo 2016 en <http://www.abuelas.org.ar>)

¹⁶⁸ Rosa Tarlovsky de Roisinblit es la actual vicepresidenta de la organización Abuelas de la Plaza de Mayo además de ser una de las fundadoras de esta institución, así como madre y abuela de víctimas de la violencia de Estado. La hija de Rosa –Patricia Roisinblit, fue secuestrada junto con su hija de 15 meses de edad y su compañero José Manuel Pérez Rojo. La niña –Mariana Eva- fue devuelta a sus abuelos paternos quienes la criaron. Patricia tenía un avanzado embarazo al momento de su secuestro. Tanto Patricia como José Manuel fueron desaparecidos y el bebé –un niño que nació en un Centro Clandestino de Detención y a quien Patricia nombró Rodolfo Fernando- entregado a otra familia. El nieto desaparecido –Rodolfo Fernando- quien llevaba por nombre Guillermo y vivía en Estados Unidos fue ubicado gracias a una denuncia anónima a la organización en el año 2001.

pedimos, rogamos o imploramos; ahora exigimos que cada una de esas personas sea juzgada. No hablamos de otra cosa más que eso; después del juzgamiento vendrá la verdad, la justicia y todo desde el punto de vista legal.

Si pudieras platicarme de manera breve –si no quieres lo entiendo- ¿cuál fue tu experiencia?

No, me siento como una persona privilegiada. Hace 36 años que estoy sentada en este sillón buscando todos los nietos; pero hace 14 años que yo encontré a mi nieto. Lo encontré siendo un muchacho de 21 años con un metro y ochenta y uno de alto; ese era mi nieto. ¿Yo a ese nieto podría llevarlo al jardín de infantes? ¿Podía llevarlo a la plaza a jugar? ¿Podía llevarlo a la calesita o al tobogán? No, eso no se recupera jamás. Y tengo que empezar a conquistar el cariño de un hombre de 21 años que hasta ese momento creía que esas personas que lo criaron eran sus padres. No fue fácil. Mi experiencia no fue fácil. Me dio mucho trabajo y el problema se acrecentó cuando la justicia citó a los apropiadores –a sus padres- los juzgó por ladrones porque robaron a un chico recién nacido y se presentaron ante el registro civil con una falsa partida de nacimiento, diciendo que ellos son los padres, que el parto se efectuó en su casa. Así que son delincuentes; han delinquido y entonces la justicia los condenó. Y ahí fue más terrible para mí porque el muchacho estaba encariñado con esa gente.

Algunos de nuestros nietos tuvieron la suerte de los apropiadores los trataran bien; pero no todos. Nosotras hemos encontrado a 110 nietos y muchos de ellos han sido maltratados. Así que no es una cosa para todos igual; cada caso nuestro es distinto de los demás. Cada caso tiene otra historia; lo único parecido es que son hijos de desaparecidos; nada más. Lo demás cada uno es personal.

¿Ha habido casos en donde encuentran al nieto y él decide quedarse con quien sabe que son sus padres? ¿O sí hay la necesidad de buscar su identidad?

Él no se puede quedar con esos papás porque sus papás están desaparecidos. Se quedan con la familia. La mayoría acepta pero a algunos les cuesta más y a otros menos. Uno a las 48 horas dice que no los quiere ver nunca más porque son ladrones. A otros les lleva dos semanas para recuperarse y a otros como a mi nieto le costó varios años. Pero eso es dependiendo del caso y de cómo fueron tratados y cómo piensen. Pero hoy en día, después de 36 años, nuestros nietos no son más bebés que les dices que ahora van a ir a vivir con su abuelita. Son hombres y mujeres de 35 o más años –algunos de ellos casados y tienen hijos a su vez- no les puedes decir que ahora van a ir a vivir con su abuelita. Muchas abuelitas ya no están más, aunque encontremos a sus nietos –porque los seguimos buscando-. Hace 14 años que yo encontré a mi nieto; y hace 14 años que sigo buscando los nietos que faltan porque estimamos que durante la dictadura se llevaron entre 400 y 500 nietos.

¿Cómo es el proceso que se lleva para encontrar a los hijos o nietos desaparecidos –nietos que para este momento son 110-?

Cuando empezamos teníamos una carpeta con 240 denuncias –ahora ya cambió todo-. Si partimos de la base que cada nieto tiene 4 abuelas -2 maternas y 2 paternas- tendríamos que tener más de 800 pero nunca fuimos tantas. Teníamos la firma de 240 abuelas; después eso fue creciendo, pero partimos de ahí. ¿Cómo fue que lo encontramos? En principio fue más fácil encontrar a aquellos chicos que se llevaron ya nacidos -porque se llevaron chicos ya nacidos-. Por ejemplo si se llevaban a un matrimonio con un bebé de 3 ó 4 años o dos bebés –también había-, esos chicos también fueron dados y los padres asesinados. Así que como en esas casas los abuelos ya tenían un documento de identidad del bebé que se llevaron o al menos tenían una foto, con base en eso hemos podido reconstruir algunos casos y los primeros que encontramos fueron chicos que se llevaron ya nacidos. Pero pasando el tiempo, nosotras fuimos luchando e investigando y llegamos a la conclusión –científicos muy capacitados que vinieron a apoyarnos- y nos indicaron que por medio de la sangre se puede averiguar la identidad de una persona. Entonces ahí fuimos todas nosotras a depositar nuestra sangre en lo que se llamó después el Banco Nacional de Datos Genéticos –que existe hasta ahora- y con la sangre se puede identificar a los nietos.

No es lo mismo salir a buscar un bebé recién nacido. Los íbamos a buscar a las casas cuna, a los orfanatos, a los hospicios, a los juzgados de menores; pero nosotras crecíamos y nuestros nietos crecían. No es lo mismo buscar un bebé que un adolescente; la estrategia para buscar un adolescente cambia porque no lo vamos a buscar en el mismo lugar que buscamos a un recién nacido. Cuando nuestros nietos fueron creciendo; ya pasaron 36 años. Cambia la estrategia de nuevo cuando buscamos un joven que está en la universidad y ahora estamos buscando adultos; hombres de 35 años o más que ya están casados y tienen hijos. Las estrategias han cambiado completamente.

¿Por dónde empezar a buscar a un adulto? Sin saber el nombre que le dieron los padres a quienes fue entregado, por ejemplo.

Teníamos gente que hacía denuncias. Algunas hacían llamadas telefónicas anónimas, o mandaban cartas anónimas o venían personalmente –algunos a quienes ni les preguntábamos cómo se llamaban porque no queríamos que se vieran involucrados; la cautela y la discreción nos empezaron a distinguir-. Con base en esos testimonios salíamos. Por ejemplo, teníamos a unos muchachos jóvenes que se fueron exiliados a Francia, un grupo de muchachos que estaban en París, nos pidieron las fotos de esos chicos que se llevaron ya nacidos; hicieron una fotos grandotas y mandaron por vía diplomática a la embajada de Francia de acá mandaron esas fotos. Yo personalmente he ido a la embajada retirar esas fotos para hacer afiches con ellas y gente amiga pegaba en las paredes de las calles –en todas partes- las fotos de los chicos diciendo que son nuestros nietos y que los estamos buscando. Una vez salió en una revista una foto de un chico que nosotras estábamos buscando, la foto la sacaron de alguna pared. Una de nuestras abuelas salió a su mercado, se le acercó una señora con la revista preguntando si ella buscaba ese chico; le dijo que ella sabía dónde estaba. Y la llevó y así empezó; fuimos, los encontramos, estaba en manos de una represora e hicimos el juicio contra esa mujer; ganamos el juicio y tuvo que devolver al chico. El chico se encontró con su verdadera abuela – tenía 8 o 9 años-.

¿Ustedes proveen ayuda psicológica a los nietos?

Siempre es un shock. Decir que esa persona que te crio no son tus padres, que tenía otros padres que están desaparecidos... siempre es un shock para un bebé, un adolescente, un joven y para un adulto. En este momento después de haber pasado por psicólogos personales y grupales que venían a ayudar; tenemos ahora un Instituto Psicológico donde se puede dar apoyo psicológico a cada uno de los nietos que lo requiere, porque ningún análisis psicológico se puede imponer. Si uno quiere, está a su disposición el Instituto; no solamente para los nietos sino para las familias de los nietos que recibe a una persona de su misma sangre pero que no conoce y no sabe cómo tratarlo -cuando eran chicos más pero siendo adultos igual- algunos lo requieren y tenemos un Instituto. Así como le hablé que tenemos un buen equipo de abogados que defienden nuestros casos desde el punto jurídico; también tenemos psicoanalistas. Nuestro objetivo es devolverle la verdadera identidad a nuestro nieto; lo demás la familia tiene que arreglarse –no es problema nuestro- pero si lo requieren tienen un Instituto.

Cuando se estaba creando la CONADEP hubo organismos de derechos humanos como el suyo que estaban en contra de su creación. ¿Cuál es su postura ante la CONADEP? ¿Por qué la negativa?

Es cierto que nosotras no queríamos la CONADEP; nosotras queríamos una comisión bicameral para que eso se estudiara en el Congreso, pero el Presidente de la República tenía la decisión final, decidió eso y lo tuvimos que aceptar. Nosotras no queríamos a la CONADEP porque no queríamos que gente importante que ni siquiera nos había ayudado –pero por ser una persona importante- integrara una CONADEP queríamos una bicameral. Pero el Presidente fue electo, ganó las elecciones y había que obedecer lo él decía y se hizo.

La CONADEP salió todo bien, todo perfecto. Había una persona que se tuvo que retirar porque a nosotras no nos gustaba –ese es el peso que nosotras siempre hemos tenido-. Dijimos “fulano no, no lo queremos”. No lo quisimos porque él formaba parte de un grupo que estaba haciendo los exámenes de sangre en contra de nosotras por eso no lo quisimos; porque trabajaba en el Hospital Militar Central, nosotras no confiábamos en

él. Era un gran médico, pero al trabajar en el Hospital Militar Central; pero no queríamos a nadie de ahí y se tuvo que ir. Lo cambiaron por otra persona.

¿Cree que algo le hizo falta a la CONADEP?

Salió todo bien con la CONADEP. Yo me presenté, mi caso está ahí documentado. No le falta nada a la CONADEP porque cada organismo trabajó por su cuenta. Ya no había dictadura, así que teníamos la libertad para trabajar ya.